

NOVENTA AÑOS DE LIBERTAD

*Antología de artículos de Pedro Schwartz
publicados por el Instituto Cato*



Introducción

Pedro Schwartz, uno de los principales referentes del pensamiento liberal en España y el resto del mundo, cumple 90 años el 30 de enero de 2024. Esta efeméride representa una oportunidad para rendir homenaje a un pensador, economista, académico y divulgador que ha dedicado toda su vida a la defensa de la libertad individual, política y económica. Su trayectoria ha marcado profundamente el debate público y académico, tanto en su país natal como en el extranjero, convirtiéndolo en un verdadero pilar del liberalismo contemporáneo.

Considerado uno de los liberales más influyentes del último siglo, Pedro Schwartz ha combinado el rigor académico con una habilidad excepcional para comunicar las ideas de la libertad a un público más amplio. Su obra abarca una amplia variedad de temas, desde la economía y la política hasta filosofía. El autor siempre ha buscado conectar las teorías académicas con las implicaciones prácticas y éticas de la vida en sociedad. Es esta capacidad de vincular el pensamiento abstracto con las necesidades concretas de las personas lo que ha hecho de Schwartz un autor imprescindible para quienes defienden una sociedad más libre y próspera.

El Instituto Juan de Mariana, en colaboración con el prestigioso Instituto Cato de Estados Unidos, han decidido sumar fuerzas para conmemorar la trayectoria de Pedro Schwartz con el presente volumen, un documento en el que se presenta una recopilación exhaustiva de todas las publicaciones que ha firmado nuestro homenajeado en la web del Instituto Cato en español, *ElCato.org*.

Esta iniciativa busca preservar y difundir su legado intelectual, destacando las contribuciones de Schwartz al debate sobre las grandes cuestiones económicas, sociales y políticas que han definido el siglo XXI. La publicación tendrá un alcance internacional, llevando el pensamiento de Schwartz a un público aún más amplio. El proyecto abarca más de 100 artículos escritos por Pedro Schwartz que fueron editados entre los años 2000 y 2022.

Estos textos, publicados asimismo en medios de comunicación y revistas académicas de referencia, reflejan la profundidad analítica de Schwartz y la claridad con la que ha expuesto siempre sus ideas. Cada uno de ellos es una muestra de su capacidad para abordar los asuntos de la actualidad y los desafíos contemporáneos desde una perspectiva que combina principios sólidos con un entendimiento pragmático de la realidad.

La recopilación de estas obras no solo será un homenaje a su figura, sino también un recurso invaluable para quienes deseen comprender mejor los valores y las ideas que han guiado su vida profesional. El Instituto Cato, reconocido por su papel en la promoción del liberalismo a nivel mundial, y el Instituto Juan de Mariana, referente liberal en el ámbito de habla hispana,



confían en que esta colección ayude a que la obra de Pedro Schwartz llegue a nuevas generaciones de académicos, economistas y ciudadanos interesados en las ideas de la libertad.

Con este proyecto, ambas organizaciones celebran no solo los 90 años de un pensador brillante, sino también el impacto duradero de sus ideas. En un mundo en el que los principios liberales enfrentan constantes desafíos, la obra de Pedro Schwartz continuará siendo una fuente de inspiración.



ÍNDICE DE CONTENIDOS

- Ambiguo euro – 27 de octubre de 2000
- Los bloques bloquean el comercio – 26 de febrero de 2001
- Peste de anti-globalizadores – 17 de agosto de 2001
- Las causas de la riqueza – 27 de agosto de 2001
- Ridículo en Eurolandia – 22 de octubre de 2001
- El éxito de occidente – 31 de octubre de 2001
- España, país de inmigrantes – 7 de junio de 2002
- Globalización: Fuego cruzado – 12 de julio de 2002
- El valor del euro – 29 de julio de 2002
- Popper y el nacionalismo – 14 de agosto de 2002
- La Unión Burocrática Europea – 30 de octubre de 2002
- Tipos de competencia en el comercio – 20 de noviembre de 2002
- La mano muerta contra la mano invisible – 3 de enero de 2003
- Tipo bajo y parejo – 3 de febrero de 2003
- El problema con los subsidios a la industria cinematográfica – 24 de marzo de 2003
- Libre comercio atlántico – 19 de mayo de 2003
- Destrucción creadora – 3 de junio de 2003
- Corea del Norte – 1 de julio de 2003
- El código Giscard – 17 de julio de 2003
- El libre comercio después de Cancún – 29 de septiembre de 2003
- La búsqueda de las rentas políticas – 3 de noviembre de 2003
- ¿Es Europa una zona monetaria óptima? – 20 de noviembre de 2003
- Nacionalismo y democracia – 29 de diciembre de 2003
- España, reformas pendientes – 19 de enero de 2004
- Constitución europea, para qué – 13 de abril de 2004
- La deslocalización como ventaja – 21 de abril de 2004
- Aznar y Thatcher – 29 de abril de 2004
- Diccionario de pensamiento económico en España – 10 de mayo de 2004
- Ronald Reagan, un gran presidente – 21 de junio de 2004
- El esfuerzo de Alemania – 19 de julio de 2004
- Sen elogia a Hayek – 5 de octubre de 2004
- África quiere Progresar – 28 de octubre de 2004
- El fracaso de América Latina – 10 de noviembre de 2004
- La talla de Aznar – 8 de diciembre de 2004
- ¡Premio a Xavier Sala i Martín! – 16 de diciembre de 2004
- China, ¿Un peligro? – 18 de enero de 2005
- Lo que ofrece la constitución europea – 1 de febrero de 2005
- ¿Adónde vas Europa? – 2 de marzo de 2005
- El Área Económica Transatlántica – 14 de marzo de 2005
- Privatizar la TV pública en España – 24 de marzo de 2005
- Bienes y servicios públicos – 5 de abril de 2005
- Un “No” francés – 26 de abril de 2005
- España: Federalismo fiscal – 13 de mayo de 2005
- Yo voté no – 27 de junio de 2005
- Condonación de la deuda – 8 de julio de 2005



- La moral del mercado – 27 de septiembre de 2005
- España, federalismo enfermo – 11 de noviembre de 2005
- Las dos caras de Adam Smith – 22 de noviembre de 2005
- La Francia reaccionaria – 18 de abril de 2006
- En España preocupa la inmigración – 3 de octubre de 2006
- España: ¿Productividad o competitividad? – 27 de diciembre de 2006
- La constitución europea: Resucitando – 23 de febrero de 2007
- Un área de prosperidad en el Atlántico Norte – 6 de marzo de 2007
- Democracia y mercado en los libros de texto – 20 de marzo de 2007
- ¡El dólar a 73 de céntimos de euro! – 13 de julio de 2007
- La oscura Constitución Europea – 26 de julio de 2007
- El dogma Gore-Clinton – 22 de octubre de 2007
- Cohesión social en Latinoamérica – 27 de diciembre de 2007
- La deslocalización como ventaja – 1 de abril de 2008
- Confianza – 9 de octubre de 2008
- Apalancamiento y productividad – 17 de noviembre de 2008
- Ciegos conducidos por ciegos – 3 de diciembre de 2008
- EE. UU.: La Gran Depresión – 10 de febrero de 2009
- Mentiras universales – 14 de abril de 2009
- Rose Friedman – 24 de septiembre de 2009
- Recorte de las pensiones en España – 15 de febrero de 2010
- España: No entienden el Euro – 24 de febrero de 2010
- España: Unos presupuestos tardíos – 3 de octubre de 2012
- Soluciones estables para elecciones en pareja – 17 de octubre de 2012
- El euro, adulterado por la política – 27 de noviembre de 2012
- España: El envejecimiento como una bendición – 20 de diciembre de 2012
- España: De la reacción a la estrategia de la transformación – 11 de enero de 2013
- España: Iberia se salvará si la dejan – 11 de febrero de 2013
- No hace falta corralito – 9 de abril de 2013
- Lady Thatcher, la más admirada y la más odiada – 15 de abril de 2013
- “No llores por mí, Argentina” – 24 de abril de 2013
- España: Un error subir los impuestos – 1 de mayo de 2013
- España: Prestidigitación tributaria – 10 de junio de 2013
- España: Falsa tranquilidad sobre las pensiones públicas – 25 de junio de 2013
- Quieren hacer de lo económico algo más humano – 3 de julio de 2013
- Carrera de obstáculos en el Atlántico Norte – 25 de julio de 2013
- España: Kafka en el sistema eléctrico – 15 de octubre de 2013
- España: A la japonesa – 24 de octubre de 2013
- España: Unidad de mercado a prueba de triquiñuelas – 24 de diciembre de 2013
- Anschluss – 27 de marzo de 2014
- España: Errores y autopistas – 3 de abril de 2014
- España: La quiebra de las pensiones – 11 de abril de 2014
- Gary Becker o el enfoque económico del comportamiento humano – 6 de mayo de 2014
- Todo quieren ser Estado – 19 de mayo de 2014
- Capitalismo: La forma más moral de organizar la sociedad – 3 de junio de 2014
- España: Perdido el camino... – 5 de junio de 2014
- España: Teoría de la corona – 11 junio de 2014



- Draghi incumple el mandato del euro – 25 de junio de 2014
- España: Reducir el gasto para aliviar la presión fiscal – 2 de julio de 2014
- España: Día de la liberación fiscal – 16 de julio de 2014
- Escoria independiente y socialista – 16 de septiembre de 2014
- Miguel Boyer: Hombre de convicciones y gran ministro de Economía – 3 de octubre de 2014
- No entienden por qué ha fallado el euro – 15 de octubre de 2014
- España: Las tribus liberales – 27 de octubre de 2014
- España: “Podemos” quedar fuera del euro – 6 noviembre de 2014
- La democracia “curalotodo” – 7 de enero de 2015
- Grecia retorna a cuidados intensivos – 21 de enero de 2015
- Draghi cruza el Rubicón – 27 de enero de 2015
- Toda necesidad no es un derecho – 25 de marzo de 2015
- Crecimiento económico gracias a la austeridad – 21 de mayo de 2015
- La parábola de los ciegos – 29 de mayo de 2015
- Cómo entender qué pasa en Grecia – 1 de julio de 2015
- Grecia: Tsipras ha ganado el primer órdago – 8 de julio de 2015
- La envidia – 21 de julio de 2015
- ¿Qué más se puede pedir a este gobierno tan aburrido? – 11 de agosto de 2015
- Casandra o el liberalismo – 24 de noviembre de 2015
- Vuelco político en Guatemala – 8 de enero de 2016
- El fin de un camino para China – 1 de febrero de 2016
- España: El corralito de Pablo Iglesias – 22 de febrero de 2016
- Banco Central Europeo, a la desesperada – 30 de marzo de 2016
- ¿Qué hemos hecho mal? – 29 de junio de 2016
- El Brexit no es una catástrofe – 7 de septiembre de 2016
- La quiebra de las pensiones – 9 de febrero de 2017
- La difícil vida de un banquero central – 26 de febrero de 2019
- El buen mecenas y la envidia – 18 de junio de 2019
- El Reino Unido corta amarras 11 de febrero 2020
- El virus comunista – 23 de abril de 2020
- Si pudiera venir Erhard – 8 de junio de 2020
- Hay que saber ser minoría – 17 de julio de 2020
- El laberinto de la inflación – 20 de octubre de 2021
- Un gran liberal – 8 de marzo de 2022



Ambiguo euro

27 de octubre de 2000

Sólo entusiasmo concita el euro en España. Por eso los españoles no aciertan a comprender las razones de quienes, en el Reino Unido, Dinamarca y Suecia, se oponen al abandono de sus monedas nacionales. Ni siquiera entienden bien el por qué de los buenos efectos que la creación del euro ha tenido en las economías periféricas de la UE, especialmente las de Irlanda y España. El euro es una institución compleja, que deberíamos comprender a fondo si queremos evitar sorpresas desagradables.

La mejor manera de entrar en este laberinto es por la puerta de la inflación. ¿Por qué se mantiene alta la tasa de inflación de España, sobre todo comparada con las de Francia, Alemania e Italia? Una pequeña parte de nuestra inflación se debe al 21% de depreciación del euro desde su creación, respecto del dólar y el yen, en especial por su efecto sobre lo que nos cuesta el petróleo. Pero el 68% de nuestros intercambios exteriores (por cuenta corriente) tiene lugar con la UE, por lo que la devaluación del euro desde su nacimiento no influye tanto en los precios como si nuestra moneda fuera independiente. Pero si el euro sigue cayendo hasta hacer perder la confianza de los inversores, puede dispararse la inflación en el conjunto de Europa.

El rápido crecimiento de la economía española, por encima de la media de la UE, no explica tampoco la inflación que sufrimos. El efecto del crecimiento de una economía sobre los precios es al contrario del que se cree: cuando crece la economía, la demanda de dinero por el público aumenta y se reabsorbe una parte del excesivo dinero creado por el banco emisor. La expansión de la economía española es un síntoma, no una causa, de la inflación, cuyo origen siempre es monetario y cambiario. La inflación no se combate "enfriando" una economía "recalentada", metáforas que enturbian la comprensión del fenómeno, sino manteniendo el valor de la moneda.

En un reciente almuerzo de los titulados del servicio de estudios del Banco de España, uno de sus antiguos subdirectores, Pedro Martínez Méndez, señaló con acierto la razón por la que los precios al consumo están subiendo tan de prisa en Irlanda, Portugal y España. Mientras estuvieron en el SME, sus monedas se devaluaron estratégicamente y por tanto su nivel de precios, al entrar en el euro, era artificialmente bajo. El cambio nominal del punto había caído un 13%; el escudo, un 16,34%; la peseta, un 22,5, después de las tres devaluaciones que castigaron al tándem González-Solchaga, por expandir el gasto y mentir sobre el déficit. Ahora que la peseta ya no puede rebotar, el reequilibrio de nuestros precios con los de la UE hace inevitable una inflación temporalmente mayor que la media europea, de lo que no nos libra ni la paz ni la caridad.



Un país relativamente pequeño forzado a devaluar su moneda más de un 20%, cual le ocurrió a la peseta en 1992-93, pronto tendría que haber soportado tipos de interés muy altos, por el recargo que los inversores extranjeros exigen para cubrirse de posibles devaluaciones futuras de una moneda poco fiable. Además, una devaluación sorpresiva de ese tipo no habría corregido el déficit de la balanza de pagos, porque no habría sido acompañada de las necesarias medidas correctoras del gasto.

La bendición de encontrarnos en la unión monetaria es que, tras nuestras devaluaciones y la consolidación de un tipo de cambio artificialmente bajo, los intereses, en vez de aumentar, se redujeron casi al nivel de Alemania. La infravaloración de peseta y la financiación barata han provocado unos años de extraordinario crecimiento, y además sin déficit exterior. Un país como el nuestro no puede pedir nada mejor que el impulso competitivo de una devaluación acompañada de una reducción de tipos de interés y balanza de pagos equilibrada. Grecia será la próxima en dispararse, según todos los indicios.

Estos efímeros beneficios del euro no militan a su favor. Terminado el efecto "boom" inicial, será necesario que las economías más pequeñas hayan reformado sus estructuras para seguir creciendo en un gran mercado abierto. Es cierto que el euro fuerza a corregir comportamientos poco ortodoxos, pues impone un déficit presupuestario cero y la supresión de barreras a la libre competencia. Esa disciplina es bienvenida para corregir la inclinación demagógica de muchas democracias. El rechazo del tal disciplina explica la resistencia de las capas populares danesas y suecas a entrar en la unión monetaria: temen que el euro ponga en peligro su Estado de bienestar, sus pensiones, medicinas, guarderías, escuelas. Ese miedo me parece desplazado, pues la beneficencia pública puede y debe financiarse, en el nivel que decidan los votantes, con impuestos y tasas, no con déficit, que no es sino un engañabobos.

En el Reino Unido, las razones de la resistencia son diferentes. Una gran mayoría del electorado recela de que el euro, además de fines de estabilidad monetaria y económica, persiga objetivos sobre todo políticos. Temen lo que muchos continentales desean, que el euro sea un instrumento de centralización política, una bandera para el nacionalismo europeo. Ya he dicho que el euro es una institución con muchas dimensiones. Numerosos británicos, preferirían una unidad atlántica que incluyese a los países americanos. También recelan de que la mayoría de escoceses que quieren el euro lo deseen para poder separarse de Inglaterra. Pues eso: la unión monetaria puede acabar en una pelea entre sus miembros, en el enfrentamiento con Estados Unidos y en la disolución de viejos estados nación, lo que a algunos nos alarma.



Los bloques bloquean el comercio

26 de febrero de 2001

Sólo entusiasmo concita el euro en España. Por eso los españoles no aciertan a comprender las razones de quienes, en el Reino Unido, Dinamarca y Suecia, se oponen al abandono de sus monedas nacionales. Ni siquiera entienden bien el por qué de los buenos efectos que la creación del euro ha tenido en las economías periféricas de la UE, especialmente las de Irlanda y España. El euro es una institución compleja, que deberíamos comprender a fondo si queremos evitar sorpresas desagradables.

La mejor manera de entrar en este laberinto es por la puerta de la inflación. ¿Por qué se mantiene alta la tasa de inflación de España, sobre todo comparada con las de Francia, Alemania e Italia? Una pequeña parte de nuestra inflación se debe al 21% de depreciación del euro desde su creación, respecto del dólar y el yen, en especial por su efecto sobre lo que nos cuesta el petróleo. Pero el 68% de nuestros intercambios exteriores (por cuenta corriente) tiene lugar con la UE, por lo que la devaluación del euro desde su nacimiento no influye tanto en los precios como si nuestra moneda fuera independiente. Pero si el euro sigue cayendo hasta hacer perder la confianza de los inversores, puede dispararse la inflación en el conjunto de Europa.

El rápido crecimiento de la economía española, por encima de la media de la UE, no explica tampoco la inflación que sufrimos. El efecto del crecimiento de una economía sobre los precios es al contrario del que se cree: cuando crece la economía, la demanda de dinero por el público aumenta y se reabsorbe una parte del excesivo dinero creado por el banco emisor. La expansión de la economía española es un síntoma, no una causa, de la inflación, cuyo origen siempre es monetario y cambiario. La inflación no se combate "enfriando" una economía "recalentada", metáforas que enturbian la comprensión del fenómeno, sino manteniendo el valor de la moneda.

En un reciente almuerzo de los titulados del servicio de estudios del Banco de España, uno de sus antiguos subdirectores, Pedro Martínez Méndez, señaló con acierto la razón por la que los precios al consumo están subiendo tan de prisa en Irlanda, Portugal y España. Mientras estuvieron en el SME, sus monedas se devaluaron estratégicamente y por tanto su nivel de precios, al entrar en el euro, era artificialmente bajo. El cambio nominal del punto había caído un 13%; el escudo, un 16,34%; la peseta, un 22,5, después de las tres devaluaciones que castigaron al tándem González-Solchaga, por expandir el gasto y mentir sobre el déficit. Ahora que la peseta ya no puede rebotar, el reequilibrio de nuestros precios con los de la UE hace inevitable una inflación temporalmente mayor que la media europea, de lo que no nos libra ni la paz ni la caridad.



Un país relativamente pequeño forzado a devaluar su moneda más de un 20%, cual le ocurrió a la peseta en 1992-93, pronto tendría que haber soportado tipos de interés muy altos, por el recargo que los inversores extranjeros exigen para cubrirse de posibles devaluaciones futuras de una moneda poco fiable. Además, una devaluación sorpresiva de ese tipo no habría corregido el déficit de la balanza de pagos, porque no habría sido acompañada de las necesarias medidas correctoras del gasto.

La bendición de encontrarnos en la unión monetaria es que, tras nuestras devaluaciones y la consolidación de un tipo de cambio artificialmente bajo, los intereses, en vez de aumentar, se redujeron casi al nivel de Alemania. La infravaloración de peseta y la financiación barata han provocado unos años de extraordinario crecimiento, y además sin déficit exterior. Un país como el nuestro no puede pedir nada mejor que el impulso competitivo de una devaluación acompañada de una reducción de tipos de interés y balanza de pagos equilibrada. Grecia será la próxima en dispararse, según todos los indicios.

Estos efímeros beneficios del euro no militan a su favor. Terminado el efecto "boom" inicial, será necesario que las economías más pequeñas hayan reformado sus estructuras para seguir creciendo en un gran mercado abierto. Es cierto que el euro fuerza a corregir comportamientos poco ortodoxos, pues impone un déficit presupuestario cero y la supresión de barreras a la libre competencia. Esa disciplina es bienvenida para corregir la inclinación demagógica de muchas democracias. El rechazo del tal disciplina explica la resistencia de las capas populares danesas y suecas a entrar en la unión monetaria: temen que el euro ponga en peligro su Estado de bienestar, sus pensiones, medicinas, guarderías, escuelas. Ese miedo me parece desplazado, pues la beneficencia pública puede y debe financiarse, en el nivel que decidan los votantes, con impuestos y tasas, no con déficit, que no es sino un engañabobos.

En el Reino Unido, las razones de la resistencia son diferentes. Una gran mayoría del electorado recela de que el euro, además de fines de estabilidad monetaria y económica, persiga objetivos sobre todo políticos. Temen lo que muchos continentales desean, que el euro sea un instrumento de centralización política, una bandera para el nacionalismo europeo. Ya he dicho que el euro es una institución con muchas dimensiones. Numerosos británicos, preferirían una unidad atlántica que incluyese a los países americanos. También recelan de que la mayoría de escoceses que quieren el euro lo deseen para poder separarse de Inglaterra. Pues eso: la unión monetaria puede acabar en una pelea entre sus miembros, en el enfrentamiento con Estados Unidos y en la disolución de viejos estados nación, lo que a algunos nos alarma.



Peste de anti-globalizadores

17 de agosto de 2001

Los movimientos contrarios a la globalización sufren todos de una confusión elemental: creen que la miseria de la mayor parte de la humanidad es culpa de los ricos, que o bien explotamos a los pobres o bien nos negamos a ayudarles. La verdad es más complicada: lo natural es pasar hambre y penalidades, padecer enfermedades sin cuenta y, expuestos a muerte violenta o sumidos en la superstición, vivir bajo la férula de déspotas caprichosos. Como dijo Thomas Hobbes, la vida en el estado natural es "solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve". El camino hacia el bienestar es mucho más largo y complicado de lo que dicen los mensajes de los anti-globalizadores, quienes ni siquiera aciertan a señalar los defectos reales del sistema capitalista actual.

Ante tanto despropósito, yo estaría dispuesto a aconsejar paciencia y oídos sordos, pero no es la primera vez que los bárbaros destruyen el artificial entramado de la civilización. La nuestra, la civilización de la autonomía individual, de la libertad científica, de los cambios de gobierno sin violencia, de la prolongación de la esperanza de vida, de la creciente prosperidad popular, es demasiado preciosa para que nos rindamos con armas y bagajes a quienes ni siquiera son capaces de comprender el sistema que pretenden transformar.

No me parece mal que haya disconformes en el seno de nuestra sociedad, que precisamente se distingue por permitir la diversidad política y social. Pero aceptando que muchos otros no piensen como yo, no estoy dispuesto a callar ante su demagogia otorgándoles la razón con mi silencio. Estoy aún por oír un solo argumento convincente entre el griterío y el barullo de sus manifestaciones. Como científico de la economía, cuando me enfrento en mesas redondas, debates periodísticos, controversias universitarias, con la patulea de los enemigos de la mundialización, me siento como un astrónomo que tuviera que discutir con un creyente en los horóscopos.

Recientemente conversé ante las cámaras con una buena mujer orgullosa de ser comunista. Le dije que, dado su aspecto bondadoso, estaba seguro de que no se identificaba con el comunismo histórico, pero expresé dudas sobre la fiabilidad de su consejo, cuando el último intento de los comunistas de mejorar la sociedad dejó más de 100 millones de muertos sobre la faz de la Tierra. Tengo pánico a la utopía, esa seductora mujer con la cabeza en las nubes y los pies en un charco de sangre.

Lo primero que no entienden es que el sistema que atacan tiene la ventaja de no ser un sistema, sino el resultado espontáneo y no planeado por nadie, de las acciones de incontables hombres y mujeres pasados y presentes. Representan el capitalismo como una dictadura, como un oligopolio de "multinacionales", que imponen gustos, compran gobiernos, atentan



productores, saquean la naturaleza. La vida de los grandes empresarios sería muy fácil si moldearan a su antojo la masa inerte de los consumidores. Un ejemplo: el fútbol se ha convertido en un espectáculo millonario; ¿cree alguien que ese consumismo deportivo es algo artificial impuesto al pueblo con un hábil lavado de cerebro?; ¿no es más bien un cauce en el que los individuos vierten su amor a las emociones fuertes, su gusto por dividirse en tribus, su deseo de parecerse a los héroes? El que haya grandes empresas en el fútbol o en los automóviles no quiere decir que falle la competencia. Los grandes fabricantes de autos son capaces en menos de tres años de copiar los todo-terreno de sus rivales, que el público demanda. El consumidor es rey, aunque le pese a la izquierda antiyanqui, que viste "T shirts" y "blue jeans"; que oye música "rock" más "heavy" cuanto más revolucionaria; que se cita por "Internet" para la próxima algarada.

El capitalismo democrático, síntesis de antiguas instituciones, como la familia, la propiedad privada, el sufragio universal, el dinero, el comercio, el trabajo libre y la libertad de opinión, es el sistema que está sacando a grandes zonas del Tercer Mundo de una miseria que parecía sin esperanza. En Asia no había más oasis que Japón: ahora se desarrollan, con los altibajos naturales, Corea, Taiwán, China, ¡Vietnam!, Singapur, India... La apertura de México a la democracia y al comercio están transformándolo en un país industrial. La pobreza se perpetúa en las sociedades atrapadas por un pasado populista o sometidas a la guerra civil y el mal gobierno, como durante nuestra Edad Media. ¡Cuánto desprecio por los datos veo en quienes dicen que el número de pobres aumenta cuando China e India, los dos países más populosos de la Tierra, han estado creciendo durante un decenio a tasas del 10% y de 5% anual.

No me importa la desigualdad, porque no soy envidioso. Me importa la pobreza y creo que uno de los instrumentos más poderosos para combatirla es el libre comercio. Hablaré del azúcar. ¡Pobres cubanos, aplastados por el imperio yanqui que les ha impuesto un embargo comercial! ¿No? Ciertamente es que el levantamiento del embargo ayudaría a que los esclavos de Fidel empezaran a intuir lo mal que funciona un sistema socialista. Pero quienes de verdad les hacemos daño somos los europeos, con la política agrícola que defiende José Bové: nuestra azúcar de remolacha cuesta el doble del precio mundial porque impedimos las importaciones de azúcar de caña. Las reclamaciones de más ayuda para Cuba no son más que una hoja de parra para tapar nuestras vergüenzas.

Para salir de la pobreza, el Tercer Mundo necesita más comercio y más democracia, no más intervención y más anarquismo.



Las causas de la riqueza

27 de agosto de 2001

No me importa en absoluto el que haya grandes diferencias entre las personas más ricas y las más pobres. Si como ocurre en las democracias capitalistas las grandes fortunas se obtienen sirviendo al prójimo; jugando al fútbol, creando una cadena de tiendas de moda o inventando un sistema operativo para PCs, por ejemplo. No entiendo, entonces, por qué algunos se escandalizan. Más discutibles son las fortunas obtenidas por culpa de la intervención estatal mal concebida, como las de los tratantes de armas o los traficantes de drogas. Las fortunas obtenidas en honrada competencia, que son las más, me parecen buenas para la sociedad, por la variedad que dan al gasto y las formas de vida. Como estoy de acuerdo con los críticos del sistema en que el dinero no mide el mérito de las personas, sino sólo si han sabido satisfacer las demandas del gran público, me resigno de buena gana a no ser multimillonario ni me duele que haya quien lo sea. No soy envidioso.

Lo importante pues es que desaparezca la miseria. Los anti-sistema cometen dos errores en su percepción de la pobreza en el mundo de hoy. Se equivocan al pensar que ha sido causada por la explotación de los países ricos. Y erran al creer que está aumentando.

Una de las afirmaciones que más indignación ha causado entre mis lectores anti-progresistas es que la pobreza es el estado natural de la humanidad y que la riqueza es el resultado de un entramado artificial de instituciones y libertades, que son lo más contrario que pueda imaginarse a la sociedad de los anti-sistema.

Lo natural es pasar hambre y penalidades, padecer incontables enfermedades y, vivir expuestos a una muerte violenta o sumidos en la superstición, vivir bajo la férula de déspotas caprichosos. Como dijo Thomas Hobbes en 1651, la vida en el estado natural es "solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve". Su sentencia sigue siendo válida. Por eso Adam Smith tituló su libro de 1776 "De las causas de la riqueza de las naciones" y no de la pobreza. Lo fácil es ser pobre. Para que cunda el bienestar, es necesario que se respete la propiedad privada, se cumplan los contratos, haya un gobierno honrado que defienda los derechos humanos y se abran los mercados, incluso la Unión Europea, al comercio internacional. ¡Muy difícil!

Tampoco es cierto que la pobreza esté aumentando con la globalización del comercio y de las finanzas. Voy a tomar cifras de las Naciones Unidas, un organismo internacional que los anti-sistema parecen respetar. Comenzaré comparando el crecimiento económico de los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. De 1981 a 1990, el crecimiento de la producción de los desarrollados fue mayor, aunque ambas positivas, un 2,7% de media anual de los ricos frente a un 2,4% de los pobres. Pero en los años que van de 1991 a 1997,



el orden se ha invertido: cada año ha habido un crecimiento de los subdesarrollados superior en más de dos puntos porcentuales; y en el 1998 y 1999, virtual igualdad. No es casual el que todos los años, del 81 al 98, el comercio haya crecido mucho más que el PIB. ("World Economic and Social Survey, 1999").

Bjorn Lomborg, en "The Economist", cita fuentes de la ONU para señalar que la producción agrícola per cápita en el mundo subdesarrollado ha aumentado un 52% desde 1961. Del año 1961 al 1998, la ingesta alimenticia por persona en esa zona ha aumentado de 1.932 calorías, con la que casi es imposible mantenerse vivos, a 2.650. El mismo autor toma de esas fuentes la proporción de personas que sufrían de inanición en 1949: el 45% frente al 18% en la actualidad.

Naturalmente, no basta con índices de producción y alimentación para acercarse a una medida del bienestar. En el "Informe sobre desarrollo humano, 1999", la ONU aplica un Índice de desarrollo humano de tres dimensiones: producción, alfabetización y esperanza de vida. Pues bien, de los 79 países incluidos en ese índice entre 1975 y 1997, sólo Zambia ha sufrido una caída. De los demás, hay 54 que se han acercado al máximo en más de un 20%. Entre los que más han adelantado se encuentran, no sólo Singapur, Corea del Sur y Hong Kong, sino también Indonesia, Egipto y Swazilandia.

¡Qué molestas son las estadísticas para los dogmáticos!



Ridículo en Eurolandia

22 de octubre de 2001

Tras el ataque terrorista del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono, los distintos países amigos de EE.UU. han ido reaccionando de manera diferente según su preparación militar y según el pro o antiamericanismo de sus ciudadanos. La respuesta del Reino Unido ha sido cálida, inmediata y práctica. Incluso ha surgido algún país que se encontraba en las bambalinas de la escena mundial, como era Rusia, que con agilidad e inteligencia ha aprovechado el estado de necesidad de quienes fueran sus enemigos hace poco más de diez años para estrechar sólidos lazos con ellos. Las naciones del continente europeo se han contentado con declaraciones de adhesión inquebrantable, con incondicionales puestas a disposición, con sesudas exhortaciones a la prudencia, pero al lado de los británicos, agua de borrajas. América no olvidará.

He quedado avergonzado por las tibias reacciones de tantos políticos, escritores, artistas españoles ante los dolorosos momentos por los que están pasando los americanos. La Vanguardia preguntó la semana pasada a un grupo de intelectuales si eran pro americanos. Unos señalaban que el terrorismo islámico tiene sus razones; otros se declaraban antiamericanos profundos; los de más allá perdonan la vida al cowboy Bush; incluso los más amigos de ese gran país se declaraban amigos de los artistas y políticos "progres" y abominaban de los yanquis más tradicionales. Ahora oiremos voces culpando a los americanos y sus aliados de las víctimas civiles de la contienda, cuando han sido los talibanes quienes han dado acogida a Osama Bin Laden y sus terroristas y se han negado a entregarlo pese a lo que ello podía significar para su sufrido pueblo. Las imágenes de la miseria del pueblo afgano que diariamente nos ofrece la televisión y las noticias de que ese pueblo malvive de la venta de opio a los traficantes de droga sugieren que los talibanes podrían ocuparse de otra cosa que de fomentar y proteger el terrorismo islámico.

El mismo día del inicio de las operaciones, vimos en la pantalla de nuestros televisores a Bin Laden diciendo que los ataques de Nueva York y Washington eran la justa respuesta a cincuenta años de crímenes americanos y admitiendo prácticamente la responsabilidad de su organización por esos atentados. Le precedió ante las cámaras, situadas en algún lugar de Afganistán, su lugarteniente Ayman Zawahri, el dirigente del grupo egipcio "Yihad Islámica" al que se considera responsable del asesinato de Anwar el-Sadat, así como de las muertes de numerosos turistas en visita a Egipto. Zawahri lamentó en ese mismo vídeo la pérdida de Al Andalus. Espero que esta yihad no tenga como uno de sus fines reconquistar Andalucía, después de todos estos siglos. El fanatismo evidenciado en ese vídeo por los dirigentes de terroristas y sus llamadas a la guerra santa helaban la sangre.



La guerra plantea dos cuestiones fundamentales a la Unión Europea: una, lo fútil de la idea que albergan tantos europeos de convertirse en un poder rival de los EE.UU.; otra, lo débil de su preparación militar.

La solitaria reacción de los británicos en apoyo de los americanos indica que la contribución europea a la defensa del mundo atlántico debe basarse en las fuerzas armadas nacionales en el marco de la Alianza Atlántica, no un mítico ejército europeo, para cuya creación no existe verdadera voluntad política. Además, se ha visto que las defensas nacionales de varios de los Estados de la UE no se encuentran a la altura de las exigencias del peligroso mundo en que vivimos. El contraste entre los medios y la preparación de las fuerzas armadas británicas, y los de los demás Estados de la Unión Europea es clamoroso. Alemania está limitada por su Constitución a tener un ejército meramente defensivo. Italia tiene unas fuerzas armadas que tampoco están a la altura de sus capacidades. Los españoles hemos estado denegando a nuestros ejércitos de Tierra, Mar y Aire los recursos que corresponden a una potencia de rango medio. No es que el gobierno se haya mostrado avaro por cortedad de miras ni que los militares no hayan expuesto las necesidades de la defensa con reiteración, es que la opinión pública española está aquejada de un pacifismo larvado o de una confianza bobalicona en la bondad de la humanidad.

La excepción es Francia. Pero nuestro vecino del norte, de gran tradición militar, siempre anda a la retranca cuando se trata de defender los intereses atlánticos. El gobierno francés no ha enviado su poderosa flota inmediatamente al Golfo Pérsico en ayuda de sus aliados americanos, ni el primer ministro Jospin se ha paseado por el mundo en compañía de Blair intentando conseguir aliados para la complicada operación de sacar de sus cuevas a unos terroristas que tienen el apoyo del gobierno local y de gran parte de la población.

La gran alianza que ha montado el presidente Bush tiene como objeto el defender la civilización occidental de los ataques de los bárbaros exteriores e interiores. Nuestra civilización no se caracteriza por la imposición de un ideario, una cultura o una religión únicas. En ella cabe una infinita variedad de religiones y culturas, mientras acaten el principal legado de nuestra historia: las libertades individuales, ciudadanas y económicas sobre las que se basa nuestro progreso.



El éxito de occidente

31 de octubre de 2001

¿Por qué nos odian? Tal es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos de Estados Unidos al ver en sus televisores violentas manifestaciones en los países musulmanes contra la campaña militar de su gobierno. Su desconcierto sería aún mayor si tuvieran noticia de las actitudes anti-americanas de los socialistas y verdes alemanes y franceses, o de las palabras taimadamente favorables a los terroristas de muchos mal llamados intelectuales españoles, insensibles ante el cruel fanatismo de los autores de los crímenes del 11 de septiembre. Esa hostilidad es más honda que la de un anti-americanismo visceral en los países musulmanes y entre los izquierdistas europeos. Es incluso más profunda que el anti-capitalismo de los críticos de la globalización. Esa hostilidad nace de un intento de negar que la civilización occidental, con todos sus defectos, es la más humana, próspera, progresiva y justa de las que recuerda la historia.

La confusión mental reinante en Occidente lleva a que se tilde de eurocéntrica, intolerante e incluso racista esta afirmación de que nuestra sociedad occidental es, por alguna de sus características, superior a las demás existentes hoy y también a las que decayeron en el pasado. Lo diré con sumo cuidado. Lo que hace la superioridad de la civilización occidental no son nuestras creencias religiosas o ausencia de ellas, nuestras complicadas vidas familiares, nuestras artes progresistas, nuestros modos de diversión o extrañas modas, ni tampoco la ciencia, la tecnología o las capacidades productivas de que hacemos gala, y todo lo que ofende a los más tradicionales o más espirituales de nuestros enemigos.

La superioridad de nuestra civilización radica en unas normas que, a lo largo de varios siglos, hemos ido descubriendo sin pretenderlo y que conforman la esencia de una sociedad abierta: el respeto de las libertades individuales, la defensa de la propiedad privada y los contratos, la igualdad de todos ante la ley, la participación de los ciudadanos en el gobierno de sus naciones. Nuestra superioridad se basa en reglas de procedimiento y en formas constitucionales: gozamos de libertad de pensamiento, expresión y asociación; nadie puede robar impunemente nuestra propiedad ni incumplir sus promesas; las leyes son iguales para todos; cambiamos los gobiernos con nuestros votos. Esas reglas constitucionales, cuando las observamos, garantizan la libre competencia entre distintas formas de vida y dejan la puerta abierta a la esperanza de que lo mejor prevalecerá: la reacción del pueblo americano bajo el liderazgo del presidente Bush confirma esa esperanza.

Quienes hayan visto en la televisión, como yo lo vi con gran emoción, el acto religioso del Yankee Stadium y hayan oído a tres clérigos musulmanes proclamar su amor a América y su Constitución, y luego entonar una plegaria en nombre del único Dios, el clemente, el misericordioso, podrán comprender que en una sociedad abierta es posible ser musulmán, mientras sean respetadas reglas como la de la monogamia y la de la igualdad de derechos de



las mujeres. No lo veo incompatible, como tampoco lo ha sido el abandono de la poligamia para la práctica de la religión mormona.

La grandeza de nuestra civilización estriba precisamente en esto: hemos conseguido dotarnos de reglas constitucionales que permiten el florecimiento de culturas diversas, la competencia entre formas de vida, el contraste de religiones, la crítica razonada de ideas, la difusión de nuevas tecnologías. Por eso somos más prósperos. Quienes no entienden la razón del éxito de Occidente quieren corregir su atraso por el reparto forzoso de la riqueza, por la imposición del pensamiento único, por la prohibición de la disidencia. De esa manera, el bienestar que sedientos ambicionan se les escapará como agua entre los dedos.

Todo ello no quiere decir que la historia se haya acabado ni que nuestra civilización no vaya a decaer ni a desaparecer. Torres más altas cayeron. Pero el ataque de los bárbaros de dentro y de fuera es una llamada urgente, no ya a calmar nuestra mala conciencia abjurando nuestros principios, sino a ahondar en los derechos individuales, en el libre mercado, en la igualdad ante la ley, que son la esencia de nuestra dignidad y grandeza. Por eso mismo debemos acudir en ayuda de quien es hoy el principal sostén de la sociedad abierta, es decir, en defensa de los Estados Unidos de América.



España, país de inmigrantes

7 de junio de 2002

España, que durante siglos ha sido un país de emigrantes, se ha convertido desde su entrada en la Unión Europea en lugar de acogida de un número creciente de extranjeros. Aunque la proporción no es alta comparada con países como Australia, Canadá, Estados Unidos y Alemania, sin embargo el aumento de nuestro ritmo de inmigración es notable y el de la inmigración ilegal, preocupante.

La inmigración ha aparecido como problema nacional cuando el número y proporción de extranjeros en España aún alcanzan niveles reducidos. Según la publicación del Círculo de Empresarios, "El fenómeno de la Inmigración: aportación a un debate", son los EEUU los que más inmigrantes reciben, unos 800 mil anualmente, con lo que hoy son 26 millones los residentes nacidos fuera del país, seguidos por Alemania con 600 mil anuales. Pero en proporción al número de habitantes, destacan Australia, Canadá y Suiza, con 21, 17 y 19 por ciento en 1998. España recibe unos 94 mil inmigrantes legalmente al año, a lo que hay que añadir un flujo de ilegales difícil de cifrar. En todo caso, la población extranjera total residente en España (incluidos unos 200 mil ilegales) alcanza el 2,5 a 2,7 por ciento de nuestra población. El problema no ha hecho más que empezar.

Desde el punto de vista de nuestros hermanos más pobres, el trasladarse a un país en el que tienen posibilidades de prosperar es perfectamente comprensible. Como emigrante amenazado de expulsión en el Reino Unido, fue mucho el capital humano que yo pude acumular allí y que me valió para volver a España cuando la situación política mejoró. Los países que envían a sus habitantes a trabajar al extranjero durante algún tiempo a la postre también se enriquecen.

Pero la inmigración desde el Tercer Mundo dejaría de ser un alud en la medida en que el nivel de vida se elevase hasta alcanzar el de Europa. Las limitaciones al comercio internacional son un acicate a las migraciones. Si en vez de proteger los países ricos a sus improductivos grupos de presión, como nosotros al sector agrícola, si en vez de empeñarse los pobres en encarar sus importaciones, se libera el comercio, rápidamente aumentarían las posibilidades de sobrevivir en las regiones exportadoras de mano de obra. El comercio es sustituto de la emigración.

Por el otro lado, los emigrantes contribuyen a la riqueza de los países receptores, en la medida en que se ganan la vida en el libre mercado. Si una empresa o patrono paga un sueldo a un inmigrante, es que éste está añadiendo valor a la producción. Nunca entendí la objeción a las migraciones económicas. Por dar dos ejemplos: tuve la suerte de recibir la enseñanza de



muchos profesores centroeuropeos huidos de Hitler y Stalin. He visto con mis ojos la transformación de Vancouver, gracias a la inmigración china.

La competencia que plantean estos trabajadores extranjeros a los locales, en especial a los de más baja calificación, es una de las fuentes del resentimiento con que se les acoge. La expresión de ese disgusto se condensa en la frase "los inmigrantes dejan sin trabajo a los nacionales". Pero es sabido que la oferta de mano de obra, al contribuir al crecimiento económico, crea su propia demanda. Sólo quedan desplazados quienes no son capaces de "reciclarse", como dicen los cursis. El propio estudio del Círculo de Empresarios presenta unos datos de la mitad de los años noventa que indican más bien una relación inversa entre desempleo e inmigración. El país con más paro y menos extranjeros es España, mientras que EEUU, Canadá y Australia muestran mucha inmigración y mucho empleo.

Se pueden añadir otras tres repercusiones sociales a ésta sobre el mercado de trabajo: sobre las formas de vida, sobre la delincuencia, y sobre la Seguridad Social. La gente tiene la impresión, no del todo injustificada, de que hay un límite a lo que un país puede aceptar en cuestión de costumbres foráneas, especialmente si son contrarias a los derechos humanos, como el matrimonio forzado de menores y las mutilaciones rituales. Contra la delincuencia, debe imponerse la "tolerancia cero", cualquiera sea la edad de los transgresores y su nacionalidad. En cuestión de beneficios de la Seguridad Social la respuesta no es tan fácil, pero no hay duda de que muchos inmigrantes vienen a aprovecharse del Estado de Bienestar.

El primer ministro de Dinamarca, Anders Fogh Ramussen ha hecho aprobar por el Parlamento que, durante los siete primeros años de su estancia en Dinamarca, los inmigrantes no reciban ningún beneficio social, si no es educación para los hijos y cuidados médicos en caso de accidente: nada de subsidio de paro, nada de pensión pública durante ese tiempo. Así quedaría claro que vienen a contribuir a la riqueza con su trabajo y que quieren integrarse de verdad en nuestra sociedad. ¡Ah! y añadido que la supresión de fronteras por el Tratado de Schenghen no me parece muy buena idea.



Globalización: Fuego cruzado

12 de julio de 2002

En las democracias occidentales cunde la idea de que la globalización, gracias a las nuevas tecnologías y al capital cosmopolita, es una fuerza casi irresistible, una corriente que socava los cimientos del Estado nacional, anega los sistemas de seguridad social, bate la agricultura y la industria con las olas de una dura competencia; y cubre los gustos, las culturas, las sociedades con el limo de la uniformidad. Tanto los que están a favor como los que están en contra del capitalismo global parecen dar por sentado que, tras la caída del viejo orden comunista, el neoliberalismo, a lomos de Internet, del libre comercio y de la especulación internacional, triunfa en toda la extensión del globo, sometiendo la socialdemocracia, el intervencionismo estatal, las tradiciones nacionales al asalto de una modernización sin paliativos.

Un investigador de Cato Institute, Brink Lindsey, acaba de publicar un notable libro titulado "Contra la mano muerta", en el que sostiene que tanto los antiglobalizadores como los neoliberales yerran al dar por hecho el triunfo de la libertad de mercado. Ha querido Lindsey contraponer la mano muerta del intervencionismo industrial, de la planificación burocrática, del paternalismo social a "la mano invisible" de Adam Smith, que conduce a quienes sólo buscan su propio interés, a promover involuntariamente un fin que no era parte de su intención, el fomento del bien común. Para Lindsey, es la mano muerta de la reacción estatista la que la que está poniendo en peligro el futuro del capitalismo global.

No sabe Lindsey que "mano muerta" es una vieja expresión española, con la que los ilustrados españoles del reinado de Carlos III designaban aquellas instituciones que acumulaban propiedades, sin posibilidad de colocarlas en el mercado aún cuando no supieran explotarlas debidamente. Los legados de la Iglesia, los mayorazgos de las familias nobles, las tierras comunales y concejiles de los ayuntamientos, estancaban fincas, palacios, tesoros, que la autoridad pública acabó desamortizando en busca de ingresos. Ese mismo fenómeno amortizador se repitió en el siglo XX en el mundo entero, cuando los Estados nacionalizaron empresas y actividades, que luego hubo que privatizar para devolver las economías a la senda del crecimiento.

Los movimientos antiglobalizadores, con sus manifestaciones callejeras a veces violentas, no constituyen un verdadero peligro para la prosperidad económica y la libertad de elección individual. Tampoco son peligrosas las mal hilvanadas críticas de economistas y filósofos amateur, como George Soros y Jeremy Rifkin, porque al final se impone la evidencia de que las crisis financieras no hundan el sistema, y que el avance tecnológico no nos deja sin trabajo. Incluso las falsas afirmaciones de personajes como Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique, de que la globalización aumenta el número de pobres y amplía la



desigualdad en el mundo, irán dejando de convencer incautos a medida que se conozca la realidad estadística.

A veces parece que el sistema de mercado se sabotea a sí mismo, por la falta de ética y gestores y especuladores sin escrúpulos. El caso de Enron suele citarse como el tipo de fallo que muestra la necesidad de una regulación más estricta para salvar el capitalismo de las garras de los capitalistas. Pero un sistema legal como el de Estados Unidos no necesita más reglamentaciones que las existentes para castigar y prevenir los abusos. Pregunten si no a los socios de Arthur Andersen si el castigo no ha sido inmediato.

Los verdaderos enemigos de la economía de mercado son los que, en busca de rentas y privilegios, levantan barreras contra la competencia. Los sistemas de pensiones públicas de casi todos los países de la Unión Europea soportan obligaciones futuras insostenibles: la prueba es que los gobiernos no paran de recortar beneficios para evitar futuras catástrofes a la argentina. Los sindicatos, que viven de los presupuestos nacionales y comunitarios, que carecen de verdaderos afiliados, plantean huelgas generales en Italia o en España, en cuanto temen reformas para incentivar a los parados a buscar con ahínco un nuevo empleo. El 12% de la población activa de los Países Bajos goza de incapacidad permanente. La UE quiere armonizar los impuestos de la Comunidad e imponer el euro a Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia (además de a Suiza y Noruega), para que la competencia fiscal y monetaria entre los países europeos no ponga en peligro la centralización política a la que aspiran. La lista podría seguir inacabable.

La mano muerta ha ahogado más de una economía en la historia de la humanidad. No hagamos caso de los argumentos falaces o hipócritas de los buscadores de rentas: el mercado funciona. Son los gremios, los gobiernos, los funcionarios quienes hacen todo por maniatarlo, con la esperanza de que el costo de las interferencias que les benefician no sea demasiado evidente para el sufrido ciudadano. El capitalismo global sigue estando en entredicho: quienes dan por hecha su victoria hacen que los amigos de la libertad bajemos la guardia.



El valor del euro

29 de julio de 2002

El euro ha recobrado la paridad con el dólar que perdió en febrero de 2000. Los críticos del euro subrayaron entonces aquella caída como señal de la falta de calidad de la flamante moneda europea. Ahora podría parecer que se han vuelto las tornas, pero los amigos del euro no gritan albricias ante la igualdad recobrada. La razón de este silencio es bien clara: la flamante igualdad se debe a una pérdida de valor del dólar por falta de confianza de la economía financiera americana, no una revaluación del euro por el atractivo de los datos fundamentales de la economía europea.

Vista entre otras cosas la evolución del tipo de cambio con el dólar, cabría preguntarse además en qué medida ha sido conveniente para Europa la creación del euro y si hay razones para desear que los británicos, los suecos y los daneses, además de noruegos y suizos, abandonen pronto sus monedas nacionales por el euro.

Los tipos de cambio son indicadores ambiguos. La valoración de una moneda por comparación con otras puede ser el reflejo de tres elementos distintos aunque relacionados entre sí: las expectativas de inflación, las cotizaciones de las Bolsas y la marcha de las economías reales. La depreciación de una moneda puede deberse a una política monetaria y fiscal imprudente, como es el caso de las devaluaciones del peso argentino o el real brasileño. Mas cuando la comparación es entre divisas bien llevadas, su valor relativo refleja la evolución de los mercados financieros y sobre todo las circunstancias de fondo de la economía productiva. Dicho de otra forma, aunque el precio de las monedas recoge sin duda las expectativas de inflación en sus respectivos países, en situaciones de precios más o menos estables, las divisas reflejan en última instancia la productividad relativa de las empresas y los trabajadores en los sectores del país que comercian internacionalmente.

El elemento clave, pues, en la valoración del euro es la comparación entre las economías europea y estadounidense. En el momento actual, los inversores muestran un poco menos de desconfianza en la economía financiera del continente europeo que en la de EEUU. La burbuja de Wall Street y Nasdaq, al reventar, ha dejado unas secuelas de fraudes, disimulos contables, inversiones imprudentes, que sin duda los responsables pagarán pero que está haciendo tambalearse las cotizaciones. La economía productiva por su parte muestra mucha más solidez que la esperada, con tasas de crecimiento de 2,7% en 2001, y una expansión anualizada en el primer trimestre de 2002 de 5,6%. La pérdida de patrimonio sufrida por los inversores en Bolsa puede afectar su demanda de bienes de consumo diario y duradero, pero en fin de cuentas lo que vale para el crecimiento es la inversión y el avance tecnológico, que siguen muy vivos en EEUU, sobre todo si se comparan con un crecimiento estimado de un 1,4% del PIB de la Unión Europea.



Vista así, la revaluación del euro frente al dólar no es una noticia del todo favorable para Eurolandia. Los europeos continentales hemos evitado una recesión más profunda gracias a que la debilidad del euro animaba nuestras exportaciones. Si ahora entramos en una época de moneda fuerte, por razón de la debilidad de la economía financiera de EEUU más que por la productividad de la europea, ello puede afectar a corto plazo la ansiada recuperación de las economías de Francia y Alemania, y por carambola la nuestra. Sin embargo, a largo plazo y cuando se maneja de forma ortodoxa, la moneda es un velo, que puede aletear un poco, pero que en fin de cuentas no tiene efectos reales permanentes.

Un mercado único y sin barreras como pretende ser el europeo no necesita tener una moneda única. La existencia de diversas monedas que fluctúan entre sí no es impedimento para la expansión de los intercambios comerciales. Si no lo creen, fíjense en la tasa de crecimiento del comercio mundial, que de 1990 a 1998 ha crecido por término medio un 6,4% anual, mientras la producción mundial lo hacía en un 3,2%. El mercado único de la UE puede funcionar y expandirse perfectamente con una variedad de monedas.

Si es así, ¿por qué tanta insistencia en que los británicos adopten el euro? Una moneda es también un símbolo político e incluso un instrumento constitucional. No hay duda que a los países que teníamos una política monetaria pródiga e irresponsable, la introducción del euro nos ha traído grandes beneficios temporales, sobre todo la reducción de los tipos de interés al nivel de los del Bundesbank. Pero el Banco de Inglaterra es serio y la esterlina no es una moneda inflacionista. No hay razón para abandonarla, si no es porque el euro simbolizaría una UE más centralizada. Por eso creo que la detestación de la esterlina en los círculos políticos de Eurolandia se debe sobre todo a que aquí nos inclinamos mucho más por una Europa federal que por una Europa de los Estados.



Popper y el nacionalismo

14 de agosto de 2002

Hace cien años nació Karl Popper en la Viena imperial. Al celebrar la obra y la persona de mi maestro debo recordar a catalanes, vascos y castellanos la firmeza con la que rechazó los nacionalismos de toda índole. Había nacido en un estado plurinacional, en el que podían integrarse y prosperar incluso las personas de etnia judía como él. Disuelto el Imperio Austro-Húngaro tras la Primera Guerra, Popper tuvo que abandonar para siempre una república austriaca cada vez más enferma de nacionalismo alemán, e integrarse en la cultura abierta del mundo de habla inglesa.

Tomo un solo detalle de la recentísima biografía de Malachi Hacoheh sobre "Los años formativos de Popper, 1902-1945". Refugiado en Nueva Zelanda, se presentó Popper voluntario al ejército neozelandés en cuanto tuvo noticia del estallido de la Segunda Guerra. Por suerte para la filosofía no fue aceptado y dedicó esos años a lo que él llamó "su esfuerzo de guerra", a la composición de "La sociedad abierta y sus enemigos" (1945).

Su actitud cosmopolita no le impidió, pues, una adhesión patriótica a la sociedad y los valores que había elegido; pero recuerdo bien el horror que le inspiraba toda ideología nacionalista, no sólo la totalitaria de Hitler, o Mussolini, sino todos los nacionalismos, incluso los aparentemente justificados por la persecución, como el sionismo. "La idea de que existen unidades naturales como las naciones, o los grupos lingüísticos y raciales, es enteramente ficticia. El intento de ver el estado como una unidad 'natural' conduce al principio del estado nacional y a las ficciones románticas del nacionalismo, el racialismo y el tribalismo". Popper condenaba así la idea de que las naciones, los estados, las clases sociales eran algo más que modelos interpretativos de fenómenos sociales que debían analizarse en términos de individuos, sus deseos y sus acciones. La creencia en la realidad metafísica de la nación, lo sagrado de la lengua nacional, lo permanente de la identidad racial, debía poder desentrañarse, para así echar las bases de una sociedad crítica y abierta.

Nacida con la Revolución francesa, la exigencia de que toda nación alcance el rango de estado es una ideología que, paradójicamente, se difundió entre los pueblos agredidos por Napoleón en nombre del estado-nación francés: como muestra, vean esta frase de Hegel, citada por Popper: "una Nación que no ha tomado la forma de Estado -una mera Nación- no tiene estrictamente hablando historia, como ocurre con las Naciones en estado salvaje". Elevado el nacionalismo a principio sagrado durante la Guerra del catorce, fue el origen de la atomización de Europa en estados inviables, y la base del fascismo y el nazismo. Cuando tras la Segunda Guerra, los europeos empezamos a apartarnos del nacionalismo, las colonias recién liberadas lo tomaron como coartada de toda clase de excesos. Así, la democracia que Popper definió de forma minimalista, como el régimen que permite cambiar de gobierno sin



derramamiento de sangre, se ha pervertido insensiblemente, hasta significar el plebiscito continuo de la nación en marcha.

En un ensayo que tituló "Hacia una teoría racional de la tradición", se opuso Popper al racionalismo que se burla de todas las costumbres que conforman la tradición de las sociedades y pretende hacer tabula rasa de todos los tabúes a los que instintivamente nos atenemos. Las tradiciones desempeñan una función esencial en la vida social, la de crear un cierto orden y la de ofrecernos una base sobre la cual actuar. La facilidad de trato con quienes han sido educados en la misma cultura, las costumbres de puntualidad y honradez inculcadas en la familia, la escuela, el trabajo, son el efecto de tradiciones que facilitan la vida en común. Este tipo de regularidades se extiende al campo político: damos una adhesión crítica y civilizada a las tradiciones y costumbres de nuestro país porque así se crea una expectativa de solidaridad, de juego limpio, de colaboración espontánea que hace de nuestra Constitución algo más que un texto legal.

Pero una cosa es el rechazo de toda tradición comunal y otra el examen crítico de las costumbres sociales. Debemos poder distanciarnos de nuestros hábitos, para no caer en la intolerancia fuertemente emocional que a veces caracteriza el tradicionalismo y el nacionalismo.

Para Popper, esas actitudes traslucen un miedo a la sociedad abierta, que a veces parece tan fría e impersonal que podría llamarse "la sociedad abstracta". A los hombres nos gustan los grupos concretos, y nos desazonan las grandes masas, los inesperados movimientos de precios, el exceso de información, la continua necesidad de tomar decisiones. Esa angustia de la sociedad abierta hace que olvidemos a menudo sus beneficios, como son el contraste de las ideas, la libertad de anudar relaciones personales, las oportunidades de creación e innovación, la mejora nunca soñada de nuestro nivel de vida. El nacionalismo es una de las formas de resistencia frente a la gran revolución que es el paso de la sociedad cerrada a la abierta.

Nada hay inevitable en los asuntos humanos. No tenemos que unirnos al rebaño de rinocerontes que invade las calles de la ciudad, como en la reveladora obra de Ionesco. Si comprendemos el fenómeno nacional, podremos salvar de la superstición orgánica nuestras democracias individualistas, tolerantes y plurinacionales.



La Unión Burocrática Europea

30 de octubre de 2002

La Unión Europea sigue en marcha por encima de todos los obstáculos e incidencias. Mucho de lo conseguido desde que se firmó el Tratado de Roma ha resultado beneficioso para los europeos, pero a la UE le falta apoyo democrático y calor popular. La razón principal de este llamado "déficit democrático" es que en la UE mandan los burócratas, que dan la impresión de haber puesto el proyecto europeo al servicio del aumento de su poder y competencias. El referéndum irlandés ha resultado al segundo intento en una mayoría de seis. Estaba en juego nada menos que la ampliación de la UE de 15 a 25 miembros, una transformación que en sí debería haberse presentado como emocionante e incluso llena de ilusión.

Vuelvo de la reunión del capítulo europeo de la Comisión Trilateral, que ha tenido lugar en Praga. La capital de la República Checa estaba deslumbrante: un modernísimo aeropuerto, unos monumentos casi repuestos de las inundaciones del verano, una tranquila aceptación de las elecciones legislativas recientes, una atmósfera de confianza y seguridad entre los responsables empresariales. Los checos ya han hecho todo el trabajo necesario para acceder a la UE, de tal manera que ni el Banco de Desarrollo Europeo ni el Banco Mundial encuentran allí proyectos de inversión que subsidiar. ¡Qué diferencia con la Praga de 1990, apenas caído el régimen comunista! ¡Aquellas luces mortecinas, comercios sin mercancías, iglesias desconchadas, tráfico balbuciente! Allí enviaría yo al maestro ciruela de la Real Academia Española, José Luis Sanpedro, quien, con tal de atacar a la globalización, se ha atrevido a escribir que el sistema de libre mercado tiene las mismas carencias que el comunista, sólo que las del capitalismo no se ven.

Parecía que la cultura centro-europea nos había sido amputada para siempre. Así se reincorpora a nuestro mundo atlántico: larga historia; música refinada, pinturas nuevas y antiguas, iglesias, palacios, plazas; investigaciones en marcha, capacidades productivas, un mercado anhelante, un tesoro que los europeos vamos a poner en valor entre todos. ¿Por qué no se presenta así la ampliación de la UE? Todo son lamentos porque el campo español y francés corre peligro de perder unas ayudas a la agricultura que de todas formas representan un abuso a los consumidores europeos y la explotación de los pobres del Tercer Mundo. Todo son miedos a que vengan a trabajar inmigrantes dispuestos a ganarse la vida honradamente lejos de casa, como un día hicimos irlandeses, italianos, portugueses y españoles. Todo son protestas porque la fábrica de Volkswagen en Eslovenia pone en aprietos a SEAT. Así aprenderán unos sindicalistas de visión estrecha que nada desengrasa tanto como laborar cinco días más al año con buena remuneración.

Digo que la razón por la que nadie habla así es que Europa la están haciendo los burócratas de la Comisión, del Parlamento, del Consejo. Desde el punto de vista del pueblo, la UE es un guiso alimenticio pero sin forma y confuso. Me pregunto cuántos ciudadanos europeos



saben que el Parlamento no legisla; o cuántos podrían explicar lo que es el Ecofin; o qué hace el Consejo de Asuntos generales; o si el presidente de la Comisión puede licenciar un comisario; o por qué tiene personalidad jurídica la Comunidad Europea pero no la Unión Europea. Incluso me atrevería a preguntar si diferencian entre Consejo, Comisión, Comunidad y Unión. Todo esto no importaría si hubiera políticos que hablaran a los ciudadanos de los países miembros directamente de lo que cuesta la política agraria comunitaria. O un político que planteara las ventajas de una pronta libertad de migración de trabajadores entre los veinticinco. O un líder que defendiera una unión aduanera con Canadá, México y EEUU. Es decir, que hubiera una discusión política y ésta no quedara escondida tras las disquisiciones sobre la VMC (votación con mayorías calificadas), o sobre los poderes de co-decisión del Parlamento, o sobre la preeminencia de un idioma sobre otro.

Todo ello hace sospechar que un ejército de gnomos en Bruselas pretende secuestrar las energías económicas y culturales del crisol europeo para construir un Estado centralizador y burocrático. Así enganchó Bismarck las energías del Zollverein, la unión aduanera alemana, para reforzar el imperio que estaba construyendo.



Tipos de competencia en el comercio

20 de noviembre de 2002

Confieso que no soy neutral en materia de libre competencia y he notado con tristeza la hostilidad contra todo lo que signifique competencia de tantos responsables de comercio en las distintas Autonomías, entre otras la de Cataluña.

La libre competencia tiene mala prensa. Se la retrata como un mecanismo darwiniano, de guerra de todos contra todos, en que el pez grande se come al chico, y cuyo resultado es empleo y producto "basura" y la monopolización del mercado por grandes tiburones multinacionales: sólo la continua vigilancia de las instituciones públicas evita todos estos males y consigue defender el modelo de sociedad elegido por el pueblo contra la corrosión globalizadora. ¿Exagero? No crean. No hace falta señalar a monsieur Bové para confirmar que hay quien piensa así: miren alrededor.

Para hablar de estas cuestiones con sosiego, lo primero es decir que todos los beneficios del comercio y de la actividad económica en general se obtienen cuando los acuerdos son voluntarios. La ley es necesaria para impedir que nadie obtenga beneficio empleando la violencia, el engaño o la coacción. Dicho de otra forma, la actividad comercial debe estar basada en el acatamiento de la autonomía individual, el respeto de la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. El sistema de la libertad natural, como lo llamaba Adam Smith, excluye pues la persecución del propio interés por la violencia física, moral o política, cual sería el apedrear farmacias que quieren abrir 24 horas al día o conseguir que el gobierno niegue una licencia de apertura a un competidor.

Dicho esto de manera tan elemental, veamos cuáles son los mecanismos y los efectos de la libre competencia. Son dos los conceptos de competencia que empleamos los economistas para analizar los mecanismos que hacen de la economía de mercado una fuente de bienestar. Uno es el concepto estático de competencia perfecta y otro el dinámico. Ambas son nociones abstractas, como siempre ocurre con los conceptos científicos, que no hay que juzgar por su realismo sino por su poder explicativo. El concepto estático toma una foto fija de un mercado para ver si en un momento dado hay suficientes competidores. El dinámico toma una película del sector o de la economía para ver si, cuando una empresa obtiene beneficios extraordinarios, aparecen rivales dispuestos a entrar en busca de una parte de tan cuantioso negocio, abaratando precios o multiplicando ofertas, para beneficio de los consumidores.

El concepto dinámico es el que aplica el Tribunal de Defensa de la Competencia español. Así, en el reciente Informe sobre la compra de una cadena de supermercados, no ha visto en esa fusión más peligro para la libre competencia que las barreras de entrada en el sector de la distribución comercial colocadas por la Generalidad de Cataluña, que "perjudican el auténtico



sentido de la competencia, como es la garantía del libre acceso y salida de los mercados de forma libre y lealmente".

El concepto estático de la competencia es muy útil para analizar determinados problemas analíticos, mas para entender y regular un sector tan ágil como es el del comercio hay que tener paciencia y ver la película completa. La libre competencia se entiende mejor comparándola con el deporte que con la guerra. Cuando el Barça y el Real Madrid se enfrentan en el Nou Camp, el juego es de suma cero, porque uno gana y otro pierde, incluso si hay empate, que perjudica a quien juega en casa. Vista estáticamente, la competencia comercial es también un juego de suma cero: los clientes que se lleva un comerciante no se los lleva su competidor. Pero en otro plano, el fútbol es un juego de suma positiva: si el partido es emocionante y los jugadores se parten el pecho, los espectadores quedan encantados, la audiencia de televisión aumenta, los clubes ganan más dinero, los jugadores pueden comprarse ese Ferrari con el que soñaban... Cuando los comerciantes compiten abaratando los precios, mejorando el producto, devolviendo el dinero a los clientes insatisfechos, aceptando pedidos por Internet y llevándolos a domicilio, o cambiando los modelos cada quince días, la competencia comercial beneficia a todos.

Haré tres reflexiones más, la primera sobre los tiburones empresariales. Fue San Agustín quien dijo primero eso de los peces grandes y chicos: que me perdone el santo, pero ¿cómo es que hay tantos peces chicos en la mar? He comparado las listas de las veinte primeras empresas de Estados Unidos en 1992 y 2002 según la revista Fortune: medidas por ventas, a los diez años sólo quedaban ocho de veinte; medidas por beneficios, ocho; y por capitalización, diez. Las grandes empresas también quiebran, ¿no les parece? Segunda reflexión. Estarán de acuerdo en que la competencia ha mejorado la calidad de nuestros comercios, grandes y pequeños. Tercera reflexión. En el deporte del comercio y las ferias parece estar ganando Madrid, más abierta y liberal, a Barcelona, más conservadora y recelosa. Pero no desesperen: la competencia deportiva empuja a todos a superarse.



La mano muerta contra la mano invisible

3 de enero de 2003

Los enemigos del capitalismo se estremecen ante lo que ellos piensan que es la ineludible fuerza de la globalización: reposado sobre las espaldas del Internet y la especulación financiera, el libre mercado está penetrando, según ellos, hasta los lugares más recónditos de la vida social. El Estado Nacional se debilita más y más con el paso de los días, el Sistema de Seguridad Social está siendo minado en sus bases, los paraísos fiscales permiten a los ricos evadir sus deberes fiscales, la competencia de mano de obra infantil y esclava en el tercer mundo empobrece a los trabajadores sindicalizados. El afán de lucro incentiva a la destrucción del medio ambiente, de la cultura nacional y de las lenguas indígenas y la cocina autóctona esta siendo desplazada por las cadenas de comida rápida. El resultado es un incremento preocupante en el número de pobres en el Mundo y un crecimiento obsceno de la brecha entre el ingreso y la riqueza del Norte y del Sur.

Una confusión similar tienen muchos de los simpatizantes del capitalismo democrático, quienes hablan como si el avance de la globalización fuese imparable. Después de la caída del Muro de Berlín, los beneficios del libre mercado se han vuelto tan evidentes, piensan, que no tiene sentido resistirse al avance inexorable del progreso económico. El Internet, y más ampliamente la tecnología informática, está permitiendo a los capitales internacionales moverse a donde es mayor la rentabilidad. Los inversionistas no sólo escapan de la mano interventora del gobierno sino también imponen una "camisa de fuerza dorada" a los políticos irracionales, quienes ahora corren un gran riesgo si desafían las reglas de los mercados financieros internacionales. Este optimismo exagerado juega en favor de los anti-globalizadores y motiva a dormirse en los laureles a los defensores del libre mercado.

Ambas partes están equivocadas, como argumenta convincentemente un fascinante libro. Bajo el título de *Against the Dead Hand: The Uncertain Struggle for Global Capitalism*, Brink Lindsey, un académico del Cato Institute en Washington D.C., ha publicado un estudio contundente contra aquellos que malinterpretan la historia de los últimos dos siglos como una constante y progresiva transición de mercantilismo y despotismo hacia libre mercado y democracia.

La historia verdadera puede ser muy diferente. El surgimiento actual de mercados libres y sociedades cosmopolitas de competencia y de reducción del Estado que se inicio con el Plan Marshall en 1947, tomo velocidad con el fracaso del Imperio Soviético y ha empezado a tomar alto vuelo con las alas de la alta tecnología; en este sentido es una réplica del desarrollo liberal de la primera mitad del siglo XIX. Pero entre estos dos períodos liberalizadores, indica Lindsey, se encuentran unos 100 años dominados por lo que él acertadamente llama "La Contrarrevolución Industrial".



La apertura de la economía mundial desde 1815 hasta 1865 llevó al surgimiento de la primera ola globalizadora. La aplicación de nuevos inventos e instituciones, maquinaria automática, máquinas a vapor, transporte más barato, el patrón oro, el libre comercio y finanzas internacionales en la primera mitad del siglo XIX causó un enorme incremento en la prosperidad general, liberó a los individuos de las constricciones del antiguo régimen y ayudó a incrementar la libertad económica y política.

Sin embargo, en la última parte de ese siglo, esta nueva prosperidad y estas nuevas fuerzas productivas fueron secuestradas por los gobiernos de Europa. Una carrera hacia el nacionalismo, la expansión imperialista, los carteles industriales, las regulaciones laborales y la estatización de la seguridad social se inició entre las potencias de Europa. Esta fue la era del regreso al control autoritario después de un largo periodo de creciente individualismo. Los nuevos métodos de factores de producción industrial ayudaron a consolidar este retorno a la planificación global traída por políticos y electorados nacionalistas. En los inicios del siglo XX, Henry Ford y el "Fordismo" se convirtieron en el evangelio de moda para los barones industriales de los Estados Unidos, los carteles de la Alemania Imperial y después para Lenin, Mussolini y Hitler. El progreso de la civilización estaba en peligro de ser detenido y revertido por la adopción general de un sistema social que la mayoría de las personas creía que era la esencia del capitalismo de mercado cuando era exactamente lo contrario: un regreso al control estatal, al reclutamiento militar de la fuerza productiva, al control centralizado sobre el "caos del mercado".

La segunda era actual de globalización, de comercio más libre, mayores movimientos de capitales, renovadas migraciones, derrocamiento de gobiernos despóticos, privatización de las industrias y los sistemas de seguridad social, intercambio cultural y libre elección del entretenimiento podría fácilmente terminar si la mano muerta del pasado ahoga nuestra recobradas libertades económicas y sensible sentido cosmopolita.

La lucha entre la mano muerta de cualquiera de los poderes y la mano invisible de Adam Smith no ha terminado. La expresión "mano muerta" es familiar para cualquier historiador español. En la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la Ilustración era el centro del programa político de Carlos III de España, anteriormente Carlos VII de Nápoles, los grandes economistas Campomanes, Olavide y Jovellanos lucharon por suprimir las manos muertas que ahogaban el progreso de la agricultura española como la Iglesia, la Aristocracia, el monopolio de la lana de la Mesta, la retardada expansión del comercio con las Indias Occidentales y el monopolio del puerto de Cádiz para el comercio con América. Entonces, la expresión "mano muerta" retumba sugestivamente como un eco a aquellos que conocen qué tan poderosa era ésta en la España de los Borbones. La mano invisible que conduce a los individuos a trabajar involuntariamente por el bien general al tratar de mejorar sus condiciones mediante la búsqueda de su interés personal está en auge en el mundo occidental pero nunca libre de antagonistas necios.



Cuando trato de prever el futuro de esta segunda ola globalizadora y del liberalismo, estoy más preocupado de los enemigos conservadores que de los anarquistas, ecologistas o socialistas utópicos cuyas protestas en las calles de nuestras ciudades, y con motivo de los Cumbres Internacionales, son más o menos inofensivas.

La lista de los enemigos conservadores debería engendrar miedo en los corazones de los amigos de la libertad individual. Dado que estoy en Italia, permítanme empezar con los sindicatos. Los sindicatos modernos no son una normal y legítima asociación de individuos libres en defensa de sus legítimos intereses. En 1867 el Parlamento inglés liberó a los sindicatos de la ley de Agravios, es decir, de la obligación de compensar el daño realizado por ellos con las huelgas. La huelga es un incumplimiento de contrato y bajo leyes contractuales normales los sindicatos sólo adoptarían una huelga laboral si previamente han estimado que el beneficio resultante será mayor a la indemnización por los daños ocasionados. La solución al maltrato en el lugar de trabajo o a un salario debajo del nivel de mercado en una economía libre es cambiar de trabajo. Es típico en las sociedades de la Contrarrevolución Industrial que el mercado laboral no sea flexible y que sea fácil de encontrar ejércitos industriales. En el mundo de hoy la conglomeración de trabajadores en milicias industriales predomina cada vez menos, porque los trabajadores se están volviendo más individualistas y menos mecanizados—al menos aquellos trabajadores que tienen ambición y una chispa de vida. Sin embargo, los buscadores de rental se resisten al progreso, tanto personal como social, demandando legislación proteccionista, pensiones estatales, salud pública, educación reglamentada pública para sus hijos y la imposición de gravámenes a otros.

Esta actitud reaccionaria también ha sido adoptada por los tenderos, quienes buscan un horario restringido para comprar, el congelamiento de los permisos para abrir nuevos establecimientos y un alto a la guerra de precios en nombre de un retorno absurdo a un paraíso de tiendas pequeñas que amenazará la vida de las mismas ciudades que ellos dicen defender.

A los buscadores de renta no sólo se los encuentra en las filas de la vieja clase obrera. Los terratenientes y los trabajadores agrícolas se han aliado tanto en América como en Europa para detener el libre comercio de bienes agrícolas. Chantajea al resto de la sociedad, de hecho al resto del mundo, por medio de medidas proteccionistas cabildeadas a parlamentos débiles en la forma de altos precios en los comestibles y subsidios generosos. Otras industrias usan la falsa noción de comercio desleal para impedir que los pobres vendan bienes en su patio trasero; el acero, los textiles, los carros, las carnes, los plátanos y otros han estado subordinado en un momento u otro a la mano muerta de agentes aduaneros. Probablemente lo más escandaloso de todo, debido a que detiene el progreso técnico, es la prohibición en Europa de los alimentos modificados genéticamente.

Esto me conduce a decir unas palabras sobre la Unión Europea. LA UE se esta pareciendo más y más a uno de aquellos Estados extorsionistas de la época previa a la Primera Guerra



Mundial; usan la prosperidad surgida de un amplio mercado interno para el engrandecimiento del Estado. La creciente rivalidad con los Estados Unidos, la profunda hostilidad en Europa hacia el líder de Occidente, me hace temer que los europeos nacionalistas se salgan al fin con la suya. ¿De qué otra manera se puede interpretar la presión puesta sobre el Reino Unido, Suecia, Dinamarca e incluso Suiza y Noruega para adoptar el Euro basados en una diversidad de falsos argumentos económicos? Una moneda única no es una condición necesaria para un mercado libre y abierto, pero sí un paso adelante para la creación de un mayor poder centralizado que reestablecerá el poder sobre sus ciudadanos perdido por la competencia fiscal y regulatoria entre Estados debilitados por la globalización.

En resumen, nosotros no debiéramos dormirnos en los laureles de la globalización pensando que la guerra ya está ganada. El período anterior de libertad personal y económica en el siglo XIX terminó en las mediocridades y las miserias de un asalto totalitarista a la Sociedad Abierta, dos Guerras Mundiales y un Estado Orwelliano. Este bendito momento de la Pax Americana no va a continuar por mucho tiempo si los amigos de la libertad no están vigilantes y unen fuerzas contra el poder de la mano muerta.



Tipo bajo y parejo

3 de febrero de 2003

La conveniencia de un tipo único en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y sobre los beneficios de las sociedades se está abriendo camino en la opinión ilustrada. Es sintomática la tendencia a reducir los tramos del impuesto sobre la renta en un número creciente de países. Aun más notable es que en España el aspirante socialista a ministro de Hacienda, Jordi Sevilla, haya propuesto algo que se acerca mucho al tipo y tramo únicos. En defensa de esta idea de simplificar drásticamente la estructura de los impuestos milita el hecho de que la cacareada progresividad sólo la sufrimos quienes vivimos de una nómina; y que las exenciones, reducciones y beneficios fiscales en el impuesto de sociedades distorsionan la estructura industrial. Pero hay otro argumento al que sólo se presta una atención superficial: la proliferación de expertos, burócratas y "lobbyistas" fomentada por la complicación impositiva.

El título de este artículo está tomado de una expresión corriente en Chile, donde el arancel es en efecto "bajo y parejo", es decir, que se cargan unos derechos de aduanas reducidos e iguales sobre todos los bienes que se importan. No es casualidad que Chile sea uno de los dos países latinoamericanos, junto con México, libre de los males típicos de esa región. A los mexicanos les beneficia su creciente conexión con Estados Unidos. A los chilenos les favorece mucho la apertura de sus intercambios exteriores: tienen firmados tratados de libre comercio con el TLCAN y la UE y en todo caso cargan el mismo arancel "bajo y parejo" sobre las importaciones de los demás países del mundo, aunque no les traten a la recíproca.

Pues bien, el mismo concepto es aplicable a la fiscalidad interior de los países. Con un tipo del 15% en el impuesto sobre la renta y del 14% en el IVA bastaría para mantener el ingreso público. Pero habría de ser sin excepciones. Esta propuesta es revolucionaria pero todo se andará, siempre que no prestemos oídos a los defensores de intereses especiales en busca de exenciones y subvenciones.

El malogrado Mancur Olson, en su libro de 1982 sobre *El Auge y Declive de las Naciones*, escribió párrafos luminosos sobre las causas y efectos de la creciente complejidad de la legislación fiscal. Los asesores empiezan por buscar huecos en la legislación por los que colar a sus clientes; los funcionarios entonces diseñan nuevas normas para tapar esos huecos; los asesores encuentran otras maneras de evitar legalmente el pago del impuesto; y así *ad infinitum*. Cuanto mayor es la complicación de las normas, más necesarios son los servicios de expertos legales y contables, y mayores las oportunidades para que los funcionarios del Fisco puedan coronar su carrera pública yéndose a la empresa privada. Por otra parte, esa complejidad permite a diputados, consejeros y ministros atender a las peticiones de su clientela política: aquí una enmienda para eximir la empresa familiar del impuesto de sucesiones; allá una carga discriminatoria sobre las grandes superficies; por el otro lado una reducción del IVA para los restaurantes o del impuesto de sociedades para pequeñas empresas. Cuanto más complicados son los impuestos y sus reglamentos, más difícil es que



los favores sean visibles. De esta forma, todos contentos: los favorecidos y favorecedores, al loro; y el público, en las nubes.

Lejos de mí el sugerir que estas personas hacen nada ilegal. Todos los que conozco son profesionales serios y escrupulosos. Sólo digo que falla el sistema. Si la complicación demagógica de los impuestos incita a que se dediquen más y más recursos a la actividad de influencia política, el resultado inevitable será que se dediquen cada vez menos a la producción de bienes y servicios. Bajos y parejos.



España: El problema con los subsidios a la industria cinematográfica

24 de marzo de 2003

Triste es la situación de los cineastas españoles. Pese a la ayuda del Estado y la garantía de la "cuota de pantalla" son los filmes estadounidenses los que consiguen el favor de los espectadores. Pero, cuidado, el espectáculo montado por actores y directores contra "la guerra del Imperio" en la entrega de los premios Goya y en la galería del Congreso de los Diputados no debe llevarnos a conclusiones precipitadas. Les movía su amor por la paz mundial y por la cultura española. Toda relación entre sus virulentas protestas y el éxito de las películas estadounidenses es pura coincidencia.

A favor de la protección política para el cine español, se argumenta que nuestros productores no pueden competir con las películas de las llamadas "majors" estadounidenses. También se alega que los ingresos de taquilla no son un indicador de calidad artística. El dinero público es necesario para evitar que el cine se vuelva estadounidense y se mercantilice del todo.

Pero las subvenciones sembradas a voleo han atomizado la industria del cine español y protegen los malos cineastas. Un enjambre de empresarios indigentes acude al panal de rica miel del Ministerio de Cultura, que les adelanta por término medio un tercio de su presupuesto a resultados del ingreso en taquilla, si el funcionario les aprueba el guión. Otro tercio lo obtienen vendiendo los derechos de DVD, TV de pago, y TV abierta, si alguien se los compra. Con suerte, el otro tercio se lo financian bancos y cajas. En el 2001 estaban censadas en España 315 compañías cinematográficas, de las que 280 habían producido una única cinta en los últimos cinco años. De éstas, 46 han venido produciendo una película al año; 10, de dos a cuatro; y sólo 6 empresas realizan cinco o más cintas anualmente. Todo ese andamiaje proteccionista no consigue contener a las cinco grandes estadounidenses, que, en el 2001 ingresaron el 56,5% de lo obtenido en taquilla en España.

El cine es un negocio incierto, que exige un tejido de grandes empresas productoras, con recursos para inundar el mercado hasta conseguir la "bomba" que les hace de oro. Para sobrevivir necesitan integrar verticalmente desde el guión hasta las palomitas de maíz; mantener una filmoteca de clásicos; extenderse horizontalmente a cadenas de televisión, medios de comunicación, parques temáticos; contratar una rutilante plantilla de estrellas; llevar a cabo un costoso marketing. En España hay talento pero no empresas suficientemente grandes y bien relacionadas. Unas migajas de subvención a casi todo el que se presente no abren las puertas del mercado mundial. Para bien y para mal, una película no triunfa de verdad, ni siquiera en el mercado latino o incluso en España, sin el aval estadounidense. Es necesaria la potencia de distribución de las "majors" y el renombre de actores mundialmente famosos para conseguirlo.



El secreto está en usar la fuerza de los demás en beneficio propio, como en el judo. Un director imaginativo e innovador irrumpe en el mundo del cine con una cinta muy barata. El éxito de público y crítica le permitirá encontrar algún ángel que quiere arriesgar más capital en su próxima producción. Luego podrá él mismo financiar sus ideas minoritarias con las ganancias de sus filmes más populares.

El cine español no consigue aprovechar el inmenso mercado de lengua española en el continente americano. En Estados Unidos, los latinos acuden en masa a las salas de cine los días de fiesta. Almodóvar, con todo su prestigio, apenas consigue un estreno simultáneo en 50 cines, cuando una película hispana hecha en Hollywood como "Empire" se proyecta el primer día en 800 salas.

En general, el éxito se consigue utilizando algún elemento que llame la atención en Estados Unidos, como actores que son famosos allí, o productores estadounidenses que garanticen una buena distribución. Soderbergh nos señala incluso el camino del mercado latino: "Tráfico" está protagonizada por un actor puertorriqueño, Benicio del Toro, y uno estadounidense, Michael Douglas; y la mitad del diálogo está en español. Ese es el camino seguido por Amenábar, que ha dirigido "Los Otros" con el apoyo de una actriz famosa en todo el mundo, Nicole Kidman, y de un productor poderoso, Tom Cruise

Muy otra es la peripecia de "Los Lunes al Sol", que tanto ha gustado al sensible público español. Los derechos de exhibición en Estados Unidos se han vendido por la miserable suma de \$50.000. Pero ¿cómo van a entender esas jeremiadas laboristas unos latinos que viven en un país donde quien busca trabajo lo encuentra?



Libre comercio atlántico

19 de mayo de 2003

También la política comercial del Mundo Occidental tiene que cambiar después del 11 de septiembre y de las guerras en Afganistán e Irak. El libre comercio es uno de los factores más importantes de creación de riqueza, tanto para las potencias que lideran el progreso de nuestra civilización como para los países pobres que aspiran unirse a la modernidad; la riqueza ha resultado ser una de las fuentes más caudalosas de libertad; y la pobreza a menudo estanca las aguas pantanosas del rencor y cría terrorismo.

Por un lado, nos enfrentamos con el peligro de que nuestro mundo occidental se divida en dos bloques comerciales crecientemente distanciados: uno formado por todos los países de Europa, otro por todos los de América. En efecto, la Unión Europea está empeñada en una muy deseable ampliación hacia el Este, pero es una ampliación que normalmente no incluirá a Rusia ni a gran parte de las naciones mediterráneas; y Estados Unidos, en la cumbre de Québec de abril de 2001, relanzó, por boca del presidente Bush, el proyecto autóctono de un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Por otro lado, vemos que las barreras que la Unión Europea y el ALCA levantan a los productos del resto del mundo, notoriamente los agrícolas y textiles, alimentan las fuentes de hostilidad contra la globalización.

Con motivo de la guerra en Irak, una ola de sentimiento anti-estadounidense ha barrido a Europa y un viento de hostilidad contra Francia y Alemania recorre Estados Unidos. La aparición de sendos bloques comerciales a cada lado del Atlántico crea el riesgo de agravar los enfrentamientos políticos entre los dos continentes, de traer "guerras comerciales," y de reducir la capacidad de crecimiento de los así separados. Además, ello supondría un incentivo para la aparición de otro bloque en Extremo Oriente y Asia sudoriental con los mismos efectos. Creados esos tres bloques, muchos otros países como Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, India y, sobre todo, los del llamado "Tercer Mundo" se sentirían excluidos de los grandes centros de crecimiento económico y llevados a proteger sus propios mercados frente a la competencia extranjera.

Uno de los objetivos estratégicos de España y Portugal, como países atlánticos que son, ha sido el de constituirse en puente de comunicación entre la UE y las naciones ibéricas de América. Ese objetivo está en peligro. No bastan para una verdadera comunicación entre España, Portugal e Ibero América unas conversaciones en Río de Janeiro, ni siquiera unos acuerdos entre la UE y las naciones iberoamericanas, si en el fondo son un intento de excluir a los dos países americanos de habla inglesa. El enfoque debe ser otro y más ambicioso: echar las bases de un amplio acuerdo de libre comercio entre América entera y Europa ampliada.



Sin embargo, sería una equivocación querer formar un club comercial de naciones atlánticas que excluyese las demás naciones del mundo. Una de las prioridades de la política occidental ha de ser el conseguir que los intercambios económicos mundiales discurran cada vez por vías más francas, para lograr así que crezca el número de países insertos en la civilización occidental.

Por eso me atrevo a proponer la creación de un Area Internacional de Libre Comercio en las dos orillas del Océano Atlántico, que, empezando por unir la UE y el ALCA, se vaya abriendo a todos aquellos países del mundo que cumplan unas condiciones sencillas y objetivas y así contribuya a hacer realidad un libre comercio mundial pleno.



Destrucción creadora

3 de junio de 2003

Los enemigos de la sociedad abierta suelen comparar la competencia económica con la guerra. En contraste con un idílico socialismo democrático en el que las decisiones se toman por acuerdo y para bien de todos, el capitalismo salvaje progresa por medio de la lucha de todos contra todos, en la cual sobrevive el más fuerte o el que mejor se adapta al medio. Es posible que la libre competencia favorezca al consumidor durante algún tiempo, aunque al final lo deje alienado, o enajenado como se dice en castellano, imponiéndole productos innecesarios. Pero en el lado de la producción la lucha es sin cuartel. San Agustín lo resumió con una frase que ha resonado a lo largo de los siglos: en la ciudad terrenal, "el pez grande siempre se come al chico."

Joseph Schumpeter (1883-1950) era un gran economista a quien gustaba chocar y sorprender. En cierta ocasión dijo que él era dos de estas tres cosas: el mejor jinete, el mejor amante o el mejor economista del Imperio Austro-húngaro. Su gran aporte fue refinar la idea de que el capitalismo es como la guerra, al proponer la teoría de la "destrucción creadora." Schumpeter partió de la idea de que "el capitalismo, por su propia naturaleza, es una forma o método de cambio económico y ni es estacionario ni puede serlo." El sistema se mueve empujado por "los nuevos bienes de consumo, los nuevos métodos de producción y de transporte, los nuevos mercados, las nuevas formas de organización industrial que crea la empresa capitalista." Schumpeter subrayó la diferencia entre el mero refinamiento de tecnologías existentes y el movimiento lateral de procesos totalmente nuevos: un sistema que utilizara sus recursos óptimamente podría con el paso del tiempo resultar inferior a otro sistema subóptimo que sin embargo fuera más innovador. El premio Nobel Theodore Schultz añadió en 1964 que una economía en proceso de cambio y crecimiento se encuentra normalmente lejos del margen de eficiencia óptima, mientras que las economías estáticas y subdesarrolladas son las que están en equilibrio de perfecta competencia. Era empresario para Schultz el que mostraba "capacidad para enfrentarse con el desequilibrio."

Sin embargo, Schumpeter puso demasiado énfasis en que la competencia destruye estructuras productivas existentes para sustituirlas por estructuras innovadoras. No supo subrayar uno de los aspectos positivos de la innovación, a saber, que ésta puede surgir sin necesariamente destruir la capacidad de ganarse la vida de los acostumbrados al modo antiguo de hacer las cosas, si muestran adaptabilidad al cambio. Los humanos, antes que desaparecer, somos capaces de cambiar y adaptarnos de una manera que no está al alcance de otros mamíferos. Los numerosos animales de tiro del siglo XIX no pudieron aprender a conducir y por eso se han visto reducidos a servicios de salto y paseo. Los hombres no somos mulas ni caballos.

La competencia tiene además un aspecto cooperativo que aclararé con un símil deportivo. Si el Barsa y el Real Madrid se enfrentan en un partido de fútbol de la Liga, no pueden ganarlo



los dos, pues incluso un empate favorece al equipo visitante. En este nivel se trata de un juego de suma cero de eliminación del contrario. Pero en un nivel superior el juego se hace de suma positiva: cuando ambos emocionan con un fútbol de calidad, eso favorece a los dos clubes y a los jugadores mismos; los ingresos de todos aumentarán, no tanto por conseguir una mayor cuota de mercado, sino por crear un mercado más amplio. Además, es precisamente esa lucha la que espolea los jugadores a superarse, los entrenadores a imaginar nuevas tácticas, los presidentes a fichar grandes estrellas. La libre competencia comercial no tiene sólo el efecto de eliminación por "destrucción creadora" que señaló Schumpeter, sino sobre todo el cooperativo de ampliación del mercado y de superación de los contendientes.



Corea del Norte

1 de julio de 2003

Corea del Norte chantajea al mundo libre. Tras haber adquirido el compromiso con Estados Unidos de no producir plutonio útil para bombas nucleares y haber obtenido a cambio ayuda económica y alimentaria, el Gobierno de esa república popular disparó el año pasado un cohete capaz de portar una carga mortífera por encima de Japón, hasta hundirlo en el Océano Pacífico. Acusado por Estados Unidos de estar infringiendo su compromiso de no producir armas de destrucción masiva, declaró que abandonaba el Tratado de no-Proliferación Nuclear y lanzó otro misil de aviso al mar que separa Japón de Corea del Sur. Luego exigió que Estados Unidos se sentara otra vez a la mesa con ella. Los norteamericanos respondieron que no aceptarían conversaciones bipartitas y que sólo tratarían con los comunistas coreanos si les acompañaban Japón, Corea del Sur y China. Incluso insinuaron que, si los otros seguían su camino, propondrían a Japón y Corea del Sur que también adquirieran armamento nuclear.

La situación es complicada. Aparece un poder nuclear en Extremo Oriente, caracterizado por su inestabilidad, agresividad y miseria económica. En Japón hay una gran resistencia popular al armamento nuclear, debido al trauma causado por la mortandad en Hiroshima y Nagasaki; pero un senador japonés declaró que Japón se opondría por todos los medios a su alcance a la nuclearización de Corea. Los coreanos del Sur consideran a los del Norte como hermanos y, tanto bajo su anterior presidente Kim Dae yung como bajo el recién elegido líder de la oposición Roh Muu-hyun, han iniciado una política de acercamiento al Norte. China guarda un silencio enigmático, cuando es la potencia que podría presionar a su vecino comunista, por ser su suministrador principal de petróleo y armamento convencional. Rusia no ve con buenos ojos ni la nuclearización de Corea y Japón ni el predominio de Estados Unidos en la región.

Otra dimensión preocupante son las actividades armamentísticas de Corea del Norte en el mercado negro de armas de destrucción masiva. Hay quien cree que Corea del Norte ya tiene dos ingenios nucleares, aparte los elementos portadores necesarios para lanzarlos incluso a la costa de California, construidos con material obtenido a escondidas de Pakistán. Se teme que las armas nucleares que está produciendo ahora en su central eléctrica de Yongbyon puedan venderlos a grupos terroristas adinerados .

Un ataque aéreo a los centros de producción nuclear del Norte podría tener un alto costo. A cuarenta kilómetros de Seúl, los comunistas cuentan con unas fortificaciones armadas con 1500 piezas de artillería de largo alcance. En Seúl viven 15 millones de habitantes, de los 43 con que cuenta Corea del Sur. Las consecuencias producen pavor.



Hay que ver la frontera del paralelo 38 para creerla. Defendida sobre todo por los denostados norteamericanos, resulta más siniestra que la que dividía a Alemania en dos. Aquello no es un muro y alambrada sino una banda de tierra desierta en la que apenas hay algún campesino en la parte libre. Kim Sung-il ha conseguido aparatos de interferencia que impiden a sus esclavos oír la radio o ver la televisión libre del Sur. Sólo saben de desfiles proletarios armados y de hambre.

El contraste entre las dos Coreas no puede ser más dramático. La República de Corea lleva creciendo desde el año 1982 a un media de 7,2%. La crisis financiera asiática de 1997 produjo un crecimiento negativo de 6,7% pero el año siguiente el crecimiento volvió a ser de 10,9%. El Gobierno intervino para salvar el sistema financiero comprando unos bancos y quebrando otros, hasta gastarse una cantidad equivalente al 27% del PIB. Ahora está privatizándolos. También hubo de tomar medidas para disolver los "chaebol" o conglomerados a la japonesa, en quiebra bajo el peso de sus deudas. La crisis estadounidense del año 2000 se reflejó en una tasa de crecimiento de "tan sólo" 2,5% en 2001, pero en 2002 el crecimiento ha vuelto al 6% anual. La economía no deja de tener problemas, nacidos unos de la política paternalista de los dictadores anticomunistas hasta principios de la década de los noventa y otros de las demandas de un electorado soberano: me refiero al alto costo de la rescisión de contratos de trabajo y a la creación de un sistema de pensiones de reparto en una población que envejece rápidamente. Pero la Corea democrática y capitalista ha alcanzado los \$10.000 de ingreso per capita y la comunista tiene que mendigar alimentos mientras gasta la hijuela en armas. Ya saben: comunista, título que tanto enorgullece a gente como Llamazares y Saramago.



El código Giscard

17 de julio de 2003

La Convención Europea presidida por Giscard d'Estaing ha concluido sus trabajos con la redacción de un Proyecto de Constitución europea que se presentó a la consideración del Consejo Europeo de Estados Miembros en Tesalónica, que a su vez someterá el texto que enmienda a la decisión de una Conferencia Intergubernamental que tendrá lugar en los meses de octubre del 2003 a marzo del 2004.

Si la frase que acabo de escribir parece complicada, atribúyanlo al efecto de la lectura del laberíntico texto producido por la Convención, que termino de leer en este momento. La longitud, alcance, complicación e intromisión de la Constitución Europea que nos preparan no se acortará ni estrechará ni aclarará ni contendrá en Tesalónica. La Constitución de los Estados Unidos consta de 9 artículos, compuestos por 18 secciones, más 24 artículos de enmienda, total 42. La Constitución española, que ya es larga y entrometida, comprende 169. El Código Giscard se extiende por los meandros de un río de 461 artículos y 5 protocolos.

Sin duda era necesaria una revisión de los Tratados de la Unión, dado el aumento de los miembros de 15 a 25 países (o 27 cuando accedan Bulgaria y Rumania). Pero el proyecto de la Convención aprovecha esta circunstancia para dar un paso más en el camino de la creación de una Federación Europea, lo que podría aceptarse si no fuera porque amenaza con entrometerse gradualmente en todos los asuntos personales, económicos, sociales y políticos de los europeos.

Es cierto que el texto insiste en los principios de "subsidiariedad" y "proporcionalidad" en el funcionamiento de la UE. Según estos principios, la Unión deberá intervenir justo lo necesario para complementar la acción de los Estados cuando éstos se enfrenten con cuestiones que sobrepasen su capacidad o su jurisdicción. Pero el contenido del proyecto de Constitución descubre una realidad muy distinta. Son en efecto competencia de la Unión: el establecimiento del mercado único y las intervenciones para fomentar la libre competencia; la aproximación de las legislaciones mercantiles nacionales; la política económica de los Estados miembros y su supervisión por la Comisión; la política monetaria; la política de empleo; la política social; la cohesión económica, social y territorial; agricultura y pesca; medio ambiente; consumidores; transportes; investigación, desarrollo tecnológico y exploración espacial. ¿Sigo? También ha de coordinar y apoyar la salud pública; la industria europea; la cultura; la educación, la juventud y el deporte: la protección civil; la cooperación administrativa. ¿Quién da más?

Conocí a monsieur d'Estaing en el ministerio de Hacienda francés, en una ocasión en que se declaró acérrimo defensor de la empresa pública. Dirigidos por él, los redactores del proyecto



olvidan un elemento esencial de las democracias liberales: el papel de la economía de mercado como dique de las posibles extra-limitaciones de la política comunitaria. En efecto, sería muy importante en una Unión tan basada en el Derecho interpretado con ayuda de principios explícitos que la Constitución inscribiera en su frontispicio la economía de mercado y la iniciativa empresarial, el respeto de la propiedad privada y la libertad de contratación, la libre competencia y la libre formación de precios. Sólo hay alusiones perdidas en puntos lejanos del articulado. Para la defensa de la autonomía individual no bastan los derechos fundamentales del habeas corpus, la libertad de opinión, de asamblea o de asociación. Sin el espacio que la libertad de mercado proporciona a la iniciativa individual, los derechos que los socialdemócratas consideran suficientes no bastan para librar a los individuos de interferencias enfadosas: si no lo creen, pregúntenselo a los dueños de pisos vacíos, a los fumadores de tabaco u otras sustancias, a los inversores deseosos de mejores rendimientos, a las familias en busca de alimentos baratos los domingos y festivos, a los maestros ilusionados con experimentos educativos, a quienes sufren los efectos de las huelgas de servicios públicos sin poder reclamar compensación.

En el proyecto, cualquier atisbo de competencia jurisdiccional entre las legislaciones e instituciones de distintos países es tratado con sospecha. Se olvida así el poderoso mecanismo de progreso consistente en que los individuos lleven su trabajo, sus capitales, su iniciativa empresarial, su domicilio allí donde vean un futuro más halagüeño. Sólo una vez en todo el texto de la Convención he visto una alusión a los efectos benéficos de la acción espontánea de los individuos en un mercado libre y abierto.

Todo presidente francés sueña con emular al Gran Corso. Lo siento mucho, pero el "Code Giscard" es muy inferior al "Code Napoleón".



El libre comercio después de Cancún

29 de septiembre de 2003

El encuentro ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Cancún acabó en sonora pelea. El ciudadano corriente no comprende. Por un lado cae sobre él una lluvia de términos técnicos y siglas misteriosas: reciprocidad en el desarme comercial, barreras no arancelarias, defensa de la propiedad intelectual, subvenciones a la producción en vez de ayuda a los agricultores, todo ello aderezado con abreviaturas como OMC, Ronda Doha, "caja azul", "caja ámbar", G-12, G-21... Por otro se enfrenta con las simplificaciones ideológicas que pululan en la oscuridad del discurso: lo ocurrido se representa como una batalla entre países pobres y ricos, o bien como una derrota de la globalización a mano de los verdes. El fracaso de Cancún no es una victoria de nadie y hará mucho daño a todos los habitantes del planeta, especialmente a los más desvalidos.

En Cancún se habían reunido hasta 300 responsables de cuestiones comerciales del mundo entero. Esa reunión era otra más de la Ronda de negociaciones iniciadas en la ciudad de Doha que habría de culminar en un tratado internacional que recogería las mutuas concesiones de los países del mundo en materia de intercambio de bienes y servicios. El acuerdo final habría de recoger una serie de reglas aplicables a todos los países, sin distinción de lugar, tamaño o riqueza. Lo que se concedía a uno, se concedía a todos.

Las anteriores liberalizaciones del comercio internacional, como la Ronda Uruguay que inició el presidente Kennedy, han tenido un efecto beneficioso sobre la economía mundial, al ayudar a la multiplicación de los intercambios comerciales: un comercio que en 1985 sumaba menos de 2 billones (o millones de millones) de pasará de 145 billones de dólares en el 2003. Como bien sabemos los españoles y saben los chilenos o los neozelandeses, la apertura de la economía nacional eleva el nivel de vida del país que liberaliza al abaratar los suministros extranjeros y al multiplicar el grado de competencia en el mercado interior. Si además se nos permite vender más en otros países, miel sobre hojuelas.

En la base estas negociaciones multilaterales alientan, pues, la convicción de que el comercio internacional aumenta y difunde la riqueza por todo el mundo, pero también la idea de que ese efecto es mayor cuantos más sean los países que se acuerden mutuamente los intercambios. Los tratados comerciales y las uniones aduaneras entre países singulares tienden a fomentar artificialmente el comercio entre países singulares a costa de cerrar el paso a terceros más eficaces. Así, las barreras proteccionistas exteriores y programas de fomento de la producción nacional, aplicadas por la Unión Europea o Estados Unidos a la agricultura, desvían la demanda de alimentos de sus habitantes a fuentes de suministro interiores, más costosas que las de terceros países excluidos. Si además llegan al punto de subvencionar la exportación de los excedentes de carne, leche o cereales como resultado de sus políticas de protección al campo, arruinan por partida doble la agricultura de los países pobres.



Precisamente la protección de la agricultura europea y estadounidense era uno de los puntos de conflicto en la reunión de Cancún. El nivel de protección (subsidios más aranceles) de la agricultura en los países ricos de la OCDE se ha mantenido estable durante los últimos 15 años en \$300.000 millones anuales, refiere The Economist. Que en países de alto nivel de vida como España sigamos amamantando a nuestros agricultores mientras vertimos lágrimas de cocodrilo sobre las miserias de los pobres del mundo es hipocresía inexcusable.

En Asia, donde pedían el cese de tales prácticas, también estaban divididos: muchos querían mantener la defensa de sus propios agricultores, o temían que un acuerdo general les privase de su acceso especial al mundo desarrollado. Al final no cabrá más solución que la liberalización completa de los intercambios agrícolas mundiales.

Pero en Cancún, sorpréndanse ustedes, no se llegó a entrar en la cuestión agrícola. El obstáculo final fue la negativa del G-21 a discutir las "cuestiones Singapur". Aclaro. Se trata de cuatro barreras existentes en los países subdesarrollados (y algunos otros como Francia): apertura a la inversión extranjera, mayor competencia en los mercados internos, reducción de los obstáculos administrativos al comercio en las aduanas, y compras de bienes y servicios por los Estados. Al negarse a discutir estas cuestiones los aspirantes al desarrollo se hacían daño a sí mismos.

El fracaso de Cancún es algo más que un aplazamiento de la liberalización del comercio mundial a conferencias posteriores. Pone en cuestión el procedimiento multilateral de la OMC. Por eso estamos viendo una proliferación de acuerdos bilaterales, como el de Estados Unidos con Chile, o el de la Unión Europea con Brasil y México, que amenazan con cubrir la tierra de una tupida red de preferencias discriminatorias



La búsqueda de las rentas políticas

3 de noviembre de 2003

Las campañas electorales me deprimen. Los candidatos buscan votos ofreciendo rentas políticas a grupos de presión más o menos vocingleros. Un ejemplo: la cuestión de la apertura de comercios en días festivos en España. Rafael Simancas, el aspirante del PSOE a la presidencia de la Autonomía madrileña, quiere rebajarlos de los 21 actuales a sólo 14; Justo Fernández, el de Izquierda Unida, a menos de 12; la candidata del Partido Popular, Esperanza Aguirre, calla; y el Gobierno, que ya se prepara para las generales del año que viene, ha aplazado la libertad de horarios, proclamada en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, al año 2005. Todos ellos saben, en especial los del PP, que en una economía de mercado lo suyo es la libertad de elección de tenderos y consumidores. Sin embargo, prometen a una minoría de tenderos que teme competir en busca de clientes una renta de situación, a costa de la gran mayoría de ciudadanos.

La búsqueda de rentas políticas es la persecución socialmente perniciosa de transferencias de riqueza con ayuda de los poderes públicos. El análisis de estas actividades comenzó con la controversia sobre los aranceles proteccionistas en el comercio exterior. Un economista de origen austriaco, Gottfried Haberler, argumentó en 1936 que la protección otorgada a una industria nacional no causaba grandes pérdidas para el conjunto de la sociedad si, en vez de utilizarse el arancel para fomentarla, se beneficiaba a los fabricantes nacionales con un subsidio directo, financiado con impuestos generales. El arancel exterior encarecía el bien importado, lo que forzaba a los demandantes a consumir menos, a precios más altos. Mas esa pequeña pérdida de bienestar incluso se podía evitar si la protección se convertía en una transferencia fiscal, en una mera redistribución de la riqueza de consumidores a fabricantes.

Gordon Tullock dio un gran paso adelante en el análisis de la utilización del poder político para conseguir rentas al margen del proceso productivo. En 1967 señaló que los esfuerzos para conseguir rentas políticas acabarían por disipar todo el beneficio que un grupo de presión pudiera obtener con ayuda de la Administración. El gasto en servicios de abogados y economistas, en asociaciones patronales, relaciones públicas, campañas de opinión, contribuciones electorales llevaría a los competidores por el favor político a un punto de equilibrio en el que la renta política obtenida se había perdido en las arenas del lobby. Lo más grave es que, en ese punto final, la productividad económica se habrá visto reducida por efecto de la intervención, sin ningún beneficio neto para los contendientes.

El mal no para ahí. Una vez creado el arancel, o controlados los precios de frutas y verduras, o prohibido el descuento de libros, o limitados por ley los horarios y días de apertura comercial, el gasto de lobby continúa para defender la situación obtenida, o, si ésta es estéril, para volver a la situación competitiva y tirar por la borda todo el esfuerzo realizado. Aparecen pues nuevos gastos no productivos para defender la situación de privilegio legal. El



fenómeno es bien conocido. Una vez concedida una subvención, privilegio exclusivo, beneficio "social" o renta política, no hay nada más difícil que retirarla. Incluso si todos están de acuerdo que la suma de esas trabas maniat a la economía nacional, los grupos de interés aceptan que todo se reforme menos lo suyo.

Sino vean la situación de Alemania. Esa poderosa economía ha dejado de crecer debido a los excesos del Estado de Bienestar, a la estrechez de visión de los sindicatos, a las infinitas reglamentaciones de una vieja Administración. El canciller socialdemócrata Schroeder ha tenido que poner en juego su futuro político para sacar adelante un mínimo plan de reforma competitiva. Francia, por su parte, parece derivar placer masoquista del daño que le infligen sus ubicuos lobbies. A un panal de rica miel cien mil moscas acudieron y por golosas se vieron presas de patas en él.



¿Es Europa una zona monetaria óptima?

20 de noviembre de 2003

Robert Mundell, en una casi inadvertida comunicación del año de 1961, titulada "Una Teoría de las Zonas Monetarias Óptimas", echó las bases del que hoy es el imponente edificio del euro. En apenas nueve páginas, detalló las condiciones para que la Unión Monetaria europea pudiese funcionar sin estorbo, para que Europa llegara a ser una zona monetaria óptima. Por ello fue galardonado con el premio Nobel de Economía en 1999. Tal es, para bien o para mal, el poder de las ideas. Mundell sólo olvidó una cosa: un "óptimo monetario" es algo muy distinto de un "óptimo económico".

En la referida nota, Mundell buscaba demostrar que un régimen monetario común sólo puede aplicarse en zonas o regiones que tengan una misma estructura económica o puedan converger rápidamente a ella. Imaginemos un país llamado Canadá, en el que corre una moneda de curso legal. Este país está dividido en dos zonas: el este produce automóviles, el oeste sobre todo productos madereros. Una repentina subida de los precios del petróleo reduce el consumo de vehículos pero no el de muebles y provoca un aumento del paro en el este. Si, para estimular la demanda, el banco central reduce los intereses, aliviará temporalmente el desempleo en el este a costa de aumentar la inflación en el oeste. Si por el contrario, mantiene una política monetaria estricta, sólo podrá evitar la inflación en un sitio a costa de desempleo en otro. La misma política monetaria no conviene pues igualmente en la totalidad de un país con una estructura económica diversa: "Canadá" no es una zona monetaria óptima.

De aquí que, para la aplicación de una política monetaria común en la Unión Europea, sea conveniente que la estructura económica de sus miembros converja de tal manera que los choques "transversales" les afecten a todos igualmente. Lo mismo cabe decir de la evolución de las economías en el tiempo: el ciclo del Reino Unido, dice Gordon Brown, su ministro de Hacienda, debe estar sincronizado con el del Continente antes de que los británicos adopten el euro.

Hay un remedio, añadió Mundell, para esta falta de convergencia o sincronía: "un ingrediente esencial de una moneda común, o de una zona de moneda única", dice "es una gran movilidad de factores de producción". Supongamos que el banco central decide mantener una política monetaria de dinero caro a pesar de la aparición de desempleo en el sector de vehículos. Esa política monetaria única resultaría sin embargo sostenible si los desempleados en el sector automotor pasan a emplearse rápidamente en el sector maderero. En resumen y según Mundell, Europa se convertirá en una zona monetaria óptima si todos los países miembros tienen la misma estructura, sincronizan sus variaciones cíclicas, o si, a falta de ello, dan muestra de una gran movilidad de factores.



En este modelo, pues, la rápida adaptación de los factores productivos a las cambiantes circunstancias de costos o de demanda no es algo valioso en sí, sino un remedio para las dificultades de la política monetaria cuando hay diversidad de estructuras o asincronía de ciclos. Sólo si las economías europeas convergen o los ciclos se sincronizan, dicen los partidarios del euro, será posible mantener la política monetaria anti-inflacionista que imponen los estatutos del BCE.

Todo esto pasa por alto que las economías nacionales están compuestas de innumerables individuos y empresas con estructuras y evoluciones variadísimas. No hay regiones este ni oeste, hay individuos. La competencia, la movilidad de factores, la productividad se multiplican cuando compiten actores con estructuras distintas y tiempos diferentes. Los bancos centrales deben ocuparse sólo de mantener el valor del dinero. Si la política monetaria del BCE conviniese a toda Eurolandia sólo porque todos los países fueran igualmente rígidos, nos encontraríamos en una zona monetaria óptima con una economía pésima.



Nacionalismo y democracia

29 de diciembre de 2003

Los sentimientos nacionalistas nos hacen perder la calma, incluso a quienes, como yo, no somos nacionalistas, ni de Cataluña, ni de España, ni de Europa, aunque sí seamos patriotas.

Como discípulo que fui de Karl Popper y Friedrich Hayek, encuentro imposible compaginar liberalismo y nacionalismo: para el uno, era necesario conseguir sociedades cada vez más abiertas basadas en la autonomía individual; para el otro, la nación no era más que la versión moderna de la tribu transformada por el colectivismo integrador. Eran sin duda patriotas, en su caso, patriotas de adopción de la Gran Bretaña que les había acogido cuando huían de la barbarie racista alemana: Popper aceptó con alegría el título de "sir" que le concedió la reina de Inglaterra y Hayek mantuvo su pasaporte británico hasta el final de sus días, aun cuando fijara su residencia en Estados Unidos y en Alemania. Pero defendieron siempre el individualismo por sobre las emociones colectivas. Para ellos, lo que une a los ciudadanos es la ley más que la sangre y el suelo.

Ya sé que en el siglo XIX, liberalismo, democracia y nación eran ideas gemelas. Muchos creían que las libertades individuales expresadas en el sufragio desembocaban naturalmente en la autodeterminación colectiva. Mas la experiencia de los horrores del siglo XX ha hecho ver que hay que delimitar muy claramente los derechos individuales de los pretendidos derechos comunales. Los individuos necesitan sin duda el marco de un Estado democrático para relacionarse políticamente: sólo en ese marco aceptan que les gobiernen sus rivales políticos cuando éstos han conseguido una mayoría de votos (en general, relativa y temporal). Pero no debe olvidarse lo dicho por James Buchanan, otro filósofo de la libertad: "la autodeterminación, como extensión del principio liberal de que declara lícitos los acuerdos voluntarios entre los sujetos que los suscriben, sólo es aceptable en la medida que esos acuerdos no tenga repercusiones negativas graves sobre terceros". La autodeterminación nacionalista tiene a menudo un carácter total, que en su versión extrema niega la personalidad política e incluso personal a quienes no participan del entusiasmo metafísico de la nación en marcha.

No tengo ni necesidad de decir que en Cataluña el nacionalismo es pacífico y tolerante: cualquiera que haya tenido la suerte de experimentar la generosa hospitalidad de los catalanes lo sabe. Sin embargo, veo tendencias, inclinaciones, derivas que son inquietantes por su parentesco con posturas fundamentalistas. Así lo expliqué en el artículo sobre Pla, un catalán puro si los hubo, que tomó partido por Franco, como también lo hizo Cambó, reaccionando contra la opresión sufrida en el campo republicano. Quizá yo sea demasiado sensible al peligro de determinados mensajes políticos, por haber tenido que soportar el adoctrinamiento sistemático de los vencedores de la guerra civil. Hice mal en decir que la defensa del catalán en la Cataluña de hoy tiene un carácter semejante a la imposición violenta



del castellano por los nacionales. Yo también sentí la opresión de ese régimen, por monárquico y liberal, hasta el punto de verme despojado de la oposición ganada y sufrir un confinamiento forzoso, que supusieron mucha perturbación para un joven que intentaba abrirse camino en la vida. Debo decir que nada de lo que ocurre en Cataluña se parece a eso.

No me negarán, sin embargo, que hay políticos que se ofenden de que en el Parlament se hable castellano, que buscan convertir a Cataluña en una Comunidad monolingüe, pese a que según la Constitución el catalán y el castellano son co-oficiales. Tampoco me negarán que la historia de Cataluña que se enseña en las escuelas es en muchos puntos discutible y recuerda el tipo de saga que se enseñaba bajo el régimen anterior: idéntico preguntarse por el ser de la nación en decadencia, mismos quejidos por las derrotas infligidas a manos de sañudos enemigos, deseos parecidos de reconstruir territorios imperiales por encima de los mares. Incluso noto a veces un soplo de catolicismo nacional en algunas declaraciones clericales.

Acabo de pasar unos días en Valencia, tierra que igualmente conozco bien. Quizá porque se me ha festejado tanto, he vuelto con la sensación de que allí el ambiente es muy distinto del que se trasluce en Cataluña de los discursos de los electos, los debates de la televisión, las afirmaciones de los tertulianos. La política no lo invade todo como ocurre en momentos de fragor nacionalista. Las conversaciones giran alrededor de los negocios, la fábrica, la exportación, las fiestas, los deportes, la música, el nuevo museo de la Ciencia, la vida corriente. Hubo alegría desbordante por la ubicación de la copa de América. "¡Cómo nos ha ayudado el rey! ¿Llegará el AVE a tiempo? ¡El nuevo puerto va a transformar la ciudad!" Todo esto saltando del valenciano al castellano, sin exclusiones ni reivindicaciones, como también los catalanes fuera de períodos electorales. Y sin quejarse de Madrid, ni de Felipe V, que fue más duro con ellos que con los catalanes.



España, reformas pendientes

19 de enero de 2004

Supongamos que el Partido Popular obtiene mayoría absoluta en el Congreso en marzo. ¿Cuál es la lista mínima de las reformas que debería aplicar el Gobierno del Sr. Rajoy?

Ya no podemos fiar el crecimiento de la economía española al tirón de las grandes economías europeas: Alemania y Francia, es cierto, están empezando a poner en marcha reformas que quizá las saquen de su presente estado comatoso, pero los españoles debemos centrar nuestro crecimiento en algo más que el aumento de la población activa. Además, ya no es posible achicar las vías de agua con devaluaciones.

Debe aumentar el grado de competencia en nuestra economía (que no es lo mismo que aumentar la competitividad, pues la competencia aumenta con las importaciones de bienes y servicios). Así, es necesario terminar con el aplazamiento de la plena libertad de horarios comerciales y reducir la arbitrariedad en la concesión de licencias de apertura de los comercios. También es necesario liberar la oferta de suelo para vivienda, sedes comerciales y centros de producción (lo que implica revisar el sistema de financiación de los Ayuntamientos que retienen suelo para aumentar sus ingresos). En el mismo mercado del suelo, la oferta de viviendas en alquiler es raquítica porque la ley sigue protegiendo al inquilino, con tres años mínimos de contrato, dificultades de desahucio por impago, escaso resarcimiento de daños producidos. La mayor competencia debe extenderse al mercado de trabajo. Las reformas han sido insuficientes para reducir la lacra del empleo precario, que es el resultado de un exceso de indemnización por despido para amplios colectivos de trabajadores más antiguos.

Las reformas impositivas han sido de lo más notable de lo realizado por el último Gobierno de Aznar, pero no deberían detenerse, aunque fuera necesario tomar alguna de las propuestas del PSOE: un tramo único del IRPF con un tipo igual al impuesto de sociedades y un mínimo exento general simplificarían el sistema impositivo y evitarían mucha ingeniería fiscal. Sería necesario un Pacto de Estabilidad y Crecimiento con las Autonomías y los Ayuntamientos más efectivo que el actual, en especial obligando a consolidar todos los organismos y empresas que dependen de las corporaciones locales.

La Seguridad Social tendría que financiarse con impuestos generales y no con cotizaciones que equivalen a un impuesto regresivo sobre el empleo. Esto, unido a condiciones más severas para gozar del subsidio de paro, reduciría la cifra artificialmente hinchada del desempleo.

El camino seguido por la reforma de las pensiones públicas no resuelve la insuficiencia constitutiva de un sistema de reparto. Los jóvenes que accedan al mercado de trabajo deberían poder todos capitalizar sus pensiones, lo que implicaría la necesidad de emitir deuda del Estado para financiar las de reparto subsistentes. Ya sé que la UE limita la proporción de deuda respecto al PIB, pero creo llegado el momento de traer a la superficie el déficit escondido de las obligaciones por compromisos de jubilación.

¿Me atrevo a decir que la enseñanza y la salud son las últimas empresas públicas por privatizar? El que los presupuestos del Estado y de las Autonomías financien estos servicios no implica que tengan que ser producidos y suministrados por el sector público. Nadie se



atreve a hablar ya del bono escolar y sólo en Villena se explota un hospital público privadamente en sistema de concesión.

Para no quitarles del todo el aliento, no diré nada de la necesidad de sanear nuestra democracia haciendo que los partidos políticos, asociaciones empresariales y sindicatos sean financiados exclusivamente por sus miembros.



Constitución europea, para qué

13 de abril de 2004

El Tratado constitucional de la Unión Europea revive con la victoria electoral de Zapatero. Volvemos a oír razones por las que, nos dicen, necesitamos una Constitución europea. La primera es instrumental: sin reforma de los actuales tratados, la UE no puede funcionar. ¿Cómo llegar a decisiones operativas en la Comisión si alrededor de la mesa se sientan 25 comisarios? ¿Cómo legislar si el Consejo de jefes de Estado y presidentes de Gobierno tiene 26 miembros, porque Francia lleva dos?

La segunda razón es más política: reducir las materias en las que es necesaria la unanimidad, pero sin caer en la mayoría simple de países, pues algunos son minúsculos. De ahí la cuestión de si debe prevalecer la voluntad de quienes reúnan el 50 por ciento de países con el 50 por ciento de la población, o 55/55, o 54/54.

La tercera razón es politiquísima: la esperanza de que el mayor aerodinamismo de las decisiones y las instituciones empuje a Europa hacia una unión cada vez más profunda, camino de su transformación en un gran poder mundial capaz de mirar a EEUU a los ojos.

Las elites giscardianas cubren la píldora de la centralización con dos capas de azúcar, para que los ciudadanos confundidos por la letra pequeña se unan de corazón al proyecto: el mercado único y la subsidiariedad.

Es cierto que la libertad económica exige un entorno de cortas reglas comunes para toda el área que permitan a individuos y compañías contratar sin trabas, pues las normas locales muchas veces sirven para proteger intereses bastardos. Así, la Comisión puede imponer la competencia de cerveceras en Alemania, o de empresas eléctricas en Francia, o de distribuidores de automóviles y de licitadores de obras públicas en toda la Unión. Pero a su vez ese poder central reforzado puede ser atrapado por los lobbies obreros y limitar las horas de trabajo para todo el Continente; o ser ocupado por los redistribuidores de la renta y prohibir la competencia fiscal entre países.

Para que los políticos locales acepten esa centralización (la buena y la mala), se refuerza la “subsidiariedad” y la “proporcionalidad”, conceptos oscuros donde los haya. Se trata de que las decisiones no se tomen en el centro cuando pueden dejarse en manos de instancias políticas inferiores y que las comunes no se aprovechen para engordar los poderes situados en Bruselas. Siempre poderes y nunca individuos.

Para el individuo, la mejor subsidiariedad es la competencia, sea entre productores o entre instituciones: reglas mínimas y mucha variedad, para poder desplazarse en busca del lugar o la legislación más convenientes. Otra Constitución, sí, pero mucho más pequeña: que se contente con defender la libertad de movimientos de personas, mercancías, servicios y capitales y prohibir los subsidios.



La deslocalización como ventaja

21 de abril de 2004

Es un error pensar que la deslocalización (conocido en inglés como outsourcing) constituye un problema nacional. Sin duda hay quien sufre temporalmente con el traslado de plantas de automóviles desde España a los antiguos países comunistas, de desvío de la producción textil al Magreb, o de ubicación de centros de servicio informático o telefónico a Marruecos e India. Sufren los que tienen que buscar un nuevo empleo. Sufren las empresas auxiliares que temporalmente pierden su cliente principal. Pero el país en su conjunto progresa gracias a la deslocalización y a cualquier destrucción de empleos improductivos, por efecto de la competencia, internacional o nacional.

En un mercado competitivo, las empresas pagan a sus empleados el equivalente del valor de lo que cada uno produce: el salario viene gobernado por la productividad marginal de los trabajadores. Si por término medio los salarios en España son cuatro mayores que en Marruecos, es porque la mano de obra española es en su conjunto cuatro veces más productiva. De lo contrario, los empresarios son idiotas. No vale comparar sólo el coste de un obrero en Marruecos o en India con el de un obrero en Cataluña o Madrid para decir que corremos peligro de que toda la actividad se deslocalice. Si a un empleado en España se le paga tanto más, tiene que ser porque produce tanto más, por el capital físico o humano puesto a su disposición, por la capacidad de venta y mejor organización de la empresa en la que trabaja y por el más adecuado marco institucional en el que ésta opera.

Una empresa que envía sus empleados al paro lo hace porque no consigue que produzcan lo suficiente para compensar su salario. Ese cierre puede deberse a la competencia del vecino o del indio o del chino, pero en todo caso indica que en otro lugar serían más productivos. Si encuentran ese nuevo empleo, producirán más, para bien de nuestro país. ¿Existe esa otra actividad? Es una pregunta que se plantea con el desplazamiento de trabajadores por efecto de cualquier competencia, nacional o extranjera.

En una economía flexible, la creación de puestos de trabajo resulta de una inmensa destrucción de empleos antiguos. El Instituto Cato da las cifras de EEUU. Entre 1993 y 2002 aumentó allí el empleo en el sector privado en 17,8 millones de puestos netos; pues bien, eso fue el resultado de 327,7 millones de empleos creados y de 309,9 millones destruidos. En España se han creado durante los gobiernos de Aznar más de cuatro millones de puestos de trabajo netos. Al mismo tiempo, ha caído el paro y el ingreso real medio de las familias española ha crecido un 35%. Quienes piden medidas contra la deslocalización deberían oponerse a toda importación del exterior.



Aznar y Thatcher

29 de abril de 2004

José María Aznar esperaba retirarse con aplauso. Había traído la prosperidad económica a España, había apoyado a las dos democracias más antiguas en una renovada lucha por la libertad, había hecho frente a la matonería de Francia y Alemania en el seno de la Unión Europea, había intentado mantener los nacionalismos de campanario dentro de nuestra Constitución, y había renunciado después de dos legislaturas, como prometió. Pero estos logros han contado poco para una mayoría de votantes españoles, que no han podido aguantar la tensión de encontrarse en guerra contra dos terrorismos, el nacional de ETA y el mundial de Al Qaeda. En vez de eso, Aznar es ahora el “mentiroso” que utilizó la masacre de Atocha para ganar votos, el “asesino” responsable de muertes en Irak y en España, el “dictadorzuelo” que aplastó la libertad de expresión.

Me atrevo a trazar un paralelo entre los últimos días del mandato de Aznar en España y la salida de lady Thatcher de la escena política británica. En ambos casos, la izquierda ilustrada se sintió libre de cubrir de insultos a líderes que, cuando se escriba la historia, serán recordados por haber ayudado a encaminar a sus dos países hacia la prosperidad perdida. Recetaron amargas medicinas que hicieron su efecto. Tony Blair no ha tocado las reformas de Thatcher. Zapatero repite a quien quiera oírle que “no tocará la economía” y mantendrá el déficit cero y las rebajas de impuestos. Pero mientras la herencia de los dos gobernantes conservadores se mantiene de hecho, sus personas se denigran de palabra.

Aznar fue más suave que Thatcher, en consonancia con la mayor timidez española. Ella rompió el poder del sindicato minero, combatió contra los generales argentinos en las Malvinas, no se inmutó ante las huelgas de hambre hasta la muerte de los presos del IRA. Fue el primer gobernante europeo en suprimir los controles de cambios, privatizó empresas nacionales y viviendas municipales, combatió la inflación, redujo impuestos. Hoy la economía británica es mayor que la de Francia y crece a un ritmo que deben envidiar las grandes naciones del Continente – excepto España.

Los logros de Aznar también han sido notables. Basó su política anti-inflacionista sobre la búsqueda de un presupuesto equilibrado. España consiguió participar en el proyecto del euro desde el principio y sorprendió así a quienes dudaron de la capacidad de España para cumplir las condiciones de Maastricht. Había congelado los sueldos de los funcionarios durante tres años y fue recortando el déficit público hasta conseguir un pequeño superávit. Privatizó 51 empresas públicas y trajo 31 mil millones de euros a las arcas del Estado. Una modesta reforma laboral condujo a un aumento del número de inscritos en la Seguridad Social de 13,5 millones a casi 17. Ayudó a crear 5 millones de nuevos puestos de trabajo. Redujo el tipo marginal del impuesto sobre la renta de las personas físicas del 56% al 44%. España sigue creciendo al doble que sus vecinos europeos.

Las ministras de Educación de sus Gobiernos iniciaron una reforma de la enseñanza para mejorar la calidad y la seriedad de los estudios en las escuelas públicas, reformas que ahora pueden estar en entredicho. Una tímida reforma de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo y la creación de un mínimo fondo de reserva al menos sirvió para crear la conciencia de un grave problema sin resolver. La ambiciosa política de obras públicas buscó mejorar las vías de comunicación y distribuir el agua de Autonomías hasta entonces mal atendidas.



Los Gobiernos de Aznar lucharon con algún éxito contra el terrorismo de ETA: tolerancia cero de la “Kale borroka”, ilegalización de Batasuna, cumplimiento íntegro de las penas por los terroristas, apoyo de Francia para privarles del santuario francés. Cuando Marruecos dio un pequeño golpe para relanzar sus reivindicaciones territoriales por la fuerza, una operación de policía cerró el incidente, por cierto, con el apoyo de EEUU y no de Francia. Como Thatcher, Aznar fue un firme atlantista, colocándose al lado de los americanos para defender la libertad en el mundo. A Aznar le quedaron cosas por hacer, la liberación del suelo, el bono escolar, una verdadera reforma de las pensiones públicas, mayor inversión en defensa, pero el saldo es positivo.

Tanto lady Thatcher como José María Aznar cometieron errores. La Dama de Hierro sintió poco entusiasmo por la reunificación alemana, no supo mantener con suficiente firmeza su visión de una Europa de Estados, creó un impuesto de capitación municipal que los británicos consideraron injusto. El desastre de este impuesto fue una muestra de su incapacidad para comunicarse con el electorado, sobre todo durante sus últimos años de gobierno. Aznar también falló en este punto. Hizo mucho por Cataluña pero dio la impresión de que se tiraba al cuello de los nacionalistas. Fue a las Azores a ponerse al lado del presidente Bush y del primer ministro Blair pero no explicó bien la necesidad de apoyarles a fondo en la lucha contra el terrorismo internacional.

Tanto Thatcher como Aznar reñían demasiado a sus conciudadanos como unos preceptores, amenazándoles con el dedo para que hicieran sus deberes. Arrastraron a sus países hacia la modernidad poco amablemente – y ahora la mitad del país les detesta. Pero pueden estar seguros de un lugar honroso en la historia de sus países y del mundo occidental.



Diccionario de pensamiento económico en España

10 de mayo de 2004

Bajo la dirección de Luis Perdiges y John Reeder, acaba de publicarse en Editorial Síntesis un Diccionario de pensamiento económico en España (1500-2000) de útil y absorbente lectura. En un volumen muy manejable, de 925 páginas, quedan resumidas las aportaciones al pensamiento económico realizadas en España durante cinco siglos. El curioso lector podrá ampliar sus conocimientos en los ocho tomos (uno por venir) de Economía y economistas españoles, dirigida por el Prof. Fuentes Quintana. Pero este diccionario alcanza un detalle y una precisión más que suficientes para los economistas que quieran ilustrarse sobre las vidas y las ideas de quienes les precedieron.

El título mismo indica que no se trata de un repertorio de la doctrina nacional de España, sino de la ciencia y la política económica en España, pues la economía y los intercambios científicos entre economistas no tienen fronteras. El diccionario destaca las aportaciones hechas en España al acervo científico mundial: cortas aportaciones quizá pero alguna crucial, como las de los teólogos del siglo XVI, que explicaron la formación del precio por la demanda y la oferta, y la inflación y el tipo de cambio por la cantidad de dinero. Mas también hace hincapié en la transmisión de conocimientos de un país a otro, en el éxito de ciertas ideas y métodos y el fracaso de otras, en la adaptación de las doctrinas a las realidades locales y su efecto en la sociedad: son especialmente interesantes los artículos sobre la influencia de economistas de naciones extranjeras y sobre las traducciones de sus obras, aunque he echado en falta otro sobre versiones extranjeras de obras castellanas, que hubo muchas y muy reveladoras del aprecio en que se tenía a nuestros economistas.

Los autores han tenido el buen criterio de elegir sólo cinco nombres de economistas españoles vivos: Fuentes Quintana, Rojo, Manuel Varela, Mas-Colell, y Xavier Sala i Martín: ¡qué distinto es el modo de trabajar de estos dos últimos! Los artículos que tratan de instituciones tienen especial interés, como la "Asociación para la reforma de los aranceles de aduanas" de Madrid o el "Fomento del trabajo nacional" de Barcelona, La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la Junta para Ampliación de Estudios, los Servicios de Estudios de los bancos, en especial del de España, las Facultades de Economía. Los artículos sobre la influencia de Marx y Keynes son reveladores de los inesperados vericuetos de la transmisión de las ideas. De la lectura de las voces, que se arraciman como cerezas, emerge una visión de la historia de España que sorprenderá incluso a los historiadores de profesión: la variedad de los llamados a la economía y su patriotismo a veces apasionado, el apasionamiento de los debates, la influencia (mayormente para bien) del pensamiento económico en la política,

No necesito decir más para picarles la curiosidad.



Ronald Reagan, un gran presidente

21 de junio de 2004

Reagan marcó el mundo con la huella indeleble de su presidencia: la Unión Soviética vencida sin provocar un holocausto atómico, la economía de su país liberada de la inflación y el estancamiento, el orgullo de sus compatriotas recuperado tras el gran desastre de Viet Nam y las pequeñas humillaciones de Carter el breve. Sobre todo destacó por su sintonía con el pueblo americano, que reconoció en él al sheriff tranquilo y valeroso de las leyendas del Oeste, que, tras luchar a brazo partido con los cuatrerros, supo alejarse hacia el poniente de una vida tranquila acompañado de su fiel Nancy.

Muchos de los que ahora aceptan a regañadientes la realidad de sus éxitos fueron sus críticos y enemigos implacables. La temerosa opinión europea, dispuesta ayer como hoy a ceder ante los enemigos de nuestras libertades, se burló de su definición del comunismo como “el Imperio del Mal”, y se resistió como pudo al rearme de la “Guerra de las Galaxias” y la instalación de misiles de medio alcance en nuestro Continente. Pero Reagan, casi siempre con fortuna, campeó contra los adversarios de Occidente: apoyó a Margaret Thatcher contra los dictadores argentinos, derrotó dictadorzuelos del Caribe, mostró firmeza en Oriente Medio, y, sobre todo, consiguió poner a los soviéticos contra las cuerdas. La historia nunca olvidará su exhortación en el Berlín dividido de 1987: “¡Abra esa puerta, señor Gorbachov ¡Eche abajo ese muro!”

Su política económica sigue siendo incomprendida. La parte que en general se admira, pero con cierto temor a lo drástico de los remedios, fue la política monetaria aplicada en la Reserva Federal por Paul Volker para centrifugar la inflación que había penetrado en los entresijos del sistema social: los tipos de interés llegaron casi al 20% y las expectativas de continuas subidas de precios desaparecieron, con lo que se crearon las bases de un crecimiento sostenido que duró casi siete años. Más discutidas fueron las tres rebajas de impuestos, pese al creciente déficit público: Reagan se inclinaba por una drástica reducción del gasto “social” (despilfarro lo llamaría yo) pero el Congreso se opuso; en lo que sí tenía razón era en negarse a considerar el impuesto como un instrumento de política coyuntural. Los impuestos afectan radicalmente las decisiones de inversión y consumo de los particulares, por lo que no es posible el crecimiento económico si el Estado reduce el ingreso disponible de individuos y empresas. Con su castigo inicial al sindicato de controladores aéreos y su apoyo a la empresa privada, consiguió crear once millones de empleos durante sus años en la Casa Blanca.

Aprendió a hablar y convencer, no sólo como actor, sino también como conferenciante de General Electric en giras de difusión del ideario capitalista. Hizo sus prácticas de político activo como gobernador de California, marcando directrices y dejando hacer a sus subordinados. Era sobre todo un hombre de convicciones claras y sencillas, un hombre sin dobleces y lleno de optimismo, como es el pueblo americano. Si no hubiera de vez en cuando gobernantes americanos de ese talante a la cabeza del mundo occidental, habríamos dejado de ser libres hace tiempo.



El esfuerzo de Alemania

19 de julio de 2004

A principios de la década de 1990 el ingreso medio por persona de Alemania superaba en 14% el del Reino Unido. En 2003 eran los británicos los que gozaban de un ingreso medio superior en un 10% al de Alemania. La situación relativa alemana queda bien clara: Alemania se encuentra estancada mientras la economía más abierta y más flexible de la Gran Bretaña gana puestos en la clasificación europea. El canciller Schroeder presentó al principio de la presente legislatura el “Plan 2010” con propuestas para reformar a fondo del mercado de trabajo y del sistema de bienestar de la República Federal. Su popularidad en las encuestas de opinión ha caído más bajo que nunca.

Mientras la economía crece, la gran mayoría de los votantes de las democracias avanzadas piden creciente protección social, ya sea con normas laborales que dulcifican el esfuerzo diario, ya sea con prestaciones cada vez más generosas en sanidad y pensiones. Pero ese continuo aumento de la protección social, que al principio parece inocuo, acaba poniendo en peligro la prosperidad del país.

El Plan de Schroeder está encontrándose con obstáculos políticos y constitucionales que a veces parecen insuperables. La República Federal es un modelo del sistema de frenos y contrapesos creados para evitar los abusos de poder de partidos políticos o grupos de interés a costa de la mayoría silenciosa. El poder co-legislativo del Senado y la Cámara, los poderes muy amplios de los Länder o Autonomías, llevan a que las decisiones o concesiones demagógicas no puedan introducirse de golpe, al albur de una victoria electoral o de una huelga general. Pero una vez introducidas, esos mismos frenos y contrapesos atan las manos de los gobiernos reformistas. La división de poderes, instaurada para retrasar los abusos de poder, se convierte en un baluarte defensivo de los buscadores de rentas.

Sin embargo, no debemos desesperar. La creciente rigidez laboral y la expansión del gasto social están sometidas a tres frenos, lentos pero eficaces. El primero es la evidencia de estancamiento de la empresa en la que uno trabaja y de la economía en general. El segundo es la resistencia a pagar cada vez más impuestos. El tercero es la apertura del país a la globalización y la competencia internacional.

Daré dos muestras de la operación de algunos correctivos en las empresas alemanas. La Siemens acaba de acordar con el poderoso Sindicato del Metal que sus trabajadores en Alemania aumenten sus horas de trabajo de 35 horas semanales a 40, sin aumento de paga, para evitar el traslado de las plantas a otros países. La DaimlerChrysler, por su parte, está inmersa en un conflicto colectivo con el mismo sindicato porque quiere reducir los costos de su planta de Baviera en €500 millones, bajo la amenaza de llevar la producción a Bremen



o a Sudáfrica. No es que los trabajadores alemanes no sean productivos: la prueba es el superávit de exportaciones industriales alemanas. Es que esos tan productivos trabajan pocas horas.

Otra muestra de medidas tomadas para limitar la deriva del gasto social la encontramos en algunas reformas aplicadas por Schroeder en su camino hacia el 2010. Los pacientes que acuden a un médico de la Seguridad Social tienen que pagar un euro por visita. Eso ya ha reducido las visitas de 550 millones al año a 500 millones. El objetivo de estas y otras medidas semejantes es intentar reducir el gasto del sistema público de salud de €142 miles de millones a €119 en 2007.

El canciller Schroeder, socialdemócrata, ha visto la cuestión con claridad. Alemania no puede pagar beneficios y servicios sociales cada vez más generosos si no crece la riqueza. También ha comprendido, porque los datos se lo han metido por los ojos, que la proliferación de cuantía de esos privilegios laborales puede paralizar el desarrollo económico. Igualmente ha entendido que el modo de financiar las prestaciones sociales puede infligir graves distorsiones a la economía nacional. Si las medidas de política laboral resultan en un aumento de los costos de producción, las empresas comienzan a pensar en la temida “deslocalización” y el crecimiento de la producción nacional desmaya. Si las conquistas sociales han de financiarse con las cuotas de la Seguridad Social, el gasto se cubrirá con lo que a fin de cuentas es un impuesto sobre la mano de obra. Lo que no sé es si los votantes se lo agradecerán, pero a la fuerza ahorcan.



Sen elogia a Hayek

5 de octubre de 2004

No puede imaginarse dos Premios Nobel de Economía más distantes que Amartya Sen y Friedrich Hayek. Examinan el comportamiento humano y conciben el bien común de forma radicalmente distinta.

Sen se ha especializado en el estudio de la “elección social”, buscando analizar la racionalidad de las decisiones colectivas, detallando el contenido positivo de las libertades individuales, e intentando medir y corregir las desigualdades sociales.

En cambio Hayek dedicó su vida a explicar la “evolución social espontánea”, señalando la incapacidad de la razón humana para planificar la vida social, definiendo la libertad como defensa contra la violencia y la coacción, y mostrando la justicia social como un concepto vacío.

El 21 de septiembre de 2004, Amartya Sen celebró en el diario Financial Times de Londres el sesenta aniversario de la publicación por Hayek de “Camino de servidumbre”, un año antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, el libro en el que avisaba del peligro que corrían las libertades bajo un sistema socialista de planificación racional. Como alumno que fui de ambos (y como admirador muy crítico de Sen y menos crítico de Hayek), quiero señalar con piedra blanca este homenaje al viejo maestro austriaco por quien declara tener unas ideas económicas y políticas muy distintas.

Tres son las razones por las que Sen quiere celebrar “Camino de servidumbre”. La primera y más importante es que Hayek juzga todas las instituciones por su contribución a la libertad humana. El mercado tiene que ser apreciado no solamente porque es un motor de prosperidad (que es lo que la mayoría de los economistas han destacado), sino sobre todo porque fomenta y garantiza la libertad individual.

La segunda razón del elogio de Sen es que Hayek no rechaza de raíz el Estado de Bienestar. Acepta que las democracias creen una red de salvamento para quienes no tengan las capacidades necesarias para funcionar en el mercado, versión mínima aceptable si la apoyan todos los ciudadanos.

La tercera es una razón que Sen denomina “psicológica”: se trata del peligro de conceder poderes administrativos ilimitados a los planificadores socialistas porque necesariamente caerán en la corrupción política y económica. En palabras de Hayek, “el socialismo sólo puede ponerse en práctica con métodos que la mayoría de los socialistas desapruaban”. Con



todos sus defectos y en la medida en que es competitivo, el mercado limita automáticamente el albedrío de los poderosos. Para Sen, Hayek acierta, en suma, al pedir que se tome en consideración la psicología administrativa y la tendencia a la corrupción antes de decidir qué debe o no debe hacer el Estado. Quedaría yo muy contento si políticos y ciudadanos aprendiesen esta sencilla lección.



África quiere Progresar

28 de octubre de 2004

El visitante queda fascinado por Gabón, no tanto por el contraste de la vida africana con la europea, como por una inquietante capacidad de recordarle cosas que prefiere olvidar. Ante sus ojos se presenta el rigor de nuestra madre Naturaleza y la salvaje oscuridad que se esconde en el corazón de todos los hombres.

Gabón, con la mitad de la superficie de España tiene poco más de un millón cien mil habitantes y un creciente número de inmigrantes de partes más pobres. Hace un siglo que franceses y alemanes empezaron a cortar en sus bosques el “okué”, el árbol que se desenrolla en finos tableros, cuyos troncos aún descienden en tropel por inmensos ríos. Entre las dos guerras comenzó la exportación del manganeso para la industria del acero, y se descubrieron oro y diamantes. A partir de 1956, los gaboneses entraron en la era del petróleo, bombeado en aguas de la costa por las grandes petroleras, que siempre parecen descubrir más yacimientos cuando comienzan a agotarse las reservas, como en estos momentos. Las crisis energéticas de la década de 1970 animaron la producción de uranio para las centrales nucleares francesas. Hay un ferrocarril a través de la selva, pocas carreteras, deficiente educación y servicios de salud. No hay hambre pero sí carencias. Tanta riqueza natural parece una maldición: adormece las energías creadoras de los agraciados, despierta la concupiscencia de buscadores de fortuna, corrompe los líderes naturales.

Antes de que los ingleses prohibieran la trata de negros, el negocio del Africa ecuatorial fue más siniestro y también corruptor. Es curioso que nadie recuerde a los árabes que ellos eran los que cazaban esclavos en el Este africano. En Guinea, los reyezuelos locales vendían “ébano” a tratantes portugueses, vascos, franceses, americanos, hasta que a finales del siglo XIX se abolió la esclavitud. La capital Libreville la fundaron idealistas franceses de 1848, con 272 hombres, mujeres y niños, liberados de un barco negrero brasileño: organizaron para ellos un “falansterio”, un poblado socialista según la doctrina de Fourier.

Es revelador que el alcalde de la nueva población pronto se negara a trabajar en la huerta, alegando que él era “el jefe”. El paternalismo tribal aún es el de Gabón hoy. Los beneficios obtenidos de la madera, minerales y petróleo quedan en manos de los cabecillas, que disponen de ellos como les place, pero con la prudencia necesaria para mantener contentos a sus familiares y seguidores –y a los miembros de otras tribus. Lo que nosotros consideramos corrupción es la forma tradicional de disponer de la riqueza, como cuando en la Andalucía de Felipe y Guerra se decía que “¡por fin roban los nuestros!”. Así, Gabón está gobernado por el presidente Omar Bongo desde hace 36 años, no todo el tiempo como dictador, sino como jefe que sabe mantener la paz y gozar de la riqueza. Bongo es el segundo presidente desde la independencia en 1960. Instauró el multipartidismo y las elecciones libres en 1985. Pese a algunos golpes y crisis económicas, ha mantenido, con la ayuda omnipresente



de los franceses, una moderada libertad de prensa, no mata ni tortura como Obiang en Guinea, no enciende la guerra civil, no guerrea contra sus vecinos. El francés es la lengua oficial. La principal preocupación del país es ver si designa un sucesor adecuado, como Franco en su día. No es poco esto, en un Continente destrozado por la violencia civil y militar.

Es revelador que Bongo sea miembro de una tribu minoritaria, los “bateké”, por lo que gobierna en relativa paz: si perteneciese a una de las grandes etnias, cual la “bapunú” o la “fang”, habría corrido la sangre como en Ruanda, Sudán, Costa de Marfil, Congo... Bongo asignó los 43 puestos del Consejo de Ministros cuidadosamente entre su familia y también entre los miembros de etnias distintas a la suya. El peso de las tradiciones tribales es aplastante: el incesto no es tabú, las niñas púberes son llevadas al abuelo para iniciarlas; todo pertenece al “nganga” o sabio que encabeza la gran familia. La religión animista subyace, pese a un barniz de religión cristiana o musulmana: las enfermedades se deben al mal de ojo, antes de las elecciones los ministros visitan su poblado en la selva para consultar a sus antepasados con ritos inmemoriales, en las ciudades cunden el vudú y las ceremonias de la masonería rosacruz; se perpetran sacrificios humanos, cuanto más dolorosos por la proximidad de la víctima, más meritorios.

Todo el mundo lo sabe, nadie lo dice. En momentos cruciales de la vida social, aparecen cadáveres de niños, atados de pies y manos, y privados de ojos, dedos, y otros órganos, que han servido para oscuras ceremonias. El viajero tiene testigos fidedignos de víctimas en ese estado, arrojadas por el mar o abandonadas en la selva. Mientras caminaba por la selva tras un guía guineano que penosamente se abría paso por la vegetación con su “panga”, sorprendido ante una familia de huidizos elefantes, calado por repentinas lluvias tropicales, se le presentó cegadora la evidencia de que las fuerzas oscuras de la animalidad humana deben encauzarse y disciplinarse. La reverencia idólatra ante la Naturaleza, la tolerancia integral de costumbres salvajes, el respeto ilimitado de todas las culturas, no son aceptables. Hay un mínimo de valores irrenunciables que hemos aprendido de la religión cristiana y la ilustración racional. Apoyemos el Africa que quiere civilizarse.



El fracaso de América Latina

10 de noviembre de 2004

Álvaro Vargas Llosa acaba de publicar un libro notable, con el título de “Rumbo a la libertad: por qué la izquierda y el ‘neoliberalismo’ fracasan en América Latina” (Planeta). Su lectura es obligada para todos los que se interesen en el subdesarrollo, especialmente para quienes tienen puestas sus esperanzas de remedio tanto en el socialismo como en el liberalismo. Lejos de ser un ensayo de los que se lleva el viento, el estudio de ese curtido periodista y elegante escritor que es el joven Vargas Llosa está construido sobre una sólida base científica y un íntimo conocimiento de la realidad de Iberoamérica. El socialismo, el populismo, el nacionalismo económico en los que tantas almas generosas pusieron su esperanza tenía que fracasar, pero lo hizo en América con más dureza que en los países del norte. El capitalismo, la democracia, las uniones aduaneras no han conseguido remediar los daños causados por los intervencionistas de derecha e izquierda. Las razones que aduce Vargas Llosa para ese doble fracaso deberían convertirse en instrumentos de análisis de uso obligado.

La tesis del libro consiste en señalar que ningún salto adelante es posible con los cinco principios de opresión que caracterizan la historia y el presente de América Latina: corporativismo, mercantilismo de Estado, privilegio, transferencia de riqueza, y legislación política. Estos principios de opresión se remontan a los Estados indígenas y a la época de la colonización hispana, pero las repúblicas nacidas de la independencia no supieron corregir tales vicios. Las sociedades americanas al sur del río Grande han seguido organizándose sobre la base de colectivos en vez de primar la autonomía individual. El comercio, apenas libre algunos años tras la destrucción del monopolio español y portugués, ha estado intervenido por el Estado, ya para primar la exportación, ya para reservar el mercado nacional o comunitario a grupos privilegiados. Naturalmente, el privilegio de los poderosos o de los burócratas no se ha reducido al comercio, sino que tomó forma de latifundismo en el siglo XIX, y en el s. XX de empresas públicas detentadas por sus empleados, de exclusivas en el negocio bancario, o directamente de corrupción política. El efecto de estas corruptelas ha sido la permanente transferencia de ingreso y riqueza de productores a buscadores de rentas. Por fin, todos estos vicios necesitaban la continua legislación para cambiar las reglas a favor de colectivos poderosos. El ejemplo de las 318 enmiendas a la Constitución mexicana por los gobiernos del PRI es llamativo. Indica una utilización del Derecho para objetivos coyunturales e interesados, general en Latinoamérica. Sin reglas imparciales para la protección de los derechos humanos, los derechos de propiedad, y el cumplimiento de los contratos, no es posible conseguir un desarrollo económico y social sostenible.

Los observadores de fuera nos asombramos del caos de la historia de Latinoamérica: revoluciones, dictaduras militares o civiles, cambios bruscos de política económica. Vargas Llosa busca explicar estos vaivenes por la ilegitimidad de las república en la conciencia de sus pueblos. El conservadurismo de los gobiernos al servicio de los terratenientes durante el s. XIX desembocó en la sangrienta revolución mexicana de 1910, pronto imitada en otros



pagos del Continente. Esa revolución y sus imitadoras, sin embargo, no crearon sociedades abiertas al servicio del individuo, sino repúblicas basadas en la soberanía popular concentrada en un presidente todopoderoso. La desilusión ante el fracaso de regímenes autocráticos apenas vestidos de un manto populista abrió la puerta a golpes militares y revoluciones comunistas, aún más alejados de la legitimidad. Una de esas sublevaciones ha sido la que agudamente llama Vargas Llosa, la revuelta de las elites de la década de 1980 para traer un falso capitalismo. Una de las peores desgracias de América Latina es su relación con EEUU. El anti-americanismo de los latinos es una forma de desplazar la culpa propia sobre cabezas ajenas, pero los vecinos del norte han sido torpes en su relación con el resto de América. El proteccionismo comercial desde finales del s. XIX, la ayuda económica y política a gobiernos corruptos y sus protegidos durante la guerra fría, los cambios de la política de inmigración, y ahora el inmenso fracaso de la guerra contra la droga, han contribuido al odio al capitalismo liberal que EEUU debería representar. Hasta las instituciones internacionales apoyadas por Occidente, como el FMI, han cometido graves errores: no supo ver la crítica implícita que suponía la fuga de capitales de Iberoamérica, mayor en los últimos veinte años del s. XX, que toda la ayuda del Fondo a los países en desarrollo.

Quizá lo más útil del libro sea el análisis del fracaso de esa revolución de las elites, de ese intento de traer el capitalismo a sus países, que sólo ha tenido éxito en Chile. También los economistas fracasamos cuando nos especializamos en exceso y olvidamos las condiciones sociales y legales de la sociedad abierta. La vuelta al libre mercado que ahora tantos latinoamericanos ponen en cuestión ha fracasado por no haberse liberado las repúblicas de los cinco principios de opresión tradicionales.

La pregunta acuciante es si podrá Latinoamérica seguir el camino de libertad y prosperidad que señala Vargas Llosa en su último y esperanzado capítulo, o si seguirá el ejemplo de Chávez dedicado a derruir estatuas de Colón el día de la reivindicación del indígena.



La talla de Aznar

8 de diciembre de 2004

Durante las casi once horas de su declaración ante la Comisión Investigadora del 11 de marzo, José María Aznar confirmó su integridad como persona y su solidez como político. Pretendida víctima de un espectáculo de acoso y derribo, se tornó en acusador de quienes, en su afán de desprestigiarle, habían dado pábulo a falsos rumores e incluso habían arrojado sobre su Gobierno culpas de acción u omisión por la espantosa matanza de Atocha. Incluso si no coincidiéramos con la totalidad de sus afirmaciones, seguiríamos sosteniendo que Aznar salió indemne de los cargos que varios diputados de izquierda y nacionalistas le imputaban.

El primer cargo con el que hubo de enfrentarse Aznar fue que su Gobierno había mentido deliberada e interesadamente al atribuir a ETA durante casi un día y medio la autoría del crimen, porque ello daría sin duda al PP la victoria en las inminentes elecciones generales. Por el contrario, los ministros creían sinceramente que se trataba de ETA. A quienes seguimos el pormenor de las investigaciones policiales durante aquellas horas del 11 y 12 de marzo nos parecía cierto lo que decía el Gobierno. Los intentos de la banda terrorista vasca de organizar un atentado de semejantes proporciones en la Estación de Chamartín las Navidades anteriores parecían confirmarlo. Ibarreche lo creyó. Rodríguez Zapatero, según declaró Aznar ante la Comisión, le dijo eso mismo en la primera de las dos conversaciones telefónicas que mantuvieron. Luego se descubrió la camioneta con cintas coránicas y Acebes dio cuenta inmediata del hallazgo y ordenó que se abriera una investigación subsidiaria siguiendo la pista islámica. La ministra Ana de Palacio envió telegramas atribuyendo el atentado a ETA por un exceso de confianza en la validez de los primeros indicios mas no en el marco de un intento deliberado de esconder la realidad. En fin, oídas las detalladas declaraciones de Acebes primero y de Aznar luego ante la Comisión, creo que a muchas personas de buena voluntad les parecerá que no hubo mentira deliberada, todo lo más error inicial explicable.

Un error que, en mi opinión, sí cometió el Gobierno Popular fue el no convocar inmediatamente la Comisión del Pacto Antiterrorista. Aznar lo explicó en la Comisión diciendo que no quería distraer de sus perentorias obligaciones a los ministros encargados del caso. Quizá hubiera servido para unificar posturas frente a este nuevo ataque el que los diputados de la oposición hubieran participado en las deliberaciones sobre las medidas a tomar.

En vez de la unidad ante el ataque, corrieron informaciones improbables, pero fueron los enemigos del gobierno quienes las lanzaron. Por ejemplo, se difundió el bulo de que el Gobierno había llevado a la firma del Rey un decreto aplazando las elecciones. La SER habló de cadáveres de terroristas suicidas encontrados en los vagones destrozados. Hay que decir que esa radio y los periódicos afines organizaron una campaña sistemática para desalojar al



PP, con un tono rayano en el odio personal, como tenían acostumbrados a sus oyentes y lectores desde la victoria de los populares por mayoría absoluta en el año 2000. A esa campaña periodística se añadió el comportamiento ilegal de quienes se acordaron para asediar las sedes del PP durante la jornada de reflexión, acusando al Gobierno de mentir y sobre todo de ser culpable de la matanza por haber apoyado a EEUU en la guerra del Irak.

El segundo cargo, explícito en boca de izquierdistas y nacionalistas extremos, implícito en las preguntas de otros más moderados, es que el atentado no habría ocurrido si Aznar no hubiera apoyado tan claramente al presidente Bush en la guerra de Irak. La culpa la tuvieron sola y únicamente los terroristas. No debería haber hecho falta que Aznar lo dijera. Envidió la suerte de Bush de que no le culparan a él y al Gobierno americano del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono. El atentado de Atocha demuestra precisamente que es necesario combatir el terrorismo islámico con toda firmeza y decisión, no que haya que lavarse las manos como Pilatos y dejar el trabajo duro en manos de otros más valientes. Aznar decidió, en contra de la mayoría de la opinión pública española y de algunos de sus ministros, que había que estar del lado de Bush y Blair en la cuestión de Irak, a riesgo de perder las siguientes elecciones. Pero esas son las reglas de juego de la democracia parlamentaria: el presidente del Gobierno puede tomar decisiones impopulares si cree que la salud pública lo exige. Luego los votos hablan. Creo que de todas maneras habría ganado las elecciones si los terroristas islamitas no hubieran buscado cambiar el signo de éstas con un ataque que acobardara al pueblo español. Otra vez digo que una persona ecuánime tendrá que admitir que Aznar tenía razón cuando afirmó que el atentado buscaba precisa y calculadamente dar un vuelco a las elecciones que parecía tener ganadas el PP.

El tercer cargo contra Aznar era la falta de previsión y preparación ante un posible ataque de terroristas islámicos. Si a algún Gobierno no se le puede acusar de dejación ante el terrorismo y en especial ante esa parte, minoritaria por cierto, del Islam dedicada a destruir la civilización occidental, es al Gobierno de Aznar. La persecución desatada contra José María Aznar desde el 11-M debería parecer excesiva incluso para sus críticos. Para quienes creemos que el sitio de España es estar al lado de los EEUU y sus aliados contra nuestros enemigos, la figura de Aznar se engrandece a medida que pasa el tiempo.



¡Premio a Xavier Sala i Martín!

16 de diciembre de 2004

Acaban de concederle el Premio Rey Juan Carlos de Economía a Xavier Sala i Martín e inmediatamente ha cedido su cuantía a la Fundación Umbele dedicada al estudio de los problemas de Africa. Su artículos quincenales en La Vanguardia han venido ilustrándonos sobre las bondades del la libertad económica, del libre comercio, de la globalización, en desafío quijotesco contra los follones y malandrines defensores de intervenciones de toda laya, como son los reguladores que quieren destruir Microsoft porque ha tenido éxito; o los globófobos que quieren reducir la actividad económica al área de un país, una región, una tribu; o los que creen que el libre mercado fomenta la desigualdad entre lo habitantes de los países pobres y los ricos. El que un nacionalista catalán dijera después de la primera legislatura de Aznar que la reducción del “índice de miseria” (tasa de paro más tasa de inflación) fuera “un éxito económico sin precedentes en la historia reciente de España” indica que Sala dice lo que cree sin importarle un bledo el qué dirán. Yo no llevaría nunca las chaquetas color fucsia en las que se enfunda Sala ni tampoco las corbatas dalinescas con las que pretende dar un poco de variedad a su atuendo. Tampoco me siento nacionalista ni de Cataluña ni de España ni de Europa, pero estoy seguro que el nacionalismo catalán de Sala i Martín no es de los que busca proteger la industria catalana contra la competencia exterior, ni coartar la libertad de los consumidores limitando los horarios comerciales, ni imponer con castigos el uso de la lengua vernácula.

Vale la pena leer el discurso de aceptación, dirigido a hacerse estas dos preguntas: “¿por qué son pobres los ciudadanos africanos? y ¿qué se debe hacer para que dejen de serlo?” Para contestarlas, parte Sala de una constatación crucial: en el siglo XX la pobreza no va unida a la clase social en la que la suerte o la mala suerte le ha situado a uno, sino que depende del país en el que uno viva. Un taxista, un médico, un obrero o un agricultor en Estados Unidos o en Japón vive mucho mejor que un ciudadano con exactamente la misma profesión en Zambia o Mozambique. Por tanto, hay que preguntarse por qué unos países son ricos y otros son pobres, como hizo Adam Smith cuando investigó “La naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” (1776): la contestación para Smith era el tamaño del mercado y la libertad de comercio. Sin embargo, como muy bien dice Sala, los grandes clásicos como Malthus y Ricardo dieron demasiada importancia a la limitación de los recursos naturales: ambos creían que el sistema capitalista estaba condenado al estancamiento debido a los rendimientos decrecientes de una tierra cada vez más escasa. Para corregir este error, Sala echa mano del economista austriaco Schumpeter, un caso curioso de falta de fe en el capitalismo que tan bien entendió: para Schumpeter, el crecimiento nacía de los avances científicos y tecnológicos, avances que destruían las viejas formas de producir pero que creaban nuevas posibilidades de producción; mas por eso mismo pensaba el austriaco que el capitalismo estaba condenado a desaparecer, porque las grandes masas preferían la seguridad de lo antiguo a la revolución de lo nuevo. Por suerte, Sala no toma de Schumpeter más que la “destrucción creadora” (y por eso mismo supongo que es contrario al proteccionismo económico del Govern).



Otro concepto importante en el análisis de Sala i Martín es el de “los estadios de crecimiento”, tomado de Walter Rostow. Ciertamente las clasificaciones de Rostow no se correspondían con exactitud suficiente con lo ocurrido realmente en la historia. Sin embargo, la idea de que los remedios para la pobreza no son universales y deben cambiarse según el nivel de crecimiento en el que se encuentra cada país es muy necesaria: no existen fórmulas mágicas universales.

Los remedios de la pobreza en Africa son los que buscan corregir las carencias más evidentes de aquel Continente. La primera es la falta de estabilidad y seguridad en unos países constantemente enfrentados con guerras civiles, golpes de Estado, abusos en materia de derechos humanos. Es evidente que el caos permanente dificulta la inversión privada, pues la inversión pública en países atezados por la corrupción no es más que una forma de despilfarro. Todos nos asombramos de la “maldición del petróleo y de los diamantes”, que fomenta la corrupción en esos sectores de materias primas pero también corroe las actividades existentes antes de la falsa bonanza: sólo en Botswana ha servido la abundancia de diamantes para ponerse en la vía del crecimiento. Las instituciones favorables al desarrollo, como son la propiedad privada y el respeto de los contratos, también brillan por su ausencia en la mayor parte de Africa, lo que pone dificulta la participación en los beneficios de la globalización. La malaria y el sida son otros dos flagelos de esas desgraciadas poblaciones y Sala propone la creación de un fondo que garantice a los laboratorios beneficios en la búsqueda de remedios que una población miserable no puede costear. Por fin, las deficiencias de la educación, especialmente la primaria, impide la acumulación del mínimo de capital humano que ponga las bases de un despegue económico.



China, ¿Un peligro?

18 de enero de 2005

El uno de enero del presente año, los países de la Organización Mundial del Comercio han tenido que abandonar los contingentes que limitaban la importación de textiles provenientes de países subdesarrollados. Aún quedan barreras arancelarias, pero éstas no son tan efectivas como las cuotas para proteger los mercados textiles de Europa, EEUU y Japón de la invasión de productos chinos: la baratura en origen contrarresta un gravamen aduanero porcentual. Se han oído algunas voces en Cataluña que reclaman medidas del Gobierno para paliar el efecto sobre la industria textil española de un recrudescimiento de la competencia internacional. Otras voces más acordes con las exigencias de la creciente mundialización comercial lanzan ideas para fomentar la adaptación a un mercado más libre. No es sólo en el terreno textil en el que pueden distinguirse dos posturas ante el fenómeno chino: la de quienes alertan del “peligro amarillo” y la de quienes saludan con alegría el nacimiento de un gigante creador de riqueza y abridor de mercados.

Se comprende que preocupe la desaparición de puestos de trabajo en la industria textil local, pero esta consecuencia de la apertura de las economías mundiales no es necesariamente un mal y puede convertirse en un bien para el propio sector de la moda y de la distribución de ropa, en el que los españoles descuellan tan notablemente. Si levantamos la vista del sector textil, el desarrollo sostenido de grandes países pobres como India y China promete para el mundo mayores facilidades de consumo y más competencia industrial, dos avances que sería un error lamentar.

El crecimiento de los intercambios internacionales en bienes y servicios, después de ser nulo en 2001, se ha acelerado continuamente desde entonces y vuelve a tasas cercanas del 10 por ciento. La coincidencia de esta expansión del comercio con el crecimiento de la economía mundial en su conjunto lleva a reflexión: sin duda hay más comercio cuando crece la producción, pero también es más vivo el progreso productivo en un mercado más amplio. Como acertadamente notó Adam Smith, “la división del trabajo depende de la extensión del mercado”.

El efecto del libre comercio sobre el consumo es claramente positivo. Ya nos hemos acostumbrado a la etiqueta de “Made in China” en anoraks, cortinas, ropas para bebé y mantas. En 2005 también veremos camisas de punto, jerseys, calcetines e incluso trajes de confección de origen chino. El que los consumidores europeos podamos comprar productos chinos de buena calidad y bajo precio mejora nuestro bienestar, si no nos absteníamos de comprarlos.



Lo que no vemos, porque la marca es española, es la fabricación china de ropas de Mango, Zara y otras distribuidoras de moda, así como la deslocalización de la actividad de mucho textil intermedio hacia el mercado chino, cual Satri con sus telas para decoración, o Murtra con sus fibras sintéticas, por citar dos interesantes empresas catalanas. Sin duda, el efecto de la importación de bienes baratos desde China aumenta la presión de la competencia sobre los productores españoles, pero éstos no tienen por qué quedar inertes ante esa invasión de sus mercados. La desaparición de cuarenta años de limitación cuantitativa de las importaciones de textiles había sido anunciada con gran antelación en los acuerdos de la Ronda Uruguay, por lo que los fabricantes españoles más vivos han respondido con la especialización, el diseño, la diversificación hacia los plásticos o el amueblamiento del hogar, o esa temida deslocalización.

La deslocalización de parte de la actividad de las empresas de fabricación y distribución textil no daña la economía española, por dos motivos: permite que compañías punteras de nuestro país no sólo sobrevivan sino que prosperen; y fuerza a los empresarios y sus trabajadores menos productivos a desplazarse hacia nuevas actividades en las que España goza de ventaja relativa. El crecimiento de nuestro bienestar exige la readaptación de productores incapaces de competir con ciertos productos: en vez de producir lo que otros hacen más barato, nos conviene aprovechar nuestras ventajas relativas y así multiplicar nuestra capacidad de adquirir lo que China nos envía.

La competencia puede tener un efecto desagradable en lo inmediato pero, dinámicamente hablando, nos fuerza a ser más productivos y por tanto eleva nuestro nivel de vida. Si el Barça se viera limitado a competir sólo con el Espanyol, el Valencia y el Mallorca, una liga imperial catalana al gusto del Sr. Carod Rovira, y no tuviera que enfrentarse con el Madrid, el Depor y la Real Sociedad en el Campeonato de Liga de España, perdón, del Estado, el Club y sus jugadores gozarían de una vida más tranquila. Sin embargo verían disminuir el número de espectadores, los ingresos por derechos de retransmisión, y los futbolistas sus sueldos y primas. Semana a semana queremos que gane nuestro equipo, pero en un nivel superior, deseamos que gane o pierda con buen fútbol y contra los mejores. China forzará a las empresas españolas a que inventen nuevas tácticas, fichen fábricas extranjeras, jueguen en campo contrario y así mejoren nuestro fútbol económico.



Lo que ofrece la constitución europea

1 de febrero de 2005

Los españoles hemos de votar pronto en el referéndum sobre la Constitución europea. El debate ha sido mínimo a pesar de que el nuevo Tratado influirá profundamente en nuestras vidas. Ello es preocupante porque indica indiferencia de los ciudadanos y frivolidad en nuestros dirigentes. Dice el Gobierno del señor Zapatero que todo eso no importa, que es posible votar sí aunque no se haya leído texto ni siquiera un resumen de sus cientos de páginas. Nos dicen que la aprobación de este nuevo Tratado es trascendental para que Europa progrese. Nos dicen que construir Europa es como pedalear una bicicleta, si paramos, se cae. Empecemos por declarar que, en conjunto, la creación de la Unión Europea ha tenido efectos muy positivos para los pueblos que la componen, especialmente para los salidos de situaciones de dictadura u opresión. Prueba de ello es que acaban de ingresar en el club diez nuevos miembros y que otros más están llamando a la puerta con impaciencia. Ese deseo de formar parte de Europa no se debe todo a las ayudas y subsidios que reciben los nuevos entrantes. Más importante es la confianza en el progreso que traen consigo la competencia y el libre comercio. También importa sentirse anclados en una comunidad de naciones democráticas. Por fin, en un Continente arrasado por las guerras durante todo el siglo XX atrae la esperanza de paz y seguridad.

Pese a todo, cabe preguntar si era necesario poner a prueba la solidez de nuestros lazos con este oceánico texto y si vale la pena correr el riesgo de que algunos países miembro lo rechacen. Los partidarios de esta “Constitución” dan dos respuestas contradictorias para animarnos al sí: a quienes tememos la concentración de nuevos poderes en Bruselas, nos dicen que contiene pocas novedades, que no es sino una recopilación y puesta en orden de lo existente; a quienes aspiran a crear una federación de los pueblos y regiones de Europa, se les dice que la Carta es otro paso hacia una unión cada vez más profunda de los europeos. El impulso inicial para redactar este texto era doble: uno, mejorar la gobernabilidad de la Unión, ahora que cuenta con veinticinco miembros; otro, reunir en un solo instrumento más claro las normas y Tratados fundamentales de la UE. De la reunión de Versalles, por impulso sobre todo de ese impenitente centralizador político y planificador económico que es Giscard d’Estaing, salió otra cosa bien distinta.

No es mala idea que el Consejo Europeo elija su presidente por dos años y medio por mayoría cualificada y con posibilidad de reelección por otro mandato. Ello permitirá concentrar la atención de la ciudadanía en una persona y un programa y mejorará la representación de la UE en el mundo. Otro acierto es la proclamación del derecho a abandonar la Unión, lo que sin duda dulcificará cualquier incidente de secesión que pueda presentarse y facilitará llegar a acuerdos comerciales, económicos y militares con el miembro que quiera marcharse.



No me parece tan bien la reducción del quórum necesario para que el Consejo apruebe propuestas de la Comisión. Es vieja experiencia de muchas federaciones y confederaciones que las decisiones mayoritarias son utilizadas por las regiones o estados más regulados para imponer la misma regulación sobre los más competitivos. Esta mayor facilidad para alcanzar acuerdos hace temer abusos de la mayor regulación del mercado de trabajo implícita en la Carta de Derechos fundamentales y de la menor independencia del Banco Central Europeo. El texto además no pone límites a las materias sobre las que puede legislar el Parlamento, a sabiendas de su parcialidad federalista. Así también, el Tribunal de Justicia, siempre dispuesto a ampliar los poderes de la Unión, podrá seguir creando Derecho (al contrario del Tribunal Constitucional español) y tendrá la última palabra sobre si la Unión ha pasado por alto el principio de subsidiariedad.

Es natural que la UE en su conjunto goce de competencia exclusiva en materias concernientes a la moneda común, la unión aduanera y la política comercial común. Más inquietantes son las llamadas “competencias compartidas” con los Estados miembros sobre una amplia gama de materias: el mercado interior; el espacio de libertad, seguridad y justicia; agricultura y pesca; transporte y redes transeuropeas; energía; política social; cohesión económica, social y territorial; medio ambiente; protección de los consumidores; aspectos comunes de salud pública, política exterior y seguridad común; e incluso la exploración espacial. También apoyará y coordinará las políticas de industria, protección y mejora de la salud humana, educación, formación profesional, juventud y deporte, la cultura y protección civil. Cuando se descubre que, en estas materias compartidas, “los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no hubiere ejercido la suya o hubiere decidido dejar de ejercerla”, empezamos a temer lo peor.

Si la Constitución no se aprueba no creo que ocurra nada catastrófico en la UE. Un pequeño descanso en la carrera no vendría mal, aunque fuera para preguntarse a dónde se dirige la bicicleta europea. Por eso creo que no me uniré a quienes voten sí en el referéndum del 18 de febrero.



¿Adónde vas Europa?

2 de marzo de 2005

El presidente del Gobierno español, señor Rodríguez Zapatero, dio muestras de imprudencia al convocar precipitadamente el referéndum consultivo del domingo 20 de febrero sobre la proyectada Constitución de la UE. Nunca se pensó que fuera a ganar el “No”, puesto que los cuatro principales partidos, Socialistas, Populares, y Nacionalistas de derecha vascos y catalanes, apoyaban la aprobación. Se temía sin embargo una gran abstención y muchos “noes” malhumorados. Al final, un amplio 78% de los que votaron dijo “sí”, mas la participación justo alcanzó el 42% del cuerpo electoral, dos puntos por encima de lo que se consideraba el mínimo aceptable: he aquí un resultado que deslució las esperanzas de que la consulta fuera una fiesta del europeísmo y del zapaterismo.

No es nada satisfactorio que un 58% de los votantes se mantenga lejos de las urnas en una consulta de tanta importancia, la mayor abstención de todas las votaciones generales desde que se restauró la democracia en España. En efecto, el porcentaje de los “síes” aplicado a la totalidad del cuerpo electoral equivale a un mero 32%. Muchos se negaron a votar porque parecía que el referéndum era un plebiscito sobre la persona del presidente del Gobierno. Muchos se retiraron disgustados por una campaña electoral que apeló a los sentimientos más que a la inteligencia. ¿Adónde se pretende que vaya Europa con este nuevo texto constitucional? La respuesta no está nada clara, por lo que la abstención de tantos votantes es comprensible.

El proyecto europeo es ambiguo por su propia naturaleza, pues sus creadores han buscado siempre mantener un púdico claroscuro para disimular profundas diferencias y resistencias entre los socios y conseguir que fuesen uniéndose casi sin darse cuenta. El método “Jean Monnet” ideado, aplicado desde antes del Tratado de Roma, ha consistido en utilizar la armonización económica para facilitar la integración política. Se empezó por la Comunidad del Carbón y del Acero y Euratom, siguió el Mercado Común, luego fue el Mercado Único, y más recientemente, la Unión Monetaria y el euro. La Unión Europea ha ido creándose por la puerta de atrás.

Este modo de proceder ha tenido sin duda éxito y la mejor prueba de ello es que el club ha crecido sin parar: de seis ha pasado a tener veinticinco miembros y aún quedan unos cuantos a la espera de entrar. Los nuevos socios ya no acuden por motivos meramente económicos, como la conveniencia de participar en una gran unión aduanera o las ventajas de competir en un mercado tan amplio. Acuden porque esperan ayudas para elevarse al nivel de los socios más prósperos, pero sobre todo porque quieren anclar definitivamente su sistema democrático y mejorar su seguridad.



Esta forma de proceder sufre dos desventajas: una, que la integración se realiza sin el apoyo explícito de los ciudadanos; otra, que la economía sufre al convertirse en un instrumento político. Del déficit democrático son muy conscientes las élites que van pastoreando el pueblo hacia el objetivo indefinido y disimulado de la unión federal. Por eso han buscado reunir en un solo texto acromegálico lo fundamental de la UE y pasarlo a la aprobación de los 25 países. Por eso han aumentado en este nuevo Tratado la importancia del Parlamento Europeo, haciéndolo co-legislador con el Consejo de Ministros y exigiendo su aprobación de los gastos de la UE. Por eso han transformado la figura del Presidente del Consejo Europeo con la ampliación de su mandato a dos años y medio, renovable por una sola vez. Sin embargo, la cifra de abstenciones en el referéndum español y seguramente en otros futuros indica el poco arraigo de las instituciones europeas en las conciencias de los europeos: el Parlamento, el Consejo, la Comisión son entes que flotan en el limbo de Bruselas, sin verdadera relación con los ciudadanos.

La economía crea prosperidad cuando es abierta y competitiva. Más cuando se la utiliza para fomentar sentimientos de unidad política y solidaridad social, se tuerce y adultera y acaba funcionando mal. Eso es lo que pasa hoy a nivel nacional en el corazón del Continente, en Francia, Alemania, Italia. Es lo que puede pasar si las vías abiertas al intervencionismo social presentes en el proyecto de Constitución se ensanchan a instancias de los empleados de la Comisión en Bruselas, como ha venido ocurriendo con todos los poderes incipientes que se les han concedido en el pasado. No sólo tienen todas las competencias exclusivas, y las compartidas (que no pueden ejercer los Estados más que si la UE las olvida); también tendrá la Unión poderes para “coordinar las políticas económicas, las políticas de empleo y las políticas sociales”. Tiemblo. Con un texto como éste en la mano, que impone la consulta de las políticas de las empresas con los sindicatos, o el derecho a la limitación de la jornada de trabajo y a las vacaciones pagadas, por dar unas pocas muestras, me temo que no habrá límites al intervencionismo de Bruselas.

En este barco estamos montados y ciertamente no nos conviene bajarnos. El esfuerzo de todos los amigos de la libertad y la prosperidad debe pues concentrarse en apoyar las políticas de apertura del mercado hacia dentro y hacia fuera, como son la directiva de servicios a la que se opone Francia o la agenda de Lisboa que ha vuelto a lanzar Barreiro. Seguirá concurrido el limbo de la abstención.



El Área Económica Transatlántica

14 de marzo de 2005

La Fundación FAES acaba de publicar un papel, escrito por Francisco Cabrillo, Jaime García Legaz y un servidor, sobre las relaciones económicas entre Estados Unidos y la Unión Europea. La conclusión es que EEUU y la UE forman la mayor área económica del mundo, a gran distancia de las restantes. A pesar de todo lo que se habla de NAFTA, de la “irrupción de China”, del “Siglo del Pacífico”, los intercambios comerciales, inversores y financieros entre ambos lados del Atlántico norte dejan muy atrás en orden de magnitud los que se registran entre, y con, el resto del mundo. Más aún, la economía transatlántica sigue creciendo intensamente en la actualidad, pese a divergencias políticas y disputas comerciales. El papel recoge los datos publicados por los profesores Hamilton y Quinlan en su reciente libro *Partners in Prosperity* (Center for Transatlantic Relations, 2004).

- La economía transatlántica genera cerca de \$2,5 billones (no millardos) anuales en transacciones y las inversiones directas cruzadas dan trabajo a 12 millones de personas.
- El comercio bilateral propiamente dicho representa solamente el 20% de la economía transatlántica y de este comercio, sólo el 1-2% es objeto de disputas comerciales.
- En 2001, las transacciones comerciales intra-empresariales de las compañías con domicilio en cada uno de los lados del Atlántico se elevaron a \$2,8 billones, cuatro veces más que los \$548 millones de comercio bilateral.
- La mayor parte de las inversiones directas de EEUU en el exterior se realiza en la UE. El Reino Unido es el principal receptor de inversión directa del mundo procedente de EEUU. En 2003, la inversión directa de los EEUU en Irlanda fue más de dos veces y media la efectuada en China.
- El volumen de capital estadounidense invertido en el Reino Unido es superior en un 50% al total de capital estadounidense invertido en toda Asia.
- Cerca del 70% del capital extranjero invertido en EEUU procede de la UE.
- El 60% del gasto en I D que efectúan las empresas estadounidenses en el exterior se lleva a cabo en la UE.

A pesar del conflicto de Irak, en 2003 las empresas americanas inyectaron \$87.000 millones en inversiones directas en la UE, un 65% de la inversión directa extranjera de los EEUU de ese año y un 30% más que en 2002. Al mismo tiempo, 2003 fue un año récord de actividad para las filiales de empresas europeas en EEUU: las empresas europeas invirtieron ese año \$36.900 millones en territorio estadounidense, un 40% más que en 2002. Europeos y americanos somos en efecto “partners in prosperity”, como dicen Hamilton y Quinlan. ¿Dejaremos alguna vez de pelearnos?



Privatizar la TV pública en España

24 de marzo de 2005

Un “Comité de sabios” presidido por Emilio Lledó ha cocinado un Informe sobre el futuro de RTVE, con un voto particular y crítico de Fernando Gómez Urbaneja, el presidente de la Asociación de periodistas. La postura de Urbaneja es la más sensata de todas. Denuncia que la propuesta del resto de los sabios es continuista, pues no corregiría la alegría en el gasto, el mal uso de los recursos humanos, la desorganización burocrática, la falta de espíritu comercial de nuestra televisión pública. Urbaneja tiene razón. Si el Estado asume la deuda de 7.000 millones de euros acumulados por RTVE y además subvenciona la mitad del gasto de las cadenas públicas con 600 millones de euros anuales (la parte que se considera “servicio público”), faltaría incentivo para reformar. Además, una TV que tira con pólvora del rey en uno de los dos cañones, seguirá planteando una competencia injusta a las TV privadas, por mucho que se le obligue a reducir la publicidad que contrata.

No parece habérseles ocurrido a los miembros del Comité que la mejor televisión pública es la que no existe. Es un síntoma de la decadencia de la democracia sin reglas bajo la que vivimos el que se considere normal que haya una televisión gubernamental, sea nacional o de las Autonomías. ¿Por qué todo el mundo considera posible confiar en la competencia mercantil para conseguir una oferta variada, contrastada y libre de publicaciones escritas y parezca normal que las autoridades controlen uno o varios canales de TV? Para disimular sus apetencias, los lobos gubernamentales se visten con pieles de cordero y hablan con voz profesoral de la necesidad de un “servicio público” de TV. La verdad es otra: los políticos no quieren soltar un poderoso instrumento de convicción subliminal que les permite mejorar su imagen e influir en el voto.

Los mejor intencionados sufren “el síndrome BBC”, reconocible por dos síntomas: la esperanza de que en España sea repetible un servicio no comercial de TV a la británica; y la creencia de que la BBC es neutra. Todo servicio público televisivo se caracteriza por el paternalismo y la falsa objetividad: moraliza aburriendo y cae en lo “políticamente correcto”, como hoy se dice. Entre las dos guerras mundiales, Churchill tuvo que comprar tiempo en Radio Montecarlo para avisar de los planes agresivos de Hitler y pedir incansablemente el rearme, porque la BBC apelaba por turno al partido conservador y al laborista, ambos contrarios al rearme del Reino Unido. El mes pasado la BBC, siempre al servicio del “establishment”, ha admitido un prejuicio subliminal contra los críticos del proyecto de Constitución europea,

Ya sabemos que la TV española en abierto es de ínfima calidad, pero los que se sientan disgustados por sus tristes programas deben aplicar el sano correctivo de marcharse a la competencia, aprovechando la oferta de los innumerables programas de todo el mundo puestos a nuestra disposición gracias al satélite, el cable y la banda ancha.





Bienes y servicios públicos

5 de abril de 2005

Los socialistas de todos los partidos han causado una inflación de derechos sin deberes y de servicios públicos sin suministro. Son bienes públicos, según el título uno de la Constitución Española, la educación, la protección de la salud, el acceso a la cultura, el disfrute del medio ambiente, el patrimonio artístico y cultural, una vivienda digna y adecuada. El título octavo reparte las competencias sobre el control de los ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos entre el Estado y las Autonomías. Según leyes recientes promulgadas de 1980 a 1988, son servicios públicos cuya titularidad corresponde al Estado la radiodifusión y la televisión, el suministro de combustibles gaseosos por canalización, los transportes públicos regulares permanentes de viajeros de uso general, las telecomunicaciones. En caso de que alguna compañía privada quiera suministrarlos, lo podrá hacer sólo por graciosa concesión administrativa. La lista no tiene límite, pues el artículo 128 de la Constitución dice que “mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio”.

¡Claro que sí!, dirán muchos lectores. No se puede confiar al caótico mercado la protección de esos bienes públicos y el suministro de esos servicios esenciales. Sólo el Estado puede garantizarlos. Pues para cambiarles las ideas, quiero introducir dos conceptos en el discurso: la noción de bienes y servicios colectivos; y la diferencia entre producir bienes colectivos y redistribuir riqueza.

Digan “bienes y servicios colectivos” en vez de “públicos”. Todo cambia de golpe. Colectivo es aquello que se consigue mejor cuando hay cooperación de muchos, en vez de meros esfuerzos individuales. La cooperación puede ser competitiva, empresarial, política. La competencia económica es una forma de cooperación social, una cooperación no planeada que emerge de la persecución del interés individual, cuando se trata de bienes y servicios divisibles. La organización empresarial es una forma de actuación colectiva: una empresa de fabricación de automóviles es un esfuerzo colectivo para el que los accionistas, gerentes y empleados firman contratos de cooperación para lanzar los productos al mercado.

Por fin, hay ciertos bienes y servicios, como son la defensa nacional, la justicia, los museos nacionales, la investigación científica fundamental, que es posible no puedan alcanzarse óptimamente por empresas o asociaciones y que los ciudadanos de un país acuerdan financiar coactivamente con impuestos. Pero como la financiación fiscal se presta a abusos por parte de quienes monopolizan el poder del Estado, siempre hay que preguntarse en el caso de los bienes colectivos, mal llamados “públicos”, si no conviene para su mejor producción privatizarlos.



El peligro aparece cuando las decisiones sobre la producción colectiva de bienes y servicios se mezclan con la búsqueda de la redistribución de la renta. Por ejemplo, no hay duda de que la educación acaba siendo de mejor calidad cuando es privada. En vez de ser estatal, suminístrese a quienes lo necesiten un bono escolar; así se redistribuye sin limitar la elección individual y la iniciativa empresarial.



Un “No” francés

26 de abril de 2005

Aumentan las posibilidades de que el pueblo francés rechace por mayoría la llamada Constitución Europea en el referéndum del 29 de mayo. Las opiniones sobre las consecuencias de tal rechazo son para todos los gustos y todas ellas pesimistas: van desde el augurio de un total y catastrófico hundimiento del proyecto de unificación de nuestro Continente, hasta la seguridad de que la compleja y oscura maquinaria de la UE seguirá funcionando como siempre, pasando por la previsión de la apertura de un nuevo y complicado período constitucional. Una sobria evaluación de las repercusiones del “no” francés quizá nos haga ver la situación con más optimismo.

Francia es con Alemania el motor de la unificación europea. Si el tratado constitucional sobre el que van a votar los franceses se interpreta como la coronación de los esfuerzos realizados desde 1957 para crear la UE, el que uno de los dos pilares de la Unión lo rechace puede parecer en efecto un golpe poco menos que mortal para el proyecto europeo. Los holandeses han convocado su referéndum para el 1 de junio: son muy europeístas, pero el asesinato del cineasta Van Gogh a manos de fundamentalistas islámicos ha despertado un sentimiento de rechazo contra la apertura de las sociedades europeas a incontables refugiados. Si Francia vota mayoritariamente “no”, más probable que Holanda lo haga también, actitud negativa que puede extenderse a Dinamarca, Polonia y Chequia. Con eso, el referéndum británico de 2006 estaría perdido. En suma, un “no” francés echaría a pique el texto constitucional cocinado en la Convención de Versalles.

Cabe preguntarse el por qué de la creciente intención de voto negativo de los franceses. Un elemento fundamental es el disgusto de una mayoría con su patético presidente Chirac, al que más de dos tercios de opinantes consideran poco de fiar. Se le ve como cabeza de una “clase política” alejada de los problemas diarios de los ciudadanos, como la delincuencia atribuible a los inmigrantes, la calidad de la enseñanza, el desempleo, el poco dinamismo de la economía. Luego está la creencia de que la nueva Constitución abriría el camino a la integración de Turquía, de que está demasiado cerca del modelo económico “anglo-sajón”, y la evidencia de que perpetúa poderes de veto en política exterior y de armonización fiscal. En todo caso, muchos ciudadanos de los diversos Estados usan los referendos europeos para expresar su malhumor frente a sus Gobiernos. Esto no es sino una manifestación de la falta de eco popular del proyecto europeo, lo que ha llevado a los partidarios de la nueva Constitución a la actitud paradójica de poner en duda la conveniencia de preguntar directamente a los votantes lo que piensan sobre Europa. Las elites europeas lamentan de boquilla el “déficit democrático” en la construcción europea, mas al propio tiempo quieren continuarla por caminos indirectos o por imposiciones impopulares.



Siguiendo con su inveterada costumbre de explicar las cosas a medias, los euro-entusiastas han presentado el proyecto de Constitución como mayormente una ordenación y simplificación de los Tratados vigentes, necesaria, se dice, porque la ampliación a 25 o 30 miembros hace que la UE sea ingobernable. Su disgusto ante un rechazo indica que hay mucho más en el texto. Hay una carta de derechos que consagra peticiones sindicales sobre horas de trabajo, vacaciones, participación en los consejos de administración de sociedades, que no son exigibles bajo las disposiciones actuales. Se abre camino a una política exterior unificada e independiente de los EEUU. Se extiende el campo de las decisiones por mayoría, lo que los eurócratas desean para evitar la competencia de países con mayor libertad laboral, impuestos más bajos, servicios más ágiles.

El rechazo de este texto forzaría el inicio de otro período constitucional, para la revisión de la carta que tan pocos apoyos parece concitar. Un nuevo intento de escribir una Constitución para Europa podría resultar aún más disgregador que el de Versalles. Sería mejor contentarse con imponer de hecho alguna de las reformas aunque fueran rechazadas: por ejemplo, Javier Solana podría acudir a las reuniones de la Comisión, sin voto pero con el apoyo de Benita Ferrero-Waldner, la comisaria de Asuntos Exteriores, y así constituirse en la voz mundial de la UE.

Por cuanto se refiere al resto, la UE continuaría como en estos últimos tiempos, funcionando a trancas y barrancas cual acostumbra. No parece que la presencia de 25 miembros la haya paralizado. Nada cambiaría en materia económica: el Pacto de Estabilidad que controla los déficit públicos ya está aguado; la directiva de liberación de servicios ya ha caído bajo los golpes de Francia y Alemania, algo que indica cómo funcionaría la UE con una Carta escrita por la vieja Europa. En resumen, el intento de presentar el rechazo del proyecto de Constitución como el fin de la UE es mera maniobra táctica, como lo es la negativa a diseñar un “plan B” para ese caso.

El lado positivo de un “no” francés sería una Europa más respetuosa de la voluntad popular en cada Estado miembro, más variedad en materia de modelos sociales y económicos, mejor aliada de EEUU.



España: Federalismo fiscal

13 de mayo de 2005

El Govern de Catalunya ha presentado al Gobierno de España el 27 de abril pasado un modelo de financiación semejante al del País Vasco y Navarra: una agencia tributaria propia, que cobraría todos los impuestos sobre las personas domiciliadas y las operaciones originadas en Cataluña, con graciosa cesión del 50% de lo así recaudado a la Hacienda del Estado. Esto plantea una cuestión de mucho calado: la de si la propuesta catalana es para todas las Autonomías de régimen común o si es para ellos solos; dicho de otra manera, si se trata de crear una Hacienda federal o más bien de engrosar el grupo de los ricos privilegiados.

Los independentistas catalanes de izquierdas y de derechas no quieren oír ni hablar de federalismo fiscal equilibrado. El presidente de Ezquerra, Carod Rovira, ha declarado que el tripartito no piensa en hacer un modelo común a todos los españoles; y el líder de Convergencia, Artur Mas, ha recordado a Zapatero que prometió aceptar sin condiciones el modelo financiero que aprobara el Parlament. Lo malo es que también el socialista Maragall ha defendido siempre el “federalismo asimétrico”

Un auténtico sistema federal al estilo americano o alemán consta de dos niveles fiscales: el federal y el de los estados o Länder. La Hacienda federal cobra impuestos en toda la nación aplicando criterios generales y gasta esos fondos según la legislación aprobada en Washington o Berlín. Los estados y los Länder tienen sus propios recargos o impuestos sobre la renta, sobre las ventas, o sobre lo que decidan; y su gasto se financia con esos ingresos, aumentados ocasionalmente con transferencias federales.

La reforma que debería proponer el Gobierno socialista, o la oposición si Zapatero no se atreve, es muy otra que la catalana. El Estado español mantendría las figuras de los impuestos nacionales ahora existentes: IRPF, IVA, Sociedades, Plusvalías, cotizaciones sociales, pero bajando los tipos drásticamente, todos al 20% como ha propuesto Miguel Sebastián, el director de la oficina económica del presidente; y el Estado gastaría según ordenaran las Cortes, primando las localidades o los grupos que se considerara equitativo. Si las Autonomías quisieran gastar más en salud, educación, obras públicas o defensa de la lengua vernácula, en sus manos estaría el establecer recargos autonómicos sobre los impuestos nacionales o crear nuevas figuras de impuesto. (No quieren, porque pierden votos).

Lamento que Miguel Sebastián no haya conseguido su propuesta de que todos los impuestos nacionales fueran parejos y sin bonificaciones ni beneficios. El cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales se simplificaría y los asesores fiscales se quedarían sin trabajo. España (o las Autonomías más espartanas) se convertiría en una nueva Irlanda. Y los nacionalistas se comerían su identidad con queso. Por desgracia el Gobierno no está para experimentos:



Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda, tiene que ser muy prudente, para que las tonterías del presidente y sus otros ministros no hagan zozobrar la barca.



Yo voté no

27 de junio de 2005

Me encuentro en curiosa compañía como votante que rechazó el proyecto de Constitución Europea en el referéndum español: ahora me acompañan, en Francia, los enemigos del modelo económico “anglosajón” y, en los Países Bajos, los contrarios a la entrada de Turquía. Sin embargo, en un punto esencial me encuentro de acuerdo con esos votantes retrógrados: me disgustan los modos elitistas de los seguidores de Giscard d’Estaing.

¿Recuerdan ustedes que los ilustrados defensores de tan sucinto documento decían que la Constitución tendría que ser ratificada por la unanimidad de sus miembros? ¿Recuerdan la amenaza con tintes catastrofistas de que no había un “Plan B” para sustituir el documento si no pasaba por el cedazo de los Veinticinco? Nada de esto era cierto: los federalistas habían preparado una salida disimulada, por si el pueblo no les obedecía. Se trata de la Declaración 30, por la cual el Consejo Europeo de Presidentes y Jefes de Gobierno podría tomar medidas para la puesta en marcha siquiera parcial del texto, en el caso de que cuatro quintas partes de los miembros lo hubieran aprobado. Vayan, vayan al librito que el Gobierno español les repartió antes del referéndum de febrero: la dichosa Declaración 30 no está, porque nos la escamotearon a los votantes populares. He aquí otro rasgo del talante democrático de nuestros dueños y señores de Bruselas, que ahora querrán repetir todo referéndum negativo hasta el arrepentimiento de los recalcitrantes.

He sido y soy europeísta porque busco separar mi legítimo patriotismo del nacionalismo tribal. También he apoyado el proyecto europeo porque lo veía como un camino (algo sinuoso) hacia la libertad económica y la apertura de los mercados nacionales al mundo. Ahora veo que no es posible llevar a toda Europa como un rebaño hacia una mundialización que muchos rechazan. Los Gobiernos nacionales, para no perder votos, han jugado con Bruselas al juego del policía bueno y el policía malo. Han echado la culpa de las duras medidas de reestructuración a la Comisión y del estricto equilibrio presupuestario a Maastricht y ahora se extrañan de que los votantes se vuelvan contra Europa.

Al final, tendré que agradecer a los retrógrados del No de Francia y de Holanda que hayan hundido la Constitución socializante y uniformizadora que nos proponían. Los redactores del proyecto de Constitución Europea buscaban aumentar el campo de las decisiones mayoritarias, crear nuevas autoridades comunitarias con poderes más amplios, extender una única moneda y un único sistema fiscal a todos los Estados miembro; en suma, ansiaban imponer un mismo modelo de socialismo de mercado a todos los miembros de la UE. Ante tanto afán centralizador, debemos alzar de nuevo el estandarte de la libre competencia entre países: los resultados evidenciarán cuál es el mejor modelo económico.



Condonación de la deuda

8 de julio de 2005

Es muy generosa la actitud del Grupo de ocho naciones ricas (G-8) al condonar la deuda contraída por catorce naciones africanas, pero profundamente equivocada. Los gobiernos de África deberían seguir obligados a devolver el dinero que deben y han malbaratado, aunque sea haciendo que los dictadores y sus familias los saquen de los paraísos fiscales donde los han escondido. La suma de lo que piensan condonar debería ir directamente a proyectos y empresas privadas, y a programas de alfabetización y salud dirigidos a los individuos necesitados. Toda nueva ayuda a los gobiernos debería someterse a estrictas condiciones de transparencia y buena gestión. En todo caso, los G-8 han decidido no condonar los 25 mil millones de euros de deuda contratada, que aún debe Nigeria, a cuenta de futuros ingresos petroleros.

Sí, ya sé que Bob Geldorf ha dicho que al infierno con la denuncia de la corrupción de los políticos africanos, como pretexto para retener la ayuda. Pero el ejemplo de lo descubierto por el Comité sobre Delitos Financieros del Parlamento de Nigeria indica que es más que un pretexto. Durante la época de dictadura militar de 1960 a 1997 “desapareció” el equivalente de 330 mil millones de euros de los fondos recibidos. Nigeria goza de amplios recursos naturales, en especial de abundante petróleo. Es el Estado más populoso de Africa, con 130 millones de habitantes. La mayoría de esos pobladores, relata David Blair del Sunday Telegraph de Londres, vive en abyecta pobreza, un tercio es analfabeto, el cuarenta por ciento carece de suministro de agua potable. Con modos diferentes de gobernarse, la situación de esos pobres nigerianos sería muy distinta.

La ayuda recibida por Nigeria entre esos mismos años de 1960 y 1997 casi coincide con los 330 mil millones de euros. Para dar una idea aproximada del montante, sin deflactar equivale a seis planes Marshall. Según el periodista David Blair, el Reino Unido tendría que mantener la ayuda de mil millones de euros que ha concedido a toda Africa en 2004 durante tres siglos para cubrir la suma sustraída. El último dictador militar de Nigeria, el general Abacha, que recientemente murió en el exilio mientras se divertía con dos prostitutas y un abundante suministro de viagra, al parecer sustrajo entre 1,5 y 4,5 mil millones de euros durante sus cinco años al mando. Su esposa principal fue luego detenida cuando viajaba a Arabia Saudita con un baúl de varios cientos de kilos de billetes. El presidente de la citada Comisión contra la corrupción, señor Obasanjo, se ha comprometido a una difícil misión al decidirse a ir a la reunión del G-8 en Gleneagles, Escocia para pedir que se perdone a Nigeria esa deuda nacional de 25 mil millones de euros: ¿quién garantiza que no volverán sus gobiernos a las andadas?

Los críticos de la ayuda pública directa a los Estados africanos solemos señalar el terrible efecto de las guerras civiles endémicas en toda el África central. Es un mal que quizá pueda erradicarse o controlarse al menos con intervenciones armadas de las Naciones Unidas. Pero igualmente graves y difíciles de resolver me parecen las cuestiones planteadas por el mal gobierno de Nigeria y de otras naciones africanas.

Por un lado se encuentran los efectos de las equivocaciones de algunos gobernantes locales, como la conculcación de los derechos de propiedad por Mugabe en Zimbabwe, o el desenfoque de la lucha contra el sida en Sudáfrica por culpa del presidente Mbeki. No es fácil saber qué pueden hacer las naciones más civilizadas para evitar tales desmanes, pues las sanciones económicas son a menudo contraproducentes y esos nuevos Estados tienen la sensibilidad soberana muy a flor de piel. Por otro lado están los desfalcos y saqueos



cometidos con la complicidad de compañías y aún Estados occidentales, terreno en el que sería necesaria una acción más decidida, tanto de las autoridades estatales y comunitarias, como de los consejos de administración de las sociedades anónimas.

Son varios los países europeos que han tomado medidas para levantar el secreto bancario de cuentas cuyo origen se encuentra en la corrupción: Luxemburgo y Suiza dan información sobre los procesados por los tribunales de otros países y persiguen penalmente a los sospechosos de delitos financieros. Los ministros de finanzas de la Unión Europea han acordado una directiva que impondrá nuevas obligaciones y responsabilidades a bancos, intermediarios financieros, casinos y otras instituciones en materia de corrupción. La convención de la ONU contra la corrupción está siendo ratificada por un número creciente de miembros. Sin embargo, lo indispensable es que los Estados democráticos castiguen penalmente a los directivos y consejeros de las compañías privadas que sobornen a políticos del Tercer Mundo para conseguir contratos.

He aquí pues otro punto en el que hay que rechazar y combatir la llamada “Excusa de Nüremberg”, la presentada por los prebostes y oficiales nazis de que los crímenes de que les acusaban los habían realizado en el curso de sus actuaciones profesionales, para mayor bien de las organizaciones en las que trabajaban.



La moral del mercado

27 de septiembre de 2005

Escribo para celebrar la vida y lamentar la muerte de Rafael Termes, quien, como ese otro gran maestro español de la libertad, Lucas Beltrán, se declaraba “cristiano penitente y liberal impenitente”. Recordaré siempre con orgullo que, en compañía de otros buenos economistas, combatimos juntos en defensa de la libre economía de mercado, que él llamaba sin rebozo “capitalismo”. Su original pensamiento, que asociaba religión con libertad, merece un comentario doctrinal, en estos desgraciados tiempos en que tantos aúnan religión con fanatismo.

Consideraba Termes que un católico podía defender el capitalismo e incluso debía hacerlo si era consecuente con la concepción del individuo como ser libre y responsable de su propia vida. Pocos disputan la eficacia del libre mercado en la producción de bienes y servicios. Pero son muchos los que en la Iglesia y fuera de ella sostienen que el capitalismo es radicalmente inmoral y contrario a las enseñanzas de Cristo. Termes tuvo el mérito de hacernos ver que el libre mercado contribuye a elevar la calidad ética de nuestro tiempo de tres maneras: se basa en la moral de servicio, fomenta la virtud personal y es el modo más eficaz de combatir la pobreza del mundo.

El capitalismo, decía Termes, “tiene su moral”. Esa moral es el “resultado del propósito de descubrir y atender las necesidades de los demás, lo cual, en ausencia de violencia, fraude o dolor, y sin merma de la busca del legítimo interés propio, es una manifestación del espíritu de servicio inherente al capitalismo”. Además, dijo citando palabras de Juan XXIII, que en el libre mercado florecen importantes virtudes, como son “la diligencia, la laboriosidad, la prudencia en asumir los riesgos razonables, la fiabilidad y la lealtad en las relaciones interpersonales, la resolución del ánimo en la ejecución de decisiones difíciles y dolorosas, pero necesarias para el trabajo común de la empresa y para hacer frente a los eventuales reveses de la fortuna”.

Por fin, argumentó sobre sólidas bases empíricas que el capitalismo actual favorecía precisamente esa victoria sobre la pobreza que es el ideal de toda persona bien nacida y de buen corazón. Para ello tenían que darse tres condiciones en las regiones en desarrollo: a saber, la propiedad privada y el respeto de los contratos; el libre funcionamiento del mecanismo de los precios; y la libertad empresarial, tanto en el éxito como en el fracaso.

El resultado sería el que estamos viendo en todo el Sudeste asiático, en algún país de América Latina y en escasos lugares de África: la elevación del nivel de vida de cientos de millones de personas de entre las más humildes del Planeta. Pero esas condiciones, siendo necesarias, no eran para él suficientes. Para conseguir la redención de los pobres de forma definitiva, el libre mercado tenía que ir acompañado por el respeto de los derechos individuales a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, cual reza la feliz fórmula de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América del Norte, que él citaba tan a menudo.

Descanse Rafael Termes en paz, tras muchos años de labor bien hecha.



España, federalismo enfermo

11 de noviembre de 2005

Uno de los aspectos más desgraciados de este principio del siglo XXI en España es el renacimiento del nacionalismo, tanto local como español. El prólogo del Estatut parece escrito por algún filósofo alemán romántico del siglo XIX, peregrino del espíritu del pueblo, místico de la relación entre tierra, lengua e historia, lloroso por las heridas que causara el opresor extranjero. Examinen sus conciencias, señores nacionalistas y confiesen que no es del todo injusta esta descripción. Pues bien, igualmente podría aplicarla al nacionalismo franquista de mi juventud, que ahora, como un virus maligno está infectando a vascos, catalanes y gallegos. Apoyé nuestra Carta Magna y, por cierto, ayudé a redactar alguno de sus artículos económicos, porque creía y creo que recoge el espíritu del patriotismo constitucional que definió Habermas: un amor al propio país, por razón de que, recogiendo lo mejor de su tradición, está organizado liberal y democráticamente.

El documento remitido a las Cortes Generales es en realidad una pequeña Constitución. Por muchos retoques que consiga hacerle el frívolo del presidente del Gobierno (tontamente dijo que aceptaría todo lo que viniese del Parlament y ahora se desdice), creo que cambia fundamentalmente nuestro orden fundamental: en efecto, busca transformar el Estado de las Autonomías que nos dimos en 1978 en un estado federal asimétrico, como lo denominó ese otro frívolo de president de la Generalitat (bobamente se ocupa de promover a su hermano, mientras arde Roma). Si la mayoría del Parlament quiere reformar la Constitución Española, hágalo siguiendo el procedimiento del Título X. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas pueden enviar una propuesta de reforma a las Cortes y defenderla ante ellas. Si la reforma modifica los derechos y deberes fundamentales, tendrán que aprobarla los dos tercios de las Cortes, que luego serán disueltas inmediatamente. La razón de estas precauciones es evitar que una mayoría relativa, nacional y especialmente local, legisle opresivamente.

Una de las razones por las que el texto propuesto por el Parlament no nos alarma tanto como debería es que Cataluña se encuentra dentro de España y Europa: por eso no inquieta demasiado que el proyecto tienda a romper la unidad del mercado español, hable de un sistema de planificación de la economía catalana, pida el control catalán del comercio, los puertos y aeropuertos, o la catalanización del sistema de justicia y notariado, la Universidad y la enseñanza toda, y paro de contar. Un ordenamiento superior garantiza que haya remedio para los despropósitos. Ese es el papel de las directrices y reglamentos de la UE y de la Constitución española, con todos los defectos de esas normas.

Los parlamentarios catalanes, en su afán de blindar sus competencias, han creado un monstruo Frankenstein de Estatut. El nuevo texto se mete en todos los entresijos de la vida civil, dando poderes para quedarse con todo el dinero, ordenarlo todo, vigilarlo todo,- atarlo todo, atado y bien atado. ¡Federalismo, qué de pecados se cometen en tu nombre! El federalismo está muy bien mientras no sirva para blindar pequeñas claques de padrinos locales, obstaculizadores de toda reforma. Estamos viendo la dificultad con la que se enfrenta la ansiada reforma de la economía alemana, por el continuo choque entre el Bundestag y el Bundesrat. En Nigeria, en Pakistán, en Argentina, los jefecillos locales de estados o provincias, se atrincheran en el gasto excesivo y el clientelismo electoral. No basta con meter al Estatut en la horma constitucional, ni basta con que lo apruebe el 80% del Parlament para evitar que sea opresivo.



Una Constitución o un Estatut no se puede redactar a la manera de las Constituciones progresistas españolas del siglo XIX, con un “¡trágala perro!,- cual rezaba la brutal canción de los liberales de 1821. El proyecto, so capa de separar Iglesia y Estado, es claramente anticlerical. Además, una norma fundamental no puede imponer a los católicos de Catalunya el aborto o a la eutanasia como un derecho fundamental. Todo lo que toca al feminismo, los derechos laborales, el medio ambiente, la economía, la educación, la cultura, está teñido de ese falso progresismo que ha venido a sustituir la religión en las conciencias de los nacionalistas republicanos de hoy. La propia Constitución española no está libre de alguno de esos defectos, pero al menos fue el resultado de un acuerdo entre españoles de todas las creencias y convicciones, en vez de una imposición de una mayoría coyuntural sobre una minoría desasistida. ¡Pobre Cataluña, pobre España!



Las dos caras de Adam Smith

22 de noviembre de 2005

El gran libro de Smith, “La teoría de los sentimientos morales” (1759), comienza con las palabras siguientes: “Por muy egoísta que se suponga que es el hombre, es evidente que hay en su naturaleza algunos principios, que le hacen interesarse por la fortuna de los demás, y hacerle necesaria su felicidad, aunque nada derive de ella si no es el placer de verla”. Se equivocan pues quienes creen que para Smith, los hombres se mueven sólo por el propio interés, aunque ese sea un impulso muy poderoso: “este sentimiento, como todas las demás pasiones originales de la naturaleza humana, no se limita a los virtuosos y humanitarios, aunque quizá lo sientan con exquisita sensibilidad. El mayor rufián, el violador más endurecido de las leyes de la sociedad, no carece completamente de él.

Es bien sabido que Adam Smith, en “La riqueza de las naciones” (1776), presentó una imagen distinta del ser humano. La frase se ha hecho famosa: “no es de la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero de lo que esperamos nuestra cena, sino de sus miras al interés propio, y nunca les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas”. Al escribir su tratado sobre la economía, Adam Smith pareció olvidar lo dicho en su libro de 1759. Los comentaristas alemanes lo llamaron “das Adam Smith Problem”. Es este algo más que un problema de historia del pensamiento: parece señalar una división casi esquizofrénica en el ser humano.

El premio Nobel Vernon Smith escribió en 1998 un trabajo titulado “Las dos caras de Adam Smith”, en el que contrastó estas dos teorías de Adam Smith con experimentos realizados en laboratorios informáticos, con personas y dinero reales. En el “juego del dictador” uno de los jugadores recibe \$100 y puede decidir cómo los reparte con otro de los estudiantes; si este segundo rechaza lo que le dan, ambos quedan sin nada. Según la teoría “La riqueza de las naciones”, un reparto aceptable sería \$99 / \$1, pues el segundo estudiante no debería rechazarlo al considerar que \$1 es mejor que nada. Pero en los juegos de laboratorio, el receptor a menudo rechaza sumas mucho mayores, por considerarlas injustas. Además cuando el “dictador” ha conversado con el receptor, suele atribuirle una suma mayor que cuando el juego es anónimo. Por eso, Vernon Smith sostiene que Adam Smith había descubierto intuitivamente dos tipos de comportamiento coexistentes en los seres humanos: la reciprocidad positiva en los intercambios personales cara a cara y el amor de uno mismo en intercambios impersonales en el mercado económico. Cuando se trata de conocidos, entran en juego los sentimientos morales del primer libro del maestro escocés. En cambio, cuando el comercio es a distancia, los individuos miramos por nuestro propio interés. En las relaciones directas opera la reciprocidad no monetaria, disciplinada por sanciones sociales. En el mercado económico, la remuneración es monetaria y la represión de los incumplimientos opera por garantías comerciales o castigos legales. Así funcionan las sociedades libres.

La Francia reaccionaria

18 de abril de 2006

Abandonado por el presidente francés Jacques Chirac, el primer ministro Dominique de Villepin ha retirado, bajo la presión de la calle, su mínimo intento de liberalizar la ley laboral.



Villepin pretendía facilitar el despido de los menores de los jóvenes para dar nuevas oportunidades de trabajo al 22 por ciento que está parado. Con manifestaciones, huelgas y violencia, estudiantes y sindicalistas han conseguido cerrar el paso a la reforma. No nos contentemos con lamentar la victoria de la reacción. También hay que preguntarse qué errores se han cometido en el intento de ayudar a los desempleados jóvenes a encontrar un primer trabajo.

No era la primera vez que Villepin intentaba aligerar el blindaje de los contratos laborales, pero esta vez, incitado por los desórdenes sociales de otoño en los barrios marginales de toda Francia, decidió buscar el modo de fomentar la contratación de jóvenes permitiendo un Contrato de Primer Empleo (CPE) de dos años para menores de 26 años. Con la esperanza de que eso redujera los motivos de prevención ante candidatos sin experiencia, estableció condiciones para el patrono algo menos estrictas que para el contrato normal. Concretamente, la firma de un CPE habría trasladado al trabajador la carga de la prueba de lo injustificado del despido. El patrono habría tenido la obligación de dar preaviso de quince días o un mes y de pagar una indemnización del 8% del bruto cobrado, dependiendo de la duración del empleo. Si el contrato hubiera durado dos meses, el Estado se obligaba a pagar 490 euros al despido; y tras seis meses, a la concesión del subsidio de paro, como en un contrato indefinido. Con los brazos en alto y bandera blanca, Villepin promete ahora aumentar las ayudas para el empleo de los jóvenes marginados. Nadie cree que esto vaya a paliar el desempleo de uno de cada cinco jóvenes.

La idea de Villepin de incentivar la contratación de jóvenes haciendo que el coste de despedirlos en caso de insatisfacción o de necesidad del negocio no era en sí una mala idea. En especial, las pequeñas y medianas empresas son las que sufren un daño mayor cuando se equivocan en la selección de un nuevo empleado. Como ellas son las que más número de empleos crean, el primer ministro francés vio el cielo abierto.

La resistencia en las calles la crearon tres grandes grupos de interés. En primer lugar, los jóvenes no marginales, con estudios universitarios y esperanza de conseguir un contrato normal, de carácter indefinido después de seis meses, temían que los patronos aplicaran el CPE a todos los contratos de jóvenes de menos de 26 años. Luego, los jóvenes marginales temían que, caso de encontrar trabajo, los patronos los echaran enseguida si no estaban a la altura de sus nuevas obligaciones. Por fin, los sindicalistas temían que éste fuera el primer paso para reducir sus privilegios laborales, incluida la escandalosa semana de 35 horas. Este último temor atenazaba sobre todo a los funcionarios y empleados de empresas públicas, a los que ni se puede despedir ni se puede exigir mayor productividad.

Esas posturas interesadas no habrían tenido eco en la opinión pública, si no fuera porque en Francia en general no comprenden el funcionamiento de las leyes del mercado. No descubrimos el Mediterráneo al decir que toda reducción del coste de contratación de los trabajadores dará lugar a una mayor demanda de mano de obra. Entre lo que cobra el trabajador y lo que cuesta ese trabajador al patrono hay una cuña de gastos adicionales. Esa cuña es la suma de las contribuciones de la empresa a la Seguridad Social, que equivalen a un impuesto regresivo sobre la mano de obra, más las otras “conquistas del proletariado”, como son la limitación legal de la semana de trabajo o el abuso de la incapacidad laboral, la exageración de las indemnizaciones por despido, o la demasiada generosidad del subsidio de paro.

El público europeo cree que los costes excesivos no tienen consecuencias para el empleo y que el gasto del Estado cae del cielo. Los jóvenes que quizá viven en un piso subvencionado,



pero seguro que reciben educación y sanidad casi gratuita y esperan pronto un subsidio de paro, creen que se les debe todo, incluso un puesto de trabajo permanente, si es posible en un Ministerio, o en los ferrocarriles y la eléctrica del Estado. Cuando descubren que no todo el monte es orégano, se enfurecen, huelgan, manifiestan, queman y echan abajo el Gobierno. Los sindicatos franceses, entretanto, lobos cubiertos de pieles de oveja, animan a la protesta precisamente de aquellos a los que ellos condenan al paro para mantener sus privilegios.

Es un error de todas maneras concentrar las reformas en un pequeño sector de la población sin que quede clara la contrapartida de su sacrificio. La misma equivocación que Villepin cometió Schroeder cuando buscó reformar sólo las pensiones. Las reformas tienen que ser amplias, de tal manera que los que pierden alguno de sus privilegios, reales o imaginados, ganen en mayor oportunidad de trabajo, menor coste de la cesta de la compra, más oferta de bienes y servicios. Parece que Sarkozy ha prometido una reforma general del mercado de trabajo para reducir los agravios comparativos. Pero además debería liberar las horas y licencias de comercio, reducir el gasto público y los impuestos... ¿Ustedes creen? ¡Pobre Francia!



En España preocupa la inmigración

3 de octubre de 2006

Va a ser muy difícil impedir la entrada de más inmigrantes a España. De los cinco millones de extranjeros que ahora viven en España sobre una población de cuarenta y cuatro, un millón se compone de residentes en su segunda vivienda o jubilados, y cuatro de trabajadores foráneos. Soy tan impreciso en las cifras porque los hay legales, pero otros muchos ilegales, cuyo número sólo podemos adivinar porque se empadronan en los municipios y tienen cartilla del Servicio de Salud.

En la Comunidad de Madrid, las estadísticas indican que es inmigrante un 17% de la población residente y un 25% de la población activa. Esto parece enorme, pero la llegada en masa no ha hecho sino empezar: si en los últimos cinco años se cree que han llegado a España más de tres millones de trabajadores inmigrantes, seguramente vendrán otros tantos en los cinco siguientes. El atractivo de una economía en crecimiento, las obras públicas como las del tren de alta velocidad AV (ya no es AVE, pues le han quitado la 'E' de España, no se vayan a ofender los nacionalistas), la demanda de servicios domésticos y asistenciales, las necesidades de nuestros hospitales, suponen una incesante demanda de mano de obra. La oferta también responderá a esta llamada con entusiasmo: por mar, los subsaharianos (como se llama ahora a los negros de África); por aire los iberoamericanos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos; por tierra los nuevos europeos: polacos, rumanos, búlgaros y no olvidemos los marroquíes, que siguen viniendo.

Desde el punto de vista puramente económico, la inmigración contribuye a nuestra prosperidad. La Caixa acaba de publicar los resultados de un cálculo estadístico de cuánto han añadido anualmente los inmigrantes al crecimiento del PIB por persona de los países europeos, de 1995 a 2005. Así como en el Reino Unido el resultado es levemente negativo, en Irlanda la contribución de los trabajadores inmigrantes se calcula en un 4,5% anual; y en España en un 3,8% por término medio cada año de ese decenio. Lo más llamativo para nosotros es que, sin inmigrantes, nuestra economía habría decrecido en un 1,2% anual. Se trata de una interpolación basada en supuestos que algunos llamarán heroicos, pero esas cifras corresponden con lo que nos entra por los ojos: sin inmigrantes la economía española no sería tan boyante como la vemos.

La prevención contra esos nuevos entrantes tiene dos elementos: el cultural y el asistencial. Cuando voy a Barcelona en los últimos tiempos noto reacciones casi histéricas ante el peligro que corre la "identidad" catalana por las invasiones foráneas. El presidente Pujol mostraba una preferencia casi perversa por los inmigrantes polacos y marroquíes porque, pensaba él, tendrían necesidad de aprender catalán: en cambio a los latinos les bastaría su español nativo, lo que pondría en peligro la cultura catalana. Pensaría que los norteafricanos se pondrían a bailar la sardana delante de las mezquitas. La cultura catalana, por Dios, no corre ningún peligro. Incluso puede hacer daño tanta catalanidad, como nos hizo a los españoles el nacional-catolicismo. La cuestión no es cultural ni idiomática. La verdadera cuestión es si el Estado de Bienestar favorece o dificulta que en el ánimo de los extranjeros prenda la democracia y la ciudadanía.

El aviso dramático nos lo han dado los jóvenes musulmanes franceses de la tercera generación. Francia se preciaba de su empeño en asimilar a los inmigrantes para hacer de ellos franceses de cuerpo entero, cualquiera fuese el color de su piel. El fracaso no nace del generoso impulso de hacer de todos los residentes ciudadanos iguales de la República, sino



del efecto corruptor de un sistema social que combina una rígida reglamentación del mercado de trabajo con una generosa asistencia pública. El mejor integrador de las personas de otra cultura es un puesto de trabajo; nada hay tan desmoralizador como la sopa boba. Los argelinos de la “banlieue” han recibido educación gratuita, viven en casas subvencionadas, gozan de medicina subvencionada, reciben subsidios de paro, sólo quieren empleo protegido, aspiran a una pensión pública generosa. No es de extrañar que no se integren en la sociedad productiva.

El otro revulsivo es el que los nacionales se sienten desplazados de los servicios sociales, educativos, de salud por los recién llegados. En España crece el resentimiento de los padres que no encuentran sitio para sus hijos en los colegios, de los enfermos cuya espera se alarga porque familias enteras de inmigrantes copan la atención de médicos y hospitales, de los jubilados que temen que las contribuciones de los recién llegados sean insuficientes para mantener sus pensiones. Lo dijo Milton Friedman: el Estado de Bienestar no puede sobrevivir a la libre inmigración; habrá que reformarlo.



España: ¿Productividad o competitividad?

27 de diciembre de 2006

La noción de competitividad no sirve para interpretar la situación deficitaria de la balanza exterior española. El déficit es ciertamente abultado, pues en los tres primeros trimestres de 2006 ha alcanzado una cifra equivalente al 9% del PIB. Mas por sí solo, un déficit exterior poco dice sobre la buena o mala salud de una economía. Todas las economías, incluso las menos competitivas podrían siempre cubrir totalmente sus importaciones exportando bienes y servicios equivalentes, si estuvieran dispuestas a vivir más pobremente cuanto menos productivas fueran. Por suerte, incluso las economías más improductivas pueden endeudarse, sea para consumir, sea para invertir. Un déficit en la balanza exterior indica que los extranjeros están dispuestos a prestar fondos al país que lo incurre, a la espera de que se los devuelvan. Si el deudor es poco de fiar, porque está mal llevado, se le prestará a corto plazo. En cambio, si su Hacienda, sus empresas, sus familias son de confianza y su expectativa de crecimiento económico es halagüeña, los créditos serán más abundantes y más prolongados.

Para analizar una economía en su vertiente exterior es preciso tener claras las nociones básicas, como la de ventaja comparativa que explicó David Ricardo en 1817. Razonó ese ilustre clásico el famoso ejemplo de los intercambios de paño y vino entre Inglaterra y Portugal, que todos los economistas recordamos o deberíamos recordar: Inglaterra era menos eficiente que Portugal en ambos productos, pero era de todas formas capaz de exportar paño porque era incluso menos productiva en vino. La lección de ese razonamiento es clara: incluso un país menos productivo que otro en todas sus actividades sería capaz de exportar para cubrir sus importaciones. Por decirlo con un ejemplo tomado del libro de texto que muchos hemos estudiado en nuestra juventud: Samuelson está dispuesto a alquilar los servicios de su secretario, a pesar de que él escribe a máquina mejor porque, si se especializa en su materia de economista, obtiene ganancias adicionales que le permiten contratar incluso a dos o tres ayudantes más. Habrá labor para el secretario mientras en su labor de secretaría no sea tan poco productivo como en su labor de economista.

Si una economía atrasada no es igualmente poco competitiva en todos los sectores, lo normal es que pueda exportar a otra lo suficiente para cubrir sus importaciones. La falta de productividad no implica que no pueda exportar a países más productivos, sino que tendrá que contentarse con venderles bienes de menor valor añadido por persona. Se colocará así en un nivel de vida inferior al que podría conseguir si fuera más productiva, pero ello nada nos dice sobre si mostrará un déficit o un superávit en la balanza exterior.

Para entender por qué España muestra un déficit en su balanza exterior debemos fijarnos en una relación y un parámetro: el ahorro nacional comparado con la inversión; y el hecho de que nuestra moneda sea el euro. El déficit exterior de un país debe interpretarse, no en un momento, sino a lo largo del tiempo, como una apuesta que hace un país que quiere crecer. Es el resultado de la diferencia entre la cuantía de inversiones que realiza y el correspondiente ahorro para financiarlas. En estos momentos el ahorro nacional supone aproximadamente un 23% del PIB, lo que ya es mucho más que otros países occidentales. Pero además la inversión en formación bruta de capital alcanza cifras equivalentes al 34% del PIB, de lo cual sólo la mitad es en construcción.

España, pues, está invirtiendo muy activamente y no sólo en vivienda. Diré de paso que la inversión en vivienda y en construcción no es un gasto tan negativo como se dice. Los españoles buscan aumentar su bienestar mejorando las casas en las que viven y adquiriendo



un lugar de vacación. ¿Por qué no? También es positivo y más directamente productivo el gasto en ferrocarriles, aeropuertos y carreteras. La cuestión fundamental estriba en ir complementando la inversión en vivienda con inversiones que aumenten de forma continuada la productividad total de nuestros factores de producción. EE.UU. ha mantenido un amplio déficit en su balanza exterior mientras la economía ha prometido tasas de crecimiento notables, gracias a los avances tecnológicos. En esto de la economía del conocimiento los españoles deberíamos hacer más, pues nuestro sistema de educación es deficiente y la aplicación de nuevas tecnologías aún escasa.

Si se invierte más que se ahorra, habrá que buscar financiación en el exterior. Los capitalistas extranjeros atenderán esa demanda de fondos si consideran que recibirán suficiente remuneración y que se les devolverá el principal y los intereses. Esa continuada remuneración dependerá, como digo, de las inversiones productivas que garanticen que se va a mantener el notable ritmo de crecimiento de la economía española. Dada la liquidez que hay en el mundo, la principal preocupación es la seguridad. Aquí entra en juego nuestra pertenencia al área del euro. Los inversores extranjeros no temen ya que nuestra moneda sufra una repentina devaluación. Pero el euro no es todo: fíjense en lo mal que lo están pasando los italianos y los portugueses. El déficit exterior español es sostenible y se irá corrigiendo suavemente si conseguimos seguir creciendo en productividad.



La constitución europea: Resucitando

23 de febrero de 2007

Después de su rechazo en referéndum por los votantes de Francia y Países Bajos, el proyecto de Tratado para una Constitución Europea parecía haber muerto. Pero las elites que nos gobiernan no cesan en su cacofonía. Nada más formar su Gobierno de coalición, la cancillera alemana Angela Merkel declaró que era uno de los objetivos de su Gobierno de coalición el sacar la Constitución del punto muerto en el que se encontraba. Hace poco, el presidente Zapatero convocó en Madrid una reunión de representantes de los países que habían refrendado el proyecto de Tratado, para continuar por el camino de una integración cada vez más profunda de Estados y ciudadanos europeos. El presidente Barroso de la Comisión Europea se preocupa porque sobre la base de los tratados existentes, dice, la Comisión no puede funcionar, aunque en realidad es la “ponderosa” de siempre, por darle un nombre antiguo y televisivo. Los checos y los polacos ponen cara de “no” y los británicos callan pero no otorgan. Ahora los dos candidatos principales en Francia lanzan ideas contradictorias: la hermosa Ségolène habla de confeccionar un texto más “social” que sirva para resistir los efectos de la globalización; el napoleónico Sarkozy preferiría un “mini-tratado” que se pudiera presentar al Parlamento francés, evitando otro referéndum. Todo son movimientos espásticos en los miembros del monstruo ensamblado bajo la inspiración del doctor Giscard d’Estaing.

Tanto desacuerdo no casa bien con el deseo de una nación tras otra de formar parte de la Unión Europea, especialmente las que pertenecieron al antiguo imperio soviético y se encuentran demasiado cerca de Rusia o de los fundamentalistas islámicos para dormir con tranquilidad. Algo bueno habrá en esta Unión, para que tenga tanto atractivo. Quizá sería aconsejable seguir el camino trazado en el momento de la fundación del Mercado Común en el Tratado de Roma y profundizar en las cuatro libertades de movimiento de mercancías, personas, capitales y servicios, aún tan lejos de realizarse del todo. El buscar más complicaciones puede acabar incluso en la marcha o expulsión de algún miembro importante. ¿Quedaríamos los europeos más demócratas y liberales muy tranquilos si el Reino Unido acabase marchándose? ¿Europa sin la “madre de los Parlamentos”? ¿El mercado único sin los inventores del libre comercio?

Las ventajas de la UE nacen sobre todo de la colaboración espontánea entre individuos, gracias al creciente grado de libertad de comercio en el interior de la zona. Tal libertad fomenta la competencia, que es una forma de cooperación social conducente a una mayor riqueza. En efecto, el aumento de la extensión del mercado a disposición de consumidores y productores hace crecer el bienestar personal y la eficiencia productiva. También es positiva la colaboración en otros campos, especialmente los de justicia y seguridad. Aunque la defensa militar no está unificada, otros tratados como la OTAN ofrecen a los miembros una tranquilidad especialmente apreciada en el Este de la Unión.

Sin embargo, son muchos los euro-entusiastas insatisfechos con la organización europea, tan desordenada, indefinida y burocratizada. Por eso se propuso una “Constitución” que aclara las líneas de responsabilidad y centralice las decisiones, para que la UE se fuera pareciendo cada vez más a unos Estados Unidos de Europa. El intento consistió en imponer una nueva organización uniforme para todos los Estados miembro, sin ver que las diferencias y resistencias locales hacían poco probable una aprobación unánime. Es de elogiar el que se buscara la unanimidad para lo que era una reforma constitucional, aunque fuera para reducir



drásticamente el campo de la unanimidad en el futuro. Visto el fracaso del referéndum, la idea más extendida ahora entre los euro-entusiastas es establecer un círculo más íntimo de naciones que están dispuestas a fundirse en más estrechos abrazos y un círculo exterior más desintegrado. Parece difícil que lo lleven a cabo, entre otras cosas porque no estarían dispuestas las naciones del círculo íntimo a que las otras compitieran en impuestos, leyes laborales menos rígidas y sistemas educativos propios.

El problema estriba en que la UE sufre dos tipos de tensiones: una, la mayor o menor inclinación al mercado libre; otra, el mayor o menor disgusto ante la centralización administrativa. Tales tensiones no afectan a las naciones en bloque, sino variadamente según las actividades de que se trata. Los Estados que no forman parte de los acuerdos de Schengen no coinciden con los que prefieren más libertad laboral; los que tienen impuestos más bajos a lo mejor están empeñados en defender su neutralidad. En vista de ello, creo que convendría que los europeos exploráramos la vía de la variedad institucional, en el marco de una mayor competencia económica y fiscal.

Hay tanto que hacer para completar el diseño original del Tratado de Roma que parece innecesario imponer una Constitución centralizadora a todos los Estados, sean cualesquiera las preferencias de sus ciudadanos. Si un Estado quiere aceptar los servicios originados en otro sobre la base de la ley del país de origen, ¿por qué esperar a que lo hagan todos a la vez? Sería tan absurdo como prohibir que una compañía española como Ferrovial gestionara los aeropuertos de Londres mientras los extranjeros no pudieran comprar AENA, la gestora pública de los aeropuertos españoles.



Un área de prosperidad en el Atlántico Norte

6 de marzo de 2007

Angela Merkel, al formar su Gobierno de coalición en la República Federal de Alemania, declaró como uno de sus objetivos primordiales la creación de un área de libre comercio entre EE.UU. y la Unión Europea. Luego ha vuelto a insistir en lo mismo desde la Presidencia del Consejo de Europa: tras una época de desencuentros, dijo, era urgente mejorar las relaciones entre estadounidenses y europeos y la manera más natural de fomentarlas era echar abajo las barreras comerciales y económicas que aún separan las dos orillas del Atlántico.

Las buenas ideas a veces cobran vida propia y acaban concitando apoyos inesperados. La propuesta de crear una zona de libre-cambio en el Atlántico Norte es anterior a la del Mercado Común europeo, según me ha recordado Francisco Cabrillo. Uno de los primeros economistas en defender un comercio atlántico más libre fue Gottfried Haberler, quien en 1936, al tratar de una posible unión aduanera europea, señaló que no entendía por qué la reducción de aranceles debía limitarse sólo a Europa. También apuntó la idea de que los países del Occidente de Europa se encontraban mucho más cerca, espiritual y económicamente, de los países del otro lado del Atlántico que de los Estados Europeos del Este. Somos muchos los que hoy nos atreveríamos a decir estamos al menos tan cerca de Canadá, EE.UU. y México como de los nuevos miembros de la UE —y no digamos de Turquía. En 1950, el que luego fue mi querido maestro en la London School of Economics, Lionel Robbins, defendió la idea de una “Comunidad Atlántica” como solución superior a la de una mera unión europea que, en su opinión, desembocaría necesariamente en un regionalismo plagado de restricciones al libre comercio. En Francia, el premio Nobel Maurice Allais, luego partidario acérrimo de la unión monetaria europea, redactó en 1951 un “Manifiesto por una Unión Atlántica”, en el que defendió que el mercado común europeo debería incluir no sólo a Inglaterra, sino también a Norteamérica. Una idea similar fue apuntada por Pierre Uri, uno de los redactores del tratado de Roma, en su libro “Dialogue des Continents” de 1960. Es pues un proyecto que ha ido surgiendo y escondiéndose, como nuestro río Guadiana.

Yo me entusiasmé con la idea de una zona de prosperidad en el Atlántico Norte en una reunión de la Comisión Trilateral, al oír a los economistas americanos Hamilton y Quinlan explicar la profundidad de las relaciones económicas entre EE.UU. y la UE. Si ya era mucho lo que comerciábamos e intercambiábamos, me dije, cuál no sería la prosperidad que crearía una libertad de comercio total. Corría el año 2002 y a mi vuelta a España propuse a la Fundación FAES la redacción de un estudio sobre la cuestión, que, con el andar del tiempo, se convirtió en un libro colectivo. José María Aznar comenzó a difundirlo en EE.UU. e incluso llegó a presentárselo a George Bush. Pero el clima político cambió bruscamente y temí que mi idea se la hubiera tragado la tierra, como al río Guadiana en Argamansilla de Alba. Pero ahora vuelve a aflorar aquí y allá, a impulsos de una poderosa corriente subterránea.

No se hace uno a la idea de lo ricas que son las relaciones económicas entre EE.UU. y la UE ni de lo rápidamente que crecen a pesar de disputas políticas y comerciales. En su Informe más reciente, Hamilton y Quinlan subrayan que la llamada “deriva política atlántica” no ha afectado, muy al contrario, el comercio y aún menos el tráfico de capitales de una a otra orilla. Así, las inversiones de EE.UU. en Irlanda en los últimos diez años han resultado superiores a las dirigidas a China y Hong Kong en ese mismo período. Y si nos ceñimos a 2005, la



inversión de EE.UU. en Bélgica fue cuatro veces la estadounidense en China; y la realizada en Alemania, cuatro y media veces. Por su parte, Europa en ese mismo año fue responsable de aproximadamente dos tercios de los flujos de inversión extranjeros hacia EE.UU. Hay otra cifra muy reveladora: el total de los empleados directos de las subsidiarias y sucursales de compañías estadounidenses en Europa y de europeas en EE.UU. alcanza nada menos que la cifra de 14 millones de trabajadores.

Todo eso y más que no cito ocurre a pesar de las múltiples barreras que aún se oponen al libre intercambio de mercancías, capitales y servicios en nuestra zona. Deberíamos hacer un esfuerzo decisivo para abrimos mutuamente las fronteras: habrían de desaparecer cuotas y aranceles agrícolas y levantarse las barreras no arancelarias sobre todo tipo de productos; habría que llegar al reconocimiento mutuo de servicios y profesiones, al abandono de toda medida de anti-dumping o de ayuda estatal, a la mutua aceptación de regulaciones sobre alimentos transgénicos y contaminación; incluso la migración podría liberarse una vez que los países ex-comunistas estuvieran plenamente integrados en la UE. Esas reformas son sólo difíciles inicialmente, pues pronto mostrarían su efecto positivo sobre el nivel de vida y capacidad productiva de toda la región. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha calculado que los beneficios obtenibles con tal liberación equivaldrían por término medio a los ingresos de un año de la vida laboral de nuestros ciudadanos.

Una condición sin embargo es necesaria para evitar la acusación de estar intentando crear un pequeño club de ricos con exclusión de la mayoría de los habitantes de la Tierra. La zona de prosperidad del Atlántico Norte debería estar abierta a los países que se mostraran dispuestos a franquear sus fronteras de la misma manera y mismas garantías que lo harían EE.UU. y la UE entre sí. Así se extendería insensiblemente la libertad de comercio a todo el globo —sin tener que poner de acuerdo a la vez a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio.



Democracia y mercado en los libros de texto

20 de marzo de 2007

Rafael Zaragoza acaba de publicar en la editorial Aduana Vieja un libro titulado “Democracia y mercado en los textos de bachillerato”, en el que aparece a los ojos del lector un aterrador panorama de prejuicio e ignorancia en los libros de enseñanza de Historia Contemporánea.

El ensayo recorre los principales momentos de la evolución de nuestras sociedades democráticas y contrasta la interpretación sesgada de los libros de texto con los resultados de la historiografía más reciente. Comienza poniendo en duda la tenebrosa imagen de la Revolución Industrial presentada por tantos historiadores, así como la presentación de la I Guerra Mundial como la evolución lógica de rivalidades capitalistas, típicas de una economía liberal. Desmitifica la revolución bolchevique y la presenta como lo que fue, un golpe de Estado contra el régimen constitucional establecido por los liberales al mando de Kerenski. Desmonta el intento de blanquear a Lenin cargando todas las culpas sobre un Stalin traidor de la Revolución. Recuerda que el verdadero apaciguador de Hitler no fue Chamberlain en Munich sino el propio Stalin, quien, al repartirse Polonia con la Alemania nazi, dejó a su gemelo totalitario las manos libres para atacar en Holanda, Bélgica y Francia.

Los textos examinados malinterpretan, nos hace ver Zaragoza, la historia de Europa entre las dos guerras mundiales. Sobre todo señala la ausencia de la debida equiparación entre los regímenes totalitarios comunistas y los fascista y nazi. Los segundos se inspiraron en los métodos violentos de la Unión Soviética De hecho recuerda lo que los textos examinados no dicen que la mortandad causada por Lenin, Stalin, Mao y Pol Pot ha sido mucho mayor en varias decenas de millones de personas que la infligida por Hitler y Mussolini. La crisis económica de los años treinta la atribuyen los textos a un fallo inherente del capitalismo, cuando se debió al proteccionismo e intervencionismo crecientes en aquellos años y, podría añadir Zaragoza, a la equivocada política monetaria aplicada por el Banco de la Reserva Federal de los EE.UU.

La II Guerra Mundial y la Guerra Fría se interpretan mal en los textos como una lucha entre las fuerzas progresistas y las reaccionarias, cuando lo fue, en dos momentos, un enfrentamiento entre democracia y totalitarismo, con la victoria repetida de las democracias en su versión anglosajona. La descolonización posterior a la II Guerra Mundial no fue la victoria de la libertad sobre la opresión capitalista como normalmente se presenta, sino la de la identidad nacional frente al control extranjero. Además vino marcada en los nuevos Estados por el rechazo de la tradición democrática, al asociarla con el colonialismo. La excepción fue la India, donde la democracia se mantuvo, pero se impuso la planificación socialista hasta la década de 1980, con el efecto de retrasar gravemente el desarrollo económico de sus masas hambrientas. No es de extrañar que los jóvenes españoles así formados creen que el imperialismo americano es y ha sido el principal peligro para la paz del mundo, como revelan las encuestas de opinión.

Esos textos muestran una profunda incomprensión del funcionamiento de una economía libre y del alivio que trae para los pobres del mundo. Todo es hablar de comercio desigual, todo es quejarse de las desigualdades creadas por el capitalismo, o denunciar las depredaciones de las empresas privadas en la Naturaleza, o elogiar la resistencia ante la globalización. En este punto de la falta de comprensión de la economía de mercado, este ensayo de Rafael Zaragoza es un útil complemento del libro escrito hace unos años por el académico Manuel Jesús González sobre los textos usados en la segunda mitad de la década



de 1990. Zaragoza se fija en los libros publicados de 2000 a 2005: La conclusión es que todo sigue igual en el nuevo siglo.

No todos los libros de texto examinados son igualmente esclavos de una ideología que relativiza la democracia y demoniza el mercado. Pero, por increíble que parezca, todos ellos parten de la interpretación marxista de la historia, según la que la lucha de clases es el motor del cambio y la democracia formal no es sino la antesala de la democracia social. El nazismo es la expresión de los intereses de la plutocracia y la burguesía, con olvido de su carácter principalmente obrero. La violencia comunista es mucho más excusable que la fascista. La pobreza del mundo se debe al capitalismo, se supone que excepto en la China e India de hoy. La principal amenaza para las libertades y el bienestar es el neo-liberalismo, representado por Reagan y Thatcher, y no el neo-comunismo latinoamericano, encarnado en populistas e indigenistas.

Las editoriales responsables deberían recapacitar sobre el daño que están haciendo a los jóvenes al presentarles una visión de la historia del mundo destructiva de los dos pilares básicos sobre los que se asienta nuestra civilización: la democracia y el mercado. Pero no, seguirá reinando el marxismo instintivo, la retórica revolucionaria, el odio a la mundialización, el progresismo barato y el indigenismo ingenuo.



¡El dólar a 73 céntimos de euro!

13 de julio 2007

Madrid (AIPE)— Sigue cayendo el precio del dólar en términos de las otras grandes monedas. Recuerden que a poco de salir el euro al mercado su cambio con el dólar se colocó en la paridad, uno por uno. El cambio está ahora por debajo de 73 céntimos de euro. Una devaluación de un 36% en cinco años es una caída notable. Además, el mercado de futuros refleja una creencia general de que el dólar perderá aún más valor durante los doce meses próximos. Ello plantea varias preguntas. ¿Cuáles pueden haber sido las causas de esa pérdida de valor relativo del dólar? ¿Qué efectos ha podido tener la revaluación del euro sobre la economía europea? ¿Es probable una intervención sistemática de los bancos centrales en los cambios de sus monedas, por sí solos o de acuerdo con otros? La más difícil de todas es la última: ¿cómo va a evolucionar el cambio dólar/euro en el futuro? Por suerte para todos ustedes, esa última pregunta es imposible de contestar: si supiera la respuesta no se lo diría a nadie y me haría tan rico que dejaría de escribir.

La causa más próxima es la política monetaria de los respectivos bancos emisores. El mercado de cambios es muy líquido, pues el valor de las transacciones diarias alcanza los dos millones de millones de dólares al día, aproximadamente diez veces más que lo negociado al día en las bolsas de valores del mundo entero. Los gestores de carteras de divisas se fijan sobre todo en la previsible evolución de los tipos de interés básicos fijados por los respectivos bancos centrales. A riesgo igual, tenderán a comprar la moneda de aquel Estado cuyos bonos paguen el interés más alto y vender la de tipos más bajos. El tipo oficial al que el Banco del Japón presta al sistema financiero es el 0,5% anual y el rendimiento de los bonos del Estado japonés a dos años es el 1,8%. Si un gestor toma yenes en Japón y los cambia a dólares neozelandeses para comprar en Nueva Zelanda un bono a dos años con rendimiento del 7%, obtendrá pingüe ganancia. Es normal pues que, *ceteris paribus*, el yen pierda valor respecto de las monedas de otros países. A este tipo de negocio se le llama “carry trade” o “especulación-transporte”, si se me permite el neologismo.

El primer riesgo a que están expuestos tales especuladores es el de un movimiento inesperado de los tipos de interés de Japón al alza y de Nueva Zelanda a la baja. Por eso, los comerciantes de moneda se fijan atentamente en las señales que puedan indicar cambios de política monetaria. Para ello intentan ponerse en el lugar de los gobernadores y pensar qué les haría mover los tipos de interés en la próxima reunión de sus comités ejecutivos. Parten de las dos teorías en las que dicen creer los banqueros centrales: la teoría que liga la inflación con la abundancia de dinero; y la teoría que liga la inflación con el crecimiento real de las economías. La primera es cierta y la segunda equivocada.

Si los precios de todos los bienes y servicios que se venden y compran en el mercado están subiendo, y se espera que sigan subiendo, es porque el dinero es demasiado abundante. Entonces conviene encarecerlo subiendo el precio al que el banco central presta a la banca comercial. Si se espera que el Índice de Precios al Consumo se dispare, los tipos de interés subirán. Los bancos centrales también deberían fijarse en las alzas de precios de los inmuebles y los valores en Bolsa, pero no lo hacen.

La teoría equivocada a la que parecen hacer caso los gobernadores y, por tanto, los especuladores, es que habrá inflación cuando la economía se ponga a crecer deprisa, cuando, como se suele decir, la economía “se recalienta”. Sin embargo, hay ocasiones en las que las economías están deprimidas y la inflación ruge, como ocurrió durante las dos crisis del



petróleo. También hay crecimientos continuos y rápidos de la economía con precios virtualmente estables: eso es lo que lleva pasando durante los últimos diez años de bonanza mundial. A pesar de esto, son muchos los banqueros centrales, y los especuladores, que creen necesario “enfriar” la economía para evitar subidas de precios excesivas. Por eso, en cuanto se animan los EEUU, todos esperan que la Reserva Federal haga subir el tipo oficial, que ya está en el 5,25%.

Esta segunda teoría, la equivocada, se basa en la creencia de que el tipo de interés monetario y el tipo de cambio monetario influyen directamente en la economía real. Se piensa en efecto que, los aumentos del precio del dinero en unidades monetarias reducen el consumo y la inversión y así “enfrian” la economía real. También se cree que la apreciación de una moneda en términos de otras dificulta automáticamente las exportaciones y reduce la llamada competitividad de la nación. Esto no es necesariamente así y les diré el porqué.

El precio del dinero que importa a consumidores, inversores y exportadores no es el llamado “precio monetario” sino el “real”. Quiere decirse que los individuos no nos fijamos sólo en el tipo de interés proclamado por el banco central sino en ese tipo comparado con el índice de precios: si el interés es de 4% y los precios están subiendo al 5%, lo que realmente estamos pagando por los préstamos es un tipo negativo de menos 1%. El tipo de cambio que importa a exportadores e importadores es también el real: resulta de comparar el cambio de la divisa con las subidas de los costes en el interior. Devaluar no sirve de mucho si el abaratamiento de nuestras mercancías en el exterior es engañoso, porque nuestros costes de producción han subido más que el respiro conseguido con la caída de la divisa. La apreciación del euro es compatible con unas exportaciones boyantes, si nuestra productividad crece más deprisa.

En fin de cuentas, las intervenciones en los mercados de cambios son engañosas: el valor de la divisa depende de circunstancias que escapan al poder directo de los bancos centrales. Depende en última instancia de dos elementos: los avances de la productividad y la tecnología; y la disposición de los que viven en el país a ahorrar más que lo que invierten. Si la economía crece como lo hizo la americana de los años noventa y si los naturales ahorran como lo hacen los chinos hoy, la moneda se aprecia. Pero ¿cuánto y cuándo? Esa es la pregunta del billón de dólares.



La oscura Constitución Europea

26 de julio de 2007

Largas horas estuvieron reunidos en Bruselas los del Consejo Europeo, acompañados por el presidente de la Comisión y el del Parlamento. La fuerza de las olas amenazaba con echar a pique definitivamente el barco de su Constitución. Como si se los hubiera tragado una ballena, se agolparon en oscuros conciliábulos pero, tras las debidas rogativas, el pez los regurgitó, presos de oscuras visiones proféticas. ¡Habían encontrado un modo de salvar el proyecto constitucional sin necesidad de consultar directamente a los europeos!

Ese proyecto de Constitución era el resultado de una suma de buenas intenciones y oscuras maquinaciones. El encargo hecho a la Convención reunida en Versalles, bajo la batuta de Giscard d'Estaing, era modesto: se trataba de simplificar los tratados de la Unión para que los ciudadanos corrientes pudieran comprenderlos; había que reformar las instituciones para que pudieran funcionar eficazmente con veinticinco o más miembros. En una palabra, había que conseguir colmar el “déficit democrático” que denunciaban los críticos de la burocracia europea. Pero Giscard y otros fanáticos de los Estados Unidos de Europa maniobraron para hacer pasar de matute una agenda política disimulada. Lo que salió de Versalles iba mucho más allá del encargo. Para empezar, el nombre de “Convención” que le dio el señor de los diamantes de Bokassa era un eco consciente de la asamblea revolucionaria de la sangrienta República jacobina. Se incluyó en el proyecto una Carta de Derechos redundante (pues ya regía desde Helsinki la del Consejo de Europa) y se legisló el himno, la bandera, el presidente, el ministro de asuntos exteriores, el cuerpo diplomático... En vez de eso, habría bastado con poner en práctica lo mucho del Tratado de Roma de 1957 que aún quedaba sin aplicar. Giscard creyó que sus súbditos europeos aceptarían por aclamación una Carta Otorgada como las de su ídolo y modelo, Napoleón Bonaparte, ese violento unificador de una Europa a la francesa.

Con la derrota de los referendos en Francia y Holanda se evidenció el error de ponerse a la cabeza de la manifestación sin estar seguros de que el pueblo seguía. Soy el primero en admitir que la institución del referéndum es defectuosa, como todos los demás métodos de convertir las opiniones y deseos de los individuos en decisiones colectivas. En la historia de la humanidad abundan los ejemplos de referendos transformados en plebiscitos por algún líder populista: bien recientes son los ejemplos de esa corrupción del ideal de la consulta popular en Cuba y Venezuela. Ni el pueblo, ni nadie, ha de gozar de soberanía indivisa y definitiva. El referéndum es una de las formas de acordar una decisión común y sólo funciona como baluarte de las libertades en el seno de una tradición constitucional muy sólida. En Suiza, Liechtenstein o EE.UU., las consultas populares directas se combinan con abundantes dosis de representación indirecta y con una judicatura independiente del voto popular. Son un elemento más de los “frenos y contrapesos” típicos de una verdadera democracia. Nadie pretende que las naciones se gobiernen a golpe de votaciones directas, sobre todo nadie lo pretende cuando una minoría opresora quiere hacer de cada consulta una revolución. Alemania tiene prohibidos los referendos por cómo los utilizó Hitler. Así, la retórica



“democrática” de quienes reclaman la autodeterminación para el pueblo vasco no significa más que la continuación del terrorismo por otros métodos.

Sin embargo, Europa padece de un déficit democrático. Las instituciones de Bruselas, Estrasburgo y Frankfurt (¿sabía el lector que los plenos del Parlamento se reúnen en Estrasburgo?) son infinitamente remotas para los ciudadanos. Los mandatarios no representan a un “pueblo europeo” mandante, con sentimientos políticos comunes. La continua legislación y gobernación que fluye desde arriba necesita, para que no provoque oscuras resistencias, algún poderoso freno y contrapeso ejercido por las comunidades políticas nacionales, que sí existen realmente. Una legislación europea reducida a un mínimo común denominador, que permitiera la competencia institucional entre Estados miembros más o menos liberalizadores, sería un modo organizarnos mucho más realista y eficaz.

Creo que esa manera de construir una Europa más armónica y mejor insertada en el mundo atlántico sería mucho más acorde con el espíritu de los fundadores de la Comunidad Europea, Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer y Alcide de Gasperi: definir un área común mínima y dejar que los intercambios humanos y económicos fueran creando un sentimiento de común pertenencia. La evolución posterior de la Unión Europea y más concretamente el programa de reforma de los Tratados acordado en Bruselas bajo la inspiración de Angela Merkel, no son fieles a ese espíritu. Lo interpretan como un modo de hacer pasar reformas fundamentales por la puerta de atrás, a ser posible sin consultar demasiado a los ciudadanos. Recuerden que el Gobierno de España nos dijo en la publicidad de la proyectada Constitución Europea que no hacía falta leer el texto para votar que Sí. Ahora están buscando desesperadamente el modo de cambiar los Tratados constitutivos sin consultas populares, no vaya a ser que los votantes tengan una idea distinta de los gobernantes.

He leído atentamente el “proyecto de mandato para la Conferencia Intergubernamental” a la que se va a encargar la redacción del “Tratado de Reforma” con el cual imponer una nueva Constitución Europea, sin decir que es una nueva Constitución Europea. El mandato es de todo punto incomprensible, lleno de remisiones a recónditos artículos de los distintos Tratados, expresado en un lenguaje tecnicista voluntariamente oscuro. Eugenio d’Ors solía preguntar a la secretaria a la que había dictado un artículo: “¿Se comprende?” Si ella contestaba con entusiasmo que sí, añadía don Eugenio: “¡Obscurezcámoslo!”



El dogma Gore-Clinton

22 de octubre de 2007

El dogma de que el mundo marcha hacia un recalentamiento que pone en peligro la continuidad de nuestra civilización se ha convertido en el argumento capital de todos aquellos intervencionistas que no pueden soportar la idea de que el sistema de libre economía funciona bien y contribuye a mejorar la situación de todos, incluso los más pobres. Por fin han encontrado un argumento para defender la idea de que el mercado, si se le deja solo, acaba destruyendo la sociedad e incluso el mundo. El vehículo más poderoso en esta campaña de alarma es la película producida por Al Gore, “Una verdad inconveniente”, galardonada con un Oscar. También Leonardo di Caprio está paseando por todo el globo una película con el mismo mensaje producida por él. Ahora se une al clamor a favor de la regulación del control de las emisiones de CO₂ el ex-presidente Clinton, quien ha centrado la reunión de su asociación de filántropos, la “Iniciativa global Clinton”, en la lucha contra el recalentamiento de la atmósfera terrestre.

Clinton, en una reciente entrevista, tras dar por sentado que el clima terrestre está cambiando a peor debido al descontrol de nuestro uso de combustibles, ha afirmado que las medidas para combatir el recalentamiento global no tienen por qué reducir el crecimiento económico de los países que las apliquen ni afectar la cuenta de resultados de las empresas que ahorrarán energía. El argumento tiene interés porque es posible que una contaminación atmosférica al estilo de la que soportan algunas ciudades chinas resulte a la postre un freno para el progreso económico del país. También puede ser conveniente que las empresas examinen con atención si el ahorro energético no puede a la postre aumentar los beneficios que obtienen de su actividad. Sin embargo, en el caso del tipo de medidas más amplias, la pregunta crucial es si estamos seguros de que hay recalentamiento y, caso de haberlo, si se debe a la acción del hombre.

Las estadísticas de temperatura publicadas por el Instituto Goddard para Estudios Espaciales, de la NASA, son uno de los principales apoyos científicos de las tesis de Gore. Pues bien, el mes de agosto pasado el ingeniero Stephen MacIntyre recalculó la serie histórica de temperaturas de ese Instituto y descubrió que la cifra de temperatura más alta del siglo XX en Norteamérica fue 1934 y no 1998. También hizo ver que de los diez años más calientes desde 1880, cuatro se situaron en el decenio de 1930 y sólo tres en la década pasada. También es interesante saber que, tras ese nuevo cálculo, los años de 2000 a 2004 fueron todos algo menos cálidos que el de 1900. Las cifras recalculadas por MacIntyre indican una subida de 0,44 grados centígrados en los últimos diez años, si bien centrada al final del siglo pasado y no en los primeros años del siglo XXI. No hay que deducir de la reordenación de años máximos realizada por MacIntyre que las temperaturas de la década de los años treinta fueran de infierno, comparadas con las de final de siglo, pues el cambio se basa en un recálculo de las temperaturas hasta el centésimo lugar decimal significativo. La conclusión correcta es que las de los diversos años del siglo pasado marcharon parejas. Por lo tanto, quizá no haya tanto recalentamiento global como vienen diciendo Gore, di Caprio, Clinton y Zapatero.

Las medidas propuestas por los intervencionistas para reducir la emisión de anhídrido carbónico podrían además resultar contraproducentes. Me gustaría estar seguro que la producción de combustibles biológicos para sustituir los fósiles no acabará emitiendo más cantidades de CO₂ a la atmósfera, lo que al menos en los primeros diez o veinte años iniciales es probable que ocurra. La extensión de la superficie de cultivo en el mundo, impulsada por medidas políticas y los consiguientes altos precios de los cereales y otras plantas capaces de



ser transformadas en energía, podría suponer un aumento de la velocidad de deforestación contraria a las buenas intenciones de los defensores de la Naturaleza.

Por si estas llamadas de atención más puedan resultar poco convincentes, quiero recoger de la columna de Christopher Booker en el “Daily Telegraph” del 19 de agosto pasado, un cálculo por el profesor William Nordhouse de la Universidad de Yale, del coste de los recortes de emisión de gases del tipo de los propuestos por Al Gore. El valor presente del beneficio obtenido por esas medidas lo calcula Nordhouse como cercano a 12 billones (españoles) de dólares. Por contra, el coste de tales medidas, traído también a valores presentes, podría llegar a ser de casi tres veces esa suma.

Mi conclusión de todas estas reflexiones es que sigo dudando. ¿Estamos tan seguros de que el recalentamiento global no es sino una repetición de momentos de un ciclo climático de miles de siglos? Las predicciones de elevación de temperaturas y sus efectos se basan en modelos meteorológicos basados en audaces supuestos. ¿Estamos seguros de que la catástrofe global se cierne sobre nosotros como dicen los jeremías de la intervención? Como ha dicho el presidente de la República Checa, Vaclav Klaus, quizá la víctima de la acción del hombre al utilizar más y más energía para seguir prosperando acabe siendo, no el clima, sino nuestras libertades.



Cohesión social en Latinoamérica

27 de diciembre de 2007

Rafael Pampillón es un ejemplo de claridad en todo lo que escribe y enseña. Eso permite a sus lectores y alumnos aprender cuando acierta tanto como cuando se equivoca: también los errores pueden ser útiles, pues nos enseñan lo que hay que evitar. Cuando habla de América, Pampillón a menudo pone el dedo en la llaga: denuncia corrupción, proteccionismo comercial, inestabilidad monetaria, indefinición de derechos de propiedad; así puede distinguir entre los países que se comportan en estas materias de buen gobierno y buenas instituciones y los que llevan un paso tambaleante, al amparo de la bonanza de los subidos precios de las materias primas. En un reciente artículo, sin embargo, titulado “Cohesión social y reformas en Latinoamérica”, dedicado a ese aquelarre que son las Cumbres iberoamericanas, se fija en dos falsos problemas: la desigualdad social y la revaluación de las monedas en aquellas regiones.

Todavía no ha calado en la opinión pública el hecho bienvenido de que tanto Iberoamérica como el África al sur del Sahara llevan cinco años de notable crecimiento económico. En parte ello se debe a que las materias primas que producen han alcanzado muy altos precios. Otra parte se debe a que en América son ya muchos los países que funcionan muy aceptablemente: Chile, México, Brasil, Perú, incluso Colombia pese a la guerrilla y el narcotráfico. Otros hay que despilfarran su bonanza temporal: son ejemplos de la “maldición del petróleo”, que lleva a los gobernantes a enriquecerse indebidamente y a jugar con el dinero del subsuelo para darse importancia en el mundo.

Pese a tan halagüeño desarrollo, mis amigos latinoamericanos se muestran pesimistas. Desanimados y desmoralizados porque cunde el populismo petrolero y la opresión “bolivariana”, creen que la respuesta frente al peligro del dinero revolucionario es aplicar políticas socialdemócratas que han fracasado en el Primer Mundo. Pampillón es uno de los que denuncia que “el gasto público es insuficiente, está mal diseñado y no es redistributivo”. Hace falta, añade, más presión fiscal, dado que, excepto en Brasil, las “recaudaciones son bajísimas”. Ello se debe a que abundan las “exenciones y deducciones fiscales” y a que “una gran parte de la economía trabaja en la informalidad”. Lo dicho: impuestos más altos y progresivos, más gasto público, y menos corrupción (si Dios quiere).

Estoy de acuerdo con la idea de combatir con toda energía la corrupción pero quizá nuestros remedios difieran. El intento de enviar los sátrapas a la cárcel o de recobrar lo que hayan escondido en paraísos fiscales no basta. La mayor transparencia informativa, con medios independientes del poder, es cosa poco práctica cuando gobierna un gorila. Más eficaz sería reducir el tamaño del sector público: la corrupción política disminuye cuando las explotaciones petroleras no son del Estado, cuando se privatizan las empresas públicas, se reducen los trámites para crear empresas y obtener permisos, se definen y respetan los derechos de propiedad, especialmente la propiedad de los pobres.

Aumentar los impuestos para expandir el gasto público y redistribuir la riqueza puede dar algunos votos pero no resuelve, muy al contrario, el problema de la pobreza. Fíjense en que Chávez no sólo intenta expropiar el producto del subsuelo sino que, en su proyecto de Constitución, quiere suprimir la independencia del Banco Central. Poco pueden hacer los políticos decentes con impuestos redistributivos contra las larguezas de populistas que nadan en petróleo o manejan la máquina de imprimir billetes. Los populistas tienen las de ganar, hasta el momento en que ponen su país al borde de la catástrofe; y cuando llega el desencanto



de los pobres que no salen de su miseria y las caceroladas de las amas de casa esquilgadas por la inflación, puede volver la democracia, o venir un golpe militar, o crearse una situación cubana.

Esencial para combatir el populismo es vencer la pobreza, no redistribuir la poca riqueza existente. No es lo mismo dar de comer que reducir las desigualdades. La experiencia del sudeste asiático durante el último cuarto de siglo indica que es posible elevar a millones de personas por encima de la mera subsistencia si la economía se liberaliza y se busca activamente vender en el extranjero. Gracias a los avances asiáticos, nos ha enseñado Sala i Martín, el número de pobres que viven con menos de dos dólares al día en el mundo se ha reducido en 400 millones en el último cuarto del siglo pasado, y eso que la población mundial ha aumentado en casi mil millones durante ese tiempo. Además, ¡milagro, milagro! También se ha reducido la desigualdad: el porcentaje de personas que viven con menos de dos dólares al día ha pasado del 44% al 8% desde 1970. Es la globalización, señala el economista catalán.

Tampoco es cierto que la revaluación de las monedas de América Latina, respecto del dólar sobre todo, suponga necesariamente para esos países una “pérdida de competitividad”. El tipo de cambio que importa para las exportaciones es el tipo de cambio real, es decir, el que toma en cuenta el verdadero poder adquisitivo de las monedas prestando atención también a la inflación interna. Cuando una moneda se revalúa, los precios en el interior tienden a contenerse, con lo que la temida falta de competitividad se corrige. Mucho más importante para el desarrollo económico es la mejora de la productividad real, gracias a impuestos más bajos, gasto público mínimo, desaparición de protecciones y favores públicos, inversión directa extranjera, imitación de tecnologías modernas.

Importan pues mucho los impuestos bajos. Ahora está de moda decir que es bueno bajar la tarifa porque se recauda más. Se trata de bajar la carga fiscal, reduciendo el nivel absoluto del gasto público. No olviden nunca que el gasto total es el impuesto total. Un gasto público creciente, como quiere Pampillón, hay que financiarlo, sea con más impuestos, o más deuda, o más inflación. Dejaré para otro día el decirles cómo se hacen obras públicas o se financia la educación, o las pensiones con dinero privado. Hoy me contento con decir que hablar de “cohesión social” equivale a dignificar la envidia. ¡Qué importa que haya muchos ricos, si han conseguido su fortuna en limpia competencia y de paso han sacado hambrientos de la pobreza!



La deslocalización como ventaja

1 de abril de 2008

Es un error pensar que la deslocalización constituye un problema nacional. Sin duda hay quien sufre temporalmente con el traslado de plantas de automóviles desde España a los antiguos países comunistas, de desvío de la producción textil al Magreb, o de ubicación de centros de servicio informático o telefónico a Marruecos e India. Sufren los que tienen que buscar un nuevo empleo. Sufren las empresas auxiliares que temporalmente pierden su cliente principal. Pero el país en su conjunto progresa gracias a la deslocalización y a cualquier destrucción de empleos improductivos, por efecto de la competencia, internacional o nacional.

En un mercado competitivo, las empresas pagan a sus empleados el equivalente del valor de lo que cada uno produce: el salario viene gobernado por la productividad marginal de los trabajadores. Si por término medio los salarios en España son cuatro veces mayores que en Marruecos, es porque la mano de obra española es en su conjunto cuatro veces más productiva. De lo contrario, los empresarios son idiotas. No vale comparar sólo el coste de un obrero en Marruecos o en India con el de un obrero en Cataluña o Madrid para decir que corremos peligro de que toda la actividad se deslocalice. Si a un empleado en España se le paga tanto más, tiene que ser porque produce tanto más, por el capital físico o humano puesto a su disposición, por la capacidad de venta y mejor organización de la empresa en la que trabaja y por el más adecuado marco institucional en el que ésta opera.

Una empresa que envía sus empleados al paro lo hace porque no consigue que produzcan lo suficiente para compensar su salario. Ese cierre puede deberse a la competencia del vecino o del indio o del chino, pero en todo caso indica que en otro lugar serían más productivos. Si encuentran ese nuevo empleo, producirán más, para bien de nuestro país. ¿Existe esa otra actividad? Es una pregunta que se plantea con el desplazamiento de trabajadores por efecto de cualquier competencia, nacional o extranjera.

En una economía flexible, la creación de puestos de trabajo resulta de una inmensa destrucción de empleos antiguos. El Instituto Cato da las cifras de EE.UU. Entre 1993 y 2002 aumentó allí el empleo en el sector privado en 17,8 millones de puestos netos; pues bien, eso fue el resultado de 327,7 millones de empleos creados y de 309,9 millones destruidos. En España se han creado durante los gobiernos de Aznar más de cuatro millones de puestos de trabajo netos. Al mismo tiempo, ha caído el paro y el ingreso real medio de las familias española ha crecido un 35%. Quienes piden medidas contra la deslocalización deberían oponerse a toda importación del exterior.



Confianza

9 de octubre de 2008

La crisis inmobiliaria y financiera, iniciada en el verano de 2007 y agravada en los recientes meses de 2008, ha animado a los socialistas de todos los partidos a lanzarse en tromba contra ese capitalismo que los socialistas llaman "salvaje" y los conservadores tildan de "antipático". Con malsana satisfacción señalan que ni siquiera los partidarios del libre mercado dejan de llamar al papá Estado cuando las cosas empiezan a irles mal. ¿Tienen acaso razón? ¿Se deben las presentes angustias a la codicia de banqueros y especuladores movidos por un egoísmo sin freno? ¿Significa todo esto que debemos abandonar el mercado semi-libre en que vivimos y volver a un sistema detalladamente intervenido por los políticos?

Lo primero de todo es entender cómo funciona un sistema financiero moderno. Sin duda está basado en la confianza, pero no en la confianza de que todo va a seguir en continua expansión. Son muchas las inversiones equivocadas y compañías mal dirigidas que han de desaparecer, por lo que una recesión mundial es inevitable. Sostener cueste lo que cueste la actividad inmobiliaria, el empleo industrial, la oferta de servicios de los años de excesivo optimismo, sin revisar nada, no haría sino prolongar la crisis durante años, como ocurrió en Japón en la década de los años ochenta. Una profunda reestructuración acortaría la crisis pero tendría que incluir la liberalización del mercado de trabajo español y la decidida apertura del mundo al libre comercio. Sea corto o largo este período, necesitamos confianza en una cosa principal: la moneda; la moneda con la que valoramos los bienes y servicios, esa moneda con la que compramos y vendemos y atesoramos para alguna contingencia futura.

El sistema monetario en el que nos desenvolvemos es un sistema "fiduciario", es decir, basado en la "fiducia" o fe general. Aceptamos euros, dólares, yenes, en pago de lo que vendemos porque confiamos en otros los aceptarán en pago de lo que les demandemos. Ese dinero que usamos en el mercado no consiste sólo en monedas y billetes emitidos por un banco central público: la mayoría de nuestros recursos monetarios tiene la forma de depósitos bancarios. A esos depósitos acudimos para obtener billetes en un cajero automático, o para responder de un cheque que entregamos, o para saldar una cuenta con una tarjeta de pago. El sistema fiduciario moderno contribuye a crear una estupenda prosperidad, pero punteada con dolorosos vaivenes. En cambio, las sociedades primitivas vivían una interminable repetición, sometidas sólo a los azotes de la cruel naturaleza.

El dinero que usamos diariamente está expuesto a dos tipos de inseguridad: la que afecta al dinero emitido por los bancos centrales, porque la inflación en el interior y la devaluación en el exterior erosionan su valor; y la que afecta al dinero bancario, cuando los bancos que custodian nuestros depósitos suspenden pagos. No hay que olvidar que los bancos comerciales se comprometen a devolver los depósitos de sus clientes pese a que su monto alcanza cien, doscientas, quinientas veces su caja, pues confían en que no todos los depositantes querrán retirar sus depósitos a la vez. Los defensores del capitalismo moderno nunca hemos dicho que un sistema fiduciario pueda funcionar sin intervención pública



alguna. Un club de bancos como es el de cada una de nuestras zonas monetarias necesita un prestamista de última instancia. Acabamos de ver al Gobierno británico nacionalizar el banco Northern Rock en cuanto se formaron colas de personas ansiosas de retirar su dinero; o a los Gobiernos de Irlanda y Alemania garantizar el 100 por 100 de lo depositado en la banca de su país: todo para que no cunda el pánico. No otro que éste de mantener el sistema de pagos es el objetivo del fondo de 700 mil millones de dólares creado en EE.UU. para comprar activos "envenenados" de la banca.

La experiencia de lo ocurrido durante la Gran Contracción de 1929-31 está en las mentes de todos los banqueros centrales. No en vano ha sido Bernanke un estudioso de esa gran depresión de los años treinta. Recuerdo un almuerzo ofrecido a Milton Friedman en el Banco de España por Mariano Rubio cuando era gobernador. Salió el tema del salvamento de bancos españoles en la segunda mitad de la década 1980. "Hicieron ustedes bien, dijo Friedman, y también acertaron al prestar liquidez al mercado financiero en momentos de posible quiebra del sistema de pagos. Todo menos repetir la actuación de la Reserva Federal al principio de los treinta: permitió la caída del Bank of United States y otros muchos bancos; y retiró grandes cantidades de oro de la circulación sin emitir dinero en contrapartida". Cuando una economía se queda sin dinero, sea bancario, sea público, el sistema se gripa. Se necesita una mínima garantía de los depósitos privados, además de inyecciones temporales de liquidez, si los individuos hacemos caja y los bancos se niegan a prestarse los unos a los otros.

El sistema capitalista no se cuarteja porque esté basado en el egoísmo y la codicia, pasiones sempiternas del ser humano. No son los banqueros de negocios ni los especuladores profesionales los únicos que han pecado de codicia e imprudencia. Las parejas que apenas alcanzaban a cubrir gastos y que se endeudaban para especular con una segunda vivienda; los agentes financieros que colocaban hipotecas baratas o crédito al consumo a quienes no podrían soportar ni un leve encarecimiento del dinero; los consumidores que abusaban de las tarjetas de crédito para irse de vacaciones o comprar un coche nuevo; los políticos que garantizaban y siguen garantizando las pensiones públicas y la salud gratuita, pese a que no son sostenibles; todos ellos y otros muchos más han sido y son codiciosos. No se trata de maniar la actividad empresarial con enfadosas regulaciones ni de castigar el deseo de mejora personal y profesional con pesados impuestos, como proponen esos socialistas de todos los partidos. La cuestión estriba en reducir la inestabilidad de las sociedades capitalistas todo lo posible con reformas institucionales acertadas.

La base última de esta crisis, que ha hecho tambalearse la pirámide invertida de especulación, se encuentra en unos tipos de interés oficiales ridículamente bajos y una desatada creación de liquidez por nuestros bancos centrales, a lo largo de los últimos veinte años. Greenspan y los demás gobernadores inundaron el mercado con liquidez para salir de la crisis de 1987, para contrarrestar el efecto "año 2000" en el reloj de los computadores, y para calmar el pánico de las Torres Gemelas. Todo ello contribuyó a inflar la llamada "burbuja" de Internet, cuyo reventón se quiso evitar con más ríos de dinero. ¡Con decir que Greenspan llegó a mantener durante meses el tipo de interés oficial al uno por ciento! La reciente fiebre de



prosperidad ha durado cinco años, gracias a que las importaciones de China e India contenían los precios al consumo, mientras se disparaba el valor de las casas y las acciones. Cuando en 2007 la construcción y alquiler de inmuebles empezaron a no producir los réditos esperados, el ciclo se invirtió. El mercado a la postre ha funcionado, al hacer quebrar los negocios mal planteados y obligar al saneamiento de los que en ellos se apoyaban.

Es sin duda necesario mejorar la regulación del sistema financiero, sobre todo en la exigencia de mucha mayor información. Pero la regulación financiera más necesaria sería atar en corto a los gobernadores de bancos centrales. Una cosa es que el sistema suministre crédito a la innovación y la inversión, otra muy distinta es que los bancos centrales creen liquidez sin tasa. Ha fallado el Estado, no el mercado.



Apalancamiento y productividad

17 de noviembre de 2008

Una nueva doctrina se ha adueñado de los medios de comunicación y de las cámaras parlamentarias: al parecer, el pensamiento capitalista que Adam Smith ayudó a crear hace dos siglos ha sido arrumbado al basurero de la historia por la presente crisis financiera y Gordon Brown, el primer ministro británico, ha sustituido a Smith en el panteón de los grandes pensadores. Para Brown y otros refundadores del capitalismo, el apalancamiento y la innovación financiera son de mala nota. Pues bien, aún tienen mucho que decir Adam Smith y los otros grandes economistas de la tradición liberal sobre la contribución de la actividad financiera a la riqueza de las naciones.

Como bien dijo Adam Smith en su gran tratado de economía de 1776, “el consumo es el único fin y propósito de la producción”. A pesar de su sencillez, esta doctrina no es fácil entender, especialmente en estos momentos de crisis en que toda nuestra atención está fija en la parte instrumental de la actividad económica y dentro de ella, en la más remota y abstracta, cual es la finanza. Cómo organizar y encauzar la actividad financiera capitalista para fomento de nuestro bienestar, esa es la gran cuestión del momento.

La idea de consumo es mucho más amplia de lo que suele entenderse. Incluye, no sólo la satisfacción de nuestras necesidades corporales y mentales, sino todo aquello que forma parte de lo que valoramos, incluso lo que no toca directamente a nuestra persona. Por ejemplo, el bienestar de los hijos formará parte del “consumo” de los padres incluso cuando ya no sean de este mundo; y lo mismo cabe decir del progreso general de los conocimientos para un científico.

De esto se deduce que el consumo no es algo momentáneo sino que se extiende en el tiempo. Los individuos intentamos organizar nuestra producción y distribuir el consumo a lo largo de toda la vida, o más allá incluyendo una o dos generaciones más. Eso implica que los individuos tendremos diferentes necesidades de financiación en cada momento de la vida. Durante los años de niñez, crecimiento y formación, las personas consumimos e invertimos mucho más de lo que producimos: para ello, habremos de utilizar los ahorros de personas que se encuentren en otro momento de la vida en que consumen menos de lo que producen y que acumulan ahorros para un futuro más lejano. Típicamente, una familia joven se endeuda a cambio de prometer la devolución con réditos en momentos de mayores disponibilidades. Las personas de edad más madura estarán en disponibilidad de prestar sus ahorros, y así acabar la vida con medios suficientes para mantenerse en el retiro y dejar tras de sí justo lo que quieran pasar a sus descendientes. Las meras diferencias de situación en la vida, pues, inclinan de por sí a las distintas personas hacia diferentes patrones de consumo y ahorro y dan ocasión a intercambios financieros convenientes para todas la partes.



Otra diferencia entre los individuos en materia de consumo es su aversión o inclinación al riesgo. Las personas adversas al riesgo tenderán a ahorrar más por término medio en la vida y las inclinadas al riesgo a endeudarse más. Me refiero al riesgo puro que estudió Frank Knight en su tesis doctoral de 1921, no a la incertidumbre normal de los asuntos humanos, para cubrirse de la cual es posible contratar un seguro. En toda sociedad progresiva hay empresarios dispuestos a buscar réditos con proyectos e ideas de mayor varianza en los resultados. No todos los amantes del riesgo son productivos: un ladrón de viviendas corre riesgos detrayendo recursos de otros para poder consumir sin demora. Sí que es productivo el empresario que reduce su consumo, aplica el capital que ha acumulado y se endeuda, para invertir con la esperanza de obtener réditos en proyectos cuya productividad otros no hayan sabido ver. Ésta es otra oportunidad para intercambios financieros, una oportunidad que en este caso fomenta la aparición de un tercer actor, el intermediario financiero. Como los adversos al riesgo prefieren mucha liquidez en sus colocaciones, mientras los de ánimo empresarial se embarcan en inversiones de largo plazo y poco líquidas, hay un papel para las instituciones capaces de transformar ahorros liquidables a corto plazo en inversiones más fijas a largo.

En este punto interviene el apalancamiento como instrumento que magnifica la productividad de las apuestas empresariales. Apalanca el banco o intermediario financiero que, no sólo corre el riesgo al transformar ahorros a corto plazo en inversiones a largo, sino al multiplicar los ahorros originarios concediendo crédito por un valor mucho mayor que el depósito inicial. Apalanca quien contrata a futuro, o toma unas opciones, o realiza unos swaps de divisas o tipo de interés, o vende acciones a la baja sin cobertura, con riesgo de tener que aumentar el colateral de garantía si las expectativas se vuelven en contra. La cuestión es siempre la misma: lo mantenido en caja para una posible necesidad de liquidación es siempre mucho menos que las obligaciones incurridas: eso vale para los depósitos bancarios igual que para las ventas de materias primas o de títulos sin tener más que una cobertura parcial.

La tentación en momentos de crisis financiera del sistema en su conjunto es prohibir o limitar drásticamente todos esos apalancamientos. Con medidas mal consideradas de este tipo se perdería la productividad nacida de apuestas con éxito y con muchos más fondos que los originales, por proyectos que puedan resultar muy productivos. No se trata pues de acabar con el capitalismo salvaje o el neoliberalismo, sino de alcanzar ese delicado punto de regulación que evite accidentes catastróficos sin perder las ventajas de apalancar o de multiplicar riesgos empresariales productivos. ¿O es que queremos que nuestras economías dejen de crecer?



Ciegos conducidos por ciegos

3 de diciembre de 2008

La crisis financiera y económica que atenaza al mundo entero –sean países desarrollados, en desarrollo o estancados en la pobreza– no debe incapacitarnos para el diagnóstico y la acción meditada. El angustioso cuadro de Pieter Bruegel, “La parábola de los ciegos” nos amonesta a que resistamos la tentación de “hacer algo, ¡lo que sea!”, encabezados por Rodríguez Zapatero, camino de la refundación del capitalismo.

Comencemos por distinguir entre recesión productiva, por un lado, y crisis financiera, por otro. Están ligadas desde su inicio, pero conviene recordar que la primera pertenece a la economía real y la segunda afecta el ámbito monetario. Ello no quiere decir que la actividad financiera no sea un factor de producción y que sólo lo tangible e industrial sea fuente de riqueza, sólo que el dinero y el crédito son campos de actuación sometidos a leyes distintas de las que gobiernan la producción de los bienes y servicios que al final consumimos. El dinero es una representación de los bienes y servicios reales y el fin de los emisores que lo crean es que haya suficiente cantidad de él, pero no sobreabundancia para que el sistema de precios no se deforme con la inflación. En este momento de angustia nunca debemos olvidar que la mayor abundancia de lo que está a nuestra disposición para el consumo (pues, como dijo Adam Smith, el consumo es el objeto o fin de toda producción) no se consigue expandiendo sin tasa los medios de pago, sino por la mejora de los métodos de producción, por los avances de la tecnología, por la mayor laboriosidad de la población, por las instituciones de respeto de las libertades, la propiedad privada, los contratos.

La presente crisis se originó, en la medida en que podamos decirlo, en veinte años de excesivo abaratamiento del crédito, traído por Alan Greenspan, presidente de una institución pública, la Reserva Federal. La superabundancia de financiación hinchó los valores en dos mercados, el inmobiliario y el de los valores de bolsa. En materia de hipotecas fueron otra vez dos instituciones públicas las que propiciaron el exceso, Fannie Mae y Freddy Mac, que al fin y a la postre han tenido que ser nacionalizadas por el Tesoro americano. La bolsa, sin embargo, multiplicó casi hasta el infinito la inventiva aventurera de bancos y de operadores muchas veces sin escrúpulos. Una vez que los valores de los activos suben tanto que el rédito esperado de los mismos cae hasta mínimos inaceptables, los precios y las cotizaciones se desploman sin remedio.

Las medidas tomadas por las autoridades del mundo han sido dirigidas hasta el momento hacia el mundo financiero. La experiencia de lo ocurrido de 1929 a 1932, años en los que quebraron gran número de bancos, ha grabado en la conciencia de todos los banqueros centrales la obligación de evitar casi por cualquier medio que la gente vea desaparecer sus depósitos, que, después de todo son dinero: en once meses del inicio de la década de 1930, la oferta monetaria se redujo en EEUU en algo más de un cuarto, lo que multiplicó



catastróficamente los efectos de la crisis real arrastrada desde 1928. En esta ocasión, no sólo han actuado como prestamistas de última instancia los bancos centrales sino también los ministerios de Hacienda y Tesorerías de los Estados, para lo que había algún precedente en las intervenciones por el Estado sueco en la década de 1980 y del gobierno del Japón en la de 1990. Además, las acciones de salvamento, tradicionalmente dirigidas a los bancos comerciales, se han ampliado a muchos otros intermediarios financieros, como son bancos de negocios, aseguradoras, y ahora emisoras de tarjetas de crédito al consumo y para la adquisición de automóviles. Como digo, el objeto de tan extraordinarias intervenciones ha sido y es el de evitar que una contracción o recesión de la producción real se convierta en una depresión al estilo de la que duró de 1930 a 1940, los diez años perdidos de la economía mundial antes de la Segunda Guerra.

Parece lo natural que ahora se plantee la conveniencia e incluso necesidad de tomar medidas para “salvar” la economía real de la misma manera que se ha hecho con la financiera. Se entiende que esos salvamentos, en especial los que toman la forma de inversiones del Estado en el capital de las compañías rescatadas del abismo, no tienen por objeto evitar pérdidas a los accionistas y mantener el empleo de los directivos: ambos grupos lo pierden todo o casi todo cuando el público se convierte en dueño temporal de la institución. Se espera también que el Estado recupere su inversión una vez que pase la crisis y puedan revenderse los entes nacionalizados. Pero incluso aplicando ese mismo criterio a posibles inversiones “reales”, ¿es buena idea que el Estado, tras evitar las quiebras financieras, pase ahora a salvar constructores o fabricantes de automóviles? Más generalmente, ¿deben los gobiernos poner en marcha planes de obras públicas financiados con deuda, como piden ahora tantos keynesianos redivivos?

No hay ninguna seguridad de que las subvenciones a empresas productivas en dificultades sirvan para dar a la economía el estímulo que tanto desean los políticos y ciertos grupos de presión. Como Obama ha sido senador por Chicago y vive en la región del norte de EE.UU. tradicionalmente dedicada a la producción de vehículos y como los Demócratas pro-sindicalistas han ganado las elecciones, parece inevitable una acción de salvamento de Detroit, repetido de la que benefició a Chrysler en 1989: dinero tirado a la basura. Pero ¿obras públicas y deuda? La experiencia de Japón durante la “década perdida” de 1980 aboga en contrario. De 1991 a 2002 la deuda pública japonesa pasó de equivaler un 60% a un 125% del PIB; y un superávit público equivalente al 3% se convirtió en un déficit igual al 7%. Las obras públicas se multiplicaron hasta la inutilidad. Nada sirvió para sacar la economía de la parálisis, hasta que el Gobierno del Sr. Koizumi comenzó a reestructurar y a multiplicar la competencia. Meditemos si nuestro final no se encuentra en la zanja de los ciegos.



EE. UU.: La Gran Depresión

10 de febrero de 2009

Cunde el temor de que la crisis por la que estamos pasando sea una repetición de la Gran Depresión de la década de 1930. ¿Qué ocurrió verdaderamente en aquellos años? ¿Nos amenaza ahora una catástrofe semejante? ¿Se cometieron entonces errores evitables hoy? Las preguntas se agolpan angustiosamente. No es posible contestarlas en un breve artículo ni quizá encontremos nunca respuesta satisfactoria y definitiva, Sí creo, sin embargo, que vale la pena presentar un esbozo de los hechos e intentar una respuesta provisional a tanto interrogante.

Empezaré por los desplomes de la Bolsa, de la producción y del paro, que es lo que sobre todo recordamos de aquellos terribles años. La economía estadounidense había empezado a dar señales de enfriamiento en junio de 1929, aunque el índice Dow Jones siguió subiendo hasta alcanzar el 3 de septiembre un máximo de 381. Poco duró la alegría de los inversores. El “martes negro” —el 29 de octubre de 1929— el índice cayó en un solo día de 261 a 230. Siguió el desplome, hasta tocar 50 en la primavera del 33. A finales de 1933, sin embargo, pareció reanimarse la Bolsa y el Dow volvió a alcanzar los 190. ¡Poco dura la alegría en la casa del pobre! El 27 de agosto de 1937 fue otro martes negro y la Bolsa volvió a caer, hasta tocar un miserable 120 en enero del 38. Hay que aceptar la evidencia: los diez años de crisis bursátil no acabaron hasta que comenzó el rearme ante la guerra mundial que amenazaba.

La economía real también mostró el mismo desmayo. En 1933, la producción de EE.UU. había caído nada menos que un 30 por ciento respecto del nivel anterior a la crisis. Lentamente fue subiendo el PIB durante los tres años siguientes, pero en 1937 sobrevino otra recesión. Hubo que esperar a 1940 para pasar el nivel de once años antes: el rearme para prepararse a la guerra que se haría mundial tras el ataque japonés a Pearl Harbor fue lo que verdaderamente volvió a poner en marcha la economía estadounidense.

Las cifras de desempleo revelan la tragedia humana de la Gran Depresión. En julio de 1927, el paro era mínimo, el 3,3%. Todo cambió tras el primer “viernes negro”: el desempleo alcanzó un quinto de la población activa de EE.UU. En noviembre del 34, la proporción de parados había aumentado hasta el 23 por ciento. Hubo breves momentos de las presidencias de Roosevelt en que “sólo” el 9 por ciento se encontraba en el desempleo pero, por término medio, durante todo ese decenio la proporción de parados se mantuvo en el 15 por ciento.

Aunque estos datos son conocidos, no han penetrado del todo en la memoria colectiva, pues suele hablarse de tres años de Gran Depresión en EE.UU., los que van de 1929 a 1933, cuando en realidad fueron diez. Aún menos cierta es la leyenda de que Roosevelt, al llegar al poder en 1933, transformó la situación gracias a una política activa de intervención pública



inspirada en las ideas de Keynes, cuya Teoría General sólo se publicó en 1936. Para EE.UU., la década de 1930 fue toda ella una década perdida.

Ahora veamos las posibles causas de tanta tribulación. Las economías capitalistas son cíclicas desde tiempo inmemorial, en el sentido de que en vez de comportarse sus principales variables como lo hacen los amortiguadores de un vehículo, que, compensándose, mantienen un cierto equilibrio, se mueven todas en el mismo sentido. Si durante una recesión caen los precios debería aumentar la demanda de los consumidores; si se reducen los tipos de interés, sería normal que aumentara la inversión; si hay un gran aumento del paro, debería seguirse una caída de los salarios que animara a las empresas a contratar más mano de obra. Muy al contrario, todo se mueve en una infernal armonía. La explicación más corriente de tan desagradable correlación suele ser que falta confianza y que restaurándola todo se arregla. Tal explicación no explica nada: ¿por qué ha caído la confianza en primer lugar? Hay razones más profundas. Nuevas ideas, nuevos avances tecnológicos desbancan las viejas formas de producir, que por obsoletas y caras tienen que desaparecer, cuando los que viven de ellas se resisten a ceder. La destrucción creadora será aún más cruel si una política crediticia laxa ha fomentado inversiones equivocadas. En 1927 había culminado en EE.UU. un extraordinario ciclo de innovación. Era normal una pequeña recesión. La desgracia es que durante unos meses casi desapareció el dinero.

Fueron Milton Friedman y Anna Schwartz quienes, en su Historia Monetaria de los EE.UU. (1963) destacaron un hecho crucial: a lo largo de once meses de 1931 a 32, la quiebra de cientos de bancos hizo que la cantidad de dinero en la economía estadounidense se redujera un 26 por ciento. ¿Se imaginan el efecto sobre el tráfico y giro del mercado, si por quiebras encadenadas de bancos desaparece un cuarto de los depósitos bancarios? Un grave fallo del banquero central permitió esa implosión monetaria. A ello se añadió que Roosevelt, durante sus primeros cien días de presidente en 1933, declaró unas vacaciones bancarias que dejaron la economía sin más dinero que unos pocos billetes de dólar.

La mención de Roosevelt no es a humo de pajas. Él inventó ese truco mediático de los cien días, como si en ese tiempo pudiera hacerse algo serio y meditado para corregir el rumbo de una inmensa sociedad. “¡Hay que hacer algo!”, es el grito de los desorientados; “¡Sólo hay que temer el miedo!” fue la contestación de un frívolo presidente.

Durante sus dos mandatos de 1933 a 1940, previos a la II Guerra Mundial, Roosevelt volcó sobre el país una lluvia de medidas, la mayor parte de ellas para subvertir más que encauzar el sistema de la libertad económica. Amity Schlaes ha publicado hace poco un apasionante relato de la Depresión vista desde abajo, con el título *The Forgotten Man*. La lista de medidas equivocadas o discutibles es interminable. Durante esos cien días, además de las fatídicas vacaciones bancarias, lanzó una inmensa obra pública, el sistema eléctrico del valle de Tennessee, que creó efímeros puestos de trabajo a costa de semi-nacionalizar la energía; con la “National Industry Recovery Act” montó un sistema asfixiante de planificación de la industria y de regulación de las condiciones del trabajo; e, inmediatamente después, fundó el



“Consejo del trabajo nacional” cuyo objeto era imponer la negociación colectiva. Por ese camino siguió. Al firmar la Ley Nacional de Vivienda en 1934 intervino en el mercado hipotecario. En 1935 fueron la Ley Wagner, con la que fomentó la sindicación obligatoria, la creación de pensiones públicas, y los nuevos impuestos progresivos que castigaban la reinversión de beneficios en la propia empresa. También persiguió y encarceló a millonarios, y consiguió romper la resistencia del Tribunal Supremo a sus medidas extra-constitucionales con la amenaza de crear magistrados adeptos. Hubo medidas que no fueron malas del todo, como la ley que le permitía firmar tratados de comercio bilaterales, para paliar el duro proteccionismo del arancel impuesto por el anterior presidente, que tanto daño estaba haciendo a EE.UU. y al mundo entero.

No sigo. Si todas esas medidas que considero criticables les parecen bien a mis queridos lectores es que están maduros para apoyar las que, en ese mismo sentido intervencionista, vaya a tomar Barak Obama.



Mentiras universales

14 de abril de 2009

La hueca sonrisa del señor Zapatero en las pantallas de televisión y portadas de periódicos simboliza la gran mentira que ha sido la reunión del G-20 en Londres. Los días 1 y 2 de abril de 2009 quedarán en el recuerdo como la ceremonia lustral de los políticos responsables de la crisis. Sólo faltaban en la reunión los banqueros centrales, que con su imprudente inflación monetaria crearon el Niágara financiero e inmobiliario de 2007 y 2008. Ni los nuevos fondos de los que habla el comunicado final suman lo proclamado, ni las nuevas medidas regulatorias son las adecuadas para evitar futuras catástrofes, ni la denuncia de los paraísos fiscales hará más justo el sistema fiscal de las grandes economías.

El presidente del Gobierno español miente tanto que ya es incapaz de ver la realidad. Los fontaneros de la Moncloa han hecho correr la especia de que Gordon Brown había pedido a nuestro primer mandatario que mediara entre los europeos, Chirac y Merkel, y Obama. El propio Zapatero habla como si perteneciera al Grupo de los 20, aunque haya entrado allí por la puerta falsa. Hay que oír su campanuda voz cuando relata la buena impresión que le ha producido Obama, con el no tiene otro idioma en común que el de levantar las comisuras de los labios. Entretanto, el número de parados aumenta en España, a pesar del escamoteo de 400 mil en curso de formación, con lo que los desempleados son ya más de 4 millones por un amplio margen.

También está lleno de hinchazón el comunicado final de la reunión de Londres. Como señala el Financial Times, el total es bastante menos que el billón cien mil dólares (contado a la española). Al FMI se le adjudican 500 mil millones de dólares más para ayudar a países en dificultades; pero Japón ya donó 100 mil millones el año pasado y EE.UU. se comprometió antes de la Cumbre a 75. El resto hasta los 500 está en veremos, pendiente de una reunión del Fondo este mes de abril. También se ha dado permiso al Fondo para crear dinero nuevo, sacado de la nada en forma de “derechos especiales de giro”, por valor equivalente a 250 mil millones de dólares. Hasta aquí van ya casi la mitad del billón cien mil, pomposamente anunciado.

Los Bancos internacionales, como el Mundial o el Asiático, podrán prestar 100 mil millones más a países del Tercer Mundo. Ciertamente los necesitan, a la vista de las directrices de todos los Gobiernos de los países ricos para que sus bancos den crédito a las empresas locales. El comunicado también contiene declaraciones de boquilla a favor de un comercio internacional más libre. Por un lado, hablan nuestros líderes, con el asentimiento, sin duda, del señor Zapatero, que de esto sabe mucho, de 250 mil millones para financiar exportaciones. Como señala Chris Giles del mencionado diario, la financiación a la exportación dispuesta para 2009 no llega al décimo de esa cifra: el resto son promesas. Mas por otro, no han proseguido con las negociaciones de la Ronda Doha, ese benemérito intento



de reducir las barreras de los intercambios internacionales en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

Por último, la Cumbre acordó dos medidas populistas. La primera consistió en sacar de la oscuridad un Consejo de Estabilidad Financiera, en el que banqueros centrales y reguladores se esforzarán por fijar reglas de funcionamiento para los grandes bancos internacionales, con el fin de evitar los excesos cometidos por capitalistas y financieros. Dicho de otra forma, las zorras cuidarán de las gallinas, pues los grandes autores de esta crisis son precisamente los bancos centrales y los reguladores, que no han sabido mantenerse ellos mismos en el camino de la ortodoxia económica. La segunda medida populista consiste en atacar los paraísos fiscales en nombre de la justicia y la prosperidad, en vez de reducir la presión fiscal de forma permanente.

Es mi opinión que las medidas de impulso y gasto público deficitario, aplicadas por Obama y, en menor medida, por los Gobiernos europeos, no conseguirán sino reanimar artificialmente actividades sobre-dimensionadas, como es la fabricación de automóviles. La peligrosa situación por la que atraviesa el mundo precisa sólo dos tipos de medidas: las encaminadas a poner en marcha otra vez el sistema financiero y las que buscan liberar el comercio internacional. Los bancos deben poder poner de lado sus activos “tóxicos” en algún vehículo público, hasta que la reactivación de la economía real les dé su verdadero valor. Más importante es la liberación del comercio.

Cuando los productores se quejan de falta de mercados es paradójica la actitud proteccionista de tantos Gobiernos. Los líderes reunidos en Londres deberían haber ido a Ginebra, a concluir de una vez las negociaciones de la Ronda Doha. Como señala Ronald Stewart-Brown en la revista *Economic Affairs* del IEA, falta poquísimos para cerrar la bóveda de una nueva regulación más liberal del comercio mundial —apenas algunos acuerdos finales en el capítulo agrícola. Las gesticulaciones de Brown, Obama, y como no, del señor Zapatero, servirán para bien poco, al faltar ese supremo esfuerzo por conseguir lo único que vale la pena, más comercio internacional, como remedio que es para la falta de salidas a la producción, en especial la de los países pobres. Es desolador que el lema de la Cumbre de Londres no haya sido “liberemos los intercambios entre las naciones”, sino “miente, que algo queda”.



Rose Friedman

24 de septiembre de 2009

El 18 de agosto de 2009 murió Rose Director Friedman, tres años después del fallecimiento de su marido, el gran economista Milton Friedman. Como admirador de la persona y de la obra de Rose, quiero dejar constancia de su paso por la mansión del liberalismo clásico. Precisamente en estos días echamos de menos la ayuda que ella y su marido podrían habernos prestado en los debates motivados por la crisis actual: ellos habrían sabido señalar que la profundidad del crack que hemos sufrido no se debe a los excesos del capitalismo a la americana, que ahora está de moda denunciar, sino a un cúmulo de errores cometidos por las autoridades monetarias y políticas del mundo desarrollado.

Guy Sorman nos ha recordado la broma que George W. Bush, al entregar la Medalla de la Libertad a Milton Friedman, gastó a la pareja diciendo que Rose era la única persona en este mundo que había salido victoriosa de una polémica con Milton. He oído en Madrid recientemente a su hijo David Friedman describir la atmósfera de continuo intercambio de ideas en el hogar de los Friedman, en el que nadie recurría al argumento de autoridad. Las diferencias iniciales nacían a menudo de que Rose era la más radical en su confianza en la libertad económica. Tras detallados intercambios de opinión, solían llegar a un acuerdo, pero a menudo la postura final estaba más cerca de la inicial de Rose. Sabemos que los esposos Friedman sólo en una cuestión mantuvieron la discrepancia sin ceder ninguna de las partes: la II Guerra de Irak, a la que Milton se oponía y que Rose apoyaba. Su matrimonio duró 68 años y fue felicísimo. Aún tengo en la memoria la imagen de Milton y Rose bailando un foxtrot en la reunión del cincuentenario de la fundación de la sociedad Mont Pèlerin: diminuta estatura, ingravidos y armoniosos, su compenetración era la expresión ideal del amor conyugal.

“Los dos somos economistas pero no somos competidores”, dijo Rose en alguna ocasión. Su fuerte personalidad no le impidió seguir fielmente la vida profesional de su marido. Cada vez que Milton tuvo que marcharse otra ciudad por motivo de trabajo ella dejó el suyo. “Era yo lo suficientemente inteligente para saber que él era el más inteligente de los dos”. Con una reflexión típica de alguien que entendía el principio de la división del trabajo en la familia, añadió: “Él era el principal generador de los ingresos de nuestro hogar. Su profesión era la importante. Pero nunca me sentí dejada de lado; creo que gran parte de su éxito me es atribuible a mí”. ¡Bienes complementarios!

Rose Friedman contribuyó sobre todo a la parte más práctica de la obra por la que su marido fue galardonado con el Premio Nobel en 1976. Ciertamente es que, recién casados, colaboró en el acopio de datos estadísticos para lo que luego sería el libro quizá más científico de Friedman, el de la Función de consumo (1957). Sin embargo, las obras que firmaron juntos fueron de carácter aplicado o biográfico.



La primera publicación conjunta fue la de Capitalismo y libertad (1962). En la página de título de ese libro señala Milton que lo escribió “con la colaboración de Rose Friedman”. Así relanzaban una línea de argumentación que ahora parece evidente, pero casi había desaparecido en la primera mitad del siglo XX: que el capitalismo no sólo fomenta la prosperidad sino que sobre todo es la base necesaria de la libertad personal en todos los órdenes. Muchos años más adelante, en 1980, Rose fue coautora de Libertad de elegir (1980), el libro que recogió y amplió los diez episodios de la serie del mismo nombre para la televisión.

Conseguí que esta serie se proyectara traducida al español en TV2 en 1981. El escándalo que produjo en España fue mayúsculo, incluso entre las filas de UCD, el partido entonces gobernante. Me impusieron que cada episodio fuera seguido de un debate en el que participaran también enemigos de la libertad de mercado. No crean que los representantes de la entonces naciente CEOE se mostraron entusiastas del capitalismo: los que hablaban en nombre de los empresarios no salían del “ni tanto ni tan calvo”. No ha habido forma de emitir esta serie otra vez este año, cuando nos inundan otra vez con falacias keynesianas y socialistas. Lean por lo menos el libro en la reciente reedición de la editorial Gota a Gota.

Aún más oportuno para los tiempos que corren es La tiranía del status quo (1984), también producto de la colaboración entre los esposos Friedman. Se enfrenta este libro con una paradoja del liberalismo clásico. El capitalismo ha sido extraordinariamente beneficioso para la humanidad, como lo demuestra el aumento de prosperidad y la reducción de las desigualdades en todas las partes del mundo en que no han fallado los Estados. Pero entonces, ¿por qué es tanta la resistencia a llevar a cabo las reformas liberadoras? En el más pesimista de sus libros, el matrimonio Friedman analizaba los trucos y mecanismos que usan quienes detentan el poder político, sindical y empresarial para mantener sus privilegios a costa del procomún.

En la última producción del matrimonio Friedman, fue Rose la que llevó la voz cantante. Se trata de Dos personas con suerte (1998), el libro de memorias contado por ambos a dos voces. Publicó Rose en Japón un libro de diez capítulos sobre Milton. Decidieron transformarlo en una encantadora autobiografía. Así sabemos el detalle de cómo Milton, que nació en Nueva York, era descendiente de inmigrantes judíos ucranianos. Rose llegó a Portland con su familia de judíos también ucranianos cuando ya tenía dos años. La historia del progreso de estos descendientes de inmigrantes desde la más angustiosa pobreza hasta la prosperidad y la fama pertenece a otros tiempos, en los que los pobres progresaban en EE.UU. por el esfuerzo y el estudio. El hermano mayor de Rose, el economista Aaron Director, le pagó los estudios y la inscribió en la Universidad de Chicago. Allí se encontró con Milton, su compañero de curso en la clase de Jacob Viner. Fue estudiante doctoral con Frank Knight y trabajó con Milton en Washington, en una agencia del New Deal, recogiendo estadísticas sobre el consumo. Floreció así una amistad que, tras un prolongado y respetuoso noviazgo, acabó en matrimonio seis años después, una unión a la que se comprometieron “hasta que la muerte nos separe”. ¡Hermosa historia!





Recorte de las pensiones en España

15 de febrero de 2010

Acuciado por la repentina retirada de la confianza de los inversores extranjeros, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, además de recortes del gasto público y estéticas reformas de las leyes laborales, ha prometido a la Comisión Europea revisar a fondo el sistema de pensiones español para garantizar su solvencia. Al mismo tiempo, ha intentado adormecer la opinión pública nacional presentando esa prometida revisión como una mera sugerencia para su consideración por la Comisión del Pacto de Toledo. No pueden engañarnos. La solvencia de las pensiones públicas en España está en entredicho y ningún maquillaje podrá disimular esa grave situación.

La crisis financiera ya no atenaza sólo a los promotores inmobiliarios o a las cajas de ahorro o a este o aquel banco, sino también al sistema de pensiones, lo que es más peligroso, pues ello hará tambalearse la confianza en la solidez financiera del Estado español en el largo plazo. Se me dirá que la mala situación de la economía privada —con sus quiebras de pequeñas empresas, su creciente paro, su caída de la producción industrial, sus excesivos costes laborales, su contracción del turismo, y las sombras que envuelven a las instituciones financieras— no puede deberse a que las pensiones públicas no puedan pagarse dentro de 10 o 15 años. Sin embargo, si el sistema de pensiones español amenaza quiebra y no se toman medidas para reestructurarlo, se reforzaría la tendencia de los inversores extranjeros a reducir la cantidad de deuda pública española en sus carteras y a pedir un plus de seguro para decidirse a comprar nuevas emisiones de deuda. La fragilidad de nuestro sistema de pensiones podría prolongar ese recargo de interés y dar lugar a una década de anémico crecimiento como la de Japón después de que allí estallara la burbuja inmobiliaria de los años ochenta.

Nuestro sistema de pensiones es de reparto, quiere decirse que los pensionistas no reciben el rédito de lo que ahorraron e invirtieron sino que viven de las cotizaciones actuales de quienes están empleados. Un sistema de reparto parece muy sólido mientras los jóvenes empleados son mucho más numerosos que los mayores pensionistas. Sin embargo, cuando la vida media de la población se prolonga y aumentan los parados en edad de trabajar o los empleados buscan jubilarse cuanto antes mejor, el flujo de caja no basta para sufragar las pensiones. El sistema de reparto es sostenible sólo si la vida laboral se prolonga a medida que las personas viven más años y si los trabajadores empleados aumentan su productividad, entre otras cosas porque no están en el paro. Nuestro sistema, pues, depende crucialmente de que el Estado incumpla las promesas sobre la edad de retiro, de que el mercado de trabajo no sea una fábrica de parados, y de que la economía en su conjunto sea cada vez más productiva y competitiva.



En consecuencia, en el sistema coactivo e impositivo que es el nuestro, el Gobierno no tiene más remedio que decidirse por una combinación de retraso de la edad de jubilación, de reducción del monto de las pensiones y, si le fuera posible, de aumento de las cotizaciones. Ello desataría (en realidad, desatará) la protesta de los trabajadores que querrían gozar de largos años de jubilación, de inminentes pensionistas que confiaban en el ingreso que se les había prometido, y de empresarios que ven las cotizaciones de la egresa como un impuesto sobre la mano de obra empleada. Sin embargo, salvo si se reforma a fondo el sistema, un Gobierno acuciado por la posible suspensión de pagos y carente de escrúpulos (lo que se llama un “Gobierno responsable”) no tiene otra salida que la presentada a Bruselas: alargar la vida laboral a los 67 años, extender el período sobre el que se calcula la pensión de los últimos quince años a los últimos veinticinco y usara el respiro de ese menor gasto para reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. El presidente del Gobierno debería explicar lo que ocurre y la Oposición apoyar ese doloroso recorte.

Algo más hay que hacer, sin embargo. Estas dificultades se platearán de forma recurrente en un sistema de reparto, sobre todo si los Gobiernos no son capaces de reducir los privilegios de empleados antiguos y de representantes sindicales ni de conseguir mejoras de productividad para que las pensiones no se conviertan en una carga insostenible. El saneamiento de un sistema de reparto tiene que ir acompañado de una reforma del mercado de trabajo y del sistema educativo, sobre todo por lo que se refiere al aprendizaje. Mas lo verdaderamente importante es que España se plantee la paulatina transformación del sistema de pensiones hacia otro de capitalización, para que al menos una parte de la pensión fluya de lo que cada trabajador ha ahorrado para su jubilación. El sistema de reparto es siempre inviable. Hay que dismantelarlo, aunque sea poco a poco, pero esto es tan revolucionario en nuestro país que habrá que dejarlo para otro día.



España: No entienden el Euro

24 de febrero de 2010

Los mercados dieron repentinamente la espalda a España. El viejo esbirro que es Pepiño Blanco se ha quitado el disfraz de ministro de Fomento. Con certero instinto político, ha atribuido la caída de la deuda pública y los valores españoles en las Bolsas del mundo a una “conspiración bien orquestada” contra el euro y contra el presidente de España. ¡Qué bálsamo para Rodríguez Zapatero oír que no tiene la culpa de nada y que todo se debe a una conspiración judeo-masónica! ¡Cuánta satisfacción la de socialistas y sindicalistas al descubrir que lo malo que se murmura de España en el FMI, la OCDE y en los corrillos de Bruselas es un complot capitalista! Bien dijo el Dr. Johnson que el nacionalismo es el último refugio del rufián.

No entienden cómo funciona el euro. Cuando en 2008 España se adhirió a la nueva zona monetaria, todo fueron parabienes. Entrábamos en el club de los países serios. Contribuíamos a la construcción de una Europa mejor trabada. Evitaríamos los peligros de la inflación. Ya no necesitaríamos dolorosas devaluaciones. Ahora el desconcierto es mayúsculo. Resulta que, para alcanzar la prosperidad y la estabilidad, rigen las mismas reglas de conducta cuando usábamos la peseta que cuando contamos en euros. Nada fundamental cambia cuando cambiamos de moneda. En el largo plazo, nunca conviene a la nación que el Estado se endeude en exceso, gaste imprudentemente, imponga pesados impuestos, hinche el número de sus empleados, con pesetas o con euros.

El euro es sobre todo una disciplina. Para entrar en esa zona monetaria, los países tenían que cumplir cuatro condiciones estrictas: reducir el déficit público por debajo de una cifra equivalente al 3% del PIB; no endeudarse por encima del 60% de ese mismo producto nacional; haber mantenido bajos los tipos de interés y haber controlado la fluctuación del tipo de cambio, durante dos años. Los nuevos miembros de la Unión monetaria tenían además que firmar el Pacto de Crecimiento y Estabilidad, que les obligaba a contener el déficit por debajo de ese 3% y la deuda pública por debajo del 60%. Este Pacto no era caprichoso. Su objeto era evitar que los miembros de la zona, especialmente los pequeños, aprovecharan la buena conducta de los demás para lanzarse a gastar y endeudarse sin control.

La ventaja de estar en el euro, si el banco que lo gobierna se comporta bien, es que la inflación no se desboca y los Estados, las empresas y los individuos pueden conseguir crédito a tipos más favorables que si acudieran solos y desarmados a los mercados financieros internacionales. Cuanto mayor sea la confianza de que un país deficitario volverá pronto a las buenas prácticas, menor será el diferencial entre los tipos que se le cargan y los de Alemania (que es el serio de verdad). Pero la confianza de los mercados tiene la triste tendencia de quebrarse repentina y catastróficamente. La falsedad de las estadísticas griegas disimuló durante algún tiempo el pozo sin fondo de la deuda contraída. Cundió la alarma de



que Grecia no podría pagar los intereses y el capital debidos y que suspendería pagos. Su diferencial se disparó y los “especuladores” pusieron los ojos en otros países cuya política auguraba una posible suspensión de pagos en el futuro. Ya se sabe: los especuladores miran al futuro; los gobiernos manirroto se consuelan diciendo que todo se arreglará mañana, en cuanto pase la crisis.

La gente olvida la semejanza entre el euro y el patrón oro. Hace dos siglos, las monedas nacionales tenían que mantener fijo su valor en oro. Un déficit prolongado de las cuentas exteriores desataba la especulación contra la moneda claudicante y la ponía en peligro de ser expulsada del sistema. El banco central tenía entonces que elevar los tipos de interés para contener el crédito y la excesiva actividad. Casi lo mismo ocurre con el sistema del euro, sólo que ahora los gobiernos de los países miembros no tienen el recurso de manejar el tipo de interés en su país. Tienen que tomar medidas directas en la economía nacional, so pena de ser expulsados de Eurolandia. Por doloroso que sea, tienen que volver al superávit presupuestario, reduciendo los impuestos y aún más el gasto. También tendrán que reformar el marco institucional para favorecer la productividad y la capacidad de competir de empresas e individuos. Cuanto mejor aguanten la dureza de la restricción, como lo están haciendo los irlandeses, antes se restablecerá la confianza y volverán las aguas a su cauce. La política necesaria es más difícil cuanto más fragmentada esté la economía de la nación en apuros. Bajo el patrón oro, la gente emigraba a América cuando cundía la crisis. Hoy, las Autonomías protegen sus pequeños mercados y los trabajadores no quieren o les es difícil trasladarse en busca de trabajo. Como Eurolandia no es una zona monetaria óptima, la disciplina local de adelgazamiento tendrá que ser más severa.

De las medidas que han tomado los gobiernos para combatir la crisis desatada en 2007, estaban justificadas las que buscaban evitar la congelación del sistema de pagos y la evaporación de los depósitos bancarios. En cambio, los “estímulos” obamescos, al estilo del Plan E, no han tenido efecto perceptible sobre el empleo y la actividad. Eran Pepiño y Zapatero los que creían que la capacidad de endeudamiento de España era inacabable. ¡Peste de keynesianos!



España: Unos presupuestos tardíos

3 de octubre de 2012

He aquí unos Presupuestos Generales del Estado confeccionados no en el ejercicio de la soberanía nacional sino al dictado de las autoridades monetarias y económicas de la eurozona. El ministro De Guindos los ha resumido como que con ellos podremos los españoles conseguir la línea de crédito prometida y aplazada de €100.000 millones para el rescate bancario, además de franquear el camino al Banco Central Europeo (BCE) para que comience a comprar deuda pública española en el mercado secundario y también recibir el rescate general de los Fondos de Estabilidad Europeos. Si todo esto se hubiera hecho antes, por ejemplo en el Presupuesto del presente año de 2012, el peso con el que ahora cargamos los españoles habría sido más ligero. Me estoy refiriendo sobre todo a que la carga de intereses de la deuda sería quizá la mitad de lo que se prevé para el año que viene —nada menos que € 38.600 millones— si estas medidas de reequilibrio se hubieran empezado a tomar desde mayo de 2010, cuando el presidente Zapatero abandonó tímidamente el campo de los keynesianos o si el presidente Rajoy no hubiera esperado a las elecciones andaluzas para aplicar todo el paquete.

Mi segunda crítica a este proyecto de Presupuestos es la importancia del ajuste por vía de impuestos. Cuando una economía se encuentra en recesión como lo está la española el ajuste debe centrarse sobre todo en la reducción del gasto. Ciertamente es que con la reducción del gasto se prevé conseguir el 58% del ajuste pero cargar el 42% sobre el aumento de los ingresos es demasiado. No hay que olvidar que el sector privado es el que ha cargado con el peso del ajuste mientras el sector público mantenía su nivel de gasto. La mayor parte del paro que sufre España viene del despido de trabajadores de empresas privadas. El crédito del sistema financiero a las empresas y familias se ha reducido y sigue reduciéndose mientras que el del sector público sigue aumentando. Esto es especialmente grave si se mira desde el exterior: la balanza de pagos básica de España está acercándose al equilibrio porque empresas y familias han reducido drásticamente sus importaciones de bienes y servicios, mientras el Estado y las autonomías siguen teniendo que financiarse fuera. En suma, el recorte del gasto público apenas ha empezado y estos Presupuestos no son sino el principio de lo debería haberse hecho antes.

Se nota cierta satisfacción en la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando destaca que las partidas de gasto social suponen el 63,6% del Presupuesto y que incluso el gobierno acudiría al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones. Aquí está la esencia del problema del Estado español. Pese a la evidencia de que el Estado de Bienestar se ha hecho insostenible, los gobiernos de todos los colores cortan todo menos sus aportaciones a la educación, la salud, las pensiones. Nadie quiere entender que quienes criticamos la financiación a fondo perdido de lo “social” no estamos pidiendo que se recorten los gastos de educación, salud y jubilaciones. Muy al contrario, pedimos que una gran parte de la financiación de esos servicios recaiga sobre los usuarios.



Pedimos un cambio de la estructura de incentivos. Se ha visto lo ocurrido con el cobro de una pequeña cantidad por las medicinas demandadas por los usuarios de la Seguridad Social: el consumo de medicamentos ha caído algo más de un 20%. Lo mismo ocurriría en escuelas, hospitales y fondos de pensiones: si se trasladara la financiación en parte al usuario, la demanda sería menos frívola y los servicios más eficaces. Pero a la vez que aumentarían las tasas deberían reducirse los impuestos, para mejorar el bienestar.

Mi otra reflexión se refiere a la afirmación de los nacionalistas catalanes de que el insostenible déficit catalán se debe a que se ven forzados a transferir excesivos fondos al resto de España. ¡Toda España está en déficit y Cataluña es una de las regiones que más! El sector público ha gastado demasiado y seguirá haciéndolo después de estos Presupuestos. No faltaba más que la Generalitat pudiera retener una parte aún mayor de los impuestos recaudados en Cataluña para seguir comprando votos de una ciudadanía engañada.



Soluciones estables para elecciones en pareja

17 de octubre de 2012

Las especializaciones en el campo de lo económico son tantas y tan recónditas que los estudiosos tenemos mucha dificultad en mantenernos al día. Tengo sólo una idea remota de las aportaciones de los profesores Lloyd Shapley, de UCLA, y Alvin Roth, de la Escuela de negocios de Harvard, al estudio del comportamiento humano en sociedad (como ven, considero la sociología una provincia del imperio de lo económico). No debo fingir que sé lo que ignoro pero tampoco quiero apoltronarme en la ignorancia. Trataré de explicar lo que he entendido de las razones por las que estos dos estudiosos han recibido el preciado galardón del Nobel.

Su campo de trabajo ha sido el de las asignaciones estables en mercados en los que no se equilibran por medio de precios. El título de un trabajo de Shapley, publicado junto con David Gale, les indicará algo de la originalidad de su enfoque: “Admisiones en las universidades y la estabilidad del matrimonio” (1962, acabo de leerlo, pues no es ético citar lo que no se ha leído). El problema del que tratan es el de definir soluciones estables para elecciones en pareja, sean éstas las de un centro y los estudiantes que en él se matriculan o el de tres hombres y tres mujeres que eligen pareja con la que casarse. La solución es estable si los partícipes consideran que no mejorarían con cualquier otra asignación. La solución es inestable si un hombre y una mujer, ya emparejados con otro, querrían ponerse de acuerdo para unirse entre sí. De igual manera, sería inestable la situación en la que una Facultad y un estudiante prefiriesen unir sus destinos pese a que ya estuvieran asignados separadamente. Esta rama de lo económico se llama la Teoría de los juegos cooperativos precisamente porque se trata de cómo se organizan las elecciones en pareja, sea en el campo matrimonial como en el universitario.

Las soluciones espontáneamente aparecidas en el mercado son a menudo subóptimas e inestables. Para mejorar las asignaciones, Gale (que murió en 2008) y Shapley diseñaron un método por el que pudieran los partícipes acercarse al óptimo. Dos reflexiones son pertinentes en este punto: óptimo en economía no quiere decir perfecto sino la situación menos mala que se pueda conseguir de tal forma que uno preferiría no moverse de ella. En el ejemplo de las tres parejas, la solución óptima puede ser que ninguno se case con la persona de su primera elección. La segunda reflexión es que las soluciones a este tipo de problemas no son de las que consisten en despejar unas incógnitas para conseguir de una vez valores finales de equilibrio, sino en acercarse paso a paso a una solución cada vez más cercana al óptimo. El método en cuestión se llama el ‘algoritmo Gale-Shapley’, pues algoritmo quiere decir un proceso iterativo por el que se prueban soluciones de forma numérica.

Con su artículo, Gale y Shapley se mantenían en el campo de la teoría abstracta, lo que no quiere decir que no obtuvieran resultados interesantes. Así, en el problema de la elección



matrimonial hicieron ver que los hombres se veían favorecidos cuando eran ellos los que elegían a las mujeres, mientras que a ellas les favorecía la situación estable que comenzaba con ellas eligiendo.

En la década de 1990, Roth pasó a la aplicación práctica del citado algoritmo. En una conferencia en vídeo del año 2007, explicó alguna de sus propuestas, ampliamente aceptadas, para mejorar mercado de elecciones cooperativas. La más conocida y ampliamente aplicada es la de la elección de médicos jóvenes por hospitales y de hospitales por médicos. En líneas generales, la solución mejor consistía en que las expresiones de preferencia de hospitales y estudiante se centralizaban provisionalmente en un centro de compensación hasta que pudiera aplicarse el algoritmo tras clasificar la mayor parte de las preferencias ordinalmente. El mismo tipo de solución se ha aplicado en el mercado sin dinero de los transplantes, en el que parece haber limitaciones éticas a la compra-venta de órganos. Incluso se ha aplicado esta técnica a mejorar las subastas en internet, en las que también se trata de conseguir emparejamientos estables entre comprador y vendedor. En todo este campo Roth ha usado también la simulación informática y los experimentos de laboratorio económico —una manera de proceder empírica, que el gran público desconoce cuando critica la ineptitud práctica de ciertos economistas—.

En efecto, los fracasos de las predicciones macroeconómicas han llevado a pensar que la economía ni es ciencia cierta ni es técnica aplicable. Las predicciones macro sólo se verifican en plazos largos de hasta diez años o más. El uso de este tipo de algoritmos es inmediatamente comprobable en sus efectos y beneficios. No somos tan inútiles los economistas como se dice en estos tiempos de crisis.



El euro, adulterado por la política

27 de noviembre de 2012

Pese a la resistencia de Alemania y otros países nórdicos, el euro está cambiando de naturaleza. El euro se diseñó como un cuasi-patrón oro. Sus creadores pretendían que fuera una moneda firme cuyo banco central estuviera centrado primordialmente en el control de la inflación. Para que el Banco Central se viera libre de las posibles presiones de políticos acuciados por el malgasto, se le prohibía todo préstamo o crédito a las instituciones de la Comunidad Europea y a los Estados-miembro. La consecuencia, por así decir automática, de estas cortapisas a la actuación del BCE era que los Estados se veían forzados a acudir a los mercados financieros para cubrir sus excesos de gasto. A medida que las necesidades públicas se hacían mayores, más crecía la de colocar deuda pública. En una crisis, los Estados se quedaban sin fondos para salvar sus bancos y cajas cuando éstos se hubieran excedido en sus préstamos. También se encontraban sin fondos para financiar las perentorias demandas de unos sistemas de bienestar social generosamente ampliados en tiempos de bonanza.

Esa disciplina querida por los fundadores del euro es lo que lleva a muchos defensores del liberalismo económico, algunos tan auténticos como Jesús Huerta de Soto, a ver la moneda europea como un acertado invento. En opinión de mi admirado amigo Jesús Huerta, la crisis que tanto dolor nos está causando se debe a los vaivenes de unas monedas carentes de ancla, huecas de valor y multiplicadas imprudentemente por un crédito bancario sin freno. Por eso, había mantenido hasta ahora, con característica energía, que la vuelta al patrón oro era un remedio necesario para la elefantiasis del Estado democrático. Nadie esperaba que saliera en defensa del euro como lo hizo en la reciente reunión de la Sociedad Mont Pèlerin en Praga, cuando tantos liberales lo vienen denunciando desde hace años el euro como una construcción artificial típica de planificadores sociales a la francesa. Es fácil entender el porqué de su nueva postura: ve el euro como una bienvenida disciplina o cilicio para gobiernos incontinentes. Por citar el caso de España, si no fuera por la necesidad de mantenernos en la moneda única, no estaría nuestro gobierno tomando las medidas fiscales y aplicando las reformas sociales que, poco a poco, están enderezando el rumbo del país. Luego el euro es bienvenido.

Esa consoladora conclusión sólo puede mantenerse, sin embargo, si se olvida que todo avezado político europeo es capaz de rivalizar ventajosamente con el mago Harry Houdini, el prestidigitador capaz de escapar de cualquier lazo o nudo con el que el público quisiera atarle. Ciertamente es que los países incumplidores están aplicando (mal que bien) los duros remedios que los prestamistas exigen de ellos —con la excepción de Grecia para la cual la medicina ha llegado tarde—. Pero al mismo tiempo son cada vez más numerosas las voces que se elevan exigiendo una reforma del euro y del BCE, para convertir la moneda única en una típica divisa fiduciaria, reducida a ser un instrumento de política económica al servicio de los gobernantes de turno.



Imitación de EE.UU.

Cuando hablan de la necesidad de permitir que el BCE compre deuda pública de los Estados-miembro, de la urgencia de conseguir una unión bancaria, de la conveniencia de dotar la eurozona de una Hacienda común que sepa gastar para promover el crecimiento, en realidad quieren que el euro se convierta en una moneda como la de EE.UU., donde se ha permitido que la deuda pública pase del 100% del PIB y los votantes reelijan a un presidente a quien no le ha importado llevar al país al borde de un "precipicio" financiero. Pese a la resistencia de la opinión pública alemana, finlandesa u holandesa, los países deudores están consiguiendo transformar el sistema monetario de la UE en una futura caja de financiación de gobiernos sin disciplina. Temo, pues, que aquel banco central independiente de todo poder político, que aquel euro con aspiraciones de ser una moneda firme, creados por el Tratado de Maastricht y reforzados por el primer Pacto de Estabilidad y Crecimiento, hayan muerto para ser sustituidos por algo parecido al dólar y a la Reserva Federal.

En el momento del nacimiento de la moneda europea se reunieron alrededor de la cuna muchas hadas buenas. La una prometió que serviría para reducir los costes del comercio entre las naciones del Continente. La otra vaticinó que fomentaría la extensión del mercado único. Una tercera habló de las facilidades para los turistas, cansados de pagar comisiones en sus cambios de moneda. La cuarta destacó que la nueva moneda facilitaría los flujos de capitales y reduciría los tipos de interés de todos los miembros al nivel de Alemania. Pero repentinamente se lanzó sobre la cuna el brujo Delors, que profetizó que la infante será esclavizada para servir como instrumento y símbolo de una Unión centralizadora, gobernada por oscuros eurócratas. Ahora vemos que ha prevalecido la visión de ese político social-cristiano francés. Con tal de que la bandera del euro no se deshilache, cualquier debilidad ante las fuerzas de la inflación es excusable.

Querido Jesús Huerta: si los políticos fueran ángeles yo también creería en el euro.



España: El envejecimiento como una bendición

20 de diciembre de 2012

La actual crisis del sistema de pensiones de la Seguridad Social lleva a que muchos deploren el aumento del número de personas mayores en España como proporción de la población total. Casi parece que sea una maldición el que los mayores no se mueran a los 62 años, que era la media de edad del fallecimiento de los jubilados hacia 1880 en la Alemania del creador de los seguros sociales, el canciller Bismarck. ¡Caramba! Como persona que ha superado esa frontera y que sigue trabajando a tiempo completo respondo: "Que se mueran ellos". Ciertamente con el paso del tiempo las facultades desmejoran y los achaques y alifafes aumentan pero ya saben: "La vejez es molesta pero más desagradable es la alternativa". Gracias a la medicina moderna, los mayores somos capaces de seguir contribuyendo a la economía y la sociedad durante largos años después de la edad obligatoria de jubilación. Y sin embargo se nos presenta como una carga. ¿Quiere decirse que sobramos? ¿Que quienes tenemos la desfachatez de vivir muchos más años de lo que lo hizo la generación anterior somos culpables de las dificultades por las que está pasando el sistema de pensiones públicas?

La mala coyuntura de las pensiones en España

Nadie tiene duda alguna de que el sistema de pensiones públicas está pasando por un mal momento en España. Un sistema de reparto como el nuestro, en el que las pensiones se financian con las aportaciones de quienes tienen un empleo, sufre cuando el paro aumenta hasta las cotas aquí alcanzadas. En los cinco años que lleva durando la crisis, la Seguridad Social ha perdido 2,9 millones de trabajadores afiliados de los 19,4 con que contaba. En este solo reglón, la recaudación ha disminuido en 4.163 mil millones de euros. A ello hay que añadir otros 2,4 millones de euros por los aplazamientos de las contribuciones empresariales concedidos por la Seguridad Social a empresas en dificultades. El total de la pérdida anual traída por la crisis del empleo ha sido evaluada en 67.563 millones de euros por el Ministerio del ramo y el déficit previsto para 2012, en 10,5 millones de euros. Ciertamente es que la Seguridad Social cubre bastantes más riesgos que el de la jubilación, en especial las prestaciones por desempleo, pero el 60% de ese déficit hay que atribuirlo a las dificultades del sistema de pensiones. Por ello, ha tenido que sacar más de 4.000 millones de euros del fondo de Prevención y Rehabilitación, el excedente acumulado por las mutuas que, por cuenta de la Seguridad Social, gestionan las cotizaciones y prestaciones por incapacidad laboral transitoria. También ha tenido que tomar 4.400 millones de tesorería del Fondo de Reserva, donde sólo queda el equivalente de ocho meses de pensiones. Incluso así, se ha visto obligado a tomar finalmente una medida especialmente dolorosa: no actualizar las pensiones este año en línea con la inflación de este año, que se espera alcance el 3,4% y ahorrar así 2.300 millones de euros. Era inevitable. Sólo ha podido suavizar esa pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas reduciendo el recorte para los seis millones seiscientos mil de ellos que reciben menos de mil euros mensuales.

Fallos de estructura

Más nos deben preocupar los problemas de fondo del sistema de pensiones español. Para eso, miren la pirámide de población que acompaña este artículo. Ni es una pirámide ni es nada. Aparten la vista de la línea azul, que representa las edades de inmigrantes en la parte medio y de los jubilados extranjeros en la alta. Visto el ensanchamiento de las barras de los 30 a los 50 años y su adelgazamiento de los 60 a los 30, podemos prever con alguna certeza



que nos esperan 30 años de lenta caída de la proporción de pensionistas a trabajadores. La tasa de sustitución se sitúa hoy en España en una media en 2,3 cotizantes por cada pensionista. En los años 70 esa proporción se encontraba en cuatro cotizantes por trabajador. El umbral de la sostenibilidad de un sistema de pensiones de reparto suele fijarse en dos trabajadores por jubilado. El mantener las pensiones cuando se acerca uno a ese umbral exige subidas de impuestos. Por eso la OCDE ha previsto que el coste del sistema de pensiones pase de ser el 8,95% del PIB en 2011 al 15,5% en 2050. Imaginen el aumento de la fiscalidad sobre el factor trabajo que ello supondrá.

La actual crisis del sistema de pensiones de la Seguridad Social lleva a que muchos deploren el aumento del número de personas mayores en España como proporción de la población total. Casi parece que sea una maldición el que los mayores no se mueran a los 62 años, que era la media de edad del fallecimiento de los jubilados hacia 1880 en la Alemania del creador de los seguros sociales, el canciller Bismarck. ¡Caramba! Como persona que ha superado esa frontera y que sigue trabajando a tiempo completo respondo: "Que se mueran ellos". Ciertamente con el paso del tiempo las facultades desmejoran y los achaques y alifafes aumentan pero ya saben: "La vejez es molesta pero más desagradable es la alternativa". Gracias a la medicina moderna, los mayores somos capaces de seguir contribuyendo a la economía y la sociedad durante largos años después de la edad obligatoria de jubilación. Y sin embargo se nos presenta como una carga. ¿Quiere decirse que sobramos? ¿Que quienes tenemos la desfachatez de vivir muchos más años de lo que lo hizo la generación anterior somos culpables de las dificultades por las que está pasando el sistema de pensiones públicas?

La mala coyuntura de las pensiones en España

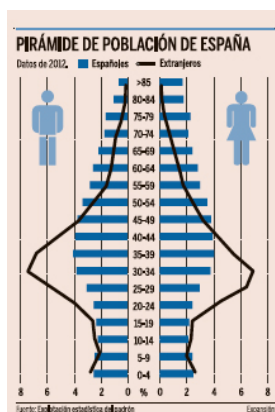
Nadie tiene duda alguna de que el sistema de pensiones públicas está pasando por un mal momento en España. Un sistema de reparto como el nuestro, en el que las pensiones se financian con las aportaciones de quienes tienen un empleo, sufre cuando el paro aumenta hasta las cotas aquí alcanzadas. En los cinco años que lleva durando la crisis, la Seguridad Social ha perdido 2,9 millones de trabajadores afiliados de los 19,4 con que contaba. En este solo reglón, la recaudación ha disminuido en 4.163 mil millones de euros. A ello hay que añadir otros 2,4 millones de euros por los aplazamientos de las contribuciones empresariales concedidos por la Seguridad Social a empresas en dificultades. El total de la pérdida anual traída por la crisis del empleo ha sido evaluada en 67.563 millones de euros por el Ministerio del ramo y el déficit previsto para 2012, en 10,5 millones de euros. Ciertamente es que la Seguridad Social cubre bastantes más riesgos que el de la jubilación, en especial las prestaciones por desempleo, pero el 60% de ese déficit hay que atribuirlo a las dificultades del sistema de pensiones. Por ello, ha tenido que sacar más de 4.000 millones de euros del fondo de Prevención y Rehabilitación, el excedente acumulado por las mutuas que, por cuenta de la Seguridad Social, gestionan las cotizaciones y prestaciones por incapacidad laboral transitoria. También ha tenido que tomar 4.400 millones de tesorería del Fondo de Reserva, donde sólo queda el equivalente de ocho meses de pensiones. Incluso así, se ha visto obligado a tomar finalmente una medida especialmente dolorosa: no actualizar las pensiones este año en línea con la inflación de este año, que se espera alcance el 3,4% y ahorrar así 2.300 millones de euros. Era inevitable. Sólo ha podido suavizar esa pérdida de poder adquisitivo de los



pensionistas reduciendo el recorte para los seis millones seiscientos mil de ellos que reciben menos de mil euros mensuales.

Fallos de estructura

Más nos deben preocupar los problemas de fondo del sistema de pensiones español. Para eso, miren la pirámide de población que acompaña este artículo. Ni es una pirámide ni es nada. Aparten la vista de la línea azul, que representa las edades de inmigrantes en la parte medio y de los jubilado extranjeros en la alta. Visto el ensanchamiento de las barras de los 30 a los 50 años y su adelgazamiento de los cero a los 30, podemos prever con alguna certeza que nos esperan 30 años de lenta caída de la proporción de pensionistas a trabajadores. La tasa de sustitución se sitúa hoy en España en una media en 2,3 cotizantes por cada pensionista. En los años 70 esa proporción se encontraba en cuatro cotizantes por trabajador. El umbral de la sostenibilidad de un sistema de pensiones de reparto suele fijarse en dos trabajadores por jubilado. El mantener las pensiones cuando se acerca uno a ese umbral exige subidas de impuestos. Por eso la OCDE ha previsto que el coste del sistema de pensiones pase de ser el 8,95% del PIB en 2011 al 15,5% en 2050. Imaginen el aumento de la fiscalidad sobre el factor trabajo que ello supondrá.



La pirámide señala la causa más profunda del problema: la caída de la natalidad, apenas paliada por la llegada de inmigrantes dispuestos a tener hijos. España apenas alcanza 10,4 niños nacidos por cada mil habitantes, lo que no basta para mantener estable la población. Notable es el número de abortos: en 2010, más de 111 mil, comparados con 485 mil nacimientos vivos. Así, no cabe culpar a los mayores de ser demasiados.

El trabajo de los mayores

Vista la escasa natalidad, no hay otra solución que ponernos los mayores a trabajar. Lo inmediato es reducir las jubilaciones anticipadas. Es un error fijarse sólo en la edad legal de



jubilación de los 65 años. Por término medio, la edad efectiva de retiro se encuentra en los 63 años y un poco más. Por eso, el gobierno ha endurecido las condiciones para gozar de esa anticipación (si es que se puede decir “gozar” a dejarse llevar por la corriente hacia abajo sin hacer nada). Aparte de la capitalización progresiva de las pensiones, que dejó para otro día, la única salida se encuentra en extender la vida laboral de los mayores. La edad legal de jubilación aumentará a partir del 1 de enero de 2013, cuando la nueva normativa entre en vigor, a razón de un mes cada año durante los seis primeros años, hasta 2018, y de dos meses cada año a partir de entonces, de forma que los primeros trabajadores que se retiren a los 67 años lo harán en 2027. Además, la ley prevé que, a partir de entonces, la edad de jubilación se siga retrasando en función del aumento de la esperanza de vida, según revisiones que se realicen cada cinco años. Por desgracia, son aún pocos los jubilados que aprovechan la posibilidad de combinar pensión con trabajo remunerado, un poco más de cien mil. ¿Para cuándo poder trabajar a jornada completa pudiendo mantener gran parte de la pensión?



España: De la reacción a la estrategia de la transformación

11 de enero de 2013

La travesía del año 2012 no ha estado exenta de tormentas, vientos cruzados y momentos de calma chicha. Incluso parte de la tripulación se ha insubordinado clamando (en catalán) que quería arriar uno de los botes salvavidas para navegar por su cuenta. No han visto la película *La vida de Pi* ni imaginado lo que sería ir mar adelante en un esquife con un tigre bizco a bordo.

Es cierto que el gobierno no ha hecho bien algunas cosas. Aplazó tres meses la preparación y aprobación de los presupuestos. Dudó y cambió de criterio en materia de la reforma de la banca y cajas de ahorro. Aumentó los impuestos dos veces, principalmente por presión de las autoridades europeas y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Consolidar las cuentas públicas en momentos de recesión intentando aumentar los ingresos, sobre todo con una elevación de los impuestos sobre la renta y de sociedades puede suponer un retraso de la recuperación. Hace poco lo explicó así el economista estadounidense Arthur Laffer en Madrid: “cargamos impuestos sobre el tabaco para que la gente fume menos; cargamos impuestos sobre el alcohol para que la gente beba menos; y aumentamos el impuesto sobre la renta para que la gente trabaje menos”.

Sin embargo es más lo que ha hecho bien, con todo y aunque duela tanto el cilicio que nos han colocado. Ha sido un acierto evitar a toda costa un rescate de la nación, con ayuda, es verdad de un cuantioso rescate del sistema financiero. Mientras sigan razonables los tipos de interés a los que tiene que emitir el Estado, será bueno que mantengamos alejados los hombres de negro, que sin duda volverían a pedir alzas de impuestos —una verdadera obsesión en los círculos de Bruselas. La reforma laboral podría haber ido más lejos en la dirección del contrato de trabajo único pero lo conseguido en materia de flexibilización de ese mercado está teniendo su efecto: al principio con un aumento del paro (aún queda por digerir la reducción de empleos en el sector financiero y el sector público), más adelante, con un incentivo para contratar. Hecho lo peor, se trata de no dejarse amilanar por las protestas.

Lo más importante para el futuro del país es lo que queda por hacer. Para explicar y poner en marcha las reformas de mayor calado (por seguir con la metáfora marinera) es indispensable pasar de una política de reacción a una estrategia de transformación. Pensiones, educación, sanidad, sector público, autonomías: he aquí la tarea de los tres próximos años. El Estado de Bienestar y la organización del Estado no se pueden reformar sin el apoyo, aunque sea pasivo, de la opinión pública.

Para eso es necesaria la explicación de un ideario. Hay que explicar que el control de las jubilaciones anticipadas y el retraso de la edad de jubilación no se aplican para hacer sufrir a



los mayores sino para darles la posibilidad de elegir unos años más de actividad remunerada. Hay que recordar que una buena formación es garantía de una vida más llena y no sólo en sentido económico. La sanidad es insostenible si los pacientes no contribuyen a pagar algo de lo que gastan. Las administraciones tienen que cargar ahora con el peso de los recortes sufridos por el sector privado.

El rumbo está claro. El capitán y los oficiales deben poner de su lado a la marinería.



España: Iberia se salvará si la dejan

11 de febrero de 2013

Crece la preocupación por el futuro de Iberia. Los sindicatos de los trabajadores de tierra y tripulantes de cabina han convocado paros totales los cinco días laborables de las semanas del 18 de febrero, de 14 marzo y del 18 de marzo. No sabemos si la convocatoria incluye los trabajadores de los talleres de reparación y los de handling de maletas, dos actividades en las que Iberia trabaja para un centenar de otras compañías y en distintos aeropuertos. Los pilotos, entretanto, callan taimadamente, aunque no parecen haber abandonado su veto a la creación de Iberia Express. Si los sindicatos siguen así, acabarán llevando a Iberia a la quiebra, lo que no creo que deseen.

Los problemas de Iberia son de tres tipos: la situación competitiva de la aerolínea; sus pérdidas y necesaria reestructuración; y su relación con British Airways. Iberia se enfrenta con la dura competencia del ferrocarril en España y de las líneas de bajo coste en Europa. En cuanto al AVE, ¿qué hacer contra un modo de transporte cómodo y rápido, subvencionado con el uso gratuito de la infraestructura de vías y catenarias? Sin contar con que la Alta Velocidad no lleva viajeros al Terminal 4 de Barajas, que ahora está subutilizado. Por otra parte, los viajeros ocasionales ya saben buscar vuelos baratos en internet, con precios mínimos según disponibilidad y momento.

La crisis ha hecho que muchos habituales de la clase business pasen a clase turista por necesidad o por pudor. Además, los viajeros regulares han notado algún empeoramiento del servicio a bordo y una reducción del espacio de los asientos. Por consiguiente, Iberia necesita concentrarse en las líneas donde los mayores márgenes le permitan ofrecer más comodidad, en especial las que van a Iberoamérica y algunas de mayor tráfico en Europa.

Tras trece años consecutivos de beneficios, la situación de Iberia comenzó a empeorar en 2009, año en que todas las aerolíneas regulares perdieron dinero. En 2010 y 2011 el mercado español se ha desplomado, en especial por lo que se refiere a los viajes de placer: la agencia Viajes El Corte Inglés habla de una caída de la demanda de un 25%. El resultado es que Iberia ha perdido 300 millones de euros en 2012. Una compañía aérea privada como es Iberia necesita una situación financiera sana, aunque sólo sea para infundir confianza a quienes les financian en modo de leasing los nuevos aviones que necesita.

Un mercado deprimido exige reducir producción y abaratar costes. Ya son pocos los españoles que visitan Cuba y Santo Domingo: el turismo que se salva se dirige a México, Perú y Chile. Los viajes de negocios se concentran en estos últimos países y otros que están económicamente vivos. Es necesario, pues, abandonar destinos. Los números rojos de Iberia no se deben sólo a la flaca demanda sino también a los exagerados costes.



En los vuelos de largo alcance, los pilotos de los rivales a veces cobran tres veces menos que los de Iberia. Una azafata de largo radio gana 90.000 euros al año trabajando 12 ó 13 días al mes. Para resolver esta situación se necesita una reducción de personal y remuneraciones, lo que está resultando difícil por la resistencia sindical y un sesgado laudo arbitral. La dificultad mayor se encuentra en los sindicatos minoritarios como el SEPLA de los pilotos, pues, hasta el momento, con los llamados “de clase” había sido posible encontrar puntos de acuerdo.

Con el fin de evitar las condiciones leoninas del convenio colectivo de Iberia, la dirección ha creado Iberia Express para cubrir los trayectos de corto y medio alcance. Hace poco volé a Santiago de Compostela en un avión de esta subsidiaria: igual calidad y mayor puntualidad que en los vuelos de la compañía madre. Las azafatas eran más jóvenes y los pilotos me dicen que cuestan menos, aunque sean también miembros del SEPLA. Tanto Iberia Express como Vueling, otra subsidiaria de Iberia, ganan dinero. En suma, si el grupo Iberia pierde 300 millones de euros al año, necesita reducir costes de forma permanente por unos 350 millones para obtener beneficios.

El expediente de regulación de empleo que Iberia ha propuesto a los sindicatos tiene dos fines: reducir el personal en todas las líneas de producción pero sobre todo reducir el coste y aumentar la productividad de los que permanezcan. De partida, el número de despedidos era de 4.500 empleados: en su última oferta, la compañía lo ha reducido a 3.147, si es con garantía de mayor productividad. Entiendo bien la angustia de los amenazados con perder su puesto de trabajo: por mucha indemnización que consigan siempre será insuficiente ante el panorama de un mercado laboral deprimido. Mayor, sin embargo, debería ser la preocupación de los que aspiran a quedarse: la huelga anunciada podría costar a la compañía 100 millones de euros... y su existencia.

El SEPLA intenta destrozarse la imagen pública de Iberia tocando la tecla nacionalista. Los pilotos no paran de decir que British Airways, como sociedad de la páfida Albión que es, aprovecha la crisis de Iberia para quedarse con la compañía y el Terminal T4, como los ingleses se quedaron con Gibraltar. Los hechos dicen otra cosa.

En noviembre de 2009, las dos compañías decidieron unir sus fortunas de la única manera que la política de competencia de la Comisión Europea permite hacerlo: creando un holding propietario de ambas. Su ambición era y es crear un poderoso grupo aéreo de alcance mundial. En enero de 2011 nació pues IAG, que así se llama el holding.

Una estricta valoración de activos dio lugar a que los accionistas de Iberia se vieran atribuir el 45% y los de BA el 55% de IAG. No se tomó en cuenta que entonces la compañía española mostraba pérdidas y la británica beneficios. La distribución inicial de acciones no ha impedido que ambas tengan su propio consejo de administración, en el que respectivamente nombran mayoría de consejeros.



Más importante es que el consejo de IAG es paritario; y que su presidente es el de Iberia y el consejero delegado, el mismo de BA. Ni un solo céntimo ha pasado ni puede pasar de Iberia a BA ni de BA a Iberia. El descubierta de BA por sus obligaciones con sus pensionistas, que se calcula en 3.700 millones de euros a lo largo de los próximos 40 años, es un “debe” de BA, no de Iberia.

Las pérdidas de Iberia no recaen sobre BA sino sobre IAG. Naturalmente, los accionistas de IAG, una compañía cotizada en las Bolsas de Londres y de Madrid, cuidarán de conseguir buenos beneficios con los que atender debidamente a las pensiones de BA. Un primer paso será cortar por lo sano las pérdidas de Iberia. “El nacionalismo es el último refugio de los pícaros”, dijo en una ocasión el Dr. Johnson, gran polígrafo inglés del siglo XVIII.



No hace falta corralito

9 de abril de 2013

Desde el puente de mando del “Euro”, la oficialidad grita órdenes contradictorias a la marinería para que arranque o detenga diferentes bombas de achique. El capitán y sus lugartenientes acaban de descubrir que el buque estaba mal diseñado. En los años de bonanza lo llevaron a mares peligrosos. Ahora el tifón financiero lo pone en peligro de zozobra. ¿A dónde dirigir el rumbo? ¿Volver al puerto de salida y recomponer el diseño original o seguir mar adentro hacia la Terra Ignota de “más Europa”? Que el euro estaba mal diseñado lo dijimos muchos desde el inicio. Cierto es que una moneda común tiene grandes ventajas como facilitadora de intercambios y freno de políticas populistas, pero al querer imponerla políticamente se ha obtenido el resultado contrario. El euro se ideó para consolidar la unión política de los europeos. Ahora aparecen en la eurozona dos bandos cada vez más enfrentados: los países del norte, capitaneados por Alemania y Holanda, y los latinos y periféricos, encabezados por Francia. Y, por si fuera poco, la distancia entre el Continente y los británicos aumenta como si los países con historias más o menos recientes de autoritarismo (Salazar, Franco, Pétain, Hitler, Mussolini, Tito, Pilsudski, Horthy, los coroneles griegos... y los sóviets) pudiéramos permitirnos apartar a la democracia liberal más vieja del mundo, aparte de la americana.

No está de más recordar el diseño inicial de la moneda única, tan distinto de la práctica actual. El euro nació con el Tratado de Maastricht como una moneda de nuevo cuño. La emitiría un banco central totalmente independiente de la política y los políticos, solamente dedicado a gestionar el sistema de pagos de la eurozona y de mantener el poder de compra de la divisa común. El Banco Central Europeo (BCE) tendría prohibido conceder créditos o adquirir bonos soberanos de los estados miembro, con la excepción de lo necesario para inyectar o retirar liquidez.

Vista la larga experiencia de que un banco central acaba monetizando la deuda del Tesoro, el propio Tratado de Maastricht y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento firmado después impusieron a los Estados-miembro un máximo de déficit equivalente al 3% del PIB y otro máximo de deuda equivalente al 60%. A la vista está que nada de esto se ha respetado.

Dos defectos y una contradicción han hecho que el euro falle estrepitosamente. El primer error fue creer que la mera existencia del euro haría de la eurozona un verdadero mercado común, en vez de aplazar la imposición de la moneda única hasta el momento en que las economías nacionales hubieran convergido. El segundo fallo fue elegir el Índice de Precios al Consumo como indicador de la estabilidad del valor del euro. Por definición, ese índice no puede incluir los cambios en el valor de los activos inmobiliarios y de los valores de la bolsa, donde unos tipos de interés artificialmente bajos estaban hinchando la burbuja: mejor indicador habría sido el PIB nominal. La contradicción era declarar en el Tratado de



Maastricht que ningún Estado-miembro sería rescatado si quebraba y también que “en circunstancias extremas” se podía acudir a rescatarlo: de hecho, nadie se ha atrevido a expulsar un país incumplidor.

Abandonado el diseño original, la propuesta de los soñadores es navegar hacia una federación de Estados europeos, recalando primero en la Banca Única, pasando luego a emitir eurobonos y, por fin, algún día, creando un Ministerio de Hacienda europeo. No haría falta tanta inspección y regulación bancaria si los depósitos inferiores a 100.000 euros no estuvieran totalmente protegidos. Entiendo por otra parte que ciertas mentalidades se entusiasman con la idea de una gran Tesorería capaz de colocar ríos de deuda pública en el mundo entero, flanqueada por una Hacienda encargada de ingresar impuestos a raudales. Son los mismos que en EEUU creen que apoyan a Obama cuando pide que se eleve el techo de la deuda pública y que se aumenten los impuestos sobre los ricos.

Escollera

En lo inmediato, las medidas tomadas en Chipre y las que se preparan para Eslovenia y Malta indican la escollera en la que seguramente encallaremos. El BCE empieza por salvar a los países en dificultades con descuento de papel a mansalva; luego viene la creación de fondos de estabilidad financiera para combatir la especulación; sigue el envío de la troika para imponer la consolidación fiscal acompañada de “cortes de pelo” a los tenedores de deuda pública e incluso de depósitos bancarios; y la última novedad es un corralito para evitar la huida de capitales.

El corralito podría evitarse si, en vez de limitar la retirada de billetes de los cajeros automáticos y controlar la salida de capitales, se dejara aparecer un mercado de cambio libre entre el euro normal y el euro chipriota. La banca chipriota marcaría con un sello todos los billetes que pusiera en circulación. Las transferencias al extranjero también se harían en dinero “resellado”.

Quienes necesitaran euros normales para comprar fuera o sencillamente para exportarlos acudirían al mercado libre a cambiar su moneda sellada por euros europeos. Por su parte, los exportadores chipriotas repatriarían los euros normales obtenidos y tendrían el incentivo de una ganancia en el cambio. Los residentes en Chipre y los acreedores extranjeros sufrirían un “corte de pelo” automático, sin necesidad de troika alguna. Chipre tendría dos monedas, aunque la competencia de los euros normales frenaría la sobre emisión de euros chipriotas. No hay como permitir que se organice un mercadillo para corregir los errores de la Administración.



Lady Thatcher, la más admirada y la más odiada

15 de abril de 2013

Margaret Thatcher fue una de los mejores gobernantes del Reino Unido en el siglo XX: no sólo transformó la escena laboral, en especial durante su larga confrontación con los mineros del carbón, sino que venció el monstruo de la inflación controlando la política monetaria y conteniendo del gasto público. Inició la política de privatizaciones de empresas públicas, luego imitada en el mundo entero. Desreguló la Bolsa y abrió las profesiones a la competencia. Luchó sin desfallecer contra los terroristas del IRA (Armada Republicana Inglesa). Llevó con orgullo el mote de “dama de hierro” que le pusieron los soviéticos y lo revalidó en las Falkland al vencer a los espadones argentinos. Supo enfrentarse con los burócratas de Bruselas en defensa de una Europa basada en la democracia nacional. Mas, a pesar de todo eso o quizá por eso, concitó el odio de conservadores flojos de remos en su partido y en la Iglesia anglicana, de intelectuales paternalistas anidados en la universidad y las artes, de socialistas nacionales y extranjeros, de federalistas europeos, de anti-yanquis viscerales y, sobre todo de los 364 expertos económicos que firmaron una carta en 1981 anunciando un final catastrófico a sus políticas ortodoxas —precisamente cuando la economía británica empezaba a revivir.

En 1975 consiguió convertirse en líder del partido conservador al vencer a Edward Heath en una votación de los diputados de su grupo en la Cámara de los Comunes. Heath representaba el paternalismo más tradicionales, el conservadurismo de los partidarios del Estado de Bienestar, de la concertación social, del gasto público como instrumento de crecimiento económico. Margaret Thatcher era mujer por lo que no podía acudir a las tradicionales reuniones de la elite del partido en el Carlton Club; era hija de un tendero y tan estudiosa que se había licenciado en Química y Derecho y ejercido ambas carreras. No podía concebirse nada más contrario al establishment de los príncipes de la derecha. En sus declaraciones nada más elegida líder, dejó bien clara su posición radicalmente democrática y contraria a lo que había sido el consenso político de laboristas, conservadores y sindicalistas desde el final de la Segunda Guerra Mundial: “En una sociedad libre, el poder tiene que estar bien distribuido entre los ciudadanos y no concentrado en manos del Estado. Y ese poder ha de tener como base una amplia difusión de la propiedad privada entre los ciudadanos y no estar en manos del Estado”.

Siendo ya primera ministra, hizo unas declaraciones a una revista para amas de casa que causaron escándalo entre los bienpensantes. De estas declaraciones no suele citarse más que la primera frase, tan chocante para los colectivistas de todos los partidos: “No hay tal cosa como la sociedad”. Pocos leyeron las frases siguientes: Lo que existe “es un tapiz de hombres y mujeres y la belleza de ese tapiz y la calidad de nuestras vidas depende de cuánto estemos cada uno de nosotros dispuestos a hacernos responsables de nosotros mismos y preparados para ayudar con nuestros esfuerzos a quienes son más desafortunados” que nosotros. El conservadurismo de Margaret Thatcher tenía profundas raíces cristianas y se basaba en la



responsabilidad personal y el respeto de la vida comunal creada por las acciones de hombres y mujeres libres.

Su obra

Nada más llegar al poder suprimió los controles de cambio de un plumazo. Escribo desde la Argentina, donde su personalidad ejerce una fascinación casi enfermiza. Los argentinos no perdonan que no les entregara las Malvinas sin hacer caso de la voluntad de sus habitantes pero envidian una gobernante democrática que supo devolver a sus ciudadanos la libre disposición de sus dineros —ellos que sufren de tres tipos de cambio arbitrarios y soportan pacientemente que los perros de la aduana busquen billetes de banco en su equipaje como si fuera droga.

Su principal batalla económica fue la lucha contra la inflación. En el Congreso de su partido de 1981, cuando más dura era la recesión causada por sus restricciones, pronunció una frase que se hizo famosa: “The lady is not for turning”, que no estaba dispuesta a cambiar de rumbo. Señaló que los países con menor inflación también sufrían menos paro —refiriéndose a Alemania. El gasto de las autoridades locales tenía que disminuir para que no desplazara el crédito a las empresas. “Un gasto público más elevado, lejos de curar el desempleo, puede ser el origen de pérdidas de empleo y de quiebras de empresas”.

También al principio de su mandato, se dejó convencer por algún euro-entusiasta de su Gobierno para uncir la libra esterlina al llamado Sistema Monetario Europeo. Ello suponía unirse a la política monetaria del Bundesbank, cuando la economía británica era aún muy rígida. Ese Sistema quebró en 1992, cuando John Major ya era primer ministro. Pero en 1990, cuando llegó el momento de unirse o no al euro, Thatcher sabía lo conveniente para su país y Europa: en vez de imponer una moneda única, [¿]“no sería mejor tomar la vía evolutiva, [... con] una moneda común europea dura circulando en paralelo con las monedas nacionales, de tal forma que la gente elija cuál usar”[?].

Sus logros perennes fueron los obtenidos en la flexibilización de la economía: embridó los sindicatos, sin ceder a casi un año de huelgas de dureza salvaje; privatizó las compañías aéreas, los transportes por carretera, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, la electricidad, el gas. Vendió a los residentes un millón y medio de viviendas municipales. Su ejemplo cundió en el mundo entero. Su postura frente a los terroristas irlandeses no desfalleció en ningún momento, ni siquiera cuando fallecieron algunos por huelga de hambre. La bomba en el Congreso de 1984, que casi la mató, tampoco la hizo cambiar de política.

La gran oradora



Los debates en los Comunes son muy distintos de los de nuestro Parlamento. El orador puede permitir a los diputados interrumpirle. Vale la pena ver a lady Thatcher despachar a sus contrarios cuando ya la habían desplazado sus compañeros del cargo de primera ministra. Alguien le preguntó qué haría con la cuestión europea después de dimitir. Otro izquierdista exclamó entre risas: “Presidirá el Banco Central Europeo”. Ella replicó: “No se me había ocurrido”. Añadió entre risas: “Esto me está divirtiendo”. Otro gallo nos cantaría...



“No llores por mí, Argentina”

24 de abril de 2013

"No llores por mí" cantaba Evita Perón a las masas de descamisados en el musical de Andrew Lloyd Weber y Tim Rice. Argentina debería llorar pero no porque ella vino a faltar sino porque con ella y con Juan Perón comenzó el calvario populista de aquel hermoso país, al que la Providencia ha dotado con tantos recursos. Los vaivenes de la política argentina desde que Perón accedió a la presidencia en 1945 son para no contados, por su complicación práctica y confusión ideológica. Lo notable es que una y otra vez, tras repetidos intentos de cambio, ya golpista ya democrático, la tradición peronista siempre vuelve a imponerse: una tradición en su origen mussoliniana, trufada de política social, de intervencionismo económico, de industrialización forzada con los resultados que he vuelto a observar en un reciente viaje.

La actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner sucede a dos mandatarios en apariencia muy diferentes. El primero, Carlos Ménem, se revistió de ropajes capitalistas: realizó amplias privatizaciones en nombre de los principios de la economía de mercado, pero en realidad volvió a abrir la puerta a una desenfrenada corrupción.

El segundo, Néstor Kirchner derivó otra vez hacia el peronismo clásico, con una política exterior cada vez más cercana a la alianza de Hugo Chávez y una acción interior basada en la confrontación partidista y el sindicalismo militante. Le sucedió su esposa Cristina, ahora siempre vestida de luto por la muerte de su marido y sin duda por la muerte de Evita, pese a los lustros transcurridos.

En países que van cuesta abajo, las medidas políticas tomadas por gobiernos desesperados son a la vez síntoma y causa de un continuo empeoramiento. Tras abandonar la paridad fija peso-dólar y devaluar la moneda nacional en 2001, y luego negarse al pago de la deuda extranjera, la Argentina se colocó en la senda de una notable expansión económica. Incluso durante la presente crisis económica iniciada en 2008, el país se ha beneficiado de la subida de los precios de materias primas, en especial soja, cereales, carne y petróleo.

Sin embargo, los réditos así generados se han dilapidado con una política de redistribución peronista y un continuo aumento del gasto público. Por si no bastase esa entrada de fondos del extranjero para su política "social", la presidenta nacionalizó los fondos de pensiones privados y recurrió a la emisión de dinero, que además multiplicó para mantener bajo el tipo de cambio pese a la abundancia de exportaciones.



El resultado es el esperado: una inflación creciente. Es difícil saber a qué velocidad se deprecia el poder de compra del dinero porque el Instituto Nacional de Estadística y Censos está controlado por el gobierno y el tipo de cambio intervenido. La cifra oficial de inflación es del 10%, pero los institutos de estudios de mayor autoridad la cifran en alrededor del 30%.

De hecho, las autoridades han multado a algunos de esos institutos con sanciones de un millón de dólares por “crear alarma pública”. The Economist ha dejado de publicar la cifra de inflación de Argentina y el FMI ha enviado una misión al país para supervisar la reforma de ese estadístico. Por si acaso, La presidenta instaló una nueva gobernadora del Banco central, que no cree que la inflación tenga nada que ver con la creación de dinero.

El cambio exterior de la moneda es otra manera de medir su valor pero está en vigor un control de cambios a la Orwell. Digo esto porque combina el control monetario con el malabarismo verbal. Son en efecto tres los tipos de cambio con que se encuentran argentinos y extranjeros: el del mercado negro, que el gobierno llama blanco; el llamado celeste, que es intermedio y recorta lo obtenido por los dólares invertidos en el mercado inmobiliario; y el azul, que es el oficial.

El gobierno va devaluando este último todas las semanas: ahora el dólar vale oficialmente 5,15467 pesos en vez de los 8,5 que pagan en la calle los arbolitos, que así se llaman los cambiadores plantados en las aceras a la espera del turista. En los aeropuertos usan perros para descubrir quién se lleva billetes de pesos afuera, como si fuese droga. El campo se siente maltratado. Los exportadores de soja reciben el cambio oficial y encima cargan con un impuesto a la exportación del 35%. Esta exacción recae también sobre la exportación de carne, que han querido reducir para que no se note tanto la inflación: ahora Paraguay exporta más carne que Argentina. De esa forma, las cuentas exteriores no cuadran. La intendente o alcaldesa de Rosario nos dijo que no le dejaban importar una partida de semáforos de España hasta no encontrar alguna empresa con la que combinar la exportación de frutas y verduras a nuestro país por el mismo valor. Y la crisis energética se ha agravado con la expropiación de YPF. No sólo dudan los inversores en colocar más capital en Argentina, sino que el control de precios para disimular la inflación les deja sin margen de beneficios.

Sólo la hospitalidad de los argentinos puede consolar al viajero desolado. Pero cuando pedí un salero en el hotel para aderezar los huevos fritos, me contestaron que el gobernador de la Provincia había prohibido que se colocaran en la mesa para ayudarnos a reducir la tensión.



España: Un error subir los impuestos

1 de mayo de 2013

La situación política de España es verdaderamente notable: unas cifras de paro nunca vistas y, lo que es peor, crecientes; una actividad económica en recesión, cuando las previsiones habían sido moderadamente optimistas; cierres generalizados de pequeñas y medianas empresas; autonomías necesitadas de financiación para mantener los servicios que les han sido transferidos; unas cifras de déficit que aún sobrepasan el máximo fijado por la Unión Europea (UE); una acumulación de deuda pública, que pronto equivaldrá a al 100% de la producción nacional; ... y el Consejo de Ministros declara su firme intención de continuar con la consolidación fiscal y mantener su política de austeridad, pese al coro de voces que pide medidas de reanimación del consumo con más gasto público y más deuda. Podremos quejarnos de Rajoy y sus ministros pero no hay duda que muestran una confianza inusitada en el acierto de la política económica que pusieron en marcha al acceder al gobierno de la nación, hace ya dieciocho meses.

Las radios y televisiones extranjeras que me entrevistan cada vez que en España hay una mala noticia se asombran de que los españoles sobrellevemos con indignación contenida y paciente dignidad la situación en que nos encontramos. Hay protestas, señalan, pero esto no es lo de Grecia. La explicación que les doy, con ciertas dudas, es que los lazos familiares son aquí muy fuertes y que así nos enfrentamos con situaciones de angustia que en otro país causarían una explosión. En todo caso, ello permite que el presidente y sus ministros, animados por la caída de la prima de riesgo, mantengan un rumbo que podría haberse hecho insoportable en cualquier otro país.

La consolidación fiscal era necesaria. Peor sería no llevarla a cabo. Pero se han cometido errores que ahora pagamos con una recaída en la recesión. La consolidación tendría que haberse acompañado de una verdadera reforma de lo que cabría llamar la constitución económica del país. Esa reforma de las instituciones económicas del país habría permitido basar la consolidación fiscal en la reducción del gasto público en vez de en subidas de impuestos. Ahora quiere hacerse tardíamente con el “Plan nacional de reformas” anunciado por el Consejo de Ministros. La única reforma verdadera aunque insuficiente ha sido la laboral. Cierto que su primer efecto ha sido llevar al paro a muchos trabajadores embalsados artificialmente en empresas que se ahogaban. Pero así se han puesto las bases de un renacimiento empresarial en cuanto pase la crisis. En lo demás está casi todo por hacer. Prometen una reorganización de las pensiones. La reforma bancaria aún está a medias, lo que reduce el flujo de crédito a las empresas. El desorden del sector energético se ha multiplicado. Falta culminar la reforma educativa. La transformación sanitaria se reduce a algunas medidas valientes tomadas por la Comunidad de Madrid. La competencia aún brilla por su ausencia en las profesiones. La unidad del mercado nacional está a la espera



El error principal del plan de consolidación, que es el aumento de los impuestos, es consecuencia del aplazamiento de las reformas. En vez de aumentar impuestos era necesario recortar gastos. Mas para ello era condición indispensable un profundo plan de reformas, que llega tarde. Lo fácil es subir impuestos y rezar por una pronta reanimación de la actividad económica. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 26 de abril, el ministro de Hacienda recordó con aparente satisfacción que España es el segundo país europeo después de Grecia en cuanto a esfuerzo fiscal primario, es decir en esfuerzo impositivo sin contar el servicio de la deuda. A continuación, tras intentar tranquilizarnos diciendo que no habría subidas el IVA y del impuesto sobre la renta, pasó a detallar considerables aumentos impositivos: impuesto de sociedades, tasa sobre los depósitos bancarios, aumentos impositivos a las empresas, elevación del impuesto sobre el tabaco, un nuevo impuesto medioambiental. Subir los impuestos es la solución típica de los burócratas de Bruselas. Mejor habría sido recortar el gasto y ampliar el grado de competencia de la sociedad española. Eso hicieron los tres países bálticos: reducción drástica del tamaño y funciones del Estado, lucha contra los oligopolios nacionales, dura caída del PIB durante año y medio, y vuelta a crecer sobre bases saneadas.

En cuanto a las administraciones públicas, sólo daré un dato: desde 2007 hasta el año pasado el empleo público ha aumentado en unas 50.000 personas mientras que en el sector privado se destruían unos 3,2 millones de puestos de trabajo. ¿No son reveladoras estas cifras?



España: Prestidigitación tributaria

10 de junio de 2013

La ferocidad de la batalla entre las autoridades fiscales y los contribuyentes aumenta a ojos vistas. La crisis financiera lleva a los Estados a buscar más ingresos con desesperación mientras que los paganos buscan el modo de esconder sus ingresos y riquezas de la vista de los recaudadores. Esta guerra de guerrillas está animada por la persecución de objetivos estratégicos encontrados: las autoridades quieren perpetuarse en el poder, los ciudadanos buscan gozar de beneficios públicos. Quienes mandan necesitan medios para satisfacer a sus votantes; los votantes quieren que su bienestar lo paguen otros. El cinismo está mal visto en una democracia. Hay que apelar a elevados ideales e invocar grandes sentimientos. Por eso los gobernantes proclaman no tener más objetivo que la felicidad del pueblo y los gobernados sólo querer que pague el que más tiene. El juego de la fiscalidad está lleno de travestismo, de prestidigitación. Tal hemos concluido en una conversación de esta mañana ese mago de las palabras que es Amando de Miguel y quien firma estas líneas.

En este juego parece que van ganando los profesionales de la política, pues dedican mucha más atención a conseguir sus objetivos. Las personas corrientes tienen poco tiempo para ocuparse de los impuestos y de la política del gasto. Por ello, los gobernantes emplean la opacidad y el embrollo, amparados en que los ciudadanos se mueven por impulsos y eslóganes... hasta el momento en que se hartan y cambian su voto. En lo concerniente a la fiscalidad no hay inocentes, sólo hay operadores más o menos atentos: los unos buscan conservar el bienestar del poder, los otros conservar el Estado de Bienestar.

Habrán visto cómo se evita la palabra “impuesto”: es que el “impuesto” se impone y queda feo. En esto de las contribuciones (¡cuánto mejor es “contribuir” que pagar a la fuerza!) todo son siglas. ¿Quién sabe de verdad lo que se esconde detrás de “el IRPF”? Tan bien está montada la farsa que las empresas tienen que ir descontando del sueldo bruto mes a mes una proporción mostrenca, que en muchas ocasiones resulta excesiva. Por eso dicen las almas sencillas en julio o en octubre que “la Renta me ha devuelto dinero”. ¿Cómo devuelto? Será que les cobraron de más durante todo el año y ahora les devuelven lo que les deben y sin intereses. Hay incluso quien dice con satisfacción: “Yo no pago impuestos... bueno, sí pago el IVA”, cuando han estado soportando el goteo de las deducciones en su paga, pensión o subsidio de paro.

No para ahí el disimulo de los impuestos sobre el ingreso. Se llama “contribuciones a la Seguridad Social” a lo que no es sino un impuesto sobre la mano de obra. Ese impuesto alcanza a nada menos que del 29% del sueldo de cada trabajador, a quien, para tranquilizarle, se le dice que la mayor parte la paga la empresa. ¿Crean ustedes de verdad que la empresa paga a la Seguridad Social lo equivalente al 22% del sueldo mientras que el trabajador sólo carga con el 7%? Si la oferta de mano de obra abunda, como ocurre cuando el paro es



elevado, quizá el empresario pueda trasladar algo de esa carga a sus empleados. En todo caso, ese impuesto sobre la mano de obra reduce la oferta de puestos de trabajo. Recuerden lo que dice Arthur Laffer: “Cargamos un impuesto sobre el tabaco y el alcohol para que la gente fume y beba menos; cargamos impuestos sobre el trabajo para que la gente trabaje menos”.

Cierto es que las “tasas” o “precios públicos” no son en puridad un impuesto, son a cambio de un servicio. Sin embargo, cuando este servicio es obligatorio, como ocurre con la ITV (o Inspección Técnica de Vehículos), la tasa va pareciéndose a un impuesto, en Cataluña a un impuesto para la familia Pujol. Otro caso de prestidigitación es el del impuesto sobre los depósitos, que la Comunidad Europea acaba de introducir con el nombre de tasa Tobin. En primer lugar, ¿quién era Tobin? Y luego, ¿de verdad que ese impuesto lo van a pagar los bancos y no los depositantes? Luego, dudo que mucho sepan lo que es el “valor añadido” sobre el que recae el IVA. Sea lo que sea el “valor añadido”, no queda claro quién soporta tal exacción: los tenderos sí saben que, en estos momentos de bajo consumo, el IVA no recae sobre el consumidor final sino sobre las tiendas.

Necesidades

No sigo con la relación de los disimulos fiscales. Sí les exhorto a que se pregunten por qué necesita el Estado tantos ingresos, aparte los sueldos de políticos, coches oficiales, obras públicas de relumbrón de las que tanto nos quejamos. ¿No será que los votantes queremos sanidad, educación, pensiones, servicios sociales financiados en parte o en su totalidad por el Fisco?

Imaginen como cambiaría la vida democrática si, en vez de deducir el IRPF del sueldo cada mes, tuviésemos todos los ciudadanos que pagarlo en junio con dinero fresco en una ventanilla de nuestros “agentes” de la Agencia Tributaria.



España: Falsa tranquilidad sobre las pensiones públicas

25 de junio de 2013

No envidio a los doce expertos que, a instancias del gobierno, han redactado el informe sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas en España. Sobre ellos han llovido las críticas, en especial sobre el representante de Comisiones Obreras, al que el sindicato ha desautorizado por haber votado a favor. A los sabios no se les pidió un dictamen sobre el sistema de pensiones públicas en su conjunto, sino sobre qué cambios serían necesarios para que las pensiones públicas fueran sostenibles durante los próximos treinta o cuarenta años. Pese a lo limitado del encargo, los sabios han conseguido definir el *mínimum mínimorum* de lo que hay que hacer para calafatear un sistema de pensiones públicas en el que la crisis económica ha abierto una vía de agua. Ahora le toca al Pacto de Toledo pronunciarse.

Si nuestro sistema de pensiones fuera el de una aseguradora privada, podríamos decir que el año pasado estuvo en peligro de suspender pagos y que a largo plazo se encuentra en estado de quiebra técnica. En efecto, el trimestre pasado, la Seguridad Social tuvo que acudir a su Fondo de Reserva o hucha de las pensiones por una cuantía de 7.000 millones de euros, para cubrir “una insuficiencia de liquidez en momentos puntuales”, en palabras de la ministra de Empleo.

Parece tranquilizador que aún queden en ese Fondo unos 63.500 millones de euros, pero hay que anotar dos cuestiones: una, que el 98% de esa hucha esté invertido en deuda soberana de España, una excesiva concentración de riesgo; y otra, que con repetidas detracciones como la referida, la hucha no duraría mucho más de nueve trimestres. Sobre el largo plazo, los expertos han señalado que “el peso de la población mayor de 65 años en la población total ha crecido en las últimas décadas hasta el 17% actual y está previsto que alcance el 37% en 2052”. Tienen pues razón al decir que no es posible aplazar la reforma del sistema de pensiones públicas hasta el año 2027, como, por presión de Bruselas, estableció una recientísima ley de 2011.

Reducir las pensiones sin que lo parezca

Los expertos no se han cuestionado, porque nadie se lo ha pedido, el hecho de que las pensiones públicas en España sean de reparto; es decir, que los pensionistas reciban cada año lo que los trabajadores en activo contribuyen anualmente. Las pensiones de reparto, como las españolas, se enfrentan con dos tipos de dificultades: la excesiva tasa de sustitución y la pirámide demográfica invertida. Dicho en lenguaje más claro, la pensión del jubilado en España equivale a un porcentaje muy alto respecto de los ingresos durante la vida laboral; y la proporción del número de jubilados respecto de los ocupados va creciendo cada año por el aumento de la esperanza de vida acompañado por una decreciente tasa de natalidad. Es



paradójico que hayamos montado los españoles un sistema tal que un alto nivel de renta de los jubilados y una prolongación de los años de vida de los mayores resulten ser una maldición.

Pese a ser las pensiones relativamente altas comparadas con los salarios de quienes están trabajando, los gobiernos de todos los colores han ido aumentándolas año tras año o, al menos, han procurado mantenerlas inmunes al efecto de la inflación. Además, como señalan los expertos, los años de jubilación se alargan: “En 1900, la esperanza de vida de los españoles con 65 años era de unos 10 años; hoy esperan vivir 20 años más” y, hacia 2050, 25 años más. Así, va aumentando la carga sobre los hombros de los empleados, lo que es una perenne tentación para elevar las cotizaciones o aumentar los impuestos generales, con los efectos depresivos que bien conocemos.

Los expertos no han dicho nada de retrasar la edad de jubilación más allá de los 65 años, que sería lo lógico. Tampoco han buscado relacionar la pensión con lo contribuido por cada trabajador a lo largo de su vida laboral. Se han contentado con proponer dos factores de modulación de las pensiones. A uno lo llaman factor de revalorización anual y al otro factor de equidad intergeneracional. Proponen que la revalorización anual ya no se haga aplicando a las pensiones una subida acorde con el aumento de los precios al consumo como hasta ahora, sino en función de la diferencia entre ingresos y gastos de la Seguridad Social a lo largo del ciclo económico, con la esperanza de que los ingresos en tiempos de bonanza se ahorren para los momentos de estrechez. Proponen también que la cuantía inicial de la pensión de los nuevos jubilados se reduzca a medida que aumente la esperanza de vida: de esa forma se garantizaría el total de la pensión pero no la pensión de cada año, que resultaría de dividir aquel total por los años de vida esperados del respectivo grupo de edad. El propósito es que las pensiones se ajusten automáticamente a las circunstancias, pero Dios nos proteja de la prudencia macroeconómica y los cálculos demográficos de los políticos.

Es tal el arraigo de la creencia en la necesidad de pensiones públicas que todo lo que se nos ocurre a los españoles es retocarlas aquí y allá cuando el edificio entero amenaza ruina. La gente sencilla cree que las empresas son las que llevan el peso principal de las contribuciones a la Seguridad Social, al no darse cuenta de que esas contribuciones no son sino un impuesto sobre el empleo que, a la postre, recaen sobre los trabajadores. La gente sencilla también cree que la pensión tiene relación con lo contribuido a lo largo de la vida de trabajo, pero de hecho su cuantía se decide políticamente. Estas dos deformaciones sólo se evitarían en la medida en que se añadiese al sistema de reparto algún elemento de capitalización; es decir, de basar las pensiones de cada uno en el ahorro propio y la inversión personal. Lejos estamos de esa solución.

Un sistema injustificable



El origen del mal es más profundo. Las pensiones públicas de reparto se inventaron porque se considera inaceptable abandonar los jubilados al albur de la iniciativa privada. Se da por sentado que los individuos somos incapaces de ahorrar para nuestra vejez y, en todo caso, que un sistema de pensiones privado supondría el entregar los mayores en manos de los bancos, de los gestores de fondos y de las empresas de seguros; las zorras a cargo del gallinero.

Nadie se pregunta si la creciente indiferencia de las familias ante la suerte de sus mayores no se deberá a la propia existencia de pensiones públicas. Nadie piensa en por qué se torcieron las cajas de ahorro. Nadie se plantea que el peso de los impuestos exigidos para sostener el Estado de Bienestar reduce las aportaciones a comunidades religiosas y fundaciones privadas, dedicadas a socorrer a aquellos que se quedan solos con el paso de los años. Las virtudes de previsión, ahorro, ayuda desinteresada no están de moda. Sólo hay confianza en papá Estado.

El sistema de libre competencia y responsabilidad individual no es perfecto, quién se atreve a decirlo. Sin embargo, a la vista del mal camino que lleva el sistema paternalista de pensiones públicas cabría preguntarse si no funciona peor de lo que lo haría uno privado. ¿Qué pensarían ustedes de una casa de seguros que, llegado el momento de cumplir un contrato de renta vitalicia, les dijera que estaban viviendo ustedes demasiados años y que no había más remedio que reducir el pago mensual prometido?



Quieren hacer de lo económico algo más humano

3 de julio de 2013

La caja rural Cajamar lleva publicados 23 números de su interesante revista Mediterráneo económico. Yo dirigí el nº 9 sobre la historia del pensamiento económico, lo que me ha hecho mirar con inicial simpatía el meritorio esfuerzo de meditación sobre lo económico de este nº 23, dirigido por el catedrático de la Universidad de La Laguna (Tenerife) Federico Aguilera Klink. El título es llamativo: “Para la rehumanización de la economía y la sociedad”. El lector enseguida descubre que, al proponer que se rehumanice “la economía y la sociedad”, el coordinador está revolviéndose contra lo abstracto de la teoría económica al uso y contra lo duro de las propuestas políticas de los economistas ortodoxos. Su inspiración es el Mayo del 68 y la Puerta del Sol de 2012. Sus maestros son oscuros psicoanalistas o antiguos trotskistas. Su lenguaje, metafísico.

El único autor clásico al que apelan es a Adam Smith, y lo hacen interpretando su pensamiento de forma arbitraria y anacrónica. Daré una muestra. Una es la cita del conocido pasaje de la Teoría de los sentimientos morales (1759, 1790), en el que Smith dice: “La sociedad puede mantenerse sin beneficencia, aunque no es la situación más agradable; pero si prevalece la injusticia, su destrucción sería completa”. ¿A qué injusticia se refería Smith? El profesor Aguilera sostiene que Adam Smith consideraba esencial “la existencia de una economía que incorpore prácticas justas y que esté orientada al bien común”. Si volvemos al texto de Smith, veremos que dice exactamente lo contrario. Según Aguilera y sus correligionarios, lo importante para la buena marcha de la sociedad es que, olvidados del dinero y la competencia, nos amemos los unos a los otros. Smith, en cambio, dice: “Aunque entre sus diferentes miembros faltase el amor mutuo y el afecto, la sociedad, aunque menos agradable y feliz, no se disolvería necesariamente. La sociedad puede subsistir entre los diferentes hombres, como entre diferentes mercaderes, por un sentido de utilidad, sin amor ni afecto mutuo. [...] La sociedad, sin embargo, no puede subsistir entre quienes están continuamente dispuestos a dañarse y herirse los unos a los otros”.

La justicia para Smith consiste en imponer el respeto de las personas y sus propiedades, con castigos si es necesario: nada de “prácticas justas” ni de orientación “al bien común”.

Ya sé que el profesor Aguilera interpreta a Smith siguiendo el ejemplo de Amartya Sen y su esposa Emma Rothschild, pero a ambos les he dicho repetidamente que su interpretación de Smith no se tiene en pie. Creo que con la muestra que he dado bastará para hacernos sospechar que las ideas atribuidas a Smith por estos críticos del *laissez faire* son las contrarias de las que sostuvo el maestro escocés.

Las constantes de lo económico



Como ha dicho el economista estadounidense Paul Romer, “no hay que sobre el propio cultivo de la ciencia social, como el ahondar en la teoría de juegos o la economía de las instituciones, sin duda, pero no son los de humanizar ni erotizar lo económico”.

En el corazón de la teoría económica clásica anidan una serie de principios fundamentales que es difícil pasar por alto. En primer lugar está la escasez: la más acuciante e insoslayable es la escasez. No es tanto la escasez de recursos naturales como la limitación de tiempo, porque somos mortales; lo que más nos falta es el tiempo y lo que nos obliga a elegir sin descanso es que nuestra vida se acaba necesariamente. En segundo lugar, está el hecho de que los individuos nos movemos por el incentivo del propio interés, que no es egoísmo sino la consecución de nuestros objetivos personales; el interés de una madre incluye el de sus hijos; el de Teresa de Calcuta, el de los moribundos a los que socorría. En tercer lugar, los precios y sus alzas y bajas transmiten una completa e instantánea información sobre la demanda y oferta de bienes y servicios, que nos guía en nuestras compras, ventas e inversiones productivas.

Si los precios se adulteran por motivos éticos o políticos, cunde el desorden en cuanto la intervención se hace insostenible, como ha ocurrido tras la congelación del precio de los transportes públicos en Brasil (graves revueltas en la calle) o el control de la tarifa de la electricidad en España (déficit tarifario incontenible). Sería enfadoso continuar con esta lista de principios elementales, que forman la base de la teoría económica. Lo importante es saber que no se enervan con sólo mostrar que están basados en un concepto artificial, el del homo oeconomicus, o una suposición absurda, la idea de que el hombre es un ser racional. La pretensión de cambiar la naturaleza humana o la ilusión de creer que vivimos en Jauja sólo pueden llevarnos al desastre.

De buenas intenciones está empedrado...

Thomas Carlyle llamó “lúgubre ciencia” a la economía porque sus devotos criticaban la institución de la esclavitud. Mejor intencionados son los críticos actuales del economicismo. Quieren luchar contra la pobreza creada, dicen, por el sistema capitalista. Que este sistema haya conseguido reducir el número de pobres de solemnidad en el mundo (con un consumo de dólar y medio al día), por ejemplo de 70 millones en 1990 a 50 millones en 2010, es un hecho que no quieren ni mirar. Prefieren recurrir a la garantía de una renta básica universal e incondicional a todos los individuos, además de prestaciones de sanidad, educación, vivienda, ayudas a la incapacidad, también universales y asignadas incondicionalmente. La experiencia por la que estamos pasando nos dice que un sistema así está expuesto a crecientes abusos que lo llevarán al colapso.



Carrera de obstáculos en el Atlántico Norte

25 de julio de 2013

En su Discurso sobre el Estado de la Unión del pasado febrero, el presidente Obama dio carácter oficial a una iniciativa debatida desde hacía tiempo entre los defensores del libre comercio: crear un área sin barreras en el Atlántico Norte para el intercambio de bienes, servicios y capitales. La llamó Transatlantic Trade and Investment Partnership with the European Union (TTIP). Para Obama, se trata de “forjar una alianza económica con Europa tan fuerte como nuestra alianza militar y política”. Es una gran idea que ha despertado el entusiasmo de las autoridades europeas, pero que se enfrenta con grandes obstáculos muy difíciles de superar. A ello se añade que el presidente de EE.UU. ve un posible acuerdo con Europa como una marca o recordatorio de su mandato: por ello, ha fijado un plazo brevísimo para conseguirlo. ¿Será capaz de conseguir la firma de un pacto significativo nada menos que para octubre de 2014? En todo caso, las negociaciones entre Dan Mullaney, por parte de EE.UU., e Ignacio García Bermejo, por la europea, se pusieron en marcha el 8 de julio pasado: la celeridad está a la orden del día.

La relación económica entre EE.UU. y Europa ya es profunda y productiva. Se calcula que cada día se intercambian bienes y servicios por valor de 2.100 millones de euros, lo equivalente a un tercio del comercio mundial diario. En 2011, los países de la UE dirigieron a EE.UU. el 17% de todas sus exportaciones de bienes y el 24% de las de servicios; e importaron de la gran República Americana el 11% y el 17%, respectivamente. La importancia que prestan las empresas europeas a su presencia en EE.UU. puede juzgarse por el hecho de que los individuos y las empresas europeas tienen a su haber el 62,7% de todas las inversiones extranjeras directas (es decir, excluidas las financieras) en EE.UU.; y el empleo directo total creado por filiales europeas y estadounidenses en el “otro lado del charco” supone nada menos que 13 millones de personas.

Prosperidad

Sobre esta base, el esfuerzo de liberación buscado con tal Iniciativa resultaría en una multiplicación extraordinaria de la prosperidad en Europa y EE.UU. En un Informe de 2011 del Centro de Relaciones Transatlánticas (CTR) se cifra el aumento del comercio tras acordar un “arancel 0” en un 18% anual para la UE y un 17% para EE.UU. Si además de esa reducción de los aranceles se consiguiera una convergencia en los sistemas y criterios de regulación de ambos partenaires, las exportaciones de la UE podrían crecer un 2,1% más y las de EE.UU. un 6,1%. Una cifra aún más llamativa de ese estudio es la mejora permanente de los ingresos de los hogares europeos y estadounidenses traídos por la liberación: a lo largo de su vida de trabajo, los hogares europeos podrían ingresar unos 14.000 euros más año tras año y los de EE.UU. unos 8.400 euros. Además, si los negociadores consiguen evitar la



trampa de excluir el resto del mundo de tal Iniciativa, el efecto positivo ser extendería por todo el mundo.

Las dificultades para conseguir la liberación de los intercambios y la convergencia de las regulaciones son grandes, sin embargo. Así, en el terreno agrícola, la opinión europea se opone decididamente a la importación de carne de ganados engordados con antibióticos, así como al consumo de productos vegetales genéticamente mejorados, como la soja o maíz transgénicos.

Por su parte, EE.UU. mantiene una protección de sus azucareros aún más decidida que la europea; ambas zonas permiten la entrada de azúcares de países del tercer mundo, lo que supone más 'chinitas' en el camino. Más temibles aún son las barreras no tradicionales nacidas de reglas divergentes en materia de estándares de seguridad, de protección de los consumidores o de compras por parte de instituciones públicas. Baste con señalar la distinta manera que tienen las autoridades de las dos orillas de defender la competencia y enfrentarse con los oligopolios: los estadounidenses lo hacen por medio de los tribunales de justicia, los europeos por regulación e intervención administrativa. Por eso, la "reserva cultural" exigida por Francia para su industria audiovisual es el menor de los problemas con los que se enfrentan los negociadores.

Conscientes de lo escarpado del camino y lo breve del plazo, los americanos hablan de que, una vez firmado algo significativo en octubre de 2014, se continúe el proceso con un "living agreement", una buena disposición para seguir negociando en aquellas zonas en las que sigan existiendo obstáculos no salvados.

En mi opinión, sin embargo, la dificultad mayor se encuentra en otro punto. Jacob Viner, uno de los grandes historiadores de la economía en el siglo XX, señaló que la creación de una zona de librecambio en una parte del mundo podía hacer mucho daño al resto si el resultado era el de desviar comercio en vez de crear comercio nuevo para mayor prosperidad general. Para evitar este tipo de efectos negativos, la Organización Mundial de Comercio impone a quienes busquen crear áreas de librecambio limitadas geográficamente la llamada "regla de nación más favorecida". Según esa regla, las ventajas concedidas en la más reciente negociación deben extenderse a los países con los que las partes tuvieran acuerdos anteriores. Para curarse en salud, la propuesta incluye la declaración de que "juntos, EE.UU. y la UE pueden contribuir con su iniciativa a una liberalización multilateral en un mundo globalizado". La mencionada cláusula tendría por efecto la extensión automática de las libertades comerciales a un número creciente de países: a EE.UU. y la UE les sería posible comunicar a las demás naciones que pueden entrar en la nueva zona liberada a voluntad si aceptan todas las condiciones pactadas. Temo que esta declaración no sea sino una hoja de parra para cubrir las vergüenzas de proteccionistas irredentos.



España: Kafka en el sistema eléctrico

15 de octubre de 2013

Produce pavor en el ánimo de cualquier amigo de la libertad económica la lectura de los dos últimos decretos-ley sobre el sistema eléctrico, aprobados por el gobierno a instancias del ministro José Manuel Soria, en la medida en que son legibles. El de fecha de 1 de febrero del presente año es un jeroglífico. Ya saben lo que digo: la legislación anterior se modifica línea a línea, sin presentar un texto consolidado. Las compañías afectadas ya se enterarán por lo que les va en ello. El público en general tendrá que contentarse con pagar los impuestos o las facturas resultantes de esas misteriosas modificaciones.

El segundo decreto-ley, de 12 de julio pasado es aún más preocupante. Dibuja un panorama de infinita complejidad. Se trata de una Ley que pertenece al mundo de Franz Kafka. El proceder de los oscuros funcionarios que detienen al señor K depende de órdenes futuras cuyo contenido nadie conoce. El Real Decreto de julio impide todo cálculo de previsión. Por ejemplo, concede al gobierno la posibilidad de modificar los “peajes de acceso” (lo cobrado por el consumo de electricidad) cada vez que cambien las circunstancias; o también dice que calculará “una rentabilidad razonable” para cada uno de los activos de producción de electricidad (que son sesenta mil), sin definir la tasa de remuneración razonable ni cuál será la repercusión para los usuarios finales. Como dijo Churchill de Rusia: “un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma”.

El laberinto del que intenta salir Soria

La cuestión más inmediata con la que se enfrenta el gobierno es el llamado déficit tarifario. Para contener la inflación y contribuir a que España fuera admitida en el euro, se redujeron o congelaron arbitrariamente las tarifas de la luz. A cambio, el gobierno de entonces prometió a las eléctricas que compensaría esas pérdidas o al menos que les permitiría financiarlas con bonos avalados por el Estado. A 10 de mayo de este año, el déficit acumulado alcanzaba la enorme suma de 26.062,51 millones de euros. Esta montaña que tenía que escalar Soria es un volcán, pues crece día a día. El déficit ha seguido aumentando y su continuada amortización resulta imposible en la actual situación presupuestaria.

¿Razones? El gobierno de Zapatero, lleno de celo europeísta, quiso que España fuera uno de los países que antes alcanzase la meta de 20/20/20, en 2020: un 20% de reducción de emisiones “invernadero”; un 20% de ahorro de energía; y un 20% de energías renovables: todo ello en diez años. Nada ha ido según los planes de nuestro hoy gran consejero de Estado. El petróleo está caro y las eléctricas vuelven al carbón. Las medidas de ahorro hacen daño a las eléctricas. El fomento de las renovables generosamente subvencionadas ha resultado insostenible, en especial este año de mucho viento y lluvia. La demanda de



electricidad ha caído con la crisis. Una gran parte del consumo de los hogares se acoge al “bono social”, es decir paga una tarifa reducida. Por fin el Estado está comprometido a remunerar el exceso de capacidad del sistema eléctrico español, al que se denomina “garantía de potencia”.

Por eso el ministro, como un nuevo Júpiter ha hecho caer sobre el sistema eléctrico un granizo de medidas de ahorro y recaudación: suspensión de permisos de nuevas centrales de cogeneración, de renovables y de residuos; recorte de la remuneración de las plantas eólicas, fotovoltaicas y termosolares; nuevos impuestos sobre la energía hidráulica, nuclear y de residuos; impuestos especiales sobre el gas y el carbón. Incluso se pretende impedir la producción de energía solar en los hogares. La confusión del sector es completa, en especial la de los inversores en renovables, muchos de ellos abocados a la suspensión de pagos: los extranjeros seguramente llevarán al Estado a los tribunales extranjeros. Los nacionales prefieren llorar en los despachos ministeriales.

¿Cómo es posible que esto ocurra en una economía de mercado como dicen que es la española? Se han acumulado parches sobre remiendos, emplastes sobre revoques, con el resultado típico de una planificación necesariamente mal informada. La culpa no es toda del gobierno español, pese a su imparable afición por el intervencionismo. La fuente última del desorden se encuentra en Europa. En la década de los 90, la Unión Europea decidió acertadamente crear en el continente un mercado liberalizado para toda la energía. Ésta que podríamos llamar la “Liberalización 1.0” se vio interrumpida y desviada por la angustiada decisión de luchar a toda prisa contra el calentamiento global. El 20/20/20 y sus subvenciones han puesto todo patas arriba. Haría falta una “Liberalización 2.0”, que armonizara la libertad de mercado con la calentura del clima.

Existe un sistema que armoniza la libertad de decisión empresarial con la incentivación de una conducta respetuosa del medio ambiente, si se considera necesaria: un mercado de permisos de emisión. Ahora funciona mal porque, vista la caída de la demanda por la crisis, se habían emitido demasiados permisos. Bien aplicado el sistema fomentaría una innovación técnica semejante a la ocurrida en la industria del automóvil. O quizá ocurra en Europa una revolución energética como en EE.UU., gracias a la nueva técnica de recuperación de gas de roca. ¿Volveremos a las pizarras bituminosas de Puertollano? ¡Cualquier cosa menos Kafka!



España: A la japonesa

24 de octubre de 2013

Niels Bohr, el gran físico danés, es también conocido porque dijo que “predecir es muy difícil, especialmente el futuro”. A principios de la primavera pasada, una alta autoridad del Banco de España me dijo en confidencia que esperaba que la economía española empezara a crecer muy modestamente —un 0,1%— en el cuarto trimestre de este año. Gracias a Dios se equivocaba, pues el crecimiento ha empezado ya en el tercer trimestre. Ello nos hace esperar dos trimestres positivos seguidos y, según es la definición convencional, la salida de España de la recesión en este mismo año 13 de las malas meigas. La pregunta es si la recuperación es sostenible y si se acelerará como espera el gobierno.

Empecemos con lo que sugiere la experiencia histórica sobre las consecuencias de una crisis financiera de la magnitud de la que hemos sufrido. Los bien conocidos historiadores económicos, Carmen Reinhart y Ken Rogoff, en su apasionante libro sobre nada menos que ocho siglos de catástrofes financieras, debemos pensar en ocho a diez años de crecimiento por debajo de la tendencia secular. Han recibido críticas por decir que cuando la deuda pública pasa de una cifra equivalente al 90% del PIB, la tasa de crecimiento baja un peldaño: las caídas no son al parecer así de bruscas. Sin embargo, creo que grosso modo recogen un hecho cierto y es que las grandes deudas públicas y privadas pesan como una losa sobre las economías que las sufren.

Dos grandes bolas tiene que digerir la economía española antes de ponerse a crecer otra vez como deseamos y necesitamos. La primera es el referido monto de la deuda total. En agosto pasado, las Administraciones Públicas cargaban con un pasivo financiero bruto de 944.682 millones de euros. Por su parte, las empresas no financieras debían 1.079.625 millones (de los cuales, 329.000 al extranjero); y los hogares 806.065. Todo ello suma 2,83 billones de euros, muy por encima de los 1,05 billones que se espera sea el PIB a finales de este año: la deuda total es 2,7 veces nuestro producto anual: eso es mucha deuda. Su plazo medio debe de estar en los 6 a 7 años. Tanto las empresas como las familias están amortizando crédito. El Estado, en cambio, sigue aumentando su deuda, con gritos de triunfo porque le está siendo posible refinanciarse. Todo ello augura una digestión pesada y pocas ganas de ponerse en movimiento exceptuando el esfuerzo de vender en el extranjero, que es lo más consolador de nuestra situación.

La segunda bola es el desempleo. Sin duda ha dejado de crecer y las cifras que esperamos de un día para otro confirmarán esta tendencia. Aunque sea así, mucho tiene que ocurrir para que bajemos de un 25% de paro a cifras por debajo del 10%. La cantidad de paro joven parece estar algo inflada, pues creo que hay muchos parados/estudiantes. Lo verdaderamente preocupante no es el paro, sino la acongojante caída de la población activa, de la que se han retirado por desesperanza. No me preocupa, en cambio, la emigración en busca de empleo



en Europa y el mundo entero, lo que la prensa amarilla denuncia como pérdida de capital humano: los españoles jóvenes solían negarse a ir a trabajar fuera y es bueno que se aireen un poco.

Ante estas dos cuestiones, la respuesta del gobierno ha sido tímida. Al ministro Montoro le gusta subir los impuestos pero no recortar el gasto —la prueba es que el techo del gasto se ha subido respecto del año pasado—. Las Administraciones Públicas deberían saber desendeudarse tanto como las empresas y las familias, trayendo el copago sanitario, la capitalización parcial de las pensiones públicas junto con un más inmediato retraso de la edad de jubilación, además de ahorros más decididos en gastos de personal: ¿Cuánto se han reducido las remuneraciones en el sector privado?

La reforma laboral ha resultado ser insuficiente. Tiene razón el Círculo de Empresarios al señalarlo. Los expedientes de regulación de empleo han caído en manos de una magistratura que muchas veces mira con sospecha los argumentos de la empresa. Los inspectores de trabajo actúan a menudo como si quisieran sustituir a los jefes de personal de las empresas. El Instituto de Estudios Económicos de la CEOE ha subrayado la necesidad de reformar el subsidio de desempleo para desplazar la protección hacia los parados de larga duración. El gobierno debería atreverse a suspender al menos temporalmente la obligatoriedad del salario mínimo interprofesional.

No quiere esto decir que en algunos ministerios no se hayan notado esfuerzos de reforma, como por ejemplo con los Proyecto de Ley de Educación y de Comercio, en curso de trámite parlamentario. Pero la lectura del proyecto de Presupuestos sugiere que el impulso reformista se ha agotado. La actitud del gobierno parece ser ahora la de decir “bastante hemos hecho: pasemos el testigo a Mr. Gates”.



España: Unidad de mercado a prueba de triquiñuelas

24 de diciembre de 2013

El lugar común del momento es que la codicia y el egoísmo de los empresarios es lo que impide que la libre competencia funcione debidamente en nuestro país. Ya lo dijo Adam Smith: “Rara vez se verá juntarse a los de una misma profesión u oficio, aunque sea con motivo de diversión, y que no concluyan sus reuniones y conversaciones en alguna conspiración contra el público para elevar los precios de sus mercaderías”. Sin embargo, olvidan los Jeremías que los confabulados necesitan el apoyo de los legisladores y gobernantes, pues, de lo contrario, alguno recortará a escondidas el precio acordado para aumentar su ganancia y el cártel se disolverá. Los buscadores de rentas necesitan el favor de “ese insidioso y astuto animal, vulgarmente llamado estadista o político” (dijo Smith) para conseguir que eleve las barreras legales o administrativas tras las que ellos puedan esconderse. En suma, la economía funcional mal principalmente por los defectos del Estado, no por los fallos del mercado.

La maraña de regulación de España exigía un remedio. La principal solución para la falta de “competitividad” es la competencia pura y simple, cuya debilidad durante los años de bonanza quedaba en evidencia por nuestro diferencial de inflación. Una desgraciada sentencia del Tribunal Constitucional (STC 227/93, de 9 de julio) había permitido que la regulación del comercio interior por las comunidades autónomas buscara “un equilibrio de intereses”, de lo cual se aprovechó la Generalitat de Cataluña en especial para poner obstáculo a la libre competencia en nombre del “modelo catalán de comercio”. Ya sabemos qué intereses entran en juego en este tipo de intervención: la búsqueda de rentas frente a la libertad de elegir. Por ello es curiosa la esperanza que tienen algunos independentistas catalanes, como el notable economista Sala-i-Martin, de que una Cataluña independiente tendría mayores oportunidades de liberar su economía que en el seno de España: la libre competencia en manos del partido ERC (Izquierda Republicana de Cataluña en castellano) y los botiguers (tenderos).

Milagro regulatorio

La “Ley de garantía de la unidad de mercado” que acaba de promulgarse es un milagro en el mundo de la regulación pública española. Esta ley casi le hace a uno bendecir la crisis económica que sufrimos, pues es durante las épocas de anemia cuando se ve el daño que hacen a la economía las sanguijuelas proteccionistas. Quienes han conseguido su aprobación no sólo están animados por un verdadero espíritu liberal, sino que saben de los trucos y triquiñuelas de los que buscan poner obstáculos a la libre competencia. Han pasado ya casi veinticinco años desde que Miguel Boyer, entonces ministro de Hacienda (¡socialista!), liberó los horarios comerciales, así como los alquileres de inmuebles. Desde entonces, los distintos gobiernos no han hecho sino ceder ante la presión de quienes se oponían a cualquier tímido



esfuerzo liberalizador en el mundo de los servicios y la producción. Preciosa experiencia para quienes han diseñado esta reforma para evitar nuevos subterfugios.

Está claro que el fomento de la prosperidad de un país exige libertad del comercio de mercancías, de la fabricación de bienes y de la prestación de servicios dentro del territorio nacional para tratar del mismo modo a todos los residentes. El ejemplo viene de lejos: la Constitución de EE.UU. y su renombrada “Cláusula de comercio”. El artículo 1, sección 8, concedió al Congreso “el poder de regular el comercio con las naciones extranjeras, entre los distintos estados y con las tribus indias”. Defendió Hamilton en el número 22 de *The Federalist Papers* esta disposición, diciendo que era de temer que “un creciente conflicto entre regulaciones de los estados llevase a que los ciudadanos de cada uno de ellos llegasen a ser considerados poco más que extraños y extranjeros en los demás”.

Éste es el espíritu de la nueva ley española. En el art. 21.2.a. se establece el siguiente principio: en lo referente a requisitos de acceso a una actividad o profesión, serán competentes las autoridades de origen, y las del lugar de fabricación en cuestiones de producción y requisitos para uso y consumo del producto. Gracias a ello, bastará que una empresa o un profesional cumplan las condiciones legales y administrativas de su autonomía de origen para ejercer en todo el país. Y lo mismo vale para la fabricación y denominación de los productos.

Amparo legal

¡Ah!, pero ha habido que añadir que, en materia del ejercicio de la actividad económica, las autoridades competentes son las de destino. Hay que haber sido testigo de la capacidad de las autonomías y los ayuntamientos para poner coto a la libre actividad económica para lograr imaginarse de lo que son capaces con tal de poner obstáculos a todo lo que venga de fuera. La Ley intenta evitar posibles interpretaciones bizantinas de dos maneras: dejando que sean las propias autonomías quienes diriman entre sí los incumplimientos de la ley que afecten a sus residentes y facilitando la inmediata denuncia por todas las vías posibles de cualquier “disposición de carácter general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que pueda ser incompatible con la libertad de establecimiento o de circulación”. Para ello, crea un “Consejo para la Unidad de Mercado”, con representación del Estado, las autonomías y las autoridades locales como lugar de cooperación de las distintas administraciones interesadas. Luego multiplica las instancias a las que acudir para las denuncias, la más destacada de las cuales es la nueva Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (con su capacidad para imponer cuantiosas multas a los infractores). Además, los plazos de reclamación son muy generosos, mientras que los de decisión, estrechos; la legitimación de los reclamantes es amplia y las vías de recurso no excluyentes; y la transparencia de las actuaciones lo más completa posible.

Temo más que a un nublado a nuestro Tribunal Constitucional, ante el que ya prometen interponer recurso tirios y troyanos. Que yo sepa, no hay ni un solo economista entre sus



magistrados. A muchos les cuesta entender que la mejor forma de descentralización administrativa es dejar que los individuos elijan y decidan libremente. ¡Feliz singladura!



Anschluss

27 de marzo de 2014

Karl Marx, al comentar el golpe de Estado perpetrado por Napoleón III para acceder a la dignidad imperial en 1852 y pensando en el golpe del 18 Brumario de su tío Napoleón I, escribió esta frase memorable: cuando la historia se repite, si la primera vez fue una tragedia, la segunda es una farsa. Putin no es Hitler ni Stalin.

Lo ocurrido en Crimea, ni trae consigo los peligros planteados por el Anschluss (la anexión) de Austria y Alemania, ni tiene los tintes de crueldad exterminadora que sufrieron los cosacos del Don y los kulaks de Ucrania. Sin embargo, la farsa de Putin tiene peligro. El éxito provisional de la anexión de Crimea por Rusia puede tentarle a correr nuevas aventuras. Los pequeños autócratas se crecen cuando sospechan debilidad en las democracias. Europa no debe seguir los pasos de Chamberlain en Munich en 1938, ni los de Roosevelt y Churchill en Yalta en 1945.

En las últimas elecciones antes de que Hitler se convirtiera en führer y canciller de Alemania, el partido nazi había perdido escaños en las elecciones de 1932. Sólo tras provocar el incendio del Reichstag pudo Hitler suspender unas elecciones prometidas para 1933, prescindir del parlamento y gobernar por decreto. Sus pasos inmediatos en política exterior fueron la anexión de los Sudetes, la parte de habla alemana de la hoy República Checa, y la absorción de Austria por el Reich. Chamberlain y Daladier cedieron en lo primero y no reaccionaron frente a lo segundo. ¿Pasos siguientes? El protectorado alemán sobre Bohemia y Moravia, hoy Chequia; y la invasión de Polonia.

Nótese que en el plebiscito que siguió al Anschluss, obtuvo el 99% de los votos de los austriacos. Un plebiscito es cosa diferente de un referéndum. En los referendos suizos, los ciudadanos contestan a una pregunta concreta sobre salarios, los horarios comerciales o la financiación del servicio postal. Los plebiscitos, por el contrario, los plantean políticos ambiciosos de poder, con preguntas que apelan a la reivindicación nacional, los sentimientos lingüísticos o las pasiones religiosas. Hitler los usó para ratificar la vuelta del Sarre a la soberanía alemana en el inicio de su carrera, para exigir la anexión de los Sudetes o para consolidar el Anschluss. La Constitución alemana actual prohíbe, no sólo los plebiscitos, sino todos los referendos.

Todo empieza por la deformación de la historia: Putin ha pronunciado un discurso en una manifestación en Moscú denunciando que Rusia lleva siglos oprimida o despreciada por las



demás naciones. Parece haber olvidado tres siglos de creciente poderío ruso y cincuenta años de Unión Soviética, pero considera que la disolución de la URSS fue una catástrofe histórica. Sobre esto las opiniones divergen, incluso en Rusia. Las regiones del Cáucaso ya habían sufrido las consecuencias de su ánimo doliente. Ahora, otras regiones de Ucrania de habla rusa piden referendos de adhesión al estilo.

Las Constituciones, como bien dice Guy Sorman, tienen como fin primordial proteger las minorías de los abusos de gobiernos mayoritarios. La reclamación de la lengua, como en Ucrania o Cataluña, la invocación a la raza como en Bolivia o el País Vasco, convierten las apelaciones a la voluntad popular en armas de opresión. Aunque nuestra Constitución proclame que España es una nación, no sé si deberíamos tomar esa declaración como centro de la vida política. Preferiría decir que los españoles hemos firmado un contrato constitucional, que vale la pena defender, incluso con la fuerza, porque es un ámbito en el que florecen las libertades individuales. Me dirán que esa actitud exangüe ante la política (y el fútbol) es poco operativa en un mundo lleno de conflictos tribales pero creo que no hay que perder de vista el fin último de las cosas, que es la posibilidad de gobernar la propia vida.

¿Cómo detener a Putin en su carrera expansionista? No creo que Putin dé marcha atrás en la anexión de Crimea pero hay que evitar que cometa otras fechorías del mismo estilo. Los intercambios comerciales y financieros sirven para unir los pueblos, excepto cuando algún gobierno los utiliza como método de presión. La imbricación de los intereses económicos complica la reacción de Occidente. Europa depende del gas ruso en un 30% de sus necesidades. Las inversiones de europeos y americanos en Rusia son cuantiosas. Los mercados financieros europeos están inundados de capital ruso (de diversa procedencia, por decirlos suavemente). Las medidas correctivas y precautorias habrán de tomarse con la debida prudencia pero sin quedar paralizados. Margaret Thatcher se enfrentó con los sindicatos mineros sólo en su segunda legislatura, cuando había acumulado suficiente carbón en sus almacenes para durarle un año de huelga.

Quizá Frau Merkel debería reconsiderar el cierre de sus nucleares y Europa mirar la obtención de gas por fracking con menos hostilidad. Lo ha dicho despachadamente el consejero delegado de la petrolera italiana ENI, compañera de Gazprom en inversiones para obtener y transportar gas natural y de otras partes de la Federación Rusa: “Los rusos no son suizos, son rusos”. Sin prisa pero sin pausa.



España: Errores y autopistas

3 de abril de 2014

Las preguntas son éstas: ¿por qué no se ha forzado el concurso de acreedores de las concesionarias de la explotación de las autopistas radiales, si las pérdidas sufridas por éstas ha agotado su capital?; ¿por qué resulta necesaria la creación de una Empresa Nacional de Autopistas para gestionar esos activos en crisis? La ficción de esa sociedad interpuesta esconde mal que la responsabilidad última de los contribuyentes por la mala marcha de esas compañías. El hecho es que la quiebra de dichas autopistas ha puesto al descubierto los graves errores del método de financiación de las nuevas vías de peaje cuando el ministro responsable era Francisco Álvarez Cascos y Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid. Me atrevería a ir y criticar el concepto subyacente a la construcción y financiación, no sólo de estas autopistas de pago, sino también como de las autovías gratuitas en España.

Cierto es que las autopistas ahora quebradas se construyeron al amparo del método de colaboración público privada, un concepto que lleva decenios aplicándose a la construcción y explotación de obras públicas en otros países. Empezaron los japoneses en la década de 1980 y luego el procedimiento se ha extendido al mundo entero, en especial dentro de la Unión Europea (UE). Se ha aplicado a proyectos públicos de todo tipo, desde plantas y redes energéticas hasta laboratorios de I+D, pasando por el suministro urbana o sistemas ferroviarios.

Colaboración público privada

El Banco Europeo de Inversiones se especializa en el diseño y financiación de estos proyectos. Su esencia es evitar que el peso recaiga sobre el erario público. En este caso de las radiales, las grandes constructoras de obra pública se comprometieron a conseguir la financiación, a realizar la obra y a gestionar el servicio, a cambio de obtener concesiones en condiciones favorables por períodos de 20 a 30 años. Como atractivo adicional, el Estado les aseguró un ingreso mínimo para el caso en el que el tráfico fuera menor de lo esperado. Como método general de financiar obras públicas sin apuntarlas a la cuenta de los Estados, el sistema no escapa a la crítica: con esa forma artificial de construir sin recargar su déficit, las Administraciones Públicas renuncian a una parte de la reducción de costes obtenible en concursos abiertos y sin condiciones.

En el caso de las autopistas radiales españolas han sobrevenido otros tres inconvenientes mayúsculos. Dos han afectado a las concesionarias. Uno es que el tráfico efectivo ha caído un 27% por término medio desde el año 2007, cuando ya en ese ejercicio las previsiones por parte del Ministerio de Fomento eran demasiado optimistas. Otro es que ha habido que añadir al coste de la construcción de 5.601 millones de euros el montante de las



expropiaciones, que inicialmente se calcularon en unos 387 millones y han resultado ser una suma de 2.217 millones; aquí son los tribunales los principales responsables, pues tomando al pie de la letra la Ley del Suelo, según la que todo el territorio español es urbanizable, han valorado las trazas o terrenos de las autopistas como solares urbanos (no estaría mal que muchos jueces aprendieran algo de economía). El tercer inconveniente, en cambio, recae sobre el Estado, que cometió la imprudencia de garantizar un mínimo de ingresos si el tráfico resultaba escaso: esa Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) puede llegar a un total de 500 millones, que habría de pagarse si se dejara quebrar las radiales.

La solución propuesta

Como condición para nacionalizar las referidas concesionarias autopistas quebradas y resarcir, al menos en parte a los inversores, el Ministerio quiere imponer a las constructoras y a los bancos una quita del 50%, que viene a añadirse a otra del 25% anteriormente decretada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para dulcificar ese recorte, parece que la ministra permitirá que la nueva empresa documente la deuda remanente emitiendo 2.300 millones de euros en bonos a 30 años, con una rentabilidad mínima de un 1% y media del 4,5%: 2.000 millones para los bancos y 300 millones para los accionistas y las constructoras. Esos bonos deberían poder descontarse en el mercado aun sin garantía del Estado para evitar que se sumen al déficit público. A cambio de apuntar a la nueva empresa pública un pasivo de 2.400 millones, el Estado evita pagar la RPA y se queda con el uso de las radiales.

Esas autopistas de pago no podrán competir nunca con unas autovías gratuitas que discurren en paralelo. La ministra Pastor podría plantearse cambiar el modo de explotación de estas vías de transporte. Debería completar su plan haciendo que los usuarios de las autovías pagasen al menos su coste de reparación y mantenimiento, que no veo por qué tiene que recaer sobre los contribuyentes.

Intentarán decirnos que de todo esto tiene la culpa la crisis. Falso. La operación estaba mal diseñada desde un principio. Álvarez Cascos quería construir sin pagar. Esperanza Aguirre quería que las constructoras cerraran la M-50 al norte de Madrid a cambio de conseguirles obra en las radiales de Madrid-Toledo, Madrid-Ocaña, Madrid-Navalcarnero, Madrid-Guadalajara y la M-11 hasta el aeropuerto de Barajas. Es que los políticos no pueden resistir la ocasión de inaugurar un buen tramo de carretera.



España: La quiebra de las pensiones

11 de abril de 2014

Si la seguridad social fuera una empresa privada de seguros, tendría que pedir concurso de acreedores, pues su pasivo es considerablemente mayor que su activo y la esperanza de sanear su situación financiera con los ingresos previsibles, altamente improbable. Por un lado, las promesas tácitas en materia de pensiones en nuestro país y en todos los países con sistemas “de reparto” son mucho más gravosas de lo que se confiesa; y, por otro, la capacidad de aumentar las contribuciones para cubrir esas obligaciones futuras es muy limitada, si no nula.

La situación de las seguridades sociales de los países adelantados debe verse en el conjunto de sus deudas públicas. La deuda pública confesada se refiere al pasado, a la deuda hasta el momento acumulada, no sólo por la necesidad de salvar los bancos en crisis, sino las demandas del seguro de paro y de las pensiones y la sanidad, financiadas en gran parte con deuda.

Estamos hablando de una deuda pública cercana al 100% del PIB de EE.UU. durante el próximo decenio, con un paulatino aumento posterior. En la Unión Europea (UE), la proporción es de un 85% ahora, también con tendencia a crecer más adelante. España estará peor que la media europea, pues nuestra situación se parece más a la de EE.UU.

Si EE.UU. quiere mantener sus pensiones, su Medicare y su nuevo seguro obligatorio de salud conocido como “Obamacare” —escribe el Dr. Jagadeesh Gokhale, del Cato Institute, en una reciente publicación del Institute for Economic Affairs de Londres)—, tendrán que aumentar sus ingresos fiscales un 9% de cada año. La UE, por su lado, se enfrenta con la necesidad de aumentar sus impuestos un 13,5% cada año, si quiere cumplir sus promesas sociales. Cuánto sea el peso futuro de lo prometido en España por servicios sociales, ni nos lo han dicho ni creo que lo hayan calculado.

En el caso de las pensiones en España, las causas de la quiebra técnica son bien conocidas: la reducción del número de trabajadores por pensionista por aumento de la esperanza de vida y por la caída de la natalidad. Estos factores afectan especialmente a nuestro sistema de pensiones por ser de reparto en vez de la capitalización. Dicho de otra manera, lo que recibe un pensionista cada año lo financian las cotizaciones de los empleados de ese mismo año, lo que dependerá de la presión fiscal que los contribuyentes acepten sobrellevar.

Esto último es crucial. Los gobernantes creen que el montante de lo aportado por los contribuyentes lo deciden ellos. Olvidan que quienes pagamos impuestos y contribuciones tenemos dos formas de resistirnos: si la fiscalidad es muy alta reducimos nuestra actividad



productiva aumentando el tiempo de ocio; y eludimos el impuesto aplicando ingeniería fiscal o escondiéndonos en la economía sumergida. La situación sería muy distinta si los jubilados vivieran de lo que han acumulado e invertido: sus ahorros habrían sido y serían productivos, lo que aumentaría la riqueza nacional, incluso para quienes ya no trabajan.

Prueba de que lo que digo es cierto es que el gobierno, con el apoyo de los diputados reunidos en la Comisión del Pacto de Toledo, se ha visto forzado a recortar los beneficios del sistema para “hacerlo sostenible” —hermoso eufemismo. No otra cosa que un recorte es el retraso de la edad de jubilación de los 65 años a los 67, aunque la medida se aplique paulatinamente a lo largo de 15 años. También son recortes respecto del sistema actual el desligar el monto de la pensión y la inflación, la exigencia de 37 años de cotización en vez de 35 para acceder a la pensión máxima, y la ampliación del período sobre el que calcular la pensión de 15 a 25 años. En el mismo sentido van otros cambios, como son la obligación de cotizar por remuneraciones en especie y la elevación de la edad mínima para cobrar pensión los jubilados voluntarios; no digo que estas pequeñas corruptelas no deban ir corrigiéndose, sino que de hecho equivalen a una reducción de las prestaciones del “seguro” público.

Cuando hace quince años José Piñera vino a España invitado por el Círculo de Empresarios para estudiar la posibilidad de un sistema de pensiones públicas capitalizadas, menudearon las críticas de tal manera que la ocasión se perdió. Recuerdo el enfado del presidente de la Comisión del Pacto de Toledo cuando Piñera dijo que los jubilados deberían temblar cada vez que oyeran que los diputados “iban a Toledo”. Los años le han dado la razón. Aún estamos a tiempo de crear un sistema de capitalización en nuestro país, aunque las condiciones ya no sean tan favorables como en tiempos de Suárez. La solución, en el próximo número.



Gary Becker o el enfoque económico del comportamiento humano

6 de mayo de 2014

El fallecimiento de Gary Becker nos priva de un pensador que, con 83 años, seguía investigando en su campo favorito del comportamiento humano. Echó por tierra enquistados prejuicios sobre la forma de hacer microeconomía en la profesión de economista. Por ello recibió el galardón del Premio Nobel de Economía en 1992. Mezclando la concepción teórica con la contrastación estadística consiguió arrojar luz sobre fenómenos sociales hasta entonces reservados a la mera descripción sociológica. La economía era una cuestión de enfoque, no de contenido: explicaba los fenómenos sociales sobre la base de la maximización de la utilidad individual, tenían explicación económica. No por nada era catedrático de Sociología además de Economía en su Universidad, además de serlo en la Escuela de negocios.

Su método de investigación consistía en suponer al estilo de los clásicos que los individuos maximizaban su utilidad partiendo de preferencias estables y en el marco de mercados que tendían hacia el equilibrio. Becker proponía explicaciones basadas en tales supuestos para los más diversos fenómenos sociales: la formación de los gustos, el matrimonio y los hijos, la discriminación racial, las diferencias de salarios, la adicción a las drogas, y “crimen y castigo”, como él llamaba a sus estudios del delito. En cada caso intentaba ver si los datos de la realidad casaban con ellas. No puede pedirse un punto de partida más economicista y más chocante sobre cómo y porqué se comportan los humanos. (El punto de vista económico del comportamiento humano, 1976.)

Este enfoque lo modificó Becker en dos sentidos. En primer lugar y aunque a nivel de mercado los resultados de la suma de los comportamientos individuales aparecieran racionales, ello no quería decir que los comportamientos de todos y cada uno de los individuos tuviesen que ser racionales. Los mercados funcionan como si fueran racionales, también cuando los hogares actúan irracionalmente, por ser su comportamiento inerte, impulsivo o incoherente (Comportamiento irracional y teoría económica, 1962). El derivar los principales teoremas de la micro como si la gente fuera racional, pero no necesariamente, es un verdadero tour de force. Eso debería conseguir la adhesión de muchos estudiosos de la sociedad que, sin duda mirando a los demás, consideran que los individuos son a menudo poco racionales.

Segundo y muy importante para quienes, siguiendo a Lákatos, creen que el programa neoclásico tiene un núcleo duro que nunca se cambia. Becker ha propuesto teorías contrastables sobre la formación de los gustos, que han resultado muy fructíferas para los estudiosos de marketing en las escuelas de negocios, entre otras, la de Chicago. Para esto, diferenciaba las necesidades básicas, cual el alimento, las relaciones afectivas, el cuidado de los hijos, el juego, la consideración, que todos los humanos sentían, y los instrumentos para



satisfacerlas, que eran culturalmente variados (Explicar los gustos, 1996). Concretamente, el hogar es como una pequeña fábrica, en la que, al servicio de sus necesidades básicas, la administradora maximiza la aplicación de muy variados medios, bajo la constricción de los ingresos.

En la vida de la familia también predominaban los cálculos económicos. Así, cuando el nivel de vida era miserable o incluso pobre, los hijos se ven como un bien de inversión, de los que se espera colaboración en el trabajo y sustento en el retiro. Con la prosperidad, los hijos pasan a tratarse como un bien de consumo, porque el rédito en cariño y satisfacción es mayor que el gasto de criarlos y enseñarlos.

Su tesis doctoral versó sobre las consecuencias económicas de la discriminación racial para las empresas que la practican: esa discriminación es un sobre coste que reducía su capacidad de competir frente a las que buscan el talento dondequiera se encuentre. Era una cuestión de prejuicio, pero también de precio. Es posible que los motivos económicos hayan tenido tanta o más importancia que el impulso político en la separación del prejuicio racial en EE.UU. Por ese mismo camino se acercó a la explicación de las diferencias de salarios, que no se había estudiado desde Adam Smith: los ingresos de los trabajadores hay que concebirlos principalmente como remuneración del capital humano. Los conocimientos, la experiencia, la fiabilidad se adquieren a modo de inversión, por el estudio, el trabajo bien hecho, la conducta regular y honrada —una adicción positiva a lo largo muchos años—. En cambio el consumo repetido de drogas era una adicción negativa, que destruía el capital humano de sensación, por lo que necesitaba dosis repetidas y mayores para mantener el mismo nivel de gozo.

El delito no se explicaba, según Becker, por la irracionalidad, la enfermedad o el entorno social. Los delincuentes son actores racionales, que reaccionan ante los incentivos, dada su situación personal. La reincidencia en lo delictivo se explicaba por la reducción del horizonte temporal de los delincuentes, que como los drogadictos, viven cada vez más en el presente y descuentan las consecuencias futuras (1974).

Comprendo que este artículo es algo seco y descorazonador, mas por respeto a mis lectores y sobre todo a mi maestro he querido presentar un relato completo e incitante para los amantes de la verdad por encima de todo.



Todos quieren ser Estado

19 de mayo de 2014

Desde la Revolución americana de 1776 y la francesa de veinte años más tarde no cesa el aluvión de grupos nacionales que quieren constituirse en Estado. Primero lo hicieron por la fuerza de las armas los países de la América hispana, aunque Brasil se convirtió en Imperio sin verter sangre. A lo largo del siglo XIX se constituyeron el Imperio alemán y la Italia unificada, con sendas y numerosas guerras. Tres grandes colonias del Reino Unido se transformaron pacíficamente en “Dominions”: Canadá en 1867, Australia en 1901 y Nueva Zelanda en 1907. Tras la Primera Guerra Mundial, la creación de naciones se multiplicó en aplicación de la doctrina del presidentista estadounidense Wilson. El resultado no fue halagador. Desde entonces, el nacionalismo se ha extendido a los cinco continentes, en especial a las que fueron colonias de las potencias europeas. En términos generales, la mayor parte de las transiciones hacia el Estado-nación fueron cruentas. Ni siquiera los horrores cometidos en nombre de las naciones en dos guerras mundiales han detenido el clamor por crear Estados nacionales. De forma más democrática y civilizada, sin duda, pero sin cesar en el intento, siguen los hombres apelando a la raza, la religión, el idioma, la historia o el hogar común para crear estados nacionales.

No es mi intención hoy entrar en la cuestión de qué grupos humanos tienen el derecho a constituirse en Estado. Más me interesa preguntar el porqué de ese impulso tan difundido, que lleva a numerosas comunidades a querer separarse del país al que pertenecen, como proclaman muchos escoceses o catalanes, o a reforzar y extender un Estado-nación en horas bajas, cual reclama el presidente ruso, o a transformar una organización de mera conveniencia, como es la Unión Europea, en un supra-estado. ¿Qué virtudes tiene la organización estatal para haberse convertido, a lo largo de los últimos dos siglos, en el objeto del oscuro deseo de tantos y tantos humanos?

Condición indispensable

Los catedráticos Daron Acemoglu, de economía en el MIT, y James A. Robinson, de ciencia política en Harvard, publicaron hace año y medio un libro que ha hecho furor entre los estudiosos del desarrollo económico. Se titula Por qué fallan las naciones: el origen del poder, la prosperidad y la pobreza. La palabra “nación” en inglés estadounidense tiene un significado algo distinto que en español. Correctamente traducido a nuestro idioma, el libro debería llamarse “Por qué hay Estados fallidos”, sean éstos naciones o no en el sentido metafísico europeo. Para Acemoglu y Robinson, un Estado bien constituido y de adecuado funcionamiento es condición indispensable para el progreso de su población. En eso estoy de acuerdo. No pertenezco a la escuela “anarco-capitalista” de la que son feligreses muchos buenos economistas amigos míos. Creo que es indispensable para la preservación de las libertades individuales la existencia de un Estado que defienda a sus ciudadanos contra los



enemigos exteriores, que preserve el orden público, en cuyo nombre se imparta Justicia, y que defienda la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos.

Acemoglu y Robinson sostienen que los estados eficientes tienen dos características: un mínimo de centralización administrativa y unas instituciones “inclusivas”. Explico. Entienden que los estados que se muestran incapaces de desempeñar debidamente las funciones de Defensa, orden público, Justicia y respeto de los acuerdos privados están en peligro de disolución y anarquía. Y dan muchos ejemplos de estados fallidos. Hoy lo sufren los ciudadanos de Venezuela en América o los congoleños en África. Pero una imagen vale más que mil palabras: la foto en el libro de un soldado somalí, arma al hombro y cintas de munición arrolladas al cuerpo resume elocuentemente las consecuencias de la anarquía armada. Sin embargo, la centralización del poder estatal en el siglo XX ha ido demasiado lejos. No cerremos los ojos al peligro de que el Estado acabe convirtiéndose en un sistema de explotación de los individuos por la elite gobernante o los grupos de presión. Unos gobiernos que gastan lo equivalente a la mitad del PIB nacional y lo reparten entre su clientela electoral evitan la anarquía, pero ahogan la libertad.

De ahí que Acemoglu y Johnson den tanta importancia a que las instituciones sean inclusivas; es decir, que la población en su conjunto se sienta representada por las autoridades, que éstas atiendan a sus deseos y que se pueda poner freno a los posibles excesos. La democracia parece ideal como marco político para alinear a las autoridades con el pueblo. Sin embargo, la experiencia muestra que a menudo el pueblo se excede en el uso del voto, utilizándolo para explotar u oprimir a las minorías. Pululan los grupos de interés que usan el voto para conseguir privilegios y extraer rentas, a través de los llamados “derechos sociales”, o de la expropiación fiscal o la opresión de quienes no son nacionales de primera clase. Las democracias modernas corren el peligro de dejar de ser “inclusivas” para ser “extractivas”, receta segura del estancamiento económico.

Solidaridad

Aquí entra en escena la Nación. El sentimiento nacional se utiliza cada vez más para disimular esas labores de explotación. En los estados medianos y grandes, como España, o en las organizaciones supraestatales, como la UE, la redistribución territorial de la riqueza, pese a que no promueve el sólido desarrollo de las regiones atrasadas, se justifica apelando a la solidaridad nacional o al espíritu europeo. Esa excusa solidaria se repite que a nivel local: muchos claman por la independencia para retener esos fondos de reparto y gastarlos en casa. Así, en Cataluña ha corrido la voz de que “España nos roba” con el fin de ‘robarse’ entre catalanes. Así, los nacionalistas escoceses quieren repartir localmente el producto de los impuestos sobre el petróleo del mar del Norte. Así, en Bruselas la Comisión y el Parlamento se quejan del mal uso de los fondos solidarios y reclaman más poder en el reparto y la vigilancia. Lo curioso es que esos nacionalistas y europeístas no piensan sino en imitar a su escala el Estado de Bienestar de cuyo mal uso tanto se quejan. Si los estados se redujeran a garantizar el marco que exige el buen funcionamiento de las actividades productivas privadas,



muchas tensiones nacionalistas desaparecerían. ¡Ah! Pero entonces, ¿qué harían los cabecillas de estados potenciales que sólo sueñan con lucirse como grandes dirigentes a escala mundial?



Capitalismo: La forma más moral de organizar la sociedad

3 de junio de 2014

No pasa día sin que algún líder religioso, formador de opinión, político democrático o jefe de empresa proclame que el sistema de libre mercado es en su esencia inmoral. Ustedes mismos rellenen las casillas, pero yo prefiero dejarlas en blanco, porque ahora no busco criticar a nadie en particular sino señalar el error fundamental que yace bajo tales denuncias, que no es otro que un equivocado concepto de la moral social.

Todos ustedes habrán oído decir que el capitalismo está basado en el egoísmo y la codicia; que fomenta el materialismo, el consumismo, la explotación inmisericorde; que trata al hombre como mercancía; que disuelve los lazos familiares y amistosos; que todo lo pone en venta, hasta lo más sagrado. Además, añaden que un sistema así necesariamente sufre crisis repetidas y crecientes: sus abusos socavan los valores de laboriosidad, honradez, cumplimiento de los contratos, respeto de la propiedad privada, que hicieron su grandeza; y abren la puerta a pirámides financieras, paraísos fiscales, evasión de impuestos, corrupción de políticos y toda una fronda de conductas inmorales. Los críticos del capitalismo ya no se atreven a negar que el mercado sirve para asignar correctamente los recursos, vista la desastrosa experiencia de la planificación centralizada en los países comunistas, pero... denuncian que lo hace a costa de fomentar una distribución radicalmente injusta.

Quien crea que la única ventaja de un mercado libre es la de conseguir la mejor asignación de los recursos demuestra que no ha entendido nada de cómo funcionan las sociedades libres. En su interpretación tradicional, la definición de Robbins del problema económico es incompleta. No se trata de cómo casar “fines humanos con medios escasos de uso alternativo”. No se trata de satisfacer fines expresos asignando unos recursos dados. Ni los fines humanos son patentes ni los medios son conocidos. En primer lugar, los gustos y necesidades de los consumidores hay que descubrirlos. Los enemigos del mercado acusan a fabricantes, distribuidores y publicitarios de crear necesidades frívolas. Muy al contrario, esos deseos existen pero nadie los conoce. Por eso la mayoría de los productos lanzados al mercado fracasan. En segundo lugar, los recursos no están ahí a la vista de todos, también hay que descubrirlos y recombinarlos. El economista estadounidense Paul Romer dio hace poco un ejemplo de recombinación novedosa: el dueño de una cadena de comida rápida tuvo la ocurrencia de usar tapas del mismo diámetro para cubrir recipientes de café capuccino de distinta cabida: esa forma de reducir costes solo se ha hecho evidente tras ponerse en práctica. ¿No se comunican los críticos del capitalismo sus eslóganes por YouTube o por Twitter?

Supongamos que comprenden lo que es la asignación óptima de recursos. Por donde no pasan es por la distribución desigual que dicen trae consigo el capitalismo. Para ellos es obsceno que haya personas que ganen tanto dinero como Ronaldo o Zuckerberg. ¡Claro que quienes aciertan a ofrecer productos de éxito se hacen ricos, mucho más si la mundialización



les permite conseguir millones de admiradores y clientes! La desigualdad de sus ingresos fomenta una satisfacción más igual de la humanidad en su conjunto. Lo obsceno sería que hubiesen obtenido su fortuna gracias a favores del gobierno, como el mexicano Carlos Slim.

¿Más pobreza y más desigualdad?

El lamento de los amantes de la humanidad es que “los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos”. No me refiero tanto a Oxfam y otras ONG, como a los ricos reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos, que en su reciente edición han colocado la desigualdad en el primer lugar de los 31 riesgos potenciales que ven para la estabilidad del planeta. Por suerte, estas jeremiadas no se corresponden con los hechos.

Durante los 40 años posteriores a 1970, el número de pobres en el mundo ha disminuido asombrosamente. Tomemos los cálculos para el período 1970 a 2006 del catedrático de la Universidad de Columbia Xavier Sala i Martín, que fue uno de los primeros en señalarlo. En esos años, la población mundial creció en 2.880 millones de personas, lo que debería haber aumentado el número de pobres, en especial porque son los más necesitados los que suelen tener un mayor número de hijos.

La definición más común de la extrema pobreza es la situación de quienes tienen que vivir con menos de un dólar al día: en ese caso, el número de pobres disminuyó en esos 36 años en unos 617.000, hasta quedar en 350.000. Si tomamos como línea divisoria los dos dólares al día, el número de quienes están por debajo de ella disminuyó en 783.000 y el saldo final quedó en 847.000 sobre 7.149 millones de habitantes.

Centrémonos en la India y en China, tras su paulatina apertura a una economía de mercado. Si marcamos la frontera en 1,25 dólares al día en vez de un dólar, en 1981 vivía en India con esa mísera suma el 61,7% de la población; en 2008, el 36,3%.

Más llamativa aún es la evolución de China: en 1981 el 84% de su población vivía con 1,25 dólares al día o menos; en 2008 esa proporción se había reducido al 13%. La cantidad de personas que aún vive con las migajas que pueden comprar con uno o dos dólares al día es acongojante e indica lo mucho que queda por hacer en el camino hacia una economía global y próspera. Sin embargo, no debemos olvidar la señaladísima reducción de la pobreza conseguida por el capitalismo.

Ahora demos el paso lógico de concluir que, si el número de pobres ha caído de esa manera, la desigualdad media también ha tenido que reducirse. Así ha sido con todas las medidas de la igualdad que usan economistas y sociólogos, por ejemplo, el índice Gini.



Si ha caído la desigualdad en India y China, y también ahora en las naciones más mercantiles de América hispana y en el África subsahariana, el mundo por necesidad es más igual. ¿Estaba yo soñando cuando oí que el capitalismo se ha construido sobre la inmiseración de la clase obrera?

Los críticos del capitalismo en Davos y otros foros penitenciarios, que se dicen alarmados por la desigualdad del mundo, lo último que desean es que los pobres compitan libremente con nosotros y nos igualen en productividad. Esa resistencia se ha endurecido por efecto de la crisis iniciada en 2008, que de paso diré que no ha sido causada por la codicia capitalista sino por los yerros de las políticas públicas. Es una crisis que nos está obligando a acomodarnos a nuevas tecnologías y a recortar los repartos del estado de bienestar, con el negativo efecto que esto tiene sobre el segmento de nuestra población que encuentra difícil adaptarse a las nuevas condiciones. Esta resistencia se quiere disimular con exhortaciones a repartir lo mucho que tenemos cuando los pobres del mundo se benefician más de la globalización capitalista que ningún otro.

El progreso de la humanidad

El capitalismo no solo mejora la situación de los pobres sino que también ayuda a elevar el nivel de vida del conjunto de la humanidad. Las Naciones Unidas vienen publicando desde 1990 un Índice de Desarrollo Humano, mejorado en 2010. Ese IDH no se conforma con medir el bienestar de las poblaciones de los distintos países con el PIB per cápita. Añade otros dos factores: la esperanza de vida al nacer y la mejora de los conocimientos, medida por la alfabetización y la escolarización. La mejora ha sido notable, no solo en el Tercer Mundo sino también en los países avanzados. Presento una selección indicativa del progreso de la humanidad bajo la nefanda influencia del capitalismo.

La distancia entre la realidad de los hechos y el lagrimear de los críticos necesita explicación. Algo lleva a que el rechazo del libre mercado tenga tanto éxito. ¿Qué es? En mi opinión, la gente no comprende bien la moral del mercado. ¿Cómo ha hecho más bien a la humanidad Bill Gates: lanzando la Fundación Bill & Melinda Gates o creando Microsoft junto con Paul Allen? La Fundación es una institución notable. No solo han donado los esposos Gates 28.300 millones de dólares a su Fundación sino que han lanzado con ella un nuevo modo de hacer caridad, el filantropocapitalismo, por el que se aplican los cánones de la gestión de la empresa al mundo de la filantropía. Con todo, nadie se atreverá a negar que lo hecho por la humanidad por Microsoft, con el lanzamiento de los PC (siglas de los computadores personales y no del Partido Comunista), y la creación del sistema operativo MS-DOS y su extensión gráfica Windows, es mucho más de lo que nunca podrá hacer la Fundación Gates. Y lo mismo puede decirse de Steve Jobs y su Macintosh o de la contribución de Apple.



La pregunta fundamental es por qué son muchos los que creen que quienes se han enriquecido con estos productos y otros favorecidos por el público deben “devolver a la sociedad algo de lo que han recibido de ella”. Me parece muy bien que esas personas gasten su dinero en proyectos filantrópicos como los de Gates, pero no porque deban nada a la sociedad, que les pagó estrictamente por lo que recibía de ellos. En un clarividente ensayo, los economistas Clark y Lee (2011) dan razón de por qué se considera que esas inmensas fortunas obtenidas en mercados de libre competencia parecen inmorales. Clark y Lee lo explican distinguiendo entre la moral de las relaciones personales y la moral de los negocios. Hay que reconocer que en las sociedades progresivas coexisten dos éticas en materia de ayudar a los demás: la moral magnánima y la moral mundana. La moral magnánima consiste en ayudar a los demás ex abundantia cordis, por generosidad del corazón hacia quien necesita apoyo. Son tres las características de la ayuda magnánima: (1) que se lleve a cabo intencionadamente, (2) que comporte sacrificio personal y (3) que se dirija a beneficiarios identificables.

La moral mundana, por el contrario, consiste en obedecer normas de conducta cual decir la verdad, cumplir las promesas y contratos, respetar los derechos de propiedad de los demás y no dañar intencionadamente. Las tres características de la ayuda mundana son distintas de las de la magnánima: es interesada, da beneficios (a las dos partes) y se dispersa en transacciones anónimas. Aquellas ayudas las reparten manos generosas; ésta, la “mano invisible”.

Ahora podemos ver por qué se mira la “ayuda mundana” con tan malos ojos. La magnanimidad personal despierta emociones de agradecimiento. El mundano éxito de quienes triunfan en un mercado competitivo, en cambio, se ve a menudo con envidia. La naturaleza humana es tal que apreciamos los regalos gratuitos pero no la mucha mayor contribución a nuestra felicidad de quienes nos venden lo que necesitamos o deseamos.

Civilización

Hay delincuentes tanto en la vida personal y familiar como en la vida social. Los mentirosos, codiciosos, infieles a su palabra, ladrones de fama y hacienda existen tanto en las relaciones personales como en la vida de los negocios. No es aceptable, sin embargo, que líderes religiosos y moralistas de tertulia condenen el libre mercado y el capitalismo como inmorales. ¿O es que no es moral sacar a tantos millones de la pobreza y conseguir que millones de miserables vayan ingresando en la civilización?



España: Perdido el camino...

5 de junio de 2014

Las elecciones al Parlamento Europeo, tanto en España como en el resto de Europa, se han centrado en cuestiones nacionales, incluso cuando el voto fue expresión de antieuropeísmo. Ahora, los gobiernos nacionales ven en peligro su proyecto político en la medida en que lo habían unido a la idea de Europa; y las autoridades de la Unión Europea (UE) ya no saben cómo realizar el ideal de unión europea, que es su razón de ser. Todos han perdido el camino. Es lo que suele ocurrir a quienes se encandilan con alguna utopía inasible, como es la de construir una Europa a imagen y semejanza de EE.UU. Ya saben que “utopía” quiere decir un lugar al que es difícil llegar porque no está en ningún sitio.

Es natural que una elección que muchos ciudadanos ven como carente de consecuencias tangibles muestre resultados dispersos e, incluso, contradictorios. La abultada abstención, excepto en Italia, donde se juzgaba el proyecto de regeneración de un joven primer ministro, ha significado falta de interés de muchos en el proyecto político europeo y también pérdida de confianza en sus representantes políticos. El crecimiento de los partidos de extrema izquierda y extrema derecha ha sido expresión de protesta de quienes han sufrido la crisis económica y han soportado sus consecuencias, pero también muestra de un renacimiento del sentimiento nacional. Desde el Tratado de Roma, los europeos hemos buscado acoplar la creación de un mercado único europeo con la creciente unión política: al ir demasiado aprisa con la creación del euro y construir instituciones administrativas sin raíces en el sentir de la gente, los europeos hemos puesto en peligro ambos elementos de unión.

Reformas a regañadientes

Por lo que se refiere a España, son tres las cuestiones preocupantes. El gobierno del Partido Popular (PP) cree haber ganado las elecciones. El Partido Socialista creía que podía ganarlas. Y entre los partidos nacionalistas casi las han ganado. Centrémonos en el gobierno. Achaca sus malos resultados a una falta de comunicación con su electorado: muy al contrario no ha fallado la comunicación, sino el contenido. Ha quedado bien clara para muchos de sus seguidores la falta de reacción de su directiva ante la corrupción que ha cundido en sus filas. Sin duda eran necesarias medidas para atajar la crisis financiera y económica, pero los ministros han dejado bien claro que los recortes y las reformas se llevaban a cabo a regañadientes. En realidad, al gobierno del PP le habría gustado que el proyecto socialdemócrata del PSOE hubiera sido factible y evitar la transformación a la fuerza del sistema financiero de nuestro país; una reforma del mercado de trabajo, parcial aunque bien encaminada; el intento sin duda necesario de crear un mercado único en España; unos pocos cierres de empresas públicas autonómicas; la temporal reducción del número de contratados del Estado y muchas subidas de impuestos.



La doble crisis de 2008 y 2012 era el momento adecuado para reconstruir desde sus cimientos el Estado de Bienestar en España. El público habría aceptado, con protestas sin duda pero resignadamente, que la ayuda pública se ciñera a financiar un nivel mínimo necesario de servicios públicos, con copago en la Sanidad y en la educación no básica; con capitalización parcial al menos de las pensiones; con la reforma de la representación sindical en las empresas, con un contrato laboral único... En fin, para qué voy a seguir, pues en el señor Mariano Rajoy y en muchos de sus ministros ha faltado la convicción para hacer una reforma que iniciara una nueva era en la evolución de nuestra sociedad. Y eso que sólo hablo de economía...

Con más de lo mismo, el PP perderá las próximas elecciones locales y generales. Ahora sería necesario señalar que, hecho lo mínimo necesario, había llegado el momento de un renuevo de ilusión en el país. Es indispensable un cambio de ministros con un cambio de proyecto. El señor Montoro ha hecho su trabajo y ahora le toca descansar. Es triste que se esté pensando en enviar al ministro Guindos a Europa, cuando hace falta aquí en España para dar un giro hacia el crecimiento, con nuevas y más profundas reformas. El ministro de Industria ha creado tal confusión con su reforma eléctrica que sería necesario otro ministro que libere la tarifa eléctrica de impuestos especiales y subvenciones espurias, al tiempo que se liberalice el mercado de la energía como se ha hecho con las telecomunicaciones. Una crisis de gobierno, incluso lateral, despejaría el bochorno que nos agobia.

En Europa son tantos los cambios que hay que hacer... ¿Estamos seguros de que necesitamos un Parlamento europeo? El intento de democratizarlo, dándole cada vez mayores poderes para que los votantes le presten más atención, ha fallado. ¿Por qué no reuniones contadas de una Asamblea compuesta por diputados nacionales, con verdadera representación de la ciudadanía? Muchas menos directivas desde Bruselas y mucha más concurrencia entre las diferentes naciones, sin subvenciones a quienes no quieran reformarse. ¡Ah! Se me olvidaba: Ucrania. Necesitamos una política de defensa europea, que es lo que los países que se liberaron del imperio soviético buscan de verdad. No soñemos. Como en Europa no mandamos, ¿por qué no mandar en España?



España: Teoría de la corona

11 de junio de 2014

Son muchos los que esperan de Felipe VI, el nuevo Rey de España, que desempeñe un papel activo, aunque sin duda discreto, en la solución de los muchos problemas constitucionales, políticos e incluso económicos con los que se enfrenta nuestro país. Eso es no entender el limitado pero muy importante papel que un monarca puede desempeñar en un sistema democrático como es el nuestro. La virtud de la Monarquía parlamentaria es, precisamente, que la Corona debe significar o simbolizar todo lo que en una sociedad civilizada queda fuera de la política. Si la sucesión en la jefatura del Estado es, por así decirlo, automática y si durante su reinado el Rey no se interfiere en la vida política, los ciudadanos de un país tan dado a banderías como es España pueden llegar a entender que lo más importante de su vida personal y social debe desarrollarse en el campo de lo privado.

La actividad política es sin duda necesaria en una democracia, pero no debe extenderse a todo lo que deciden los individuos, personal o colectivamente. Permítaseme una comparación. La actividad política se asemeja a la producción de electricidad en una central nuclear, que, siendo muy útil, debe quedar aislada por espesos muros de protección para que no contamine el medio ambiente. Sé que son muchas las personas, sobre todo en la izquierda, que consideran que todo en la vida de un país es política y que todas las decisiones comunales deben tomarse “democráticamente” por votación mayoritaria, desde la gestión de las empresas hasta el funcionamiento de los colegios o desde la organización de las iglesias hasta las actividades culturales y deportivas. Si todo se politiza y se hace objeto de deliberaciones teñidas de ideología, la atmósfera de la sociedad se hace sofocante y tensa.

Los racionalistas extremos entre nosotros denuncian la contradicción entre un sistema político democrático y la transmisión de la jefatura del Estado por herencia de padres a hijos y nietas. Pues precisamente ésa es la ventaja de una democracia parlamentaria coronada cual la española: lo “absurdo” o “irracional” de la forma de seleccionar quién presidirá y simbolizará nuestra nación significa que hay aspectos importantes de nuestra organización comunal que quedan fuera de la decisión por el voto mayoritario.

El campo en el que se ejerce la decisión por mayoría de votos no debe extenderse a la totalidad de la vida social. La Monarquía en España simboliza o puede simbolizar, si la arreglamos bien, los límites a los que se debe someterse la regla mayoritaria para que no sea contraproducente y no traicione a la postre las voluntades de los individuos.

Libre elección



Tanto la economía de mercado como la democracia política son sistemas sociales basados en que, en una sociedad libre, no hay ningún sistema de valores que sea común a todas las personas. Es importante que las diferencias de gustos y modos de vivir, en la medida de lo posible, no se vean recortadas por imposición política. Ni la enseñanza, ni la religión, ni la cultura, ni el deporte, ni la vida familiar, ni los precios, ni los horarios comerciales deben regirse por votación mayoritaria. Todas esas actividades deben quedar a la libre elección y acuerdo de los individuos. La democracia no es un plebiscito continuo, sino una manera instrumental y procedimental de tomar algunas decisiones comunes. La democracia debe ser limitada, pues de otra forma puede caer en lo totalitario.

No es casualidad que sean algunos grupos de la izquierda más radical los que se oponen a que nuestro sistema político tenga forma de Monarquía. El ideal de estos grupúsculos es el de meterse en los entresijos de nuestra vida cotidiana para limitar las decisiones y actividades que les disgustan porque las consideran irracionales, elitistas, creadoras de desigualdades, reflejo de visiones metafísicas y contrarias a la dictadura de las masas contra la que avisó Ortega en puertas de la IIª República.

Cierto que el papel del nuevo Rey debe ceñirse a simbolizar todo aquello en lo que los españoles pueden estar espontáneamente de acuerdo sin necesidad de imposiciones políticas. Sin salirse de los límites constitucionales, la Corona, por su sola existencia, podría contribuir a la solución de las tensiones nacionales que hoy sufrimos. Una numerosa minoría de catalanes dice querer convertir a Cataluña en un Estado independiente. Ello supondría un grave coste para los catalanes, al quedar fuera de la Unión Europea, y para los demás españoles al sufrir la amputación de la que consideran parte de su tierra propia. Por eso me parece una equivocación que Convergencia y Unión se abstenga en el voto de la ley orgánica de reconocimiento de la dimisión de D. Juan Carlos I. Quizá el acuerdo para un nuevo arreglo constitucional de la cuestión catalana (y vasca) pudiera ser más fácil dentro del marco de una Monarquía común, en la que cupieran las diferencias nacionales que tantas tensiones están creando, sin romper la unidad formal del país que es el de todos los españoles desde hace siglos.



Draghi incumple el mandato del euro

25 de junio de 2014

Sorprenderá que yo diga que Draghi y los demás directivos del Banco Central Europeo (BCE) no están haciendo lo que deberían cuando ha sido general el elogio del creciente activismo del banco en busca del relanzamiento de las economías europeas. Todo es felicitarse de que, ante el temor de una deflación a la japonesa, el BCE haya reducido al 0,5% el precio de sus préstamos ordinarios a la banca. También se elogia que haya dejado temporalmente de “esterilizar” o retirar de la circulación el dinero que inyectó anteriormente con sus compras de obligaciones. Por si era poco, todo son parabienes porque se ha comprometido a mantener abierta durante cuatro años una línea de financiación a la banca de nada menos que 400.000 millones de euros condicionados a que los bancos la usen para prestar a pequeñas y medianas empresas (“funding for lending” ha llamado el Banco de Inglaterra a un programa semejante).

Mas para evitar que la banca deposite ese dinero barato en el propio BCE, como ha solido ocurrir hasta ahora, el Consejo ha tomado la medida innovadora de cobrar un 0,15% sobre los depósitos que se entreguen a su custodia en vez de remunerarlos. “¡Por fin se decide el BCE a poner en práctica una política monetaria más parecida a la del Banco de Inglaterra y la Reserva Federal!”, dicen quienes ven la creación de dinero como fuente y causa del crecimiento económico.

Son medidas tomadas por unanimidad, nos ha dicho el Consejo de Gobierno del BCE por boca de su presidente, lo cual, lejos de indicar una actuación firme y decisiva, es muestra del limitado efecto que medidas anteriores han tenido para combatir dos males que le preocupan: la amenaza de deflación, es decir de caída de los precios al consumo, en vez de la acostumbrada inflación; y la insuficiencia de crédito bancario para las actividades productivas. En la jerga de los banqueros centrales, estaba fallando el llamado “multiplicador bancario”, el mecanismo por el que la creación de medios de pago por el banquero central se transmite a la economía en general, al transformar la banca comercial en crédito toda esa nueva liquidez. Dicho más llanamente, hasta ahora sus intentos de acelerar el crecimiento de la economía real han tenido poco éxito. Por si acaso tampoco consiguen con estas nuevas medidas los resultados apetecidos, avisan que se lanzarán, si es preciso, a la compra masiva de deuda pública de los Estados de la zona del euro, digan lo que quieran los Tratados que lo prohíben. Flaca confianza es la que tiene el BCE en sus poderes de reanimación.

El efecto de estas medidas y las ya prolongadas de la Reserva Federal sobre los mercados financieros es inquietante. El precio de la deuda pública no hace sino subir y lo mismo pasa con los títulos de renta variable. Los índices de volatilidad se encuentran en mínimos. Más extraño aún: el Estado español ha podido acudir a los mercados a costes inferiores al de EE.UU. y Reino Unido. Parece que los inversores dan por sentado que el BCE hará “lo que



haga falta” para evitar cualquier tropiezo: “whatever it takes”, como dijo Draghi cuando salvó al euro en julio de 2012. Pero ahora la llamada a la acción del banco emisor incluye evitar que las economías europeas dejen de crecer.

Resistencia a continuar las reformas

La administración de la droga excitante del dinero para sacar a nuestras economías de la neurastenia postcrisis es un intento de conseguir una vuelta al crecimiento sin plantearse las cuestiones de fondo. Primero, habría que estar convencido de que una leve deflación de precios pueda ser tan dañina como se dice. Cierto que con ello la carga real de la deuda se hace más gravosa.

También es cierto que una deflación complica el balance de los bancos, que ven caer el valor de sus activos. Sin embargo, unos precios más bajos fuerzan una mayor productividad en toda la economía. Más bien, creo que fue el empeño por mantener vivos a los bancos y empresas “zombies” que deberían haberse disuelto lo que impidió la reestructuración que la economía real japonesa estaba demandando y lo que explica ese largo estancamiento, además de la política keynesiana de multiplicar las obras públicas financiadas con deuda. A menos que la caída de los precios al consumo amenace con convertirse en una espiral que lleve a los consumidores a retrasar sus compras en espera de precios aún más bajos, no veo qué gran daño pueda causar la temida deflación. Cierto, el valor de los activos dejará de inflarse, pero así los inversores andarán más cautos y los bancos se fijarán en los planes de negocio de sus clientes. Roosevelt en su día se equivocó al atribuir la Gran Depresión a la caída de los precios agrícolas e industriales; igual se equivocan quienes culpan de la falta de pulso de la economía japonesa a una deflación de los precios al consumo. La presente falta de crecimiento europeo se encuentra en otro punto: la resistencia a continuar con las reformas estructurales que exige un sistema monetario como el del euro.

La moneda única europea se creó para que funcionara casi como si fuera un patrón oro. Para pertenecer a la eurozona era necesario garantizar a corto y largo plazo un máximo de deuda pública y déficit presupuestario. Estaba prohibido salvar al país que, habiendo incumplido, sufriera el asalto de los especuladores: “no bail out”, “nada de salvavidas”, era la regla. No se dijo, pero estaba implícito, que los mercados de todos los miembros, especialmente los mercados de trabajo, tenían que ser flexibles; y que debían limitarse los gastos en pensiones, Sanidad y Educación financiados con la deuda. Quien no pudiera cumplir esas condiciones debía volver a su antigua moneda. Todo esto ha saltado por los aires con las quiebras de los países periféricos de la zona euro. Con la ayuda de Draghi, hemos pasado a vivir en un sistema de dispendios sin fin, salvado con la creación de dinero nuevo cada vez que hay crisis. Acabaremos como EE.UU., donde cada pocos meses el gobierno pide elevar el techo de deuda para poder pagar las pensiones de los veteranos de guerra y los salarios de los empleados de las instituciones públicas.



España: Reducir el gasto para aliviar la presión fiscal

2 de julio de 2014

La reforma tributaria que se propone llevar a cabo el gobierno del presidente Mariano Rajoy tiene dos fines claros: busca corregir algunos defectos del actual sistema tributario, en aplicación de las propuestas del Comité de Sabios presidido por Manuel Lagares; y pretende recobrar alguno de los votantes tradicionales del Partido Popular (PP) que se abstuvieron en las elecciones europeas.

Sin embargo, la reforma fiscal anunciada por el ministro Montoro adolece de un defecto fundamental: se reduce a retocar el sistema de ingresos públicos. Es sabido que Montoro dio la instrucción al Comité de Sabios de que sus propuestas no supusieran una reducción de los ingresos públicos. Las decisiones de mediados de junio son fieles a esa limitación: la reforma no se ocupa del gasto. Era ésta la última ocasión para examinar en su conjunto y a fondo el papel del Estado en la economía española y se ha desaprovechado.

Cuando, como en el caso español, existe la obligación de consolidar fiscalmente la Hacienda en el lapso de unos pocos años, la reforma fiscal no puede hacerse sin atender también al lado del gasto. La consolidación fiscal aún inacabada exige, como mínimo, que el gasto público en su totalidad crezca menos que el ingreso. Más aún, si el Estado español se encuentra muy endeudado y quiere atender a su compromiso de reducir la deuda a lo equivalente del 60% del PIB, tendrá que mantener año tras año un superávit en las cuentas no financieras del presupuesto. Sabemos que la deuda del Estado español y sus Autonomías pronto llegará a equivaler al 100% del PIB. Si España no quiere argentinizarse incumpliendo sus obligaciones, tendrá que evitar nuevas deudas e ir amortizando las pasadas.

Pero, dicen los más optimistas, en cuanto salgamos de la crisis y la economía vuelva a crear empleo para los parados y beneficios para las empresas, los ingresos del fisco comenzarán a crecer espontáneamente y el problema se irá resolviendo por sí solo. Todo ministro exactor alberga en su ánimo la esperanza de que la producción se reanime por sí sola y lleve espontáneamente a mayores ingresos públicos. Pero la capacidad de crecimiento de la economía viene limitada por dos factores: unos impuestos abultados y unos gastos de bienestar que tenderán a crecer con el PIB. Eso reduce la posibilidad de que el crecimiento de la economía haga caer por sí solo el déficit público hasta convertirlo en un superávit. Una consolidación fiscal basada en el impuesto y sin recortes del gasto condena el país a un crecimiento desmayado o lo conduce al aplazamiento de la consolidación y recurrir a nuevas emisiones de deuda.

Las reformas fiscales del gobierno



Las reformas decididas por el gobierno afectan principalmente dos impuestos: el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y el Impuesto de Sociedades. Los cambios del impuesto sobre la renta suponen un cierto giro en la política redistributiva del ministro Montoro. Su inclinación ha sido siempre la de aligerar el impuesto de los “pobres” y recargarlo sobre los “ricos”, por convicción y sobre todo por cálculo electoral. Buscaba atraer votantes del PSOE con su política social. No importaba que, tras la brutal elevación de impuestos en diciembre de 2012, sólo el 0,4% de los 19,5 millones de contribuyentes llegase a pagar el tipo marginal máximo del 52%. Era para quedar bien. Ahora, con la reforma anunciada, todos los contribuyentes verán bajar el impuesto sobre los ingresos en 2015 y 2016: no sólo los más pobres sino también los más ricos, al caer el tipo marginal al 47% en 2015 y al 45% en 2016. También las clases medias quedarán aliviadas porque se reduce el número de tramos de siete a cinco, quiere decirse que son menos escalones del ingreso afectados por tipos crecientes; y porque los profesionales, abundantes en el tramo medio, verán reducirse las retenciones que han de adelantar al Fisco. Por fin, los beneficios del ahorro, que estaban gravados con un máximo del 27%, pasarán a un máximo del 23%. Todo esto coincide, claro, con que muchos votantes del PP se han abstenido en las elecciones europeas.

Por otra parte, el Impuesto de Sociedades se aligera sobre todo para las pymes. Se reduce el tipo principal del 30% al 25% pero las pymes tendrán la posibilidad de reducirlo al 20,5% — muy lejos aún del 12,5% de Irlanda—. El gobierno necesita más crecimiento para no ser derrotado en las próximas elecciones. La contradicción estriba en que las empresas siguen cargando con elevadas cotizaciones sociales.

El gasto en “bienestar”

No hay mucho misterio. La parquedad del alivio concedido a las familias y las empresas se debe a lo abultado del gasto público estructural. Nadie quiere reconocer que el gasto del “Estado de Bienestar” es excesivo. Me atrevo a decir más: que es insostenible, porque, desde el punto de vista actuarial, los compromisos latentes de los sistemas de pensiones y de salud públicas los han colocado en situación de quiebre técnica.

La crisis de los años 2007 a 2013 en el mundo occidental la trajeron políticas públicas artificialmente expansivas y generosamente “sociales”. De la burbuja inmobiliaria de EE.UU. tuvo la culpa el Congreso al fomentar la concesión de hipotecas a grupos sociales indigentes. La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo mantuvieron artificialmente bajo el tipo de interés oficial durante al menos una década. Los Estados-miembro de la Unión Europea dedican más del 60% de su gasto por término medio en subvenciones a la salud, la educación, los servicios sociales, las pensiones y el paro. En España ese porcentaje es incluso superior. En las Autonomías los servicios de salud, educación y ayudas sociales suman más del 90% de su gasto. Pese a tanto gasto, el Estado de Bienestar no funciona bien.



Todas estas intervenciones son contraproducentes porque demandan una presión fiscal o unos aumentos de deuda que están reñidos con un crecimiento veloz y sostenido. El gobierno de Rajoy no sabe o no quiere soltar ese freno con un decidido recorte del gasto.



España: Día de la liberación fiscal

16 de julio de 2014

El informe anual sobre "El día de la liberación fiscal" trata de calcular en qué momento del año empezamos los españoles a disponer de lo que nos queda de nuestros ingresos tras haber liquidado lo que hemos de entregar al Fisco. El resultado es doloroso. La versión impresa del informe presenta el siguiente cálculo de días dedicados al pago de los impuestos para un trabajador que durante el ejercicio 2013 haya cobrado un sueldo acomodado de unos 24.400 euros al año, estaba casado, con dos hijos, tenía coche, una casa, fumaba y bebía alguna bebida alcohólica:

- IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas): 41 días.
- IVA (Impuesto sobre el valor agregado): 25 días.
- Seguridad Social: 102 días.
- Impuestos especiales: 11 días.
- Otros impuestos: 5 días.
- Suma: 184 días.

De este cálculo se deduce que a dicho trabajador le quedan unos ingresos disponibles de 181 días, que es la razón por la que se ha elegido el 3 de julio para celebrar la liberación del contribuyente español. En este caso, los ingresos libremente disponibles son menores a los detraídos. Me atrevo a presentar estos resultados y alabar su elaboración porque, aun siendo secretario (no remunerado) del think tank que ha producido ese trabajo, no lo he realizado yo, sino la jefa de investigación de Civismo, Cristina Berechet, con lo que no caigo en la falta de gusto de elogiarme a mí mismo.

Se comprenderá que los resultados son distintos para cada nivel de ingresos y para cada domicilio fiscal dentro de la España de las autonomías. Así, para un empleado con un salario bruto anual de 15.500 euros, el día de la liberación fiscal fue el 16 de junio; con un salario de 19.300 euros, el 26 de junio; el susodicho 3 de julio para el de 24.400 euros; el 9 de julio para un salario de 40.000 euros; pero el 7 de julio para otro de 100.000 euros. En efecto, el día se adelanta para los ingresos brutos más altos, pues hay un tope a lo que se contribuye a la Seguridad Social —como lo hay a la pensión que al final de la vida laboral puede uno cobrar—.

Para más detalle, el informe en su versión de Internet contiene una calculadora que permite calcular el esfuerzo fiscal de cada contribuyente individual. El estudio es, además, notable por analizar la situación de las diferentes autonomías: la horquilla es de nueve días entre el País Vasco, el 28 de junio, y Cantabria y Cataluña, el 7 de julio.



El trabajo es especialmente instructivo en dos cuestiones, una explícita y otra implícita. La revelación directa más notable es el peso de la financiación de la Seguridad Social en el esfuerzo fiscal de los españoles. A sostener las pensiones, la subvención del paro y los servicios sociales dedicamos en el caso típico descrito nada menos que 102 días de trabajo de los 184 días que nos detrae anualmente el Fisco —y eso que dicha cuantía deja fuera la financiación de la Educación y de la Sanidad, que también pagamos los contribuyentes—.

Cuña fiscal

Más que el total del coste en días de trabajo del Estado de Bienestar, interesa lo que las cotizaciones a la Seguridad Social encarecen el coste del trabajo. Se trata de lo que los economistas llamamos la cuña, la diferencia entre lo que los asalariados reciben por su trabajo antes de los otros impuestos y lo que un trabajador le cuesta en total a su empresa. Nadie le dice a los trabajadores que la Seguridad Social encarece sus servicios con un gravamen sobre la mano de obra de un 36% adicional. Es un impuesto especial con el que, en una época de alto desempleo, cargan los trabajadores y no la empresa, por mucho que aparentemente el empleado no parezca contribuir más que con el 7%: la competencia hace que el resto, a fin de cuentas, se detraiga de la paga. Esa cuña tiene como efecto que la tasa de paro básica, o tasa de paro natural que decimos los economistas, sea varios puntos más alta de lo necesario.

La cuestión implícitamente evocada por el estudio de Civismo es la del peso insostenible del Estado de Bienestar en su conjunto. Como han señalado recientemente los investigadores de Fedea Juan Rubio Ramírez e Ignacio Conde-Ruiz, el sector público español arrastra un déficit estructural de un 4% del PIB, equivalente a una falta de ingresos de 40.000 millones de euros. Ese déficit se origina en la necesidad de financiar el Estado de Bienestar; es decir, la suma de la Seguridad Social a cargo del Estado, y la Sanidad y la Educación a cargo de las autonomías. La elección es bien clara: o se restringe (“desmantela” dice dramáticamente Fedea) el Estado de Bienestar o se suben los impuestos hasta doblar el esfuerzo fiscal: nada menos que todos el IVA al 21%; la supresión de todas las deducciones del Impuesto de Sociedades para poder reducir el tipo al 15% sin perder ingresos; aumentar los impuestos especiales y las tasas y precios públicos; y generalizar el impuesto sobre la riqueza. Esos animosos investigadores nada dicen del efecto que tendría sobre el crecimiento del PIB.

Mis lectores coincidirán conmigo en que gobiernos de cualquier color se guardarán mucho de elevar los impuestos de esa manera. Pero como el gasto público hay que financiarlo, ello implica que, lejos de reducirse la deuda pública, ésta seguirá aumentando, aunque la recaudación crezca a la par que la economía. La otra salida, en la que nuestro gobierno de tinte socialdemócrata ni siquiera se atreve a pensar, es la de reformar a fondo el Estado de Bienestar. No lo duden: seguiremos creciendo despacio e incurriendo en una deuda pública cada vez mayor.



Escocia independiente y socialista

16 de septiembre de 2014

El próximo jueves 18 de septiembre los residentes en Escocia decidirán si esa nación se mantiene dentro de Reino Unido. La cuestión es de importancia para los británicos, y tanto o más para el resto de los europeos. En efecto, son muchas las regiones en las que amplias minorías buscan la independencia y la entrada en la Unión Europea, no sólo Cataluña. Durante mi estancia en la Universidad de Buckingham estos dos últimos meses he seguido el debate entre nacionalistas y unionistas escoceses con creciente alarma. Mis razones son dos: la primera, la animosidad que sin duda dividirá a los británicos durante años, cualquiera sea el resultado del referéndum; la segunda, el tipo de sociedad que buscan crear los escoceses, tanto con la independencia defendida por los nacionalistas como con la autonomía prometida por los unionistas. El divorcio, caso de ocurrir, sería por exigua mayoría. Ese resultado dejaría dolorida y hostil a una gran minoría partidaria de mantener el país dentro de Reino Unido. Esos sentimientos se envenenarían con las dificultades de una prolongada negociación para disolver una Unión que ha durado más de 300 años.

El primer obstáculo lo constituye la promesa de los nacionalistas de desplazar la base de submarinos portadores de armas nucleares de la ría de Clyde a algún lugar de Inglaterra. El Sr. Alex Salmond las llama “armas de destrucción masiva”, que lo son, pero que precisamente por eso no se han utilizado desde 1945. Algunos unionistas han ironizado preguntando cuándo iría Salmond a visitar a Putin para pedirle que siguiera el ejemplo escocés. Escocia tendría que crear unas fuerzas de Defensa separadas de las de Reino Unido, lo que no sería fácil dado los siglos que llevan militando juntas.

El segundo obstáculo es la moneda. Los nacionalistas han dicho que mantendrán la libra esterlina (y la Monarquía) quiéralo o no el resto de Reino Unido. Ciertamente podrían tomar como moneda una divisa extranjera, en este caso la esterlina, como hacen Panamá o Ecuador con el dólar. Mas para ello necesitarían mantener una cuantiosa reserva de libras en esa “caja de emisión”, lo que sólo es posible con amplio superávit en la balanza de pagos y en el presupuesto: sólo así evitarían catástrofes como la de Argentina de mano de Cavallo, cuando fijó la paridad del peso con el dólar. Mejor les vendría, claro está, mantenerse en la unión monetaria británica, pero ello precisa de mutuo acuerdo: no veo por qué los ingleses habrían de comprometerse a salvar otra vez a Royal Bank of Scotland, al Bank of Scotland y a su matriz Lloyds Bank en caso de otra crisis bancaria. Por si acaso, ambos bancos han anunciado que si vence el “Sí” transferirían sus sedes a Inglaterra.

El tercer obstáculo es la división de la deuda pública y la financiación del nuevo Estado independiente. Escocia tendría que cubrir con nuevas emisiones el principal y los intereses de la parte de la deuda pública de Reino Unido que le correspondiera según la población, aproximadamente unos 10.400 millones de libras, el 86% de su PIB. Una Escocia



independiente también necesitaría seguir emitiendo deuda para atender a su déficit público, que en 2012-2013 se cifró en lo equivalente a un 8,3% de su PIB, frente al 7,3% del PIB de Reino Unido en su conjunto. En todas esas emisiones, Escocia tendría que cargar con una prima de riesgo de, al menos, 160 puntos básicos sobre el interés pagado por Reino Unido, dado el tamaño del país y la inseguridad del experimento. Además, cesaría el bloque de financiación que Escocia recibe de la Hacienda de Reino Unido, que supone que, por término medio, cada escocés recibe 1.600 libras más de financiación pública que cada inglés. Salmond cifra sus esperanzas en los ingresos de petróleo del Mar del Norte, que en el momento actual equivaldrían a un 10% de su PIB (menos de un 1% del PIB de Reino Unido en su conjunto). Sin embargo, el país quedaría expuesto al posible agotamiento de las reservas de hidrocarburos y a los vaivenes de su precio.

Aparte de estos tres obstáculos, quedarían las grandes dificultades de dividir una Administración Pública unida durante muchos años. Escocia ya rige autónomamente su Servicio de Salud, el de Educación y el de Justicia, pero el resto de los servicios públicos, en especial las pensiones son muy difíciles de atribuir y gestionar geográficamente. ¡Ni siquiera saben cómo se dividiría la BBC!

Fuera de la realidad

Salmond ha expresado su confianza de que, de ser independiente, Escocia conseguiría crecer más aprisa gracias a unos impuestos más ligeros y a unas leyes de inmigración más generosas. Me parece que eso no es sino un sueño. En Escocia se concibe el Sistema de Bienestar de manera diferente que en el resto de Reino Unido. En pocas palabras, una gran mayoría de escoceses está empeñada en crear un Estado socialista al norte del río Tweed, sean independientes o no. En Escocia ya no sólo es gratuito el sistema de Salud, sino también las medicinas, al contrario del resto de Reino Unido. E igual ocurre con la enseñanza universitaria, que es gratuita para los residentes en Escocia. Salmond ha dicho que quiere aumentar el gasto social y aumentar el impuesto a los ricos para hacer un país “más justo” —fairer, en la blanda e intraducible expresión inglesa—. En los debates que he seguido nadie se ha atrevido a decir que Escocia entera se ha quedado estancada en el año 1945, lo que hace dudar de la proclamada aspiración de transformarla en una Noruega o incluso un Singapur o un Hong Kong.

Vista la confusión que han creado los nacionalistas escoceses, sería cosa de decirles que con su pan se lo coman. El lío es descomunal desde el punto de vista económico, social y administrativo, pero además lo es para Europa en su conjunto. Ganen o pierdan, será por exiguo margen y la cuestión seguirá viva, como la de Quebec en Canadá. No nos engañemos los españoles. El caso de Cataluña se verá como idéntico al de Escocia, diga lo que diga nuestra Constitución. Se la saltarán si sienten que tienen suficiente apoyo político tanto entre sus votantes como en la UE. Europa ha socavado los Estados y soliviantado los nacionalismos. El resultado en términos de populismo y tribalismo es el que pronto veremos.



Miguel Boyer: Hombre de convicciones y gran ministro de Economía

3 de octubre de 2014

Desde los primeros momentos en que trabamos amistad Miguel Boyer se me mostró como un hombre de pensamiento libre, carácter enérgico, dispuesto a llevar sus ideas a la práctica, fueran las que fuesen las consecuencias para él. Esa claridad de visión y firmeza de carácter le llevó a los puestos más altos de la vida nacional, en los que, para bien de nuestro país, pudo demostrar su gran espíritu público.

Por el lado materno, pertenecía a una familia de liberales reformistas. Nació en San Juan de Luz (Francia) el 5 de febrero de 1939, donde su madre hubo de exilarse durante la Guerra Civil. Su bisabuelo, Amós Salvador había sido senador en el partido de Sagasta.

Su abuelo fue condenado a muerte y conmutada la pena por Franco; en el momento de su nacimiento su padre estaba preso en España. Volvieron a España y cursó estudios en el Liceo Francés: llevó para toda la vida la impronta tan típica de la enseñanza francesa.

La preparación profesional

Su primera licenciatura fue la de Física. Tras haber ingresado en la Junta de Energía Nuclear por sus actividades contra el Régimen del general Franco hubo de pasar seis meses en la cárcel de Carabanchel por propaganda ilegal, después de que la Brigada Social le sorprendiera reproduciendo panfletos subversivos en una vieja multicopista manual. Le conocí en la Facultad de Económicas de la Complutense.

Mostró ser uno de los alumnos más destacados que he tenido nunca —naturalmente le dimos matrícula de honor—. Recuerdo bien la letra chiquita y el orden lógico de sus ensayos y exámenes.

Especialmente agudos fueron sus trabajos sobre Carlos Marx, por el que nunca sintió mucha devoción, pues estaba de acuerdo con Keynes en encontrarle aburrido. Su modelo era más bien Bertrand Russell, cuyo humor cáustico armonizaba bien con el suyo. Algunos años después organizamos un congresillo sobre este filósofo y matemático inglés, que luego en opinión de ambos dio muestras de excesiva excentricidad política.

Le animé a que hiciera oposiciones al Servicio de Estudios del Banco de España. Las ganó con brillantez en 1969 y así entró a formar parte de un grupo de amigos de iguales



convicciones, como Mariano Rubio, Ángel Rojo, Carlos Solchaga, Raimundo Ortega o yo mismo.

¿Vaivenes políticos?

Con ayuda de otros profesionales del Ministerio de Comercio y del Instituto Nacional de Industria (INI) relanzamos la revista España Económica, que, durante el tiempo en que fue permitida su publicación, defendió con impertinencia la esperanza de una España democrática en la que se aplicara la racionalidad económica. Algo nos dice sobre las sorprendentes contradicciones del Régimen el que casi todos los que criticábamos la política económica desde esas páginas éramos funcionarios. En 1974 marchó al Servicio de Estudios del INI, que llegó a dirigir.

Los cambios de su vida política confunden a muchos. No era hombre de disciplina de partido, sino de fidelidad a unas ideas y modos de actuar según lo que le dictaba la razón.

Se afilió al PSOE en los años sesenta, alcanzó la directiva, abandonó el partido que consideraba en exceso marxista, y volvió a él cuando Felipe González lo modernizó. Felipe iba a su casa para que le hablase de economía con una sensatez que el joven líder no encontraba en sus otros compañeros de partido. Fue Boyer el que le hizo ver el error de la política keynesiana que el erudito a la violeta de Mitterrand estaba aplicando en Francia con dolorosos resultados.

En 1978 fue elegido diputado por Jaén y tras el gran triunfo socialista de 1982 Felipe no dudó un instante en nombrarle su ministro de Economía, Hacienda y Comercio. En ese puesto crucial contribuyó a evitar locuras de izquierdistas que una aplastante mayoría había envalentonado.

En esa legislatura de 1982, yo era el portavoz de Economía, primero, y de Hacienda, después, por la Coalición Popular, en la oposición. La primera y chocante medida que tomó el Gobierno, empujado por Boyer y Solchaga, fue intervenir Rumasa, el tronado grupo de Ruiz Mateos, desde el Banco de España y luego nacionalizarlo.

Aquello era necesario porque el imperio del jerezano era una pirámide de deudas cruzadas y activos sobrevalorados, pero se hizo de forma desordenada y poco legal. Era típico de Miguel Boyer el que decidiera tirar por la calle de en medio, sin atender a las razones ni objeciones provenientes de la oposición. Frío y seguro, hizo lo que consideraba indispensable para salvar el sistema financiero.



Curiosamente, esa medida le granjeó inmenso prestigio en la izquierda de su partido y le permitió aplicar duras medidas antiinflacionistas, que de otro modo hubieran soliviantado.

Ese gesto imperioso también ayudó a que las medidas de reconversión industrial decididas por Solchaga, su compañero de Gobierno en Industria, pudiera cabalgar sobre las objeciones sindicalistas a la reconversión industrial.

¡Qué dura fue la política monetaria y fiscal aplicada! Desde la oposición yo no tenía otro remedio que prestarle apoyo, lo que provocaba el disgusto de muchos de mis compañeros de coalición. Lo mismo tuve que hacer con las medidas tomadas en el llamado “Decreto Boyer”, de liberación de alquileres y horarios comerciales: recuerdo que felicité al ministro en mi discurso y crucé luego el hemiciclo para darle mis parabienes. ¡Qué poco de fiar somos los liberales para los dogmáticos de partido! Él quitando trabas de gusto socialista y el portavoz de la Coalición Popular pidiéndole que siguiera por ese camino.

Luego hubo de chocar con el vicepresidente Alfonso Guerra, que quería más gasto público para combatir el paro. Felipe González no supo apoyarle suficientemente contra su compañero de luchas en Sevilla y Boyer dimitió.

Luego dirigió el Banco Exterior por encargo de Solchaga, que le había sustituido en la cartera de Economía: Solchaga estaba camino de crear Argentaria uniendo todos los bancos públicos y quería que Boyer le ayudara en ese proyecto.

Todo eso fue un error, tanto de Felipe González, como de Miguel Boyer, como de Carlos Solchaga: yo creo que si Boyer hubiera seguido de ministro de Economía no habría habido necesidad de tres devaluaciones de la peseta en nuestra participación en el fracasado Sistema Monetario Europeo, porque Boyer habría sabido actuar con su severidad acostumbrada.

En la vida pública siempre le guiaban sus convicciones intelectuales y morales. Cuando el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero empezó a desbarrar, Boyer se acercó a Aznar participando en la Fundación FAES. Le alejó de Aznar el apoyo español a la segunda Guerra de Irak.

Cuando vio que era posible influir en Zapatero, entró en un pequeño grupo de economistas que buscaban convencerle de que había que cambiar de rumbo, como sonadamente lo hizo en mayo de 2010. Lo de Boyer no eran tumbos y vaivenes, sino la búsqueda franca y valiente de lo que consideraba mejor para España.

Empresario e intelectual



Como digo, dirigió el Banco Exterior y luego la Empresa Nacional de Hidrocarburos. Aconsejó a las Koplowitz durante la época turbulenta de las separaciones de sus maridos. Fue consejero de empresas tan importantes como Red Eléctrica hasta casi el final de su vida.

A mí me ha interesado siempre más la continuidad de sus intereses culturales e intelectuales y sus grandes ganas de vivir. Las visitas a la gran casa que compartía con su esposa Isabel Preysler dejaban en mí gratas sensaciones. Primero estaba la evidencia de una vida sentimental feliz con una elegante y fiel compañera, después de muchos episodios pasionales. Luego había que ver sus colecciones de libros de ciencias, de filosofía, de egiptología en las grandes estanterías de su estudio. Y por fin estaba su conversación variada, erudita, irónica.

En 1991 tomó parte principal en un encuentro con Karl Popper en la Universidad Menéndez y Pelayo de Santander, organizado por Carlos Rodríguez Braun, por Fernando Méndez y por mí. En él leyó una ponencia titulada "Las interpretaciones de Copenhague y la interpretación popperiana de la mecánica cuántica". El papel impresionó al viejo maestro vienés. Un postscriptum de Boyer indica lo bien que a Popper le agradó cuán bien le entendía, sin participar del todo en sus postulados: sobre todo supo subrayar el indeterminismo de Popper y la polémica de éste con Einstein, en la que parece que consiguió apartarle de una postura determinista algo entristecedora.

La vida de Miguel Boyer destaca en España por lo poco corriente. Fue valiente en su fidelidad a sus convicciones. Hizo mucho bien como ministro en momentos muy delicados para la economía del país. Participó señaladamente en el apartamiento del PSOE de los dogmas marxistas. Una rápida enfermedad le liberó de una minusvalía cerebral que le tenía dolorido. Sus amigos le recordaremos siempre con admiración y cariño.



No entienden por qué ha fallado el euro

15 de octubre de 2014

Jaime Requeijo, persona a la que conozco bien y respeto como gran experto en las cuestiones del euro, acaba de publicar un libro titulado con la inmediatez del gerundio *Bordeando el abismo* (Alianza). Requeijo es un paladín de quienes quieren transformar la moneda única en un instrumento de la política de unificación europea. Para salvar el euro, nos dice, se necesitan tres cosas: 1) crear en Europa un marco financiero integrado; 2) establecer un presupuesto integrado; y 3) diseñar un marco integrado de política económica. Naturalmente, añade que tales cambios deberán hacerse de tal manera que los europeos sientan que esas decisiones son verdaderamente suyas y no la de un grupo de oscuros mandarines.

Dicho con algún mayor detalle, esos tres marcos de actuación se concretarían en los siguientes puntos:

- Convertir al Banco Central Europeo (BCE) en un banco central del estilo de la Reserva Federal estadounidense, con poder para supervisar bancos, apoyado en un mecanismo de liquidación y un seguro de depósitos;
- Crear una Hacienda europea que imponga una política fiscal común y emita eurobonos;
- Diseñar un sistema de estabilizadores automáticos basados en un impuesto federal sobre el ingreso, que compense los vaivenes regionales;
- Centralizar la política económica de la eurozona;
- Multiplicar el efecto de los fondos estructurales;
- Y salvar los países que entren en quiebra, como se hizo con Grecia, Portugal, Irlanda, Chipre y Malta.

Nada de esto será fácil, aunque son muchos los economistas como Requeijo que lo defienden como la manera de estabilizar la moneda única. La resistencia no sólo proviene de Reino Unido, sino sobre todo de Alemania, donde la opinión pública se inclina por mantener el diseño original del euro y del BCE.

¿Cuál era ese diseño original? No es fácil contestar a esa pregunta, porque las condiciones impuestas por el Tratado de Maastricht y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento han resultado poco menos que imposibles de cumplir; y porque además eran insuficientes. Las tres condiciones originales fueron: que el BCE se ocupase de mantener el valor del dinero; que el déficit público un año con otro fuese cero y, en todo caso, no pasara de una cifra equivalente al 3% del PIB; y que la deuda pública no sumara más del 60% del PIB. La política de intereses bajos de finales del siglo XX y principios del XXI, con la que se pretendió contrarrestar toda amenaza de recesión, hizo que pareciera que se cumplían las condiciones



de Maastricht. No tal. ¡Si hubieran sabido los firmantes a lo que se comprometían! Luego vino la debacle y se vio que un sistema de cambios fijos exige condiciones adicionales.

Caja de emisión

Esas tres condiciones rigieron en la época del patrón oro y se aplican hoy en los países con “Caja de emisión”, en los que el tipo de cambio se ha ligado irrevocablemente a una moneda mundial. Así, Hong Kong ha fijado su tipo de cambio desde hace años en 7,80 dólares HK por cada dólar de EEUU. Para mantener ese tipo se necesita que la agencia de cambios mantenga en reserva un poco más del 100% de su base monetaria (o dinero de alto poder) en manos del público, por si acaso se desata una carrera especulativa contra la moneda nacional. Para acumular y mantener esa reserva es necesario un tiempo de superávit en la balanza de pagos y luego de equilibrio. Tal situación exterior ocurre espontáneamente si nadie se interfiere: la salida de dólares causada por un déficit comercial dará lugar a esa depreciación necesaria para reequilibrar las cuentas exteriores. Es sabido, además, que los déficit públicos, sean del Estado, sean de las provincias o autonomías, se convierten casi inmediatamente en desequilibrios exteriores, con lo que es necesario mantener la vista puesta en los dos indicadores (déficit exterior o déficit público) para asegurarse de que el tipo de cambio fijo es sostenible. No lo hicieron en Argentina.

Todo esto es aún más cierto cuando no hay sino una moneda, como ocurre con el dólar en Guatemala o Ecuador, o con el euro dentro en la Unión Monetaria Europea. Para que ese euro no desaparezca de la circulación, huya al extranjero, los precios y salarios interiores deben ser todo lo flexibles que se necesite para exportar en suficiencia; y el Estado tiene que evitar endeudarse para cubrir el déficit público. De aquí que sea peligroso mantenerse en el euro bien con deuda, bien con importaciones especulativas de capital.

Patrón “auro”

Lo positivo del euro en su diseño original es el brutal freno que ha supuesto para los déficit y los excesos de endeudamiento público y privado, casi como si nuestro sistema fuera el del patrón oro en un país inflexible. Si volviéramos al euro original, las reformas propuestas por Requeijo no serían necesarias, con dos condiciones: precios y salarios plenamente flexibles, y gasto público sumamente reducido.

- A condición de dejar quebrar los bancos fallidos y no asegurar los depósitos, no haría falta un banco central, como no lo hay en Hong Kong;
- No se precisaría un gobierno económico europeo ni política fiscal común, ni emitir bonos con garantía europea. Las emisiones de deuda serían a riesgo de cada Estado o cada compañía;



- Los estados y regiones competirían entre sí, caso de que el público supiera aguantar breves recesiones cambiando de trabajo y lugar;
- Tendrían que recortarse drásticamente los Estados de Bienestar europeos;
- Habría que suprimir las ayudas y transferencias entre estados y regiones-miembro para que todo el beneficio de pertenecer a la UE se derivara del mercado único; y
- Los estados o regiones que no supieran cumplir tendrían que buscarse la vida en otro sitio.

Ya veo a mis lectores levantar las manos diciendo que tal programa es imposible en una sociedad moderna. Lo curioso es que ya tenemos una vía intermedia que sería suficiente para evitar la creación de un Estado europeo, federal, planificador e interventor, que es lo que quieren conseguir nuestros eurofanáticos. Esa vía intermedia tampoco es la que Requeijo critica como la vía canónica de las autoridades europeas, “aumentense los impuestos y disminúyanse los gastos”. ¡Basta con disminuir los gastos y volver al euro a la alemana!



España: Las tribus liberales

27 de octubre de 2014

El mundo liberal se caracteriza por la confusión de escuelas o ‘tribus’, como dice el título del recién publicado libro de María Blanco. La autora pasa a describir con amplia visión el abigarrado mundo de los liberales y acoge maternalmente en su seno a cuantos nos declaramos amigos de la libertad. Por ello, pronto abandona el intento de clasificarnos tribalmente por el nombre de nuestros dioses particulares.

Como profesora que es de Historia del Pensamiento Económico, sabe percibir la armonía bajo la aparente cacofonía de voces liberales provenientes de tiempos y lugares distintos. La imagen que usa y dibuja en portada para explicar quienes somos los liberales es la de un árbol —un acierto, pues hubo un tiempo en que los enemigos del orden establecido plantaban árboles de la libertad en la plaza de sus pueblos—. Ese árbol hunde sus raíces en la obra de pensadores de remotos siglos, como son los escolásticos de la Universidad de Salamanca en el XVI, o tiempos más cercanos, cual los moralistas escoceses del siglo XVIII, en especial Adam Smith. El tronco de dicho árbol lo constituyen los grandes clásicos del diecinueve, como Ricardo al hablar de comercio, Say de macroeconomía o Menger del valor. Las ramas que surgen de ese tronco en el siglo XX se extienden en tres direcciones: la de los pensadores, como Mises, Hayek o Friedman; la de los políticos, verbigracia Reagan, Thatcher o Pavel; y la de los think tanks prácticos, cual el Instituto de Asuntos Económicos de Londres o la Fundación Atlas de EE.UU.

Digo a sabiendas lo de “acoger maternalmente”. Una gran sorpresa del libro es que busca explicar el liberalismo desde un punto de vista femenino, es decir, nacido de la vida práctica a la teoría, no al revés. Primero, dice que los hombres liberales somos pesadísimos por doctrinarios, lo cual es muy cierto. Luego, sostiene que las mujeres son más inclusivas, hasta el punto de mostrar una mayor inclinación a ser socialistas, lo que se refleja en la generosa actitud de Blanco hacia los liberalismos discordes.

Por fin, da muestras de una fresca espontaneidad, que al principio produce la impresión de desorden pero luego trasluce un profundo vitalismo. Todo ello tomará a más de uno con el pie cambiado: no sólo a quien esto escribe, sino a las feministas oficiales de ordeno y mando, como puede verse en el jugoso intercambio de la autora con la Jefe de Comunicación del Instituto de la Mujer en la etapa de Zapatero (páginas 82 y 83).

No me convence del todo ese contraste entre liberales masculinos y femeninas. Los creadores de la doctrina liberal han sido hombres en su mayoría pero no en su totalidad: me viene a la mente toda una cohorte de valientes mujeres, desde Mary Wollstonecraft Shelley, la escritora de Frankenstein (1818), hasta Deirdre McCloskey, con su trilogía sobre virtudes burguesas



(2006-2014). Blanco no es una liberal femenina, sino una liberal posmoderna que se mueve como pez en el agua en el nuevo mundo de las redes sociales, con su constante comunicación de pensamientos a vuelapluma y experiencias a vuelapié.

Sólido armazón

No confundamos, sin embargo. El libro está montado sobre un sólido armazón doctrinal que permite contener el asalto de quienes condenan los liberales al infierno de los enemigos de la Humanidad. Vean el capítulo IV, Liberales en el Hades. Ahí está la lista de todas las calumnias: el liberalismo es un sistema para ricos y los ricos son malos; el liberalismo es insolidario y genera discriminación y corrupción; el liberalismo trae paro, infratrabajo, explotación infantil; fomenta la especulación, atenta contra el medio ambiente, socava la bases de la moral, hunde los países pobres en la miseria, acaba con la soberanía de las naciones democráticas. Mis lectores reconocerán la cantinela. Evitar el sectarismo no implica, pues, quitar importancia a la discusión teórica. Nada de excomuniones pero luego mucha conversación. No es que me disguste el liberalismo blando de tantos ultratolerantes, sino que temo que la idea liberal corra peligro de diluirse como azucarillo en empalagosa bebida. Es indispensable una teoría económica científica para que perdamos el miedo a que, sin la tutela del Estado, la sociedad liberal caiga en la disolución y el desastre. Por desgracia, los economistas académicos, desde Mill y Pigou hasta Keynes y Galbraith, llevan siglo y medio denunciando un número creciente de defectos del mercado.

También reconocerán la lista. La competencia deriva en monopolio. Los individuos no son racionales. Proliferan los “efectos externos”, tanto excesivos, cual el cambio climático, como defectivos, como la insuficiencia de la investigación científica privada. Sin apoyo del Estado, nadie educaría a la juventud. Un país carente de leyes laborales acabaría en la explotación de los trabajadores. Los bancos centrales deben contrarrestar el ciclo económico imprimiendo dinero... para qué seguir. La erosión de la buena teoría económica comenzó a detenerse gracias al esfuerzo de economistas como Hayek, Friedman, Coase o Buchanan. Sostengo, pues, que sin la refundación neoliberal iniciada por estos buenos economistas acabarán desapareciendo las libertades.



España: “Podemos” quedar fuera del Euro

6 de noviembre de 2014

Cunde la preocupación por el ascenso de la nueva formación política que lleva el nombre de “Podemos” y por el eco de las ideas y propuestas de su líder, Pablo Iglesias. Los resultados de la primera encuesta oficial realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) indican que la nueva fuerza populista se ha puesto al nivel de los dos partidos tradicionales, el Partido Popular y el Partido Socialista, en intención de voto. Supongamos que Podemos consigue formar Gobierno en España después de las elecciones generales de 2016, coaligado con otras fuerza radicales de izquierda. ¿Qué medidas económicas buscaría poner en práctica desde el poder? Considero muy incompletos los análisis de esas medidas que he leído y oído en los medios, tanto por sus probables consecuencias próximas, como por el tipo de sociedad que Podemos pretende construir ulteriormente.

Déficit presupuestario

El efecto primero de las principales medidas propuestas por Podemos es el de aumentar explosivamente el gasto público y olvidar su efecto sobre el equilibrio presupuestario. La más irreal es la de otorgar una renta básica universal a los ciudadanos (¿o habitantes?) de España. Curiosamente, es ésta una idea de Milton Friedman, que quería sustituir todas las dispersas ayudas públicas del Estado de Bienestar por una subvención básica en dinero, para evitar la picaresca que suele acompañar los subsidios de desempleo o las ausencias por enfermedad. Podemos quiere otorgar esa renta además de todas las otras subvenciones. Si el beneficio fuera universal el Estado tendría que cargar con más de 145 mil millones de euros de gasto adicionales. Si tal beneficio se limitara a sustituir el salario mínimo interprofesional y se otorgara sólo a la población activa, el gasto adicional para el Estado sería de: 17 millones de personas por 400 euros mensuales por 12 meses —unos 80.000 millones de euros—. El déficit se elevaría bien en 14,5 puntos porcentuales más, o bien en el mejor de los casos en 7,8 puntos porcentuales.

Sabemos que, por pertenecer España a la Unión Monetaria Europea, tenemos la obligación de reducir el déficit público a una cifra equivalente al 3% del PIB. Con sólo esa propuesta nos colocaríamos en el punto en que nos encontrábamos en el último año del Gobierno Zapatero o más. El déficit anual habría de cubrirse con deuda o con mayores impuestos. La deuda tendría que acumularse a la ya existente en la actualidad, equivalente a casi el 100% del PIB. Ese endeudamiento adicional haría que los mercados elevasen el coste de la financiación pública a niveles griegos antes del rescate. Podemos propone dos salidas para esta situación. Una consiste en la revisión de toda la deuda pública, ya sea del Estado, de las Autonomías o de los Ayuntamientos. El efecto de la amenaza de impago sobre la prima de riesgo (una prima de seguro precisamente por si no se paga) sería más grande aún. La otra salida consistiría en aumentos de impuestos, sobre todos “para los ricos”.



Admitamos que en España hay unas 400.000 personas con ingresos superiores a 120.000 euros al año y que su patrimonio es equivalente a un tercio o incluso la mitad. Ni confiscando el ingreso y apoderándose de las propiedades sin indemnización habría para cubrir ese gasto adicional, entre otras cosas porque nadie querría comprarlas en tales condiciones.

No es la renta básica el único aumento del gasto que propone Podemos. Busca reducir la edad de jubilación a los 60 años, eliminar el copago de las medicinas y toda administración privada de los hospitales, nacionalizar los centros de educación concertada a los que acuden tres millones de niños, imponer precios políticos para la energía —medidas todas que colocarían a España en la incapacidad de atender a sus obligaciones europeas—.

La empresa y el mundo laboral

La eficiencia del aparato productivo español se vería amenazada por otras medidas de tipo populista. Podemos quiere que se prohíba a las empresas con beneficios reducir sus plantillas: tendrían que mantener o aumentar el empleo. El salario mínimo se elevaría y se decretaría un máximo para los sueldos. Una medida que tendería a aumentar el desempleo de quienes menos formación tienen para el trabajo; y el tope a los sueldos incentivaría la huida de los talentos. No olviden que Londres es la segunda ciudad francesa por número de habitantes, muchos en busca de un ambiente en el que progresar con mayor libertad.

Pablo ha dirigido también su atención a los precios de la energía y otros elementos básicos de la producción y el bienestar. Se darían instrucciones a las empresas para que cargaran precios políticos, bajo la amenaza de la nacionalización. El déficit tarifario de las compañías eléctricas se multiplicaría. Tampoco hace falta subrayar las consecuencias que ese tipo de política tendrían sobre las inversiones extranjeras. Por dar un ejemplo: una de las partidas principales de nuestra exportación es la del automóvil; los dueños extranjeros de las fábricas sitas en España trasladarían la producción a otras tierras.

Es conocida la enemistad de toda la izquierda española frente la incompleta reforma laboral realizada por el Gobierno Rajoy. Esa hostilidad se multiplica en el caso de los simpatizantes de Podemos. No me cabe duda de que volveríamos a la imposición de convenios colectivos nacionales y la vuelta a una rígida legislación laboral —del tipo que ha traído a España tanto paro de jóvenes y mayores—.

La pertenencia al euro



Todas las medidas que se vislumbran, en caso de llegar Podemos al poder o formar parte de una coalición de gobierno, implican necesariamente la salida de España de la eurozona. El euro ha mostrado tener muchos defectos de fábrica pero nos ofrece un beneficio fundamental: que impone una bienvenida disciplina a los gobiernos dispendiosos de izquierda y derecha. Si España quiere gozar de un continuo crecimiento de bienestar, tendrá que mantener y mejorar un sistema en el que vale la pena ahorrar e invertir —y en el que la grasienta obesidad de las Administraciones Públicas no suponga una inacabable tentación para “la mamandurria”, como suele decir una de nuestras políticas que con más transparencia usa el español—.

Confiese pues Podemos que quiere que abandonemos Europa y el mundo occidental. He tenido la curiosidad de leer la tesis doctoral de Pablo Iglesias. Deduzco que Pablo Iglesias y sus compañeros de aventura son personas inteligentes, cultas y seductoras. De ninguna manera debemos despreciarlos, como ellos hacen con quienes defendemos la democracia liberal. El sistema político español adolece de graves defectos pero es posible ponerlo de nuevo al servicio del bienestar de los españoles por medio de reformas realistas y bien meditadas. No es la primera vez que grupos de bien intencionados soñadores han dejado una estela de desgracias en la sociedades que han pretendido transformar “para hacernos realmente libres”. Celebramos este año el vigésimo quinto aniversario del desmantelamiento del Muro de Berlín, que finalmente echó por tierra el proyecto leninista de crear un hombre nuevo.

Impertérritos, los seguidores de crueles profetas totalitarios vuelven a proponernos transformaciones mesiánicas, cuyos efectos son observables en sus admiradas Cuba y Venezuela. No les atribuyamos exclusivamente las culpas de estos crueles experimentos. Nosotros hemos preparado la tierra en que crecen esas venenosas semillas con nuestra incapacidad de pasar por el cedazo de la crítica los muchos planes imprudentes e inviables con los que compramos los votos de una crédula ciudadanía. El sueño de la razón produce monstruos.



La democracia “curalotodo”

7 de enero de 2015

La democracia se ha convertido, en opinión de quienes han estudiado torcidamente la historia y la filosofía políticas, en un remedio universal para todos los males de España y las demás democracias europeas.

De ser un procedimiento para preservar las libertades y así fomentar el progreso humano, se ha convertido en un dogma que debemos acatar en la toma de todas las decisiones públicas e incluso en la organización de nuestra vida económica, social y familiar. Quienes así juran por la democracia la interpretan sencillamente como el gobierno de la mayoría. Las decisiones tomadas por la mayoría de los votos son para ellos sacrosantas. No dirigen ni un solo pensamiento a las minorías contrariadas o derrotadas. Son, pues, insensibles al peligro de la que me atrevería a llamar “democracia totalitaria”.

Hoy, en España, uno de los principales voceros de esta ideología es Pablo Iglesias, líder de Podemos. Fue Karl Popper quien me hizo entender lo que él llamaba “la paradoja de la democracia”.

La explicaba detalladamente en *La sociedad abierta y sus enemigos* (1945). Era posible que un pueblo votara democráticamente la muerte de la democracia. No decía esto Popper a humo de pajas. Para ascender a la suprema magistratura del III Reich se apoyó Hitler en el sufragio de muchos de sus conciudadanos. No me refiero tanto a su nombramiento como canciller de Alemania como a su caudillaje tras el Anschluss o unión de Austria con Alemania.

Un senil mariscal Hindenburg le entregó el Gobierno de Alemania en enero de 1933, a pesar de que los nazis habían visto reducirse el número de sus diputados en el Reichstag tras las elecciones de noviembre del 32. Quienes de verdad cometieron un suicidio democrático fueron los austriacos, que acogieron a Hitler con indescriptible entusiasmo tras la invasión de las tropas alemanas y refrendaron la anexión de su país con el Reich en un referéndum ampliamente mayoritario. Popper vivió en sus carnes, por así decir, esa violación consentida por los austriacos y, desde entonces, insistió en limitar la democracia a la categoría de procedimiento político y no elevarla a la dignidad de un dogma. Para él, la democracia era un sistema de librarse de los gobiernos sin que corriera la sangre. La democracia no debía ser un método para conseguir que gobernase el mejor, sino para prevenir y combatir la opresión. Las elecciones libres eran instituciones importantes, incluso necesarias, pero se justificaban como uno de los métodos de preservar las libertades. “El objeto de la política democrática debía ser sobre todo crear, proteger y desarrollar instituciones para evitar la tiranía” (Libro I, cap. 7.).



Muchos se sorprenden cuando les señalo que los derechos fundamentales del individuo son, en esencia, antidemocráticos. La libertad de creencias, de expresión, de reunión y de manifestación ha de protegerse en una democracia liberal, aunque la mayoría considere que esas ideas y su propaganda son nefandas. Lo sagrado del hogar, el respeto de la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos no pueden suspenderse a capricho de la mayoría.

El habeas corpus y la presunción de inocencia del detenido o acusado han de ser protegidos hasta su condena en un juicio imparcial dirigido por su juez natural, aunque la mayoría pueda considerarles a todas luces culpables. La corrupción política y administrativa debe castigarse, pero no como hace hoy la opinión mayoritaria en España durante la instrucción de un proceso, una instrucción acusatoria coreada por la televisión, la radio y la prensa. En esta cuestión de sus derechos fundamentales, el individuo puede apelar a los tribunales en defensa de su poder de veto frente a la mayoría, incluso si está compuesta por todos menos él. La importancia de esta visión defensiva de las libertades cobra aún más importancia porque en una sociedad libre no hay nunca unanimidades.

La extensión de la democracia mayoritaria a todos los aspectos de la vida —“todos decidimos sobre todo”— es absurda. Dos ejemplos entre muchos: decidir el equipo y la táctica ante un partido de fútbol por votación de los jugadores, titulares y reservas; transformar las empresas en cooperativas, al estilo de Mondragón. Me atrevería a sugerir lo inaplicable del sistema mayoritario a las relaciones entre padres e hijos o a la organización de las Universidades.

En uno de sus monólogos televisivos, Pablo Iglesias definió la democracia según la doctrina de Robespierre como un Estado en el que el pueblo soberano, obedeciendo leyes que son obra suya, actúa por sí mismo o sus delegados y usa su poder para defender sus “derechos”. Notaré, de paso, que es notable que el dirigente de Podemos se inspire en el ejemplo de ese revolucionario francés, que adoptó la guillotina como método para mecanizar la decapitación en serie de los enemigos del régimen. Siento alivio al ver que Iglesias ha dejado de hablar con admiración de Lenin, supongo que al recordar que el terrorista ruso contestó a la pregunta de Fernando de los Ríos “¿Para cuándo la libertad?” diciendo “Libertad, ¿para qué?”. Intervención contraproducente.

Fijémonos en el concepto de “derechos” expuesto por Iglesias. Es importante subrayar la diferencia entre los derechos fundamentales del individuo que acabo de analizar y el derecho de todos a la prestación de servicios públicos según el líder de Podemos. Para Iglesias, el pueblo ha de conquistar el poder para defender su goce de una pensión digna, de un servicio de salud gratuito, de una educación subvencionada. Esto me recuerda a la frase atribuida a Evita Perón de que “toda necesidad es un derecho”. Con la apelación a “derechos sociales” se pretende dignificar unos beneficios que no son nada más que directrices de política gubernamental, sólo exigibles en las urnas y no ante los tribunales. Todos estamos de acuerdo en que es muy deseable que la población goce de generosa jubilación, esté en buena salud,



sea ilustrada e instruida. La cuestión es cómo conseguirlo. La crisis ha mostrado que, al menos, el sueño americano de una vivienda en propiedad para todos ha terminado en una epidemia de quiebras y desahucios. ¿Y si la intervención pública promovida por Iglesias para garantizar esos llamados derechos sociales resultara contraproducente?

Sin una profunda modificación del Estado de Bienestar, las pensiones se evaporarán, habrá largas colas para la atención médica y los más desfavorecidos seguirán recibiendo una formación deficiente. Quizá no sea posible financiar cada vez más generosamente esos servicios usando la fuerza para exigir mayores impuestos, que la gente se niega a pagar y que en muchos casos desembocan en despilfarro y corrupción. Estos doctores en democracia deberían preguntarse para qué es la libertad y, además, estudiar algo de economía.



Grecia retorna a cuidados intensivos

21 de enero de 2015

El sufrimiento que padece el pueblo griego se debe al exceso de gasto anterior, por lo que en vez de buscar culpables, debería mirarse a sí mismo. Sin embargo, eso no quita cierta responsabilidad achacable al mal diseño del euro.

Grecia pone el euro otra vez en peligro. Pese a la ingente suma de las ayudas financieras otorgadas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, vuelve a hablarse de su salida de la eurozona. La ayuda ha sido monumental: 153.900 millones de euros, además de una quita del 50% de la deuda exterior.

Este ingente esfuerzo parece no haber resuelto nada, lo que no es del todo cierto. La recaída no se debe tanto a la economía como a la política. Grecia ha conseguido reequilibrar el Presupuesto, si se deduce los intereses de la deuda pública. Además en 2014 la economía ha vuelto a crecer, aunque sea aún por debajo del 1% anual, y sigue por el camino de la recuperación.

El mal está en otro lado: la paciencia la mayoría de los griegos parece haberse agotado. Esta tardía resaca se debe al sufrimiento del pueblo griego durante los últimos seis años, que puede colegirse por la caída de la producción nacional (el PIB se ha reducido en un 24,2% desde 2007) y por el aumento del paro (un desempleo medio de un 29,2% y un 56 de los jóvenes de menos de 25 años).

Es cierto que el pueblo griego creía vivir en Jauja, donde todo se le ofrecía gratis, en especial los servicios sociales del Estado de bienestar. Pero vaya usted a contárselo a los griegos, como vaya usted a razonar con la mayoría disgustada de los votantes españoles, que tampoco entienden lo que les ha pasado y buscan culpables por todos lados, cuando deberían mirarse a sí mismos por pedir la luna. Así suben en intención de voto Syriza y Podemos.

Derechos y deberes

Vivimos en unas sociedades donde todo es reclamar derechos: a la educación subvencionada y sin embargo de calidad, al tratamiento de todas las enfermedades a cualquier precio, a las pensiones que nadie ha ahorrado, a los puestos de trabajo permanentes. Aunque no quieran los griegos ni los españoles ni los franceses nos es preciso aceptar que los individuos no estamos dispuestos a pagar cada vez más impuestos para



sostener un sistema de beneficencia insaciable, que va empeorando a medida que se suprimen todos los incentivos a la eficacia.

No es sólo el Estado de Bienestar el que está mal diseñado. También el euro se pensó mal. El público no entiende bien el funcionamiento del euro, una moneda que nos vino impuesta de fuera. El euro tiene defectos de diseño, es cierto y los señalaré ahora mismo, pero lo que más nos disgusta y molesta son sus virtudes. Al ser una moneda que los gobiernos nacionales no pueden inflar ni devaluar, no es fácil remediar la falta de competitividad de la economía. Con una moneda de valor (más o menos) son inaplicables las políticas keynesianas de creación de empleo o fomento gubernativo del crecimiento. Cuando los gobiernos aplican políticas de gasto financiado con deuda durante muchos años, el país sufre el latigazo de la firmeza del euro.

Los Tratados de la Unión Europea prohíben al Banco Central de Europa (BCE) que participe en la gestión de la política económica del gobierno. Acaba de decirlo este 15 de enero el Abogado General de la Corte de Justicia de la Unión. El Tribunal Supremo de Alemania había pedido a esa Corte una aclaración sobre si el programa de compra de deuda pública (llamado OMT por sus siglas inglesas) propuesto por Draghi era acorde con lo mandado con los Tratados.

El Abogado General ha dicho que la compra de bonos públicos por el BCE tiene que ser a los únicos efectos de política monetaria y que el BCE tiene prohibido suscribir deuda pública cuando la emiten los Estados, pues ello sería como monetizar los déficit públicos.

El BCE debe razonar la necesidad de utilizar el método extraordinario de comprar deuda antigua en el mercado secundario atendiendo sólo la política monetaria (en este caso para prevenir la deflación que dicen que amenaza). Se deduce que sería contrario a Derecho que le BCE comprara deuda pública para participar en un programa de rescate como el que parece estar planeándose para Grecia.

Las soluciones de problemas como el planteado otra vez por la economía griega no pueden ser monetarias, pues. El origen de todo el mal, del que casi nadie habla, es el objetivo político de la creación del euro. Para crear un símbolo monetario de la Unión Europea, los eurofanáticos se precipitaron a imponer el euro a las economías europeas cuando muchas no estaban preparadas para ello.

Las deficiencias estructurales de los países periféricos de la Unión, entre ellos España, quedaron disimuladas por la expansión de Greenspan en su afán de evitar a toda costa cualquier amago de recesión. Recordarán ustedes los años triunfales en que España tuvo una prima de riesgo inferior a la alemana.



Dos monedas

Dada la resistencia de los europeos continentales a todo cambio, deberíamos pensar en una solución de dos monedas para Grecia, como involuntariamente tiene Argentina, para que sus exportaciones se denominaran en dracmas.

Es una pena que los creadores del euro no prestaran oídos en su día a la propuesta del premier británico John Major de emitir euros digitales aptos para su uso por el turismo y las grandes transferencias financieras. No habría hecho falta renunciar a las monedas nacionales: la mayor solidez de la moneda europea habría ido desplazando insensiblemente las divisas inflacionarias de gobiernos imprudentes y el euro habría ido ganando circulación sin grandes traumas. Pero John Major se enfrentaba con un socialista napoleónico llamado Delors.



Draghi cruza el Rubicón

27 de enero de 2015

La masiva creación de dinero anunciada por el presidente Draghi el día 22 de este mes de enero implica un notable cambio de rumbo del Banco Central Europeo (BCE). El euro, pese a todos sus fallos de diseño, cumplía un fin bien definido: ser una moneda de valor firme, independiente frente a los gobiernos nacionales y a la Comisión Europea. Estaba concebido como un instrumento para fomentar el progreso económico de la Unión Europea de forma indirecta, gracias a la disciplina traída por la estabilidad monetaria y la certidumbre de los contratos a largo plazo. Ahora, el objetivo del BCE parece ser otro. En imitación del Quantitative Easing o QE, iniciado por la Fed y seguido por los Bancos de Inglaterra y de Japón, esa “expansión cuantitativa” va a inundar Europa (y el mundo) con nuevo dinero comprando obligaciones de deuda pública y privada —nada menos que por valor de 1 billón (español) y 14.000 millones de euros, a razón de 60.000 millones de euros de aquí al mes hasta septiembre de 2016. Un Draghi sonriente añadió en la rueda de prensa que si no conseguía sus mal definidos fines, el Banco seguiría comprando más. So capa de combatir una mínima deflación, explicable por causas reales como la caída del petróleo, el banco busca relanzar la economía europea. Al revés: a largo plazo, es normal que los precios reales descieran por el aumento de la productividad.

¿Fraude de ley?

Para poder comprar sin límite deuda pública y privada en los mercados el BCE se ha metido en oscuros vericuetos. Es un secreto a voces que Draghi pretende hacer mucho más que mera política monetaria. Quiere sustituir a quienes llevan la política económica de Europa y convertirse en el demiurgo de la prosperidad. Cierra los oídos al voto en contra del Parlamento holandés, a las dudas de la opinión finlandesa, a la oposición del Bundesbank alemán y otros bancos centrales que no se atreven a levantar la voz. Como ha fallado el intento de reanimar la economía europea prestando dinero a los bancos, el BCE quiere paliar la sequía de crédito y animar las exportaciones colocando dinero directamente en manos del público y devaluando el euro respecto del dólar. Saben él y el Consejo del Banco que les está prohibido suscribir deuda pública directamente; pero sí se atreve a comprar deuda masivamente en el mercado secundario, a los bancos que la tienen mayoritariamente en cartera porque acudieron a las emisiones de sus Gobiernos, lo que no parece tan diferente. ¡Ah! y no debe olvidarse otro regate legal del Consejo del BCE. El Abogado General de la UE ha avisado de que este tipo de operaciones no debe poner en peligro la solvencia del BCE. El Consejo del Banco ha decidido que el 80% de esos bonos públicos y privados (algunos de helénica calidad) deberán comprarlos los bancos centrales de los países integrados en el euro. Recordando mis estudios de Derecho, me atrevo a calificar todo esto de “fraude de ley”, en el sentido técnico de aplicar formalmente la ley para conseguir lo contrario de lo que manda.



Un banco independiente

El euro se creó por razones políticas con pretextos económicos. Con la moneda única se buscaba sobre todo reforzar el débil sentimiento de unidad europea. El resultado no ha sido el apetecido. El euro nos ha dividido más que unido.

Simplificando un poco, los franceses impusieron la moneda única a los alemanes, que habrían preferido conservar el marco: por su parte los alemanes impusieron unas reglas para hacer del euro una moneda tan estable como el Deutschemark. La experiencia indica que los abultados déficits públicos y el exceso de deuda llevan a imprudentes expansiones monetarias. Por eso, el Tratado de Maastricht y el Pacto de estabilidad y crecimiento dictaron dos reglas: que los países del área del euro no incurrieran en déficits presupuestarios o que éstos no pasaran del 3% del PIB, y que el monto de la deuda pública nunca fuera mayor que el 60% del PIB. Además, el propio Tratado, para blindar el euro frente a interferencias políticas, prohibió absolutamente al BCE cualquier préstamo o financiación a los Estados o las instituciones europeas.

Sin embargo, hace dos semanas, el Abogado General del Tribunal Europeo ha emitido una opinión que el BCE ha interpretado como favorable a la expansión cuantitativa que planeaba. El Abogado General en realidad se refería a un caso anterior, a las medidas extraordinarias de política monetaria tomadas por el BCE en 2012, conocidas como Compras monetarias directas (OMT por sus siglas en inglés): con ellas el BCE se limitaba a adquirir deuda pública aquellos miembros del euro incluidos en alguna operación de rescate. El Abogado General las consideraba lícitas con dos condiciones: una, que pasara BCE un tiempo decente entre la emisión de los bonos y su compra en el mercado secundario, para que no pareciera una triquiñuela con que disimular una compra directa de deuda pública; y dos, que la compra de esos bonos no pusiese en peligro la solvencia de BCE. La expansión cuantitativa propuesta ahora es evidentemente algo distinto de una ayuda a países intervenidos: supone crear dinero a manos llenas sin especificar los límites de la operación. Igualmente, sostener que se evita el peligro para la solvencia del BCE haciendo que el 80% de las compras las hagan los bancos centrales del Sistema Europeo es un intento de hacernos creer que la quiebra de uno de esos bancos nacionales no afectaría al conjunto de la Eurozona y en fin de cuentas a Alemania.

Palos de ciego

La preocupación fundamental de Draghi es la lentitud con la que la eurozona está recuperándose de la recesión de 2007. Quieren repartir dinero para relanzar el crecimiento y no saben que el dinero no es la fuente del desarrollo económico. La explicación de la falta de pulso de Europa es financiera y real a la vez. Las familias y las empresas han tenido que reducir su endeudamiento, mientras los Estados han seguido aumentando el suyo. El “desapalancamiento” privado, unido al aumento del endeudamiento público para mantener el Estado de Bienestar, ha contribuido a reducir el consumo, la inversión y las exportaciones



de los países de la eurozona. La situación financiera del sector privado se ha hecho aún más agobiante porque la banca privada recorta el crédito, forzada por los reguladores a aumentar su capital en el peor momento del ciclo: algo la aliviará la solución de crear dinero casi sin límite

No hay que engañarse con las alzas en las Bolsas y el inmobiliario que sin duda vendrán. Nos dicen que los programas QE han funcionado en EE.UU. y en el Reino Unido. ¿Estamos seguros de que hay una relación de causa-efecto? En América aún hay una economía de mercado pujante. Cameron ha reducido el sector público como no pudo hacer Margaret Thatcher. El caso de Japón es a contrario: sus gobiernos nunca se han atrevido a reformar a fondo la economía y sus inmensas emisiones de deuda e ilimitados gastos en obras públicas no han conseguido hacerla crecer. Por contraste, el Gobierno de España, pese a inoportunas subidas de impuestos e insuficientes recortes del gasto, ha llevado a cabo reformas que han permitido que el país crezca en circunstancias poco propicias. Al final, el programa QE no es sino un modo de aplazar las reformas reales que Europa tanto necesita. El crecimiento volverá a Francia, Italia y otros países paráliticos cuando reformen sus mercados de trabajo y reduzcan su gasto público.

Draghi, al desobedecer la prohibición de cruzar el Rubicón con sus legiones financieras, ha puesto en peligro el delicado sistema del euro.



Toda necesidad no es un derecho

25 de marzo de 2015

La frase que pronunció Eva Perón fue “donde existe una necesidad nace un derecho”. Con la intuición de mujer y de política recogió en pocas palabras el deseo profundo de un pueblo que ponía en ella sus esperanzas. Ella había sufrido en sus años de joven actriz lo peor de la pobreza: no la escasez del presente sino la incertidumbre del mañana. Si además de la seguridad alguien promete regalarnos bienes que nunca estuvieron a nuestro alcance... Me parece más elocuente, sin embargo, la frase más corta, que es la que hoy repiten en Argentina cuantos recuerdan a Evita: “Toda necesidad es un derecho”. Es una frase que refleja sucintamente la megalomanía de quienes exigen que el Estado o la sociedad nos protejan de todo mal, de la cuna a la tumba.

Esta concepción de los derechos del individuo, sobre todo del individuo desasistido y pobre, del descamisado, no es peculiar del peronismo ni del populismo a lo Podemos, sino que la defienden filosofías políticas más respetables. Es la idea de que sólo quien tiene muchos medios a su disposición es verdaderamente libre; y de que el pobre hundido en su miseria, más que las libertades formales de un sistema constitucional necesita un trozo de pan que llevarse a la boca y un techo con que cubrirse: sólo redistribuyendo la renta y la riqueza, sólo combatiendo la desigualdad por imposición de la mayoría se hace libre el pueblo.

Desde este punto de vista, la libertad se concibe como poder. Pero sería mucho mejor hablar de las barreras que las libertades levantan como límites o defensas frente a las invasiones indebidas de los demás, sobre todo de los poderosos. La idea seductora de la “libertad como poder” es contraproducente: pone en peligro su objetivo principal, el de crear las condiciones para que los individuos de cualquier clase social puedan salir de la estrecha necesidad. Al tomar el atajo de la imposición política y el reparto arbitrario para colocar a pobres y ricos en el mismo nivel, mina no sólo la libertad individual sino también la prosperidad general.

La riqueza no es condición de la libertad sino su resultado.

Conceptos contrapuestos

Fue Isaiah Berlin, en su famoso ensayo “Dos conceptos de la libertad” (1958), quien marcó más claramente la diferencia entre liberty from, libertad “negativa” o formal, y liberty to, o libertad “positiva” o posesiva. Para Berlin, la libertad personal consistía en no sufrir violencia ni coacción y no debía confundirse con el tener a disposición medios, oportunidades o capacidades de goce, ni con la participación de los individuos en las decisiones comunales que les afectan. El aumento de las oportunidades de funcionar a disposición de los individuos



así como su participación “democrática” en el destino del grupo social del que son miembros pueden ser aspectos apreciables de una sociedad; pero el ejercicio de esas oportunidades viene por desgracia muchas veces acompañado de invasiones de la esfera personal que en cambio las libertades “formales” buscan defender. Comenzó Isaiah Berlin su análisis diciendo que una de las grandes cuestiones de nuestro mundo [es] la cuestión de la obediencia y la coacción. ‘¿Por qué debo yo (o cualquier otra persona) obedecer a otro cualquiera?’ ‘¿Por qué no debería yo vivir como guste?’ ‘¿Debo obedecer?’ ‘Si desobedezco, ¿se me puede coaccionar?’

La coacción

Coaccionar al ser humano, prosiguió Berlin, es privarle de su libertad, por lo que es necesario para contestar esas preguntas entender lo que significa el concepto de libertad. Distinguió para ello Berlin entre dos sentidos del concepto. El primer sentido es “negativo”, dijo. Consiste en no ser coartado en la realización de los propios planes ni verse impedido de realizar lo que uno cree que está bien. La coacción no es [...] un término que incluya todas las formas de falta de capacidad [para hacer lo que yo quiera]. Me falta libertad política sólo si algún ser humano me impide alcanzar una meta. La mera incapacidad de alcanzar una meta no es falta de libertad política. (pág.122)

Por ejemplo la imposibilidad de dar un salto de diez metros o de entender algunos de los pasajes más oscuros de Hegel, añadió Berlin con cierta sorna, no supone falta de libertad política. También subrayó que no siempre que un ser humano me impide conseguir lo que pretendo implica que me falta libertad, por ejemplo, cuando la ley me prohíbe invadir la propiedad ajena. Esta definición de libertad ‘formal’ se caracteriza, pues, por las dos notas de autogobierno y legitimidad.

El segundo concepto de libertad lo llamó Berlin “positivo”. Según esta equivocada concepción de la libertad, toda incapacidad de conseguir lo que uno quiera, toda carencia de medios para expresar lo que uno lleva dentro, para experimentar, para gozar, para realizar un deseo, o para participar en una empresa colectiva es una limitación de la libertad. La libertad es fantasía y autorealización, es odio de los límites y las reglas, es capricho romántico y revolucionario. En suma: “Toda necesidad es un derecho”.

Distinción

La distinción que presenta Berlin entre libertad “negativa” y libertad “positiva” resulta esencial para ver los peligros a que están expuestas las democracias cuando, en vez de reforzar la autonomía de los individuos, consideran su deber ocuparse del bienestar de la población. Ciertamente que el llamar “negativas” a las libertades que defienden los individuos de invasiones ilegítimas de su autonomía y “positivas” a las que consisten en poner en sus manos medios



para desenvolverse, especialmente si son distribuidos por la comunidad, carga los dados a favor de los intervencionistas. Por esa razón prefiero hablar de libertades “formales” y “posesivas”. Admitía Berlín que “ofrecer [...] salvaguardias contra la intervención del Estado a gente medio desnuda, analfabeta, subalimentada y enferma es burlarse de su condición.

[...] ¿Qué es la libertad para quienes no pueden hacer uso de ella? [...] Lo primero es lo primero. [...] Hay situaciones en las que unas botas son superiores a las obras de Shakespeare”. Pero este pensamiento podía llevar a profundos equívocos, añadió. Abría la puerta a quienes sostienen que es mayor la libertad individual cuando los individuos se liberan del hambre, la enfermedad y la ignorancia, como decía Franklin Roosevelt. Es cierto que el dinero y la riqueza pueden hacer al hombre más dueño de su destino. A pesar de ello, creía Berlín esencial separar la defensa de las libertades individuales de las mejoras del bienestar. La libertad concebida como autogobierno es otra cosa que un buen pasar. No es más autónomo o se gobierna mejor a sí mismo quien depende del subsidio ajeno. Tenía pues razón Berlín al concluir que es pura demagogia decir que un campesino hambriento carece de libertad jurídica por el mero hecho de ser pobre: “La libertad no es la ausencia de todo tipo de frustración”, cual sería la nacida de la falta de medios económicos. Decir eso “hincharía el significado de la palabra hasta hacerla significar demasiado o demasiado poco”.

Libertad

Igualmente admitía Berlín que la carencia de derechos políticos de una “clase” social explotada o una “nación” oprimida podría ser un grave obstáculo para el ejercicio individual de la libertad de expresión o de asociación. Al sentirse miembros de un grupo no reconocido o suficientemente respetado, los individuos buscan “la emancipación de una clase entera, o comunidad, o nación, o raza, o sexo, o profesión”. Sin embargo, este concepto de libertad como sentimiento colectivo a menudo casa mal con las libertades individuales que quieren proteger los defensores de las libertades formales. La solidaridad en la lucha por los intereses de clase, la formación coactiva de un espíritu nacional a menudo conllevan graves limitaciones del autogobierno personal. Si confundimos la libertad con el ejercicio del poder patrimonial y con la emancipación del grupo tenderemos a quitar importancia a los derechos humanos y políticos para los pobres y los individuos sujetos a discriminación por su raza, sexo o nacionalidad.

Están muy equivocados quienes creen que las libertades formales clásicas sólo importan a los privilegiados. Muy al contrario, lo que parece proteger sólo a los ricos es todavía más importante para el pobre, la concubina, el paria: sin habeas corpus; sin unos mínimos derechos de propiedad; sin el respeto de los acuerdos y contratos suscritos, con el esposo, con el patrón o el casero; sin derecho de voto el proletario no podrá siquiera iniciar el camino hacia un mayor bienestar para sí y su familia. Esta falta de derechos constitucionales no se suple con servicios sociales gratuitos, que a menudo suponen invasiones de la autonomía personal, como ocurrió con el programa de esterilización forzosa impuesto por la primera ministra india Indira Gandhi a los estratos más pobres de su país; o la política de un hijo por



familia impuesta por los comunistas en China. Hoy en día, es más importante para los intocables indios el librar a sus mujeres de las violaciones perpetradas por los hombres de castas “superiores” que el ser agraciados con programas de alimentación gratuita. Por higiene moral y política, creo indispensable reservar el título de libertades para las formales o clásicas.

Igualdad de oportunidades

Surge inmediatamente la pregunta fundamental de por qué no va a ser posible garantizar al mismo tiempo las libertades formales y las oportunidades de elección que confiere la riqueza. Mi contestación es que sólo cuando las mejoras del nivel de vida de los más pobres se consiguen por el ejercicio de la libertad económica es compatible la autonomía personal con la igualación de las oportunidades.

El economista Sala i Martín ha conseguido convencer a los activistas de las Naciones Unidas de dos cosas: que el número de pobres en el mundo ha disminuido y está reduciéndose de forma muy notable en todos los continentes; y que ello se debe principalmente a la globalización y la expansión del capitalismo. Las cifras que presenta Sala y que recientemente ha aceptado el secretario general de Naciones Unidas es que, de 1975 a 2006, el número de personas gravemente afectadas en el mundo por la pobreza se ha reducido en unos 750 millones de personas, y eso al tiempo que los habitantes del mundo aumentaban hasta pasar de los 6.000 millones.

La distinción entre libertad negativa y positiva la han rechazado filósofos como John Rawls o Amartya Sen, quienes, por su amor a la igualdad, han considerado que los pobres son menos libres que los ricos por no gozar de igual capacidad de realizarse, aun cuando sean iguales ante la Ley. Estos críticos de la sociedad capitalista entienden que la libertad no es completa si los individuos no poseen los medios necesarios para que florezca su personalidad. Pero la dificultad planteada por las atractivas propuestas de igualación de esos filósofos es que implican: (1) un trato desigual para los individuos de las diversas clases sociales y (2) unos incentivos que llevan al despilfarro y la desigualdad.

Al presentar esos favores como derechos, minan el deseo y voluntad de mejora personal de los individuos y les hacen esperar del Estado toda clase de mejoras de bienestar como si las debieran los demás. Los filósofos que albergan esos buenos deseos cierran los ojos a la realidad del Estado de Bienestar. Sólo quiero recordar, al respecto, que en un gran número de países adelantados una quinta parte de los jóvenes salen al mercado laboral en estado de analfabetismo funcional; y que los sistemas de salud y pensiones públicas, que parecen funcionar mal que bien están quebrados. De hecho, nuestros Estados de Bienestar se gobiernan y reforman a golpe de crisis como la que aún estamos sufriendo.

La Constitución de 1978



Las ideas importan. La doctrina política que considera la libertad como poder en vez de como valladar frente a las invasiones de la autonomía individual, se refleja en muchas constituciones democráticas, entre otras la nuestra de 1978. Es tradición que las constituciones escritas de los países civilizados incluyan una Carta de libertades personales y derechos políticos cuyo fin es defender los individuos de las intromisiones del poder y permitirles participar en el gobierno de la nación. Sin embargo, las constituciones modernas hacen más: añaden a esos derechos y libertades formales una larga lista de derechos sociales de difícil aplicación y, sobre todo, contradictoria de lo fundamental de las tradicionales.

La Constitución de los EE.UU. de 1787 no contenía sino reglas para el funcionamiento de las instituciones públicas, el Congreso, la Presidencia, el Tribunal Supremo, los estados. Cuando los americanos se decidieron a añadir a la Constitución un Bill of Rights o Carta de Derechos, en la primer enmienda de 1789, tampoco añadieron derechos sociales. Hubo que esperar a Roosevelt en la época de la Gran Depresión para que los americanos siguieran ese camino con varios intentos de deformar su Constitución.

Revolución Francesa

La Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada el 26 de Agosto de 1789, tras la primera Revolución francesa, se limitaba también a lo que hoy llamaríamos “libertades formales” —aunque es necesario recordar que nunca llegó a aplicarse, pues, tras la abolición de la monarquía y el ajusticiamiento de los reyes, su proclamación dio paso al terror jacobino—. En cambio, la nunca aplicada Constitución francesa de 24 de junio de 1793, sí añadía en su lista inicial de libertades dos derechos “modernos”, que dirían los progresistas de hoy: el derecho al trabajo o a las ayudas públicas o a la instrucción. Así, el artículo 21 de dicha non-nata Constitución de 1793 decía que los socorros públicos son una deuda sagrada. La sociedad debe la subsistencia a los ciudadanos desgraciados, sea procurándoles trabajo, sea asegurando medios de existencia a quienes no están en estado de trabajar. Añadía en el art. 22 que la instrucción es una necesidad de todos. La sociedad debe favorecer con todo su poder el progreso de la razón pública, poniendo la instrucción al alcance de todos los ciudadanos.

El concepto patrimonial de la democracia ha llegado a formar parte de las creencias más profundas del pueblo soberano en todos los países. Ello se refleja en muchas constituciones modernas y no menos en la española de 1978, que, tras definir a España como un “Estado social y democrático de Derecho”, acumula mal llamados “derechos”, de los que Evita Perón no se habría avergonzado. El Título I se titula “De los derechos y deberes fundamentales”. Define los derechos, deberes y libertades de los españoles pero lo hace de manera confusa y contradictoria, lo que refleja la desorientación doctrinal e institucional en punto a lo que los individuos pueden exigir a las autoridades y esperar de sus conciudadanos. En él interesan especialmente los capítulos segundo y tercero.



En el capítulo segundo de este Título I aparece una Sección primera con los artículos 15 a 29, en que se detallan las libertades que gozan de especial protección, como el derecho a la vida, la libertad de ideas y de cultos y su publicación, la garantía habeas corpus, la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, la libertad de movimientos, el derecho de reunión pacífica y asociación, los jueces naturales —en fin, todo lo clásico, gracias a Dios—. Ciertamente es que, al hablar de la libertad de enseñanza en el art. 27, aparece el primer derecho social: “Todos tienen el derecho a la educación” y se proclama la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica. Parece inocuo pero no lo es. Conduce insensiblemente al control de los contenidos de lo que se enseña pública y privadamente, lo que a muchos puede parecer deseable hasta que los catalanes y vascos cayeron en lo que temía John Stuart Mill: que así “se establece un despotismo sobre las mentes, que conduce por tendencia natural a un despotismo sobre los cuerpos” (De la libertad, 1859). A todo ello se añaden, en una segunda sección con los artículos 30 a 38, otros derechos cuya protección habrá de conseguirse a través de los tribunales ordinarios, como es el derecho de propiedad, el de libertad de empresa y el de sindicación.

Buenos deseos

Este Título I incluye una segunda sección llamada “De los principios rectores de la política social y económica”, que es donde aparecen los derechos sociales que no me parecen más bien una lista de buenos deseos. Se proclama “la protección social, económica y jurídica de la familia”, la promoción de las “condiciones favorables para el progreso social y económico”, “la distribución equitativa de la renta”, el “pleno empleo”, “un régimen público de Seguridad Social”. Se reconoce “el derecho a la protección de la salud”, a “una vivienda digna y adecuada”, a unas “pensiones dignas y adecuadas”, al medio ambiente, a la cultura, al patrimonio histórico y artístico.

En fin, la lista es larga y sublimemente vacía. La retórica de los derechos sociales se ha extendido así a nuestra Carta Magna, que en vez de proteger las libertades personales y políticas de los españoles, y también en lo más fundamental de todas las personas acogidas a las leyes españolas, pretende solemnizar algunos desiderata sociales presentándolos como “derechos”. La dificultad de esta retórica es que todo derecho debería tener como contrapartida el deber de alguien de respetarlo y colmarlo. Pero ¿quiénes son los que han de garantizar una educación buena y gratuita a los niños españoles? Se dice que “el Estado” o el “Gobierno”. Pero ¿y si los obligados no lo hacen? ¿Quién se lo exigirá? Lo mismo digo de la protección de la familia, la equitativa distribución de la renta, el pleno empleo, la buena salud, las pensiones dignas, la cultura. En el caso de que no se me respete la libertad prometida por la norma de habeas corpus podré acudir a los tribunales; y lo mismo digo del secreto de la correspondencia, la reunión pacífica, el derecho de huelga, o mi propiedad personal. ¿Ante qué tribunal puedo reclamar una buena educación o una eficaz cura de mis males y enfermedades?



Todos esos “derechos sociales” no son tales. Son directrices políticas para los gobiernos que sólo se pueden exigir en las urnas. Llegada una situación de crisis se recortan y primero paz y después gloria. Limpiemos nuestras reclamaciones de retórica miasmática, aunque sólo sea por claridad mental e higiene moral.



Crecimiento económico gracias a la austeridad

21 de mayo de 2015

Sorpresa general: la economía española alcanza una inesperada velocidad de crecimiento, mayor incluso que las de los países más productivos de la eurozona. La política aplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy había sido declarada contraproducente por la mayoría de los economistas nacionales y extranjeros. En especial lo hizo el profesor Krugman durante su visita a España hace ya dos años, que afirmó que la crisis se debía a que la demanda total o agregada de la economía española era en exceso débil. Para él, si por falta de confianza la demanda privada es insuficiente, debe ser la pública la que acuda al rescate. Era necesario, concluyó, que España siguiera endeudándose para obtener fondos con los que lanzar una gran política de empleo público e inversión en infraestructuras. Una vez relanzado el crecimiento, aumentarían los ingresos fiscales y la deuda iría enjugándose.

Krugman ha vuelto a carga: primero en Argentina, donde puso por las nubes la política económica de la presidenta Kirchner, Dios les bendiga; y ahora en The New York Times, para condenar la victoria de Cameron y del Partido Conservador en las elecciones británicas. La ha motejado como “The victory of the unthinking” (“La victoria de los que no piensan”), porque no entiende que alguien pueda siquiera “pensar” que una política de austeridad pública resulte más eficaz para crecer que una política de endeudamiento y de gasto a la keynesiana. No le mueve de su postura ni el creciente éxito de aquellos países que en medio de la crisis han buscado reequilibrar las cuentas públicas con recortes, como Reino Unido, Irlanda y España.

Es verdad que la política de austeridad habría hecho más efecto si los recortes del gasto público no hubieran estado acompañados de grandes subidas de impuestos, que retardaron la recuperación, especialmente en España. En cualquier caso, la experiencia indica que la consolidación fiscal y la reducción del gasto público se han visto acompañadas una y otra vez por aumentos de la producción y de la demanda, aunque para los seguidores de Keynes esto pueda parecer contrario a la lógica y al sentido común.

Contracción fiscal expansiva

El profesor Tim Congdon acaba de publicar un confutador estudio en la revista Economic Affairs (vol. 35, nº1) con el título “Elogio de la contracción fiscal expansiva”, en el que examina críticamente la idea de origen keynesiano, sostenida por Martin Wolf desde su púlpito en Financial Times, de que el Gobierno de Reino Unido, al realizar una contracción fiscal tan dura como la llevada a cabo de 2010 a 2014, corría el peligro de ahondar en la recesión de la economía. Los recortes del ministro Osborne eran mucho mayores incluso



que los de la señora Thatcher en los Presupuestos de 1981. Con esas medidas, ¿hundiría aún más el Gobierno de Cameron la economía y multiplicaría el abultado desempleo?

El plan de la señora Thatcher para consolidar los Presupuestos en plena recesión de 1981 provocó una carta de 364 economistas en *The Times* anunciando los males de la Apocalipsis si seguían adelante con sus recortes. Ocurrió lo contrario: la economía británica pudo gozar de doce años de inusitado crecimiento entre 1988 y 2000. La cuestión ha vuelto a plantearse en 2010. La alarma causada en los departamentos universitarios, entre los periodistas de relumbrón y en las huestes de la oposición es una repetición de la que provocó entonces el Gobierno de Thatcher. El resultado de la política de consolidación de Osborne ha sido otra vez el contrario del previsto: la economía británica está creciendo por encima del 2% desde 2010, precisamente después de que el Gobierno de coalición entre conservadores y liberaldemócratas pusiera en marcha la contracción fiscal. El paro ha caído al 5,6%, la población activa alcanza el 73,3% de la población adulta y los salarios reales comienzan a aumentar.

El mismo panorama de crecimiento es el que ofrece la economía de EE.UU. No es al caso entrar ahora en los detalles de la drástica contracción fiscal aplicada por el presidente Obama, cuyos planes de imprudente expansión del gasto público, sobre todo en Sanidad, son para el futuro. Sí hay que prestar atención a la política monetaria expansiva de ambos países, puesto que la compra de valores por sus bancos centrales o “expansión cuantitativa” (QE) es la que ahora empieza a aplicar el Banco Central Europeo (BCE). Primero, eso indica que, dentro de sus límites, la política monetaria en la que Keynes no tenía ninguna fe, es más eficaz que la política fiscal. Segundo, la QE ha servido para contrarrestar la inoportuna imposición a la banca de aumentos de su ratio de capital precisamente cuando fallaba el crédito.

Recuperación en España

La política de austeridad y las reformas estructurales son, precisamente, lo que explica gran parte de la recuperación de la economía española, de la que ya nadie duda. La salida de la crisis y la reducción del desempleo habrían sido más rápidas con un ministro menos recaudador que Cristóbal Montoro y una ministra aún más reformadora que Fátima Báñez. La preocupación se centra ahora en la caída de la productividad, que está tan desmayada como en Reino Unido, pero eso no es objeto de la política macroeconómica, sino de la política educativa, la de competencia y la de innovación.

El profesor Krugman no debería haber abandonado nunca el estudio de la economía internacional, campo en el que tan notables aportaciones hizo cuando era joven. Los Nobeles, en cuanto reciben el premio, empiezan a hablar de lo que no saben.



La parábola de los ciegos

29 de mayo de 2015

La economía tiene razones que la política no entiende. Durante toda campaña electoral se oyen propuestas que, de aplicarse, tendrán efectos impredecibles o incluso contraproducentes, por mucho apoyo que consigan entre los votantes. Cierto es que las predicciones de la ciencia económica son imprecisas sobre todo en cuanto al tiempo en que se van a concretar, aunque sabemos mucho más de lo que el común de la gente cree. Sobre todo sabemos lo que es imposible de toda imposibilidad. Suelen ignorarlo economistas milagrosos que, como el guía del cuadro de Pieter Brueghel el Viejo, van ciegos a caer en el hoyo y arrastran tras de sí a políticos y votantes, engañados o deseosos de engañarse.

No quiere esto decir que en cuestiones económicas todo esté ya dicho por y que, leyendo uno o dos libros de los grandes clásicos, ya no necesitemos investigar ni averiguar más. Es mucho lo que no sabemos. Sin embargo, la teoría y la experiencia nos han enseñado lo que podríamos llamar verdades negativas, prudentes avisos que no son de ningún partido ni ideología, sino reflejos de la realidad, guste o no guste.

Un primer error es creer que la austeridad pública hunde los países en una mayor depresión. Los ejemplos de Irlanda, el Reino Unido y España, tres países que están creciendo contra todo pronóstico, deberían hacernos dudar de lo que parece indicar el sentido común. Hasta Grecia se había puesto a crecer antes de que llegara al poder Siryza. Los keynesianos de todos los partidos sostienen que los recortes de las pensiones, la reducción de los salarios de los funcionarios, el aplazamiento de las grandes obras públicas llevan a que corra menos dinero, con lo que la crisis se agudizará. Si se recorta el gasto público, dicen, la demanda de la economía en su conjunto se reducirá. Error. Los españoles estamos saliendo de la crisis precisamente porque hemos buscado el equilibrio presupuestario recortando el gasto público. El buscar el crecimiento avivando artificialmente la demanda de las Administraciones choca con tres obstáculos que anulan el efecto. Primero, los individuos sabemos que el aumento del gasto público financiado con deuda supone más subidas de impuestos en el futuro. Segundo, la financiación de lo público desplaza la financiación de lo privado: vean si no la inmensa cantidad de deuda del Estado con rédito asegurado que prefieren mantener los bancos en vez de conceder crédito a empresas, grandes y pequeñas. Tercero, la inversión pública concentra los recursos productivos donde menos falta hace para un crecimiento sano, como por ejemplo nuevas obras para extender el Alta Velocidad España (AVE) a todas las capitales de provincia de España. Todo ese gasto retrae la demanda, no la aumenta. En todo caso, que quienes critican la austeridad, que expliquen por qué está creciendo España tras haber ahondado en los recortes en el momento más angustioso.

Más deprisa habrían salido esos tres países de la crisis si en vez de subir los impuestos hubieran reducido más el gasto. Sobre dónde recortar el gasto habrá disputa pero no sobre



algo más elemental: que a menudo la carga de los impuestos no recae sobre aquéllos a quienes iba destinada. Es el caso del IVA. Cuando la demanda desfallece, como durante los últimos cinco años, no lo pagan los consumidores, que se han retraído de comprar. El peso del impuesto sobre el consumo se traslada a los vendedores de bienes y servicios. La carga del impuesto sobre la renta también se traslada a quienes menos pueden pagarlo. Cuando los tipos son muy altos y progresivos, los verdaderamente ricos pueden tomar medidas que no están al alcance de todos. Así, la sola amenaza de elevar el impuesto sobre las Sicav las pone en trance de huida. Las grandes multinacionales y fondos de inversión son los magos de la ingeniería fiscal y/o evitan con facilidad el impuesto o se llevan la actividad a otra parte. El peso del IRPF y del IBI cae sobre los asalariados y los propietarios, que no podemos trasladarnos de jurisdicción fiscal.

Los efectos no queridos de la multiplicación de la deuda suponen un grave aviso para políticos y votantes. ¡Cuidado con apoyarse en los empréstitos para mantener gastos públicos insostenibles, como los del Estado el bienestar en su forma actual! Quienes confían en el crecimiento económico para devolver lo tomado a préstamo deberían saber que tanto la deuda pública colocada dentro de la nación como la incurrida con extranjeros, antes o después tienen el efecto de cercenar el crecimiento. En efecto, la deuda colocada en el interior absorbe fondos que los privados necesitan. Un ejemplo de esto fueron las dos décadas perdidas por el Japón de 1991 a 2010: gran endeudamiento interior, inversiones redundantes, crecimiento nulo; y lo mismo podría decirse de Italia. Por otro lado, la deuda colocada en el exterior aporta inicialmente capital a la nación y anima la economía, pero luego, llegada la devolución, acaba retrayendo fondos del país. Ejemplo de ello ha sido la economía española, cuyo sector público se mantuvo y el privado se expandió gracias a préstamos del extranjero: inicial expansión, recesión posterior. La deuda hay que devolverla a su tiempo o pagar el incumplimiento con una pérdida de confianza de los inversores.

Esa explosión de endeudamiento y la consiguiente burbuja se debe en última instancia a que los banqueros centrales del mundo creen que son ellos los llamados a evitar los altibajos de la economía real con la política monetaria. De 1985 hasta 2007, mantuvieron imprudentemente bajos los tipos de interés y los españoles sabemos cómo burbujan las Bolsas y los solares cuando se inyecta dinero barato. El manejo del dinero por los bancos centrales es pues una fuente adicional de desorden financiero y económico. Las elevaciones del salario mínimo son otro ejemplo de políticas contraproducentes. En principio, el elevar por decreto los salarios de los trabajadores menos productivos reduce el empleo. Una gran parte de desempleo juvenil y femenino se debe al encarecimiento forzado de esos trabajadores. Recientes investigaciones han hecho ver que el efecto es más sutil. Las elevaciones del salario mínimo pueden mejorar la situación de quienes tienen trabajo o lo encuentran gracias a sus conexiones, pero reduce las oportunidades de los recién salidos del instituto y de los parados de larga duración. Son muchos más los avisos que la ciencia económica tiene para uso de políticos apresurados. Tan es así que estoy por reeditar mis Lecciones de economía para Zapatero y sus sucesores. Ya saben: lo que no puede ser...



Cómo entender qué pasa en Grecia

1 de julio de 2015

Grecia vuelve a estar al borde del abismo, un abismo con dos simas: la falta de liquidez y la insolvencia. Para entender las condiciones de un posible rescate de última hora hay que aplicar la teoría económica y la teoría de juegos. A veces pienso que, por confusión o ignorancia, ni siquiera los protagonistas del drama saben lo que les pasa.

La falta de liquidez puede ser muy grave. No estoy hablando del abultado endeudamiento del Estado y del sector privado de Grecia: la falta de liquidez está relacionada con la insolvencia, pero es distinta de ella. Quizá el país se quede sin numerario esta semana. Toda economía necesita dinero para funcionar si no quiere volver a un sistema de trueque. Puedo remunerar a mi dentista con whisky o pagar la cuenta del restorán fregando platos, pero difícilmente será posible saldar todas las transacciones de esta manera. En el caso de Grecia, tener numerario para sus transacciones internas y sus importaciones depende de que el Banco Central Europeo (BCE) cree o permita acuñar los euros suficientes para la unión monetaria en su conjunto y preste la parte correspondiente a la banca comercial griega; de que los bancos comerciales griegos den albergue a suficientes depósitos de sus clientes para así transformarlos en préstamos, y de que el país exporte o pueda financiarse en el extranjero lo suficiente para mantener la circulación fiduciaria. Las tres fuentes se han secado. El BCE ha suspendido el suministro de fondos de emergencia a los bancos griegos. Los exportadores y turoperadores se cuidarán muy mucho de repatriar los fondos obtenidos. El mercado de deuda no está disponible ni para el Estado ni para las compañías privadas. Se comprende que el Gobierno haya impuesto un corralito para que el país no siga desangrándose, pero el cierre total de la banca y la Bolsa durante una semana o más no hace sino agudizar la falta de liquidez. El efecto negativo sobre la producción nacional será inmediato.

Parece que la intención del Gobierno griego al convocar con tanta precipitación un referéndum este domingo es conseguir que la mayoría del pueblo rechace las propuestas de reforma de sus acreedores, así reforzar su postura negociadora y, de paso, dedicar a salarios públicos y pensiones los fondos que tenía destinados a pagar los plazos inmediatos de la deuda exterior. En tan dramática situación podría surgir una solución temporal: la emisión de pagarés del Estado para atender a sus gastos. Mejor incluso sería que el Banco Central de Grecia comenzara a emitir dracmas para prestárselos al Gobierno. Por propio interés, al Banco Central no le convendría crear moneda alocadamente y perder ingresos de “señoreaje” (la diferencia entre el coste físico o electrónico de la emisión de nuevo dinero y el poder de compra de éste en el mercado, que caería con la inflación). El mercado daría un precio a los nuevos dracmas según su demanda y oferta. Así, surgiría espontáneamente un sistema de dos monedas, como en Perú. Esto haría posible que formalmente Grecia se mantuviera dentro de la unión monetaria, con lo que se obedecería la prohibición de los Tratados europeos de que un miembro de la unión monetaria abandone el euro sin antes salir de la Unión Europea.



Condiciones para la “Euroización”

Sea esto como fuere, una larga experiencia indica que un país sólo puede mantenerse “dolarizado”, como Panamá o Ecuador, o “euroizado”, como España o Grecia, si se atiene a un código de buenas prácticas y equilibrio financiero. En primer lugar, los gastos e ingresos del Estado deben estar equilibrados, un año con otro, según la regla del “santo horror al déficit”. En segundo lugar, las balanzas de pagos deben tender al equilibrio: desaparecerá la compensación de sistemas como el “Target 2”, por el que el BCE atiende automáticamente y casi sin coste a las necesidades de moneda extranjera de los países miembro, cualquiera sea su déficit exterior. En tercer lugar, el Estado no debe endeudarse más allá de lo que pueda devolver. Habrá de aplicarse estrictamente la cláusula de “no bail out” (nada de salvamentos) de los Tratados: es la regla bajo la que operan los cantones suizos o a los ayuntamientos y Estados de EE.UU. (En el caso de entidades financieras insolventes, el salvamento habrá de hacerse aplicando con urgencia las reglas del concurso de acreedores). Si estas reglas no se cumplen, el país pronto se quedará sin dólares o euros, como le ha ocurrido a Grecia pese a los 565.300 millones de euros que ha recibido como rescate hasta el momento.

Juego de póquer

Cosa diferente es la solvencia. Grecia aduce que le será aún más difícil servir su deuda si se le impone más austeridad. El argumento de que los grandes recortes del gasto público ahondan las depresiones es falso. Muy al contrario. No sólo apelo a la experiencia de Reino Unido y de España, que, aunque aumentaron los impuestos, sí recortaron el gasto público en el peor momento y ahora crecen muy deprisa. Apelo sobre todo a los estudios empíricos del catedrático de Harvard Alberto Alesina que muestran ampliamente lo que digo: los recortes del gasto público son la primera condición de la vuelta a un sano crecimiento.

Lo importante es restablecer la confianza en la economía griega gracias a un comportamiento ortodoxo. Si se consiguiera, podría aceptarse que la deuda griega se recortara. Ya hubo una púdicamente llamada reestructuración de más de la mitad de la deuda en manos privadas en 2010. Creo que si los griegos aceptaran aplicar las necesarias reformas, las autoridades europeas estarían dispuestas a conceder una quita, pues es imposible que Grecia devuelva los 317.100 millones en deuda pública que ya debían al extranjero en 2014, equivalente al 117% de su PIB.

El juego en el que están empeñadas las autoridades europeas y el Gobierno griego ha tropezado con dos prejuicios. Los griegos saben que Europa adora el euro como el fetiche de la tribu y se aprovechan de ello. Por su parte, el Gobierno griego está preso de un keynesianismo de izquierdas, que Varoufakis aprendió en la Universidad inglesa, por lo que se niega a tomar la medicina salvadora. La cuerda tan irresponsablemente tensada se rompió el domingo.



Grecia: Tsipras ha ganado el primer órdago

8 de julio de 2015

Prefiero el mus al póker, que es el estudio favorito de los especialistas de la teoría de juegos. Yanis Varoufakis, el ministro de economía de Grecia recién dimitido (otra finta), se especializó en Inglaterra en esa parte de la “económica” (si me permiten el neologismo, para distinguir la doctrina de la economía real). Nunca perdonó a Margaret Thatcher que en los años 80 ganase por la mano a los sindicatos: esta es su revancha. Compararé el referéndum que acaba de ganar la izquierda griega con un órdago sin cartas. Los europeos no han querido aceptar el envite de los griegos, que estaban jugando con dinero prestado y amenazaban con levantarse de la mesa sin devolver un chavo. Para probar su empeño, tenía el Gobierno griego que infligirse un daño a sí mismo —bueno, a los jubilados de su país— aceptando quedarse sin dinero contante. Sabía que los europeos harían cualquier cosa menos permitir que un Estado miembro abandonase el euro. Yo he calculado que el rescate de Grecia está costando al resto de los europeos por el momento 563.000 millones de euros. Ahora acabarán consiguiendo más, sostenidos por la liquidez que el Banco Central Europeo (BCE) no se atreverá a negarles. Hay que saludar rendidamente la maestría de los negociadores griegos: incluso han conseguido que el sufrimiento de su pueblo parezca obra de quienes llevamos años regalándoles dinero.

Desde el punto de vista del Derecho Constitucional, el referéndum griego se ha organizado de manera escandalosamente irregular: el plazo ha sido brevísimo y no ha permitido una explicación suficiente por los partidarios del ‘sí’ y del ‘no’. El texto griego era farragoso y oscuro y contenía expresiones en inglés. Entre líneas se leía lo pretendido por el Gobierno al pedir el ‘no’: a saber, mantener a Grecia en el euro, rechazar las reformas exigidas por los acreedores y pedir otro rescate. Me extraña que nadie haya votado que ‘sí’.

Desde el punto de vista económico, el rechazo de las ofertas del FMI, la Comisión Europea y el BCE estaba basado en un error científico. De esto tenemos la culpa los economistas profesionales. He oído a un sabio tertuliano de la SER decir que el caso griego demostraba el fracaso de la política de austeridad, “bueno... exceptuando a España”. Cualquier observador honrado debería haber señalado más excepciones a ese fracaso postulado por comentaristas superficiales: Portugal, Irlanda, Reino Unido, Estonia, Letonia, Lituania... y la propia Grecia que, cuando el Gobierno de Nueva Democracia tuvo que dejar paso a Syriza, ya había equilibrado la balanza de pagos, alcanzado un superávit primario en el Presupuesto y un crecimiento más que respetable. La izquierda europea ha conseguido que llamemos “austeridad” a lo que ha sido una política de crecimiento, basada en desplazar fondos de un sector público elefantiásico hacia la inversión productiva. Todos los países citados han sufrido caídas temporales del PIB y altas de paro, tanto más prolongadas cuanto menor calado han tenido las reformas. Tan grave error de concepto tiene atenazados a políticos sin convicciones ni conocimientos, como el presidente Rajoy, que debía haberse negado a la petición de la Troika de subir salvajemente los impuestos y haber concentrado su esfuerzo



político en recortar el gasto, liberar la economía y reducir la deuda. En todo caso, mejor ha sido esto que lo que ahora piden los keynesianos, con Jean-Claude Juncker a la cabeza: más deuda y más gasto.

Recordaremos el ‘no’ de Grecia como el momento en que la Unión Europea cambió de carácter. La unificación del continente pretendía basarse en una libre competencia económica apoyada en una moneda sólida, emitida por un BCE políticamente independiente. La regla de oro era que no habría rescates de países pródigos, como no los hay para los cantones y municipalidades suizos o los estados y las ciudades de EE.UU. La cuestión no está en si convendría una quita y espera de la deuda griega, que ahora está principalmente en el balance del BCE. El pasado no debe contar si se toman las precauciones para que no se repitan los errores. No bastaría con decir que no habrá más rescates. Habría que condicionar el alivio a una reforma y liberación de la economía griega, de tal forma que nadie en Europa sienta la tentación de ceder al canto de las sirenas del gasto financiado con deuda, si se me permite aludir a otro mito griego aparte el del caballo de Troya, tan manoseado en estos días.

Nada de esto se hará. Vamos camino de una Europa verde, con generoso Estado de Bienestar, amplio gasto público, altos impuestos, enfadosa regulación, barreras arancelarias y centralización presupuestaria: una Europa que intentará acallar los renovados nacionalismos con socialdemocracia, mucha socialdemocracia. Syriza (y Podemos) están ganando la partida.



España: La envidia

21 de julio de 2015

Para muchos españoles, la envidia es el vicio nacional por excelencia, pero la verdad es que anida en las raíces de la naturaleza humana y ha tenido mil manifestaciones en todos los tiempos y lugares, desde los celos homicidas de Caín por parecerle que Jehovah prefería a Abel hasta el odio al judío comerciante y banquero en la Alemania nazi. Es tal la fuerza destructiva de la envidia que son muchos los que, poniéndose la venda antes de la herida, imploran perdón o incluso sienten vergüenza por las ventajas que la vida les ha concedido, cuando su buena fortuna no ha sido a costa del mal de nadie, sino que la han heredado legítimamente o la han alcanzado por su ingenio, esfuerzo y suerte. Incluso el alma más generosa puede sentir un leve puntazo de amargura a la vista de la fortuna ajena. Por ello, como bien ha dicho Helmut Schoeck, es necesaria continua vigilancia personal y comunal para evitar la extensión de la envidia, disimulada bajo apelaciones moralizantes, como la «justicia social», la «responsabilidad social de la empresa», la «redistribución de la renta y la riqueza», la crítica del «consumismo», la condena del «lujo» o la denuncia del «obsceno tren de vida» de los millonarios.

Muchos empresarios de éxito dicen que, con sus donaciones a buenas obras, quieren «devolver a la sociedad algo de lo que la sociedad les ha dado». No tienen por qué devolver nada: lo que la sociedad les entregó en forma de salarios o beneficios fue a cambio de los servicios que realizaron y los productos que idearon. Ya pagaron sus impuestos. Me parece muy elogiable que haya personas que, sea grande o pequeña su fortuna, quieran dotar una fundación para acoger niños huérfanos, erradicar la malaria o defender la libertad económica. Pero lo harán ex gratia cordis, pues no tienen obligación alguna de «devolver» lo que obtuvieron justa y legalmente gracias a lo que su actividad empresarial aportó a la sociedad.

La envidia es tanto más virulenta cuanto más cerca está el envidiado del envidioso, que así puede ver los éxitos del otro como algo que estaba a su alcance si la mala suerte o la malquerencia no se lo hubieran birlado. El envidioso a veces se contenta con alegrarse del mal ajeno, lo que los alemanes llaman Schadenfreude. Otras veces va más lejos e intenta causar algún daño al triunfador, aunque solo sea con la calumnia, como don Basilio en «el barbero de Sevilla». En casos extremos, estará incluso dispuesto a infligirse daño a sí mismo, con tal de que el envidiado sufra un daño mayor. Yago tomó ojeriza a Otelo porque había nombrado lugarteniente a Casio, cuando Yago pensaba que esa promoción le era a él debida. Ese desvío se transforma en envidia destructora cuando ve que no cesan los triunfos militares del moro, que Desdémona quiere apasionadamente a su marido y que Casio goza con su nuevo mando. La conspiración de Yago acaba destruyendo al nuevo lugarteniente, al general y su esposa —y a Yago mismo.



Hace siglos que las democracias vienen institucionalizando la envidia ciudadana. Un dicasterio de Atenas condenó a Sócrates a beber cicuta. Unos fariseos azuzaron al pueblo hasta forzar a Pilatos a refugiarse en la pregunta «¿qué es la verdad?». Hoy día, la envidia es más utilitaria: algunos envidiosos proponen que el pueblo confisque el patrimonio de «los ricos» para sufragar los gastos del Estado del bienestar. Comprendo que el pueblo se indigne contra las fortunas obtenidas por el favor o corrupción. Pero entiendo que se deja llevar por la envidia cuando, en nombre de la igualdad, denuncia el legítimo premio a la excelencia, cuando no entiende muy bien en qué consiste esta. ¿Qué función es esa de los banqueros que se les premia con sueldos y bonus multimillonarios? ¿Cómo justifican sus ganancias multimillonarias los dueños de los «fondos buitres»? ¿Por qué no limitar la remuneración de los directivos empresariales al equivalente de veinte salarios mínimos, susurra Pablo Iglesias? Nadie entiende qué hace un directivo que no pueda hacer cualquiera. El común de la gente comprende que Ronaldo o Nadal acumulen una fortuna, porque sus habilidades entran por los ojos y en un campo de fútbol o una cancha de tenis se vería enseguida que no valemos lo que ellos. Pero ¿qué mérito es el de los ricos en general? Si ganan más, ¡pues que paguen más! (como si un impuesto proporcional a sus ingresos no supusiera que pagan más). Así va la democracia: toma para el Estado casi la mitad del producto nacional, emitiendo deuda pública y cargándonos de impuestos confiscatorios, cuando debería ocuparse de limitar el poder político, fuente principal de la corrupción.

Me atrevo a preguntar a mis pacientes lectores si creen que Bill Gates ha servido mejor a la Humanidad creando Microsoft con su amigo Paul Allen o financiando y dirigiendo la Fundación Bill y Melinda Gates con su esposa. Es probable que me contesten que su gran obra es la Fundación, sin recordar cuánto más nos han facilitado la vida sus aplicaciones informáticas, y lo mismo podría decir de Steve Jobs. Los economistas Clark y Lee han buscado explicar por qué la gente aprecia más la labor de una Fundación que la de una empresa, distinguiendo entre la «moral magnánima» de las donaciones y la «moral mundana» de los negocios. La gente aprecia las acciones magnánimas porque quienes las realizan lo hacen intencionadamente, se sacrifican personalmente y benefician a personas identificables. En cambio, los hombres de negocios no buscan directamente el bien social, sino el enriquecimiento personal, y los bienes que producen van dirigidos a individuos anónimos y dispersos que además han de pagar por ellos. Todo ello hace que los grandes servicios de la empresa se tachen de «egoístas», aun cuando a menudo sea mayor el bienestar social que producen que el de actividades «sin ánimo de lucro».

En Occidente hemos sabido conducir la viciosa inclinación natural de la envidia por el cauce de la incruenta emulación —sea deportiva, artística, científica o económica—. En sociedades igualitarias como son las nuestras hemos de cuidar especialmente del libre mercado, que es la institución que principalmente transforma el plomo de la envidia en el oro de una cooperación, no menos preciosa por ser las más de las veces involuntaria.



España: ¿Qué más se puede pedir a este gobierno tan aburrido?

11 agosto de 2015

La opinión se interesa poco por los Presupuestos Generales del Estado, cuando en ese proyecto se refleja, tanto lo que el Gobierno cree haber conseguido durante su mandato de cuatro años, como lo que quiere hacer si lo reeligen y lo que querría hacer si lo reeligen. Aparte lo farragoso de su prosa administrativa, está la convicción del público de que las elecciones de fin de año se disputarán por otras cuestiones que no son las presupuestarias. De ese desinterés del público votante tiene en gran parte culpa el Gobierno, ha mostrado hacia las cuestiones económicas la típica actitud de los no economistas: hacer las cuentas es indispensable pero el busilis está en otra parte, en la política. Pues no, la democracia nació del escrutinio de lo que el rey quería hacer con los dineros que extraía de sus súbditos: recuerden la proclama del medievo inglés: "No taxation without representation" ("no hay tributación sin representación"). Y encima, la llamada parte política este Gobierno la ha malbaratado.

Aquí llega pues el Libro amarillo de los Presupuestos. Refleja lo que era de esperar de un equipo en puertas de elecciones, para no perderlas. No es lo que podría haber sido como culminación de cuatro años de labor de un Gobierno profundamente reformista. El regalo de una mayoría absoluta no se repetirá pronto. Primero lo juzgaré pues como si aún fuera el político que fui durante breves años. Luego lo miraré con los ojos de un impaciente crítico del tipo de democracia que están construyendo los socialistas de todos los partidos, que decía F. A. Hayek.

Declara el Libro amarillo en sus primeras páginas que los objetivos del Gobierno durante estos últimos años han sido: consolidar la situación económica de España; luego, reactivar la actividad y así reducir el desempleo; al mismo tiempo, preservar el Estado de Bienestar; y por fin apoyar a los más castigados por la crisis. Para muchos, lo conseguido habrá de resultado inesperado. El producto está creciendo a una tasa del 3,1%, que, aunque prevén se reduzca algo, es notable. El empleo también está aumentando a una tasa del 3% anual. El déficit público sin tomar en cuenta las ayudas exteriores no se ha reducido lo que nos pedía la UE, pero en fin, hemos bajado de lo equivalente a 8,9% del PIB en 2012 al 5,7% en 2014 y la legendaria prima de riesgo ha adelgazado hasta los 125 puntos básicos. Ha habido una reforma laboral, bienvenida aunque insuficiente. La del sector financiero en realidad no la han hecho pero el Gobierno nos ha librado de la intervención completa, lo que me permito aplaudir porque fui uno de los pocos economistas que dije desde el principio que había que evitarla. La reforma de la Administración pública la notaremos si se ha hecho de verdad. Ellos dicen que hay que salvar el Estado de Bienestar: ¿saben bien lo que están salvando y si tiene remedio?



Si miro lo conseguido con los ojos de una esperanzada ilusión, mi postura tiene que ser más crítica. Tenemos un presidente del Gobierno a quien las cuestiones económicas le pesan como un deber inevitable, no como una tarea ilusionante. Dicen que ha faltado política y ha sobrado economía. No. Ha faltado hacer de la transformación económica un gran proyecto político. No se trata de que nuestros líderes nos digan qué hay que producir y a qué hemos de dedicarnos sino de remover obstáculos para que cada uno hagamos lo que creemos y sabemos hacer mejor. Que no nos digan ni el Gobierno ni la Oposición si debemos reindustrializarnos, o cuáles deban ser las tarifas de la electricidad o el gas, o qué servicios podemos prestar a nacionales o extranjeros, o qué es lo que se ha de enseñar en la escuela, o cuántas universidades ha de haber, o si hay que proteger la agricultura de la competencia exterior. Todo eso lo decidirá cada familia o cada empresa. Nuestro gran proyecto nacional tiene que ser quitar obstáculos.

El Gobierno se precia de que hay muchos contratos laborales indefinidos: todos deberían ser indefinidos. El Gobierno ha bajado y quiere seguir bajando los impuestos “para dotar de mayores recursos al sector privado”: ¿por qué los subió? El Libro amarillo lo excusa por la presión del déficit. Mejor habría sido recortar el gasto público de verdad. En 2014 el gasto de las Administraciones públicas ha equivalido a un 43,5% del PIB; el ingreso a un 37,8%. Así es que la deuda pública equivale a la producción nacional de un año entero. Es sabido que el recorte del gasto público fomenta el crecimiento, no lo reduce como afirman los keynesianos que nos azotan y persiguen.

A estos políticos de todos los partidos, que hablan de PIB, prima de riesgo, consolidación fiscal, unión bancaria europea, y otros recónditos conceptos les diré que les faltan convicciones y conocimientos.



Casandra o el liberalismo

24 de noviembre de 2015

La opinión pública se revuelve de nuevo contra el libre mercado, pero ese cambio de actitud no ha tenido aún mucho efecto en la política práctica. Si nos centramos en Europa, los votantes no se han entregado al populismo. Cuando lo han hecho, como en Grecia, pronto se han arrepentido. No creo que España sufra, tras las próximas elecciones, un vuelco político contrario a las exigencias del buen sentido. En el campo de las ideas la situación es más inquietante. Aunque huérfanas de ideología coherente, las izquierdas, radicales o templadas, no cesan en sus descalificaciones. Hasta la cátedra de San Pedro denuncia graves defectos en el sistema de libre mercado. No puede negarse que la crisis financiera de 2007 ha causado vacilación y aun repliegue en las filas de los defensores de la filosofía individualista. Los liberales clásicos sabemos que la libertad económica trae consigo la prosperidad, sobre todo para los más pobres; que la libre competencia en el comercio, en la política, la educación, las ideas, las artes, favorece el desarrollo de la persona, el vuelo del espíritu y la autonomía de la sociedad civil. En suma, el capitalismo es el principal sostén y aliado de la democracia liberal. Pero no basta con reiterar lo sabido. Hay que plantar batalla en los puntos concretos en los que sufrimos el asalto de los colectivistas.

Comienzo por el dinero y las finanzas. La opinión común es que la catástrofe de 2007 se debió a una excesiva desregulación financiera. Greenspan, uno de los grandes culpables de la catástrofe, ha llegado a decir que se había "equivocado al suponer que las empresas financieras podían regularse a sí mismas". Quienes mantenemos nuestra confianza en el libre mercado vemos las cosas de otra manera. Tardaremos en saber a ciencia cierta cuáles fueron las causas de esa Gran Recesión: aún se discute sobre el porqué de la Gran Depresión de los años treinta. En mi opinión, la crisis de 2007 se debió principalmente a la soberbia de los banqueros centrales. Creen poder evitar los vaivenes del ciclo jugando con los tipos de interés e incluso rebajándolos a cero para fomentar el empleo. Olvidan que así la moneda se devalúa sin cesar. En el siglo XIX, unas monedas sólidas, ligadas al oro, permitieron mantener el valor del dinero, contribuyendo así a un siglo de crecimiento inédito en la historia. Aunque algún país pequeño lo hace, quizá resulte imposible en las rígidas sociedades de hoy ligar las monedas a un patrón exterior que las libere de interferencia política. Entonces habrá que proponer la libre competencia entre monedas, nacionales y privadas, sin ninguna restricción de los movimientos de capitales.

El cambio climático (antes recalentamiento global) se presenta como el más grande fallo del mercado de la historia de la humanidad. Si están subiendo las temperaturas medias del globo, no sabemos a ciencia cierta si ello se debe sobre todo a la acción humana. Tampoco sabemos si se trata de un fenómeno catastrófico sin retorno. Lo que sí sabemos es que las predicciones de los agoreros se hacen sobre la base de modelos no experimentales, que olvidan la capacidad humana de adaptarse a nuevas condiciones. Recuerdo que en 1968 Paul Ehrlich profetizó la devastación mundial que produciría "la bomba demográfica". Ese clima de



maltusianismo llevó a la política de un hijo por pareja en China y a las esterilizaciones forzosas de Indira Gandhi en India. Ahora, a medida que se prolonga la vida, los humanos estamos reduciendo espontáneamente el crecimiento de la población. Sería de agradecer algún átomo de duda por parte de los intervencionistas a ultranza. Europa imita con entusiasmo las seculares leyes antitrust de EE.UU. Los monopolios que hacen verdadero daño son los que nacen de la regulación pública. Bruselas nada dice sobre el monopolio de los ferrocarriles y la electricidad en Francia. Tarde está abriendo el Gobierno español el monopolio público del AVE, que aún recibe la subvención de un favorable alquiler de las vías y la catenaria. En cambio, faltando protección política, no hay monopolio que cien años dure: el poder de mercado de IBM sucumbió ante Windows, no ante los reguladores. La desregulación del mercado aéreo iniciada por el presidente Carter ha puesto los viajes al alcance de los bolsillos más modestos. ¿Por qué no liberar el gas y la electricidad como se ha hecho con las telecomunicaciones? El mantra del día es que los ricos son cada vez más ricos, y los pobres, más pobres. Piketty dixit. La verdad es que muchas personas aún mueren de hambre, pero ninguna, que yo sepa, de desigualdad, como no sea la desigualdad ante la ley. El secretario general Ban Ki-Moon acaba de reconocer en España que el número de pobres en el mundo está cayendo mucho más aprisa de lo que preveían las "Metas del Milenio": unos ochocientos millones menos desde 1970. Lo que no ha dicho es que ello se debe sobre todo a la globalización. El progreso de tantos millones de pobres significa que la desigualdad se ha reducido drásticamente. ¡Qué manía con el 1 por ciento! No es cierto que las grandes fortunas de la lista de Forbes se mantengan a través de las generaciones. Las acumulan los grandes empresarios y las dilapidan los hijos y los nietos. ¿Dónde están los Rockefeller? Han tenido que marcharse del Rockefeller Center porque no podían pagar el alquiler. Bill Gates y Warren Buffet son riquísimos. Veremos qué hacen sus descendientes.

Para compensar a los que no tienen medios para financiar sus pensiones, su salud o la educación de sus hijos hemos creado a lo largo del siglo XX el Estado del bienestar. Nada es gratuito. Tenemos que financiarlo con impuestos sobre el trabajo —y con deuda—. La deuda pública oficial de los Estados, con todo y haber alcanzado sumas equivalentes al producto anual de sus economías, es una fracción de la deuda latente por obligaciones futuras no capitalizadas en materia de pensiones y salud (y no digamos educación). Las llama el Dr. Gokhale, del Instituto Cato, el iceberg de la democracia: en el caso de la Unión Europea, esas promesas no contabilizadas actuarialmente están dando lugar, a partir de 2010, a un déficit estructural recurrente y creciente de un 13,5% del gasto público (o un 7,8% del PIB). Cuando los liberales vaticinamos que esto, en un futuro no muy lejano, forzaría una dura consolidación fiscal o llevará a una inflación desatada que puede destruir la democracia, corremos la misma suerte que Casandra, a quien el dios Apolo condenó a decir siempre la verdad y a que nadie la creyera.



Vuelco político en Guatemala

8 de enero de 2016

Pocas situaciones políticas son tan instructivas como la de Guatemala antes y después de la elección como presidente de Jimmy Morales; actor, empresario y político. El impulso que le ha hecho llegar inesperadamente a tan alto puesto es la indignación del pueblo guatemalteco por la corrupción general de las autoridades políticas de la República.

Comienzo por subrayar una sorprendente innovación constitucional aceptada por ese país. Naciones Unidas, de acuerdo con el Gobierno guatemalteco, creó en 2006 una “Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala” (CICIG). El objeto inicial de esta comisión fue el de denunciar los posibles crímenes cometidos durante la guerra civil contra la guerrilla comunista. El objetivo era benemérito, pero sesgado: llevar a los tribunales a los militares y paramilitares que hubieran cometido abusos durante esa larga guerra. El resultado recibió el rechazo de quienes estuvieron del lado de la legalidad constitucional frente a la insurgencia comunista por la siguiente razón: la paz firmada con el objeto de integrar a los guerrilleros en la vida civil había sido especialmente generosa con ellos, olvidando sus crueles atentados contra las leyes del país con el apoyo de la Cuba de Fidel y el Che.

La CICIG se volvía contra una sola de las partes en la contienda, la de los militares. Sin embargo, tras la tercera renovación, el objetivo de las pesquisas del nuevo comisionado, Iván Velásquez, de nacionalidad colombiana, fue otro, lo que ha reconciliado a la opinión pública con la comisión: el de acabar con la impunidad de los políticos corruptos. Su colaboración con la Fiscalía de la República está resultando en sorprendentes revelaciones y procesamientos.

Daré sólo dos ejemplos del tipo de delitos investigados. El primero, conocido como La línea (por la línea de teléfono usada para acordar los desfalcos), relaciona a muchas autoridades del Estado con el impago de aranceles. Determinados importadores evadían la liquidación en aduanas a cambio de repartirse la suma debida al Fisco con un amplio número de políticos: por el momento y entre otros muchos, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina, además del gobernador del Banco Central, se encuentran en prisión preventiva. El otro escándalo toca uno de los muchos contratos públicos bajo sospecha: el referente al servicio de diálisis renal, concedido a una empresa sin experiencia, que ha resultado en 25 muertes. Otros escándalos de contratación pública han llevado a que el Tribunal Electoral esté considerando la suspensión de 35 diputados electos en los recientes comicios.

El factor decisivo ha sido el de las tres manifestaciones populares contra la corrupción, que consiguieron la renuncia de la vicepresidenta y, luego, del presidente de la nación. Esta misma



marea es la que ha nutrido de votos a Jimmy Morales. Ahora, el nuevo presidente tendrá que prepararse para una difícil labor para la que él sabe que no está preparado. Persona poco afecta a la intervención pública, creadora de un capitalismo de compadrazgo, se ha entrevistado en los últimos días con Leszek Balcerowicz, el ministro que lideró la transición de una economía comunista a una economía de mercado en la Polonia de 1989; y, luego, como presidente del Banco Central, consiguió armonizar la política monetaria con los objetivos económicos de su llamado “Plan de Choque”. Sé que Morales escuchó atentamente el consejo de llevar a cabo una drástica reforma del Estado y la economía. Para ello le hará falta convicción y conocimientos, y así no limitarse sólo a las medidas indispensables para evitar la catástrofe. Debe atreverse a cambiar fundamentalmente el sistema —y no reducirse a medias tintas, como ha hecho Rajoy—.

¿Por qué aranceles?

Si es necesario mantener aranceles como recurso para la Hacienda, deben ser “bajos y parejos”, como los de los sucesivos gobiernos de Chile, pero nunca proteccionistas ni sujetos a favores especiales que pronto se tornan en corrupción. El libre comercio unilateralmente proclamado beneficia a los países de cuatro modos. El primero es el gran favor que hace a los consumidores, por la mejora en precio y calidad, tanto directamente como indirectamente por la competencia de las importaciones con los productos nacionales. El segundo es la ayuda a los exportadores: todo arancel es un impuesto sobre la exportación, en la medida en que emplean insumos extranjeros. Esto no se resuelve con la maquila, que permite a manufactureros locales importar elementos libres de aranceles para luego reexportar (“Maquilar” quiere decir fabricar por encargo y viene del hispano-árabe, como entregar una porción de grano, harina o aceite al molinero por la molienda). Todo el país debería tener privilegio de maquila. El tercero es la mejora de la productividad por la competencia extranjera. Algunos productores nacionales sufrirían pero pronto se especializará el país en aquello en que goza de ventaja comparativa que, no se olvide, es siempre dinámica, pues el país en desarrollo pronto aprende nuevos modos. El cuarto es la menor tentación de delinquir.

Otra fuente de corrupción es el Servicio de Salud. Las concesiones al sector privado no han resultado en una gran mejoría. Quizá lo mejor sería ir a un sistema de bono médico intransferible que cubriera parte del gasto, al estilo del seguro de automóviles a todo riesgo (no digo “coches”, que es como allí se llama a los cochinos): el primer tramo del pago tendría que ser a costa del enfermo. También sería aplicable el bono a la enseñanza, tan deficiente para los pobres que más la necesitan; aunque temo la resistencia de los sindicatos de enseñantes. Por fin, y no menos difícil, es remover los obstáculos planteados por la legislación laboral y mercantil: con más de la mitad de la población en la economía sumergida, ya me dirán ustedes si no hay margen para el crecimiento. ¿Nos aplicamos el cuento en España?



El fin de un camino para China

1 de febrero de 2016

Quienes defendemos el libre comercio como el mejor camino para el desarrollo económico nos topamos con los casos de los tigres asiáticos, países del Lejano Oriente que han salido de la pobreza gracias a una política de fomento de las exportaciones. Durante el siglo XX, Japón primero, luego Taiwán, Corea del Sur, la República Popular de China, Vietnam han seguido una política de "export-led growth", de crecimiento basado en las exportaciones, un camino de crecimiento que parece estar agotándose. Fundamentalmente diferente es la política económica aplicada por Hong Kong y Singapur, que han salido de su situación de meros entrepôts de tráfico marítimo abriéndose directamente a la libertad comercial y sobre todo financiera, sin ceder a la tentación del fomento artificial de la exportación. Digo que los defensores de un libre comercio pleno nos topamos con los posibles contra-ejemplos de los Tigres, porque el camino que han seguido no es el de la total libertad económica desde el inicio, sino el de intervenciones de financiación pública y devaluación de la moneda, para forzar las exportaciones.

¿Hemos de corregir nuestra concepción del crecimiento por el comercio a la vista de estas experiencias? El caso que más llama la atención es el de China: grandes movimientos de población de la agricultura de subsistencia hacia empleos productivos en el campo y la ciudad; acumulación de poderío financiero, cuantiosas inversiones en el exterior —todo esto basado en la idea de crecer dando alcance ("follow up growth", como se llama en inglés) imitando los procedimientos e ideas de los países más adelantados—. Este tipo de imitación para exportar es sin duda más efectiva que el de la sustitución de importaciones seguida en América Latina en los años bajo inspiración de Raúl Prebisch y la CEPAL en la década de 1960. El mero hecho de tener que vender en el extranjero da lugar a un impulso competitivo que mejora la productividad nacional; pero tiene un límite, que es el que reflejan las dificultades con las que en la actualidad se enfrenta la economía china para cambiar de camino.

Para forzar la exportación, China ha manipulado el sistema cambiario y financiero. Durante años, los gobernantes mantuvieron subvaluado el renminbí para fomentar la exportación de bienes industriales; y enfocaron la importación y sus inversiones extranjeras hacia los recursos naturales demandados por su industria. Es preocupante la proporción del PIB dedicada a la inversión —por encima del 45%— con un ahorro nacional de más del 30% del PIB, también muy alto pero inferior a la inversión total: eso significa que la inversión se ha financiado en gran parte con deuda. El Gobierno chino combatió la crisis de 2008 haciendo que las grandes e ineficientes empresas públicas recibieran fondos prestados de una banca mal arreglada. Con ello, se ha omitido la necesaria reestructuración de empresas y bancos zombis. Esas intervenciones públicas y la forzada cuantía de la inversión indican un notable despilfarro y un crecimiento insostenible de la deuda.



El crecimiento por imitación y la exportación a cualquier precio tienen un límite. Llega un punto en que los recursos reales empiezan a agotarse: el aumento del crédito y la subvaluación de la moneda amenazan con derivar en inflación; la mano de obra se encarece, respondiendo al aumento de su productividad; el aire y el agua parecen inagotables hasta que la contaminación hace ver el error de no contar con su sobrevenida escasez.

Coste de oportunidad

Es un error guiar la política de crecimiento de un país atendiendo sólo a las grandes partidas de la contabilidad nacional. Llega un punto en el proceso de crecimiento económico en que ya no cabe aplazar la consideración de los costes de oportunidad. Es éste un concepto que no suele aparecer en los cálculos de los políticos. El coste de oportunidad de una inversión o un gasto, y de un impuesto o crédito para financiarlos, es lo que podría hacerse con esos recursos en un uso alternativo. El coste de un nuevo servicio de AVE a Lisboa, pongamos, o a Almería no es el trabajo, esfuerzo, financiación que en su construcción y explotación se invierten, sino lo que podría hacerse con esos recursos en otra actividad o línea de producción marginalmente menos atractiva en principio. Esta verdadera noción de coste, definida por el Premio Nobel James Buchanan, escapa a las mentalidades políticas, acostumbradas a razonar en términos de agregados: demanda agregada, oferta agregada, inversión total, consumo público y privado, como si esos grandes sumandos fueran instrumentos unívocos, utilizables para gobernar la economía en su conjunto.

La decisión del Gobierno chino de primar el consumo interior indica que sus responsables al menos han comprendido que hay que poner límite al despilfarro de un sistema de crecimiento por la exportación. No basta con eso, sin embargo. Deberían ir mucho más lejos y permitir que empresas y familias calculasen sus propios costes de oportunidad. El tomarlos en cuenta es algo instintivo en el sector privado. Por ello y como bien ha notado el economista del Cato Institute Razeen Sally, una vez agotado el camino del crecimiento por la exportación, debería confiar la marcha de las economías en desarrollo a las decisiones de individuos, familias y empresas, en un ambiente de libre competencia.

Son ellos quienes han sacado tantos millones de chinos de la pobreza. Es sabido que el milagro chino nació con la revolución agrícola realizada por los campesinos que consiguieron privatizarse “a pesar del gobierno”, como dice Carlos Rodríguez Braun. Los grandes millonarios chinos se han enriquecido por servir la demanda de consumo a espaldas de las autoridades. Es urgente que sean los individuos quienes decidan cuántos hijos tener y si gastar los dineros en su habitación, su educación o su pensión. Las empresas privadas calcularían por el criterio del beneficio si quieren invertir en el Hinterland de ese inmenso país, exportar a Japón o importar de Argentina. No es el momento de entrar en detalles. Sólo diré que el “cambio de modelo económico” en China debería encomendarse a las decisiones de individuos y empresas. Es comprensible, pues, que al resto del mundo no nos llegue la camisa al cuerpo al ver que el futuro de esa gran economía depende de los comisarios del PC, que



siempre calculan mal el coste de oportunidad de sus decisiones —o al menos no pagan los platos rotos.



España: El corralito de Pablo Iglesias

22 de febrero de 2016

La amenaza de un corralito si un nuevo Gobierno español aplica las ideas económicas de Podemos no asusta a Pablo Iglesias ni a sus ministros in pectore, quizá porque no entiendan bien el funcionamiento del euro. En realidad parece que no lo quieren entender —¿La soberbia del ignorante? ¿La ceguera del fanático?—.

Cuando un país es miembro de la eurozona, necesita abastecer de euros a sus residentes, porque ya no los puede producir su banco central. Caso de no conseguir mantener la circulación de euros físicos ni la liquidez de las cuentas bancarias, se repetirá lo ocurrido en una Grecia en crisis. ¿Recuerdan la foto del pensionista griego llorando en la acera delante de un cajero automático seco, tras peregrinar por distintos bancos para retirar el montante de su pensión?

Los miembros de la eurozona sólo pueden suministrar de euros a sus residentes acudiendo a tres fuentes de liquidez: 1) un superávit en la balanza de pagos; 2) préstamos concedidos por no residentes; 3) crédito del Banco Central Europeo. Si el país en cuestión, llamémosle España, se encontrara con que de manera continua sus pagos al extranjero son mayores que sus ingresos, vería disminuir su oferta monetaria necesariamente. Como los déficits crónicos en las cuentas externas vienen causados por déficits presupuestarios permanentes, con un Gobierno progreso-izquierdista ambos déficits se alimentarán mutuamente. Esa primera fuente pronto se cegará. En ese caso tendría que colocar más deuda pública en los mercados financieros; ello se le haría cada vez más caro, al aumentar la prima de riesgo; y llegaría el momento en que los extranjeros dejaran de prestarnos. Si el déficit en los pagos exteriores sigue creciendo año tras año, la Comisión Europea llamará la atención al Gobierno de España; si no obedecen los ministros, nos multarán a los ciudadanos; y al final nos enviará los “hombres de negro”.

Quedaría sólo el remedio de acudir al BCE en busca de liquidez. Las vías principales por las que el Banco Central emisor de euros suministra liquidez a un país con déficit exterior estructural son las siguientes: el descuento de los bonos públicos que la banca comercial tiene en su cartera; el descuento de bonos privados en el marco del programa de QE o Quantitative Easing; instruir a la banca comercial para que preste al sector privado parte de las reservas que mantiene en Frankfurt, si es que la desconfianza no cierra el mercado nacional de crédito.

Sistemas de compensación



Queda otra vía por la que el BCE puede financiar a los Gobiernos que incumplen sus obligaciones: es el sistema de compensación de pagos que se conoce con las siglas de Target 2. A Podemos quizá ni les suene, pues son mejores especialistas en el Juego de Tronos que en el juego del Monopoly. Es un mecanismo por el que el BCE financia diaria y automáticamente los déficits exteriores de países de la Eurozona que no sepan equilibrar sus cuentas. Si Pablo Iglesias compra en Italia una primera edición de *El Príncipe* de Maquiavelo o de *¿Qué hacer?* de Lenin para adorarlos en una vitrina, pedirá a su banco que salde su deuda con el librero italiano remitiendo fondos al banco local de éste. Si ese día, el sistema bancario español no ha recibido ingresos equivalentes a esa compra de Italia o los demás países de la Eurozona, ese déficit de pagos será cubierto automáticamente por el mecanismo de compensación conocido por las siglas de Target 2 con fondos del BCE. En principio no hay límite a esa financiación porque es automática —hasta que el BCE decida suspenderla como hizo con Grecia en su día—.

Entonces Varoufakis tuvo que dimitir y Tsipras recortar las pensiones. La Comisión Europea y el BCE tienen muchos instrumentos para forzar a un Gobierno recalcitrante a consolidar sus cuentas públicas y por tanto también las exteriores. Puede negarse a descontar los bonos públicos tenidos por la banca española y cerrar liquidez del QE destinada a nuestro país. También puede apartar del sistema Target 2 a la banca del país incumplidor. Así, caerá la circulación de euros en el interior, tanto en metálico como con tarjetas de débito. Se agudizará la huida de capitales. Entonces llegará a ser necesario el corralito, es decir, la prohibición a los particulares de hacer pagos en el extranjero y la drástica limitación de la liquidez de sus cuentas corrientes. El país se habrá quedado sin dinero, como ocurriría hoy con Cataluña si el Gobierno nacional no acudiera al rescate. Como me dijo una alta autoridad monetaria europea cuando la crisis griega, “entonces los residentes tendrán que buscar comida en los cubos de basura”.

Propuesta de Podemos al país

En la redacción del párrafo anterior he pasado insensiblemente del condicional al futuro de indicativo, porque creo que todo eso ocurrirá si Podemos y sus confederados En Comú Podem, En Marea, Compromís, Izquierda Unida consiguen la llave del Gobierno económico de España. Acabo de leer la “Memoria económica” incluida en la propuesta de Podemos para crear un “Gobierno del Cambio”.

El aumento del gasto que proponen a lo largo de los cuatro años es de 96.000 millones, para revertir los recortes de los servicios públicos, financiar programas como el de renta mínima garantizada y realizar inversiones públicas. Durante los dos últimos años de la Legislatura el aumento del gasto se destinaría a educación, a mayor protección social y a la transición energética verde. Así pretenderían mantener el nivel del gasto público en el 43,3% del PIB en vez de reducirlo en cinco puntos como quería al Gobierno del PP. Todo ello se financiaría con un aumento de la presión fiscal del 38,5 al 41 % del PIB, con una mayor recaudación gracias al crecimiento económico. El déficit público actual alcanza el 4,8% del PIB. Este año



deberíamos haberlo bajado al 3%. Podemos quiere pedir a la Comisión Europea que suavice la reducción todos los años para así tener 26.300 euros más que gastar a lo largo de la Legislatura. Muy notable y llena de ilusiones es la reforma fiscal que proponen: progresiva elevación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a partir de un ingreso de 60.000 euros, del 45% al 55% para los tramos superiores a 300.000. El tipo del Impuesto de Sociedades intentarán colocarlo en el 30% para todas la compañías, se gravarán más los ahorros. No es todo: creación de banca pública; completa marcha atrás en la reforma laboral; un plan de garantía de rentas; ampliación del Estado de Bienestar; pensiones de calidad y jubilación a los 65 años; sanidad más generosa y sin copagos; educación pública prioritaria... Así puedo garantizar que España dejará de crecer como está haciéndolo ahora. Es otra vuelta a los modos y despilfarros de Zapatero.

Espero que Podemos no esté pensando en un remedio a la postre mucho peor que el de mantenernos en el euro trampeando: volver a la peseta. Entonces podrían forzar al Banco de España a financiar las locuras del Gobierno populista creando más y más dinero; crecería la inflación; luego el Gobierno intentaría controlar los precios por decreto; y las tiendas se vaciarían; se hablaría de impagar la deuda extranjera. Espero que Podemos haya aprendido la lección de sus mal aconsejados amigos venezolanos.



Banco Central Europeo, a la desesperada

30 de marzo de 2016

Las últimas decisiones del Banco Central Europeo ahondan en una política monetaria equivocada, que además parece poco menos que imposible corregir. Una expansión del gasto público resultaba contraproducente, pues había que alimentarlo con más impuestos y, sobre todo, con aún más deuda. Se imponían los recortes. Mas por desgracia, la opinión pública de las grandes democracias se resiste a continuar con la política tildada de ‘austeridad’ y con las reformas ‘estructurales’ que necesariamente la acompañan, única manera de volver a la senda de un crecimiento sostenido. Por eso, y a la desesperada, los bancos centrales de Japón, Reino Unido, EE.UU. y la zona euro han venido actuando en los últimos cinco años como si fuera posible relanzar sosteniblemente el crecimiento económico de sus desmayadas economías anegándolas con ríos de dinero. El resultado, como era de esperar, es decepcionante.

La vuelta a la tendencia de crecimiento anterior a la crisis de 2007 a 2009 está siendo mucho más lenta que las ocho anteriores examinadas por el profesor John Taylor en una reciente publicación del Institute of Economic Affairs de Londres. Empezando por la de 1882 y acabando por la de 1990, todas las recuperaciones tras cada crisis financiera fueron más vivas que la actual, incluida la de 1929 a 1931. Sorprenderá que hablemos de rápida recuperación en el primer año y medio de la Gran Depresión. De hecho fue así, aunque luego la abortaron los desgraciados errores del presidente Herbert Hoover y del Sistema de la Reserva Federal: el uno, imponiendo una política de intervención en la economía, que el presidente Roosevelt, al asumir el poder en 1932, empeoró con el New Deal; la Fed, permitiendo que quebraran cientos de bancos pequeños y grandes en las dos crisis bancarias de 1929 y 1931, como bien relataron Milton Friedman y Anna Schwartz en su Historia monetaria de EE.UU. (1965). La tormenta financiera, mal gestionada por la Reserva Federal, vino a multiplicar los efectos de la precedente contracción de la economía real, señalada por el desplome de la Bolsa durante la “semana negra” iniciada el lunes 28 de octubre de 1929.

Tres lecciones pueden sacarse de la historia de las crisis financieras de los siglos XIX y XX. Una es que, en un sistema de reserva fraccionaria como el nuestro, es necesario que alguien actúe como prestamista de última instancia. Cuando la liquidez bancaria se desploma repentinamente y la gente atesora dinero físico (cae la velocidad, que decimos los economistas), es necesario prestar a los bancos con buen balance pero con dificultades de liquidez, sin bien cargándoles intereses punitivos, no negativos. Eso ocurrió en 1907 por acuerdo privado de los grandes bancos en el despacho de J. P. Mogan y no ocurrió en 1931 por falta de la necesaria intervención del banco central. Otra lección es que, pasada la tormenta financiera, puede retirarse liquidez inmediatamente confiando en la reacción espontánea de la economía real. La tercera es que la prolongación de una política de abundante liquidez monetaria, junto con una generosa política fiscal, no consigue los resultados de reanimación deseados. También sorprenderá esta afirmación, a la vista del relativo crecimiento de la economía estadounidense y su baja tasa de paro. Un examen



detallado de la relación entre la renta disponible, expandida por la política fiscal, y el consumo privado en EE.UU. contradice esa suposición, como se ve en el librito de Taylor (disponible gratis en la red).

Tristeza económica

La pregunta crucial es cómo se explica la actual tristeza de nuestras economías (por emplear una expresión vitivinícola). Las causas son dos: una, que la política monetaria antes de 2008 y después de 2010 se conduce a capricho y no regladamente; otra, que el aumento de la regulación e intervención de los mercados, ya de por sí excesivas, frena la productividad natural del sistema capitalista. Otra vez quedarán sorprendidos por lo que voy a decir de la austeridad y las reformas. Los economistas Alberto Alesina y Silvia Ardagna, entre otros muchos, han mostrado que grandes recortes del gasto público acompañados de rebajas de impuestos tienen un efecto de recuperación de la senda secular del crecimiento que ni la política monetaria ni la expansión pública consiguen.

En resumen, en la crisis de 2008 a 2010 fue acertada la decisión de los bancos centrales de actuar como prestamistas de última instancia para salvar a los bancos con dificultades de liquidez. Es lo que se negó a hacer el gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, en el caso de Northern Rock, por lo que el Gobierno tuvo que nacionalizar esa caja de ahorros, lo que al final resultó un buen negocio para los contribuyentes. El caso de Lehman Brothers es el contrario: no merecía salvarse, pero sí era necesario acudir en ayuda de los bancos que su quiebra dejó sin liquidez. Y los estímulos fiscales sobran, pues sólo consiguieron crear un lago de liquidez que ahora no se sabe cómo drenar.

Lo muy peligroso de la actual política de intereses nulos o negativos es el daño que suponen para el libre funcionamiento de los mercados. Desincentivan gravemente el ahorro, sobre todo el canalizado a través de los fondos de pensiones y los seguros de vida. Incentivan el endeudamiento de los Estados, autonomías y ayuntamientos, con grave peligro de impago. Reducen los márgenes de operación de la banca, ya maltrecha por las nuevas regulaciones que la fuerzan a recapitalizarse en el peor momento. Y fomentan las burbujas en los mercados de la vivienda y la Bolsa, porque el valor de los activos a largo plazo y los tipos de interés están inversamente relacionados. ¿No lo sabían? Pues otra sorpresa.



¿Qué hemos hecho mal?

29 de junio de 2016

He venido diciendo hace tiempo que los británicos que buscaban la separación del Reino Unido de la Unión Europea tenían poderosas razones para desearlo (Expansión, 20 de junio de 2016) y que a lo mejor vencían en el referéndum del 23 de junio. Alguna de estas razones, como es el rechazo visceral de la inmigración, pueden no ser aceptables para quienes defendemos la democracia liberal, pero habría bastado con devolver a la Gran Bretaña alguna forma de control sobre las entradas de personas. Otras razones están mucho más justificadas. La UE no va por buen camino. La victoria del Brexit no es una catástrofe sin paliativos, sea para el Reino Unido, sea para Europa, por mucho que las primeras repercusiones financieras causen susto. En el Reino Unido espero que prevalezcan quienes buscan transformar su país en una economía competitiva y abierta al mundo. Los continentales, por nuestra parte, deberíamos ver la separación del Reino Unido como un aviso saludable y una incitación a reformar la UE.

Los negociadores de la Unión han sido muy poco generosos con Cameron. El primer ministro británico puso en juego su cargo para mantener el Reino Unido dentro de la Unión de una vez para siempre. Ahora acaba de dimitir (cosa que no hacen los políticos españoles que pierden elecciones). En las negociaciones previas al referéndum lo más que consiguió fue la promesa de que la UE iniciaría el procedimiento para modificar los Tratados de tal forma que el Reino Unido no se viera forzado a participar en la creación de “una unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa”, como reza el Preámbulo de los Tratados —hay quienes no queremos tal cosa. Lo demás fue calderilla: nada de devolución de la política agraria y social al Parlamento de Westminster; apenas unos años durante los cuales el Reino Unido podría suspender las ayudas a los hijos que los inmigrantes han dejado en sus países de origen; una mínima posibilidad de que los Parlamentos de los estados-miembro pudieran pedir la reconsideración de disposiciones impuestas por la maquinaria de la UE; y la promesa de no discriminar contra los miembros que no están en el euro. La explicación de los dirigentes de la UE a Cameron fue que los Tratados impedían mayores concesiones. Ello precisamente indica que no se habían enterado de nada. Deberían admitir que algo han hecho mal.

Se dice ahora que Cameron ha estado imprudente al plantear el referendo. Él sabía lo que necesitaba para contrarrestar las peticiones de mayor soberanía por parte de los secesionistas: que se reconociese y ampliase el estatus especial del Reino Unido en Europa, que así podría dejar de ser el acostumbrado partner incómodo. De no conseguirlo, temía Cameron la vuelta a la lucha intestina en el partido Conservador por la cuestión europea que ya había hecho morder el polvo a Margaret Thatcher y John Major. Me contentaré con decir que Cameron estuvo inocente al creer que la UE era reformable. La única respuesta que obtuvo fue ‘¡más Europa!’.



No quieres taza, pues tazón y medio. En junio del año pasado, los cinco presidentes habían publicado un informe titulado “Realizar la Unión Económica y Monetaria europea”. En él proponían un plan para dar otro paso más hacia una Federación Europea. Consistiría en completar la centralización económica, financiera, presupuestaria y política, a marchas forzadas. ¿Quiénes eran esos cinco presidentes? Pues Juncker, Tusk, Dijsselbloem, Draghi y Schulz. ¿Quién los ha elegido? Yo no. No querían ver que hay otros países descontentos e inquietos en la Unión además del Reino Unido. La imposición por las bravas no es el mejor método para reforzar la UE.

El euro ha sido un doloroso fracaso. Hizo bien el Reino Unido en mantener la esterlina fuera de la Unión Monetaria, tras sufrir el revolcón con el que hizo su inmensa fortuna Soros. La precipitación en lanzar la moneda única en un continente tan desigual política y económicamente está abriendo profundas grietas de insolidaridad. Mejor habría sido un régimen de competencia entre monedas nacionales, que es disciplina suficiente, pues las devaluaciones provocadas por la mala política económica acaban siempre empobreciendo el país. ¡Tres veces ha habido que rescatar a Grecia! Y los eurofanáticos, erre que erre. Estar en el euro sin duda nos ha salvado de las devaluaciones repetidas y la inflación desatada que habríamos sufrido de haber sido la peseta nuestra moneda. Mas cuando la disciplina no nace de la voluntad de la nación sino que la imponen unos terceros (entre dudosos y amenazantes), cunde el rencor de quienes detestan cualquier freno extranjero a sus utopías. Nos salvaron en la crisis y ahora mordemos la mano que nos dio de comer. La democracia responsable es algo que se aprende con los fracasos.

La negociación entre el RU y la UE estará plagada de obstáculos y peligros. Los británicos no deben preocuparse por el comercio de mercancías tanto como se ha dicho durante la campaña, porque el arancel externo medio ponderado de la UE está alrededor del 1,5 %. El Reino Unido tendrá sin embargo que negociar nuevos acuerdos comerciales con países del resto de mundo.

Más negativo puede ser el efecto del Brexit sobre los servicios, en especial los servicios financieros de la City de Londres. Los bancos domiciliados en la City ya no tendrán el llamado “pasaporte” que les permite operar en toda la UE desde Londres sin abrir filial en la zona euro. Los partidarios del Brexit forman dos campos poco acordes entre sí: uno el proteccionista y enemigo sistemático de la inmigración, encabezado por Nigel Farage; el otro, deseoso de convertir RU en una zona de libre mercado y competencia abierta, cuya cabeza visible es por el momento Boris Johnson. Las negociaciones se complican además porque el equipo británico tendrá que incluir representantes de Escocia e Irlanda del Norte, para conseguir un régimen que les satisfaga y evite la ruptura del Reino. En el otro lado de la mesa, también divergen las posturas: Angela Merkel, que ha dicho que las negociaciones no tienen por qué ser precipitadas y rencorosas, mientras que Juncker y Hollande claman venganza. Hay que desear que al final el divorcio sea amigable y consigamos un RU convertido en un emporio de libertad económica; y una UE más abierta, menos reglamentista y más varia y democrática. No será fácil.



Al final, los continentales hemos acabado por separarnos del socio que tanto ha hecho por nuestras libertades durante el siglo XX. Muchos de los miembros de la UE andamos escasos de tradición democrática. Dicho de forma dramática, el Portugal de Salazar, la España de Franco, la Italia de Mussolini, la Alemania y la Austria de Hitler, la Francia de Pétain, la Polonia del mariscal Pilsudski, la Hungría del almirante Horthy, la Grecia de los coroneles dirán adiós a la Gran Bretaña de Churchill.



El Brexit no es una catástrofe

7 de septiembre de 2016

España ha tomado la separación del Reino Unido y la Unión Europea con gran dramatismo. Las opiniones reflejadas en diversas encuestas y expresadas en tertulias de radio coinciden en pronosticar que el Brexit hará gran daño a la economía británica, que reducirá radicalmente la importancia de ese país en la política mundial y que también afectará el bienestar económico y peso político de la Unión. Incluso se han oído voces llamando a «castigar» al Reino Unido por el daño económico y el desprecio político hecho al proyecto europeo, animando a los españoles a boicotear los productos británicos y a evitar las visitas a la pérfida Albión. Los sentimientos son libres pero los hechos son tozudos. Llevada la ruptura con sensatez y buen tino podrá sin duda evitarse una recesión económica en el RU y una pérdida de prosperidad en el Continente. Tampoco tienen por qué ser irreparables las consecuencias políticas para ellos y para nosotros. En suma, creo que la separación del Reino Unido puede tener efectos positivos tanto en la Gran Bretaña como en la UE, si aprendemos todos la lección de que la libre competencia de las personas y de las instituciones hace más por la armonía que la centralización uniformadora.

Durante la campaña del referéndum, los partidarios de mantenerse en Europa exageraron sus pronósticos de recesión si el RU abandonaba el mercado único. Ciertamente es que, nada más anunciado «el divorcio», la libra esterlina sufrió una caída del 10 por ciento respecto del dólar, reflejo de la sorpresa y la incertidumbre. Una depreciación de este tamaño, por un lado reanima las exportaciones; por otro, eleva los precios en el interior y produce una sensación de pérdida de riqueza entre los británicos. Ambos efectos se equilibran. No creo que ello vaya a torcer ni en un sentido ni en otro el buen camino que llevaba la economía del RU antes del referéndum: la tasa de paro se encuentra en el 4,9 por ciento y la economía está creciendo al 2,1 por ciento, año sobre año. El Banco de Inglaterra se ha puesto la venda antes de la herida y ha reducido el tipo de interés de sus préstamos a los bancos comerciales en un ridículo 0,25 por ciento. Una política monetaria así de impotente tampoco creo que contribuya mucho a salvar una situación que, por el momento, está lejos de tomar los aspectos dramáticos que se pronosticaban.

Los británicos pueden sin duda prosperar fuera del mercado único. Primero, no nos conviene a los «continentales» poner trabas al comercio con ellos, pues nuestra balanza comercial es ampliamente superavitaria. ¿De verdad queremos los «comunitarios» entorpecer un comercio de bienes y servicios que en el año 2015 supuso exportaciones al RU por 395.000 millones de euros, importaciones por 299.000 millones y un superávit a nuestro favor de 95.000 millones? En todo caso, el arancel externo (medio, ponderado) de la UE es un 2,3 por ciento, aunque los automóviles, una de las principales exportaciones del RU, cargarían con un 10 por ciento. El mayor papeleo puede ser un obstáculo pero no esos recargos.



Todos hablan del daño al negocio de la City de Londres por la retirada del permiso automático (o «pasaporte») a los bancos allí domiciliados para ofrecer servicios financieros en el Continente. Pero el mercado de capitales de la City es principalmente al por mayor. Su tamaño, agilidad y ubicación horaria hacen difícil que Frankfurt o París ¡o Madrid! puedan sustituirlo. Cuanto mayor sean la reglamentación en la Eurozona, más serán los que prefieran Londres. Ya ocurrió a finales de los años cincuenta cuando apareció en Londres un gran «mercado del eurodólar» para evitar los topes de remuneración de los depósitos bancarios impuestos por la Reserva Federal. Don Quijote contra los molinos de viento.

El peligro para la futura prosperidad del RU fuera de la Unión Europea acecha en otro punto. La primera ministra, Theresa May, en su primer discurso ante el número 10 de Downing Street, habló de relanzar la política social, de contener la entrada de inmigrantes, de reindustrializar las Islas Británicas. Incluso se declaró a favor de colocar representantes de los trabajadores en los consejos de administración y de limitar las remuneraciones de los altos cargos. Todos los gobiernos hacen tonterías con la mirada puesta en los votos. Mas precisamente porque el Reino Unido ya no estará protegido por los muros antiglobalizadores de la Unión, pueden estas declaraciones no pasar de ser un saludo a efímeras modas. Si son algo más, pronto verán los británicos lo duro que es subsistir en el mundo abierto con políticas socialistas —y lo agradecido que es al final apuntarse al progreso capitalista—. La Gran Bretaña goza de suficiente talento, de sobrada capacidad inventiva, de amplia cultura internacional y de acendrado amor de las libertades para conseguir lo que otros tildarán de imposible milagro económico.

También se equivocan los críticos del Brexit en su enfoque de las consecuencias políticas de la separación. El error que subyace en estos pronósticos catastrofistas consiste en reducir toda la vida social a relaciones de poder. Se puede no ser una gran potencia y sobrevivir, incluso triunfar en este mundo fragoroso. La adoración del tamaño y la pretensión de gobernar el mundo nos hacen olvidar que los protagonistas de la vida social no son las grandes organizaciones sino los pensadores, los artistas, los innovadores, los creadores de empresa, en pocas palabras, las personas sin fronteras. El grave defecto político de la Unión Europea es el «déficit democrático». Nos gobiernan remotos políticos e ilustrados funcionarios. ¡Qué ceguera la de la Unión el no haber movido un dedo para mantener en sus concilios a la más vieja democracia de Europa!



La quiebra de las pensiones

9 de febrero de 2017

Los sistemas de pensiones son de dos tipos: capitalizados o de reparto. El de España es principalmente de reparto, pues las pensiones son un "timo de la pirámide", igual que el de doña Baldoquera Larra en el siglo XIX, o los de Madoff y el Fórum Filatélico en el XX: necesita un número creciente de cotizantes para atender a sus compromisos y evitar que la pirámide se derrumbe.

Al oír que sus pensiones corren peligro, muchos jubilados exclamarán: "¡Pero si he ahorrado toda mi vida para tener derecho a una pensión...!". Se engañan. El dinero que han aportado durante su vida laboral ya no existe, se ha gastado en su totalidad. Las contribuciones a la Seguridad Social no se acumulan ni ahorran para el futuro; se aplican al pago de las prestaciones del momento. La esperanza de los actuales cotizantes de cobrar una pensión cuando se jubilen se basa en un pacto tácito con las generaciones venideras de que ellas a su vez estarán dispuestas a financiarles la pensión con sus contribuciones. Es un sistema de palabra de honor.

La situación es incluso peor de lo que parece a primera vista, pues la Seguridad Social solo mira el día a día de los ingresos y gastos y no evalúa el monto de sus compromisos futuros. Si la caja no alcanza, se acude a la "hucha"; y cuando esta se vacía se emite deuda, cual nos dice el Gobierno que ocurrirá a mediados del presente año. De esta forma no se aprecia toda la gravedad de la situación porque no se toman en cuenta los compromisos futuros de la Seguridad Social, que superan sus previsibles ingresos venideros. Si a esta carga se añade la del sistema sanitario público, es previsible que el déficit público siga multiplicándose hasta niveles insostenibles. El profesor Jagdish Gokhale, del Institute of Economic Affairs de Londres, llama esta deuda implícita "el iceberg de la deuda pública" del Estado del bienestar. En el caso de España, ha calculado que si no cambiamos el déficit anual no declarado por pensiones y servicios sanitarios podría equivaler a un 13,8% de nuestro PIB, año tras año – bien lejos del 3% máximo que fija la UE.

Incluso sin tomar en cuenta todo el "iceberg" de la política social, las pensiones de reparto están en grave riesgo por dos circunstancias. Ya he mencionado la primera, y es que las generaciones futuras puedan negarse a satisfacer las expectativas de los actuales cotizantes. La segunda es más acuciante: a medida que se amplían los años de vida escolar y se alarga nuestra esperanza de vida, los contribuyentes a la Seguridad Social forman una proporción cada vez menor respecto de los jubilados, un poco más de dos afiliados por pensionista. Para remediarlo la Unión Europea propone reducir la pensión efectiva retrasando obligatoriamente la edad de jubilación. Es una medida que va contra la corriente de la historia. El avance de la productividad a lo largo de un siglo y medio ha permitido reducir la jornada de trabajo y ampliar las vacaciones en los países adelantados. De igual manera, la mayor



productividad debería permitir que los individuos pudieran jubilarse anticipadamente si lo desean y les conviene. Esto es imposible con un sistema de reparto.

Los defensores de las pensiones públicas de reparto se escudan en el poder fiscal del Estado. Siempre será posible, dicen, financiar las pensiones con más impuestos generales, si no alcanza a cubrir las el impuesto sobre el empleo que son las cotizaciones de la Seguridad Social. Incluso hay quienes piden que la Constitución garantice el pago de las pensiones y la salud públicas con cargo al erario público. Imaginemos el efecto de tener que financiar un déficit público cuatro o cinco veces el hoy permitido. Ello supondría agravar los efectos negativos de la fiscalidad bajo la que ya gimen empresas, trabajadores y consumidores.

Los españoles deberíamos sustituir el reparto de las pensiones por la capitalización individual. El sistema de capitalización de las pensiones se inició con éxito en Chile hace treinta y cinco años y después se ha extendido a más de treinta de países. La experiencia indica que bastaría con que cada titular apartase un diez por ciento del salario –poco más que el siete por ciento que contribuyen los trabajadores hoy en España–. Lo ahorrado e invertido para su pensión pertenecería a cada trabajador. Culminada la reforma, las empresas verían notablemente reducidas sus contribuciones (en España otro 21% sobre el salario), con un efecto muy positivo sobre el crecimiento nacional. Los propios fondos de pensiones, al colocar esos ahorros diversificadamente, también animarían el crecimiento.

No pretendo minimizar las cuestiones que plantea el paso del reparto a la capitalización. Así, en la medida en que los trabajadores ahorren para su propia pensión y no para las pensiones de los jubilados de cada momento, habrá que atender las legítimas expectativas de los afiliados en el marco del sistema actual. También habrá que garantizar una pensión mínima a quienes no hayan ahorrado lo suficiente para jubilarse holgadamente. Y habrá que vigilar la gestión de los fondos de capitalización y mantener la competencia entre ellos para evitar desfalcos. Todo esto y más se estudió para España hace veinte años, cuando el Círculo de Empresarios invitó a José Piñera a escribir una detallada propuesta de reforma, que luego desgraciadamente no se puso en práctica. Entre las manos solo nos quedaron las soluciones a corto plazo del Pacto de Toledo. Valdría la pena repetir aquel estudio, pues la reforma de las pensiones no solo es posible, sino que es necesaria.



La difícil vida de un banquero central

26 de febrero de 2019

La crisis iniciada en 2007 ha levantado un maremoto de ataques al capitalismo y al sistema de libre mercado, y muy especialmente a la conducta de los banqueros centrales. No cabe duda de que la crisis sorprendió a las autoridades económicas y monetarias, a la mayor parte de los economistas y, en muchas democracias, a los votantes de centroderecha y centroizquierda que tenían confianza en el sistema que había producido tanta prosperidad.

Los movimientos populistas no son sino una expresión de la desilusión de numerosos ciudadanos ante las promesas fallidas de un sistema, mal llamado liberal, de organizar la sociedad. Es este una mezcla de elementos contradictorios. Basado en la libertad de voto y expresión, comprometido para conseguir la prosperidad general y dispuesto a permitir la competencia en mercados parcialmente libres, prometía también la creciente igualdad de ingresos y fortunas con intervenciones administrativas y fiscales, además de proteger de la cuna a la tumba a los individuos de toda incertidumbre. El precario sistema así definido como liberal se mantenía dentro de cada nación gracias a un creciente gasto en educación, salud, pensiones y servicios sociales. En lo internacional, la seguridad frente a la incertidumbre parecía estar asentada en el sólido suelo de virtudes: la extensión de la democracia y el creciente respeto a los derechos humanos. La realidad era muy distinta. Este orden en lo internacional se mantenía en el mundo liberal gracias al esfuerzo militar y técnico de EE.UU. Ahora está en peligro por la presión de dictaduras que utilizan la producción económica como instrumento de poder.

No quiero aparecer como pesimista a ultranza. Nuestro sistema tiene medios de corrección capaces de evitar que el sueño de la razón produzca monstruos. No es este el momento para hacer una crítica del engañoso estado de bienestar, cuyas encantadoras promesas son crecientemente insostenibles; ni el de insistir en que el orden internacional civilizado no se basa en el pacifismo y el odio a las fuerzas armadas: debemos estar dispuestos a usar la fuerza para defender lo nuestro pero moderando las intervenciones cuyo fin confesado es arreglar el mundo, como ha ocurrido en Oriente Medio. Hoy me ocuparé de un reducido campo, el monetario, cuyo mejor arreglo puede contribuir mucho a la libertad y seguridad de nuestras naciones y de las personas que en ellas vivimos.

Los bancos centrales y la crisis de 2007

Ya sabemos, como nos dice Carlos Rodríguez Braun, que no es el perro el animal favorito de los españoles, sino el chivo expiatorio. El Levítico describe la ceremonia por la cual dos chivos eran sacrificados simbólicamente como culpables de los pecados cometidos por el pueblo judío en el año. En esta crisis también hay dos chivos declarados responsable por el



pueblo en busca de pecador: los bancos centrales, a los que se culpa de algunos de los graves fallos del sistema financiero, y los capitalistas, que, guiados por la codicia, se lanzaron a ganar fortunas por métodos poco escrupulosos.

Los errores de los bancos centrales, que los hubo, por suerte para ellos no se prestan a escandalosas versiones cinematográficas. Los monstruos de Wall Street eran carne de guion, como lo fueron en la película de Oliver Stone de 1987: ahí pronunció Michael Douglas Jr. la frase “greed is good”, la codicia es buena, que ha hecho fortuna como retrato del capitalismo financiero. Hay banqueros poco honrados, sin duda, de los cuales hemos visto más de un ejemplo en España, pero la banca y la bolsa desempeñan un papel insustituible en el capitalismo moderno y la gran mayoría de quienes trabajan allí pueden hacer gala de buena conducta.

En cualquier caso, no sería justo cargar la culpa de todo lo ocurrido con la moneda y la estabilidad del sistema financiero sobre los hombros de los banqueros centrales, sin fijarnos en la mala influencia del marco institucional de las finanzas y en el papel que los Gobiernos desempeñan en el funcionamiento del sistema monetario y crediticio. A mi manera de ver, los errores de los bancos centrales nacen de teorías equivocadas propaladas por los economistas que se llaman neokeynesianos, y ciertamente no por Keynes, que era escéptico en materia de política monetaria y creía que la economía en su conjunto se gobernaba por el gasto público financiado con deuda. Para muchos de los economistas que trabajan en los bancos centrales el dinero es importante porque piensan que con los tipos de interés y la creación de dinero es posible hacer una política económica anticíclica.

En el uso anticíclico de la política monetaria, el principal acusado es Alan Greenspan, que, como presidente de la Reserva Federal de 1987 a 2006, guió la política del banco central en el sentido de reaccionar preventivamente ante cualquier amenaza de recesión con políticas monetarias expansivas. Así fue en el año 2000 al permitir la aparición de la burbuja de la vivienda con su política de bajos tipos de interés. Cuando en 2006 buscó corregir subiendo los tipos, entregó a su sucesor Bernanke una economía en caída libre.

Política monetaria a lo Friedman

Milton Friedman fue monetarista pero en un sentido muy distinto de Greenspan y los neokeynesianos de hoy. Friedman no dudaba de que la política monetaria influyera mucho más en las variaciones del ciclo que la política fiscal. Así lo había demostrado en su Historia monetaria de los Estados Unidos (1954), escrita con Anna Schwartz. Pero no se pronunciaba sobre las causas reales del ciclo y su recurrencia. Como él, creo que sabemos muy poco sobre por qué hay ciclos: solo que su varianza puede hacerse más aguda con políticas monetarias equivocadas. Por eso, al final de su vida se inclinó por proponer una regla que neutralizara los efectos de la política monetaria a corto plazo, mientras postulaba un aumento secular constante de la oferta monetaria al mismo ritmo que el crecimiento real a largo plazo de la



economía. ¡Nada de fine tuning, nada de intentar afinar las cuerdas de la economía como si fuera un piano! La idea de que el banquero central es el pianista y las cuerdas suenan obedeciendo a cómo tañe las teclas (si me permiten esta atrevida expresión) es un error. El economista tiene que improvisar la partitura; además, las teclas y las cuerdas piensan, tienen sus propios intereses y suenan como creen que les conviene. Con ello quiero decir que al gobernador y al Gobierno les es imposible hacer sonar la economía a su gusto. Lo mejor es proclamar una senda fija para la política monetaria, reducir los impuestos y las intervenciones públicas y permitir que individuos y empresas hagan planes a largo plazo y apechuguen con las incertidumbres inevitables en este mundo.

Cuando se trata de reducir la inflación a términos aceptables es necesario, sin embargo, una adecuación de la política fiscal a las restricciones monetarias, por la razón que voy a decir. Una restricción monetaria lo suficientemente severa siempre consigue reducir la inflación, pues esta es un fenómeno monetario causado por un crecimiento más rápido de la cantidad de dinero que de la producción real. Pero solo si los individuos creen que la política antiinflacionista anunciada se va a llevar a cabo, toman precauciones para ajustarse (si no, se dan con la cabeza en el parabrisas). Es lo que hizo en 1981 Geoffrey Howe, el canciller de Margaret Thatcher: recortó drásticamente el gasto público en medio de una recesión; al mismo tiempo, fue reduciendo la oferta monetaria mucho más lentamente. El público mismo fue el que se adaptó a la situación esperada y creíble por la razón de que cuando se combate la inflación monetariamente, es bueno que el público vea que ha desaparecido la tentación para el Gobierno de cubrir su déficit con nuevas emisiones de moneda.

La gobernadora rusa

Daniel Lacalle, en su nuevo libro *La gran trampa*, sostiene con razón que cuando una economía entra en recesión no es acertado inundarla de dinero y reducir los tipos de interés, como han hecho los cuatro bancos centrales importantes durante la crisis (Fed, BCE, Banco de Inglaterra, Banco del Japón). Si la política monetaria anterior a la caída fue sensata (no la de Greenspan), entonces es mejor mantenerla y buscar las causas de la recesión en los obstáculos y barreras de la economía real. A las medidas tomadas por los grandes bancos centrales las llama el gas de la risa monetaria. Al contrario de todos, lo hizo el Banco Central de la Federación Rusa dirigido por Elvira Nebiullina: aparte de la devaluación del rublo, forzada por la caída del precio del petróleo, el banco central se negó a actuar como si la recesión hubiera sido causada por el dinero caro: las causas eran estructurales. Sorprendente ejemplo traído por Lacalle.



El buen mecenas y la envidia

19 de junio de 2019

La gran mayoría de los españoles nos felicitamos de la generosidad de Amancio Ortega al donar 320 millones de euros a la sanidad pública a través de su fundación. Esa cuantiosa suma servirá para que las autoridades adquieran más de 290 equipos de última generación para la detección y curación del cáncer. Se añade a otras donaciones anteriores en el campo de la salud y la educación. También ha entregado a Cáritas la mayor suma jamás recibida por esa benemérita institución. Por eso hemos visto con disgusto que la parlamentaria de Podemos en la Comunidad de Madrid Isa Serra haya criticado esa donación con dos argumentos: que la sanidad pública no debe aceptar limosnas, y que un donante privado no debe interferirse en las decisiones técnicas de la autoridad pública. La señora Serra ha recibido el pleno apoyo de Pablo Iglesias y otros dirigentes de su partido. Este incidente no es una mera anécdota, pues plantea la cuestión del papel de la magnanimidad personal en las sociedades liberales.

Las razones de Podemos

Es parte del espíritu de Podemos el preferir los impuestos al mecenazgo, y ello por tres razones. Detestan la idea de que los individuos puedan usar su libertad para gastar su fortuna de la forma que crean más adecuada. Consideran que las grandes decisiones sociales deben quedar en manos de especialistas “democráticamente” elegidos. Y temen que las decisiones de los mecenas sean fuente de desigualdad. No es cierto, como se argumenta demagógicamente, que la parte de los ingresos que un individuo o una corporación asignan a un fin público de su elección suponga una reducción de sus impuestos: el donante decide el fin público al que se van a dedicar la parte de sus contribuciones de esta forma separados de la decisión política.

El mecenas, al elegir un destino para los fondos que dona, favorece a un grupo de beneficiarios y no a todo el pueblo por igual. En el caso que nos ocupa, habrá algunos enfermos de cáncer que reciban una atención médica preferente, hasta que la demanda de esos nuevos cuidados no lleve a la ampliación de la oferta y la reducción del coste unitario de los aparatos. Tal ha ocurrido con la resonancia magnética. Esta cuestión de la inicial desigualdad en la asignación de la nueva tecnología es muy reveladora de la visión política de los izquierdistas radicales. Prefieren que todos reciban por igual un tratamiento obsoleto a que algunos gocen por algún tiempo de un trato más favorable. Aún habría que ahondar más en el igualitarismo de los críticos del señor Ortega. En realidad, Isa Serra y Pablo Iglesias detestan a los ricos. No pueden comprender que haya personas que ganen montañas de dinero honradamente y sirviendo al público (es decir, que haya ricos que puedan comprar una casa mejor que la de Galapagar.



Los igualitarios no han comentado el éxito de la giving pledge, el compromiso de dar de tantos millonarios famosos del mundo. Bill y Melinda Gates, junto con Warren Buffett, lanzaron la idea de que personas con grandes fortunas prometieran la mitad de su riqueza a causas benéficas. Hasta ahora se han comprometido 40 grandes fortunas en EE.UU. y, tomando el mundo en su conjunto, ricos hasta de 23 nacionalidades (Expansión, 29/05/19). Entre ellos se encuentran Michael Bloomberg, Carl Icahn y Mark Zuckerberg. Es interesante saber que algunos del grupo, como Clinton y Buffett, han criticado los bajos impuestos a las grandes fortunas, lo que no han utilizado como excusa para no contribuir.

Ética para economistas

La sociedad de libre mercado tiene mala fama a pesar de haber contribuido señaladamente al bienestar de millones de personas, en especial en las partes más pobres del mundo. Marx consiguió disfrazarla con el sambenito de “capitalismo”, un sistema que, empujado ciegamente por el avance tecnológico, ponía en manos de los ricos un creciente poder de explotación de los pobres. Marx olvidaba (como Piketty, por cierto) que la mayor del capital en el mundo moderno es capital humano y capital social, formas de riqueza ampliamente difundidas entre todas las clases, que no suelen ser instrumentos de explotación. El capitalismo, pues, tiene mala imagen y no solo por desconocimiento de la historia económica y social de los últimos tres siglos. La razón profunda de esa hostil percepción es que, a pesar de sus esplendorosos resultados, se lo considera inmoral o todo lo más amoral, pues está basado en la búsqueda del propio interés, algunos dicen que en el egoísmo. Ello lleva a que solo se consideren morales las acciones “solidarias”, como se dice hoy en día, y no las que contribuyen a la creación de riqueza. Deberíamos, sin embargo, entender que, además de la moral magnánima o solidaria, existen otros dos sistemas éticos que sostienen nuestra civilización y que son: la moral mundana y la moral de la mano invisible de que hablaba Adam Smith.

Como han explicado luminosamente Clark y Lee (Cato Journal, 2011 Invierno), la moral de la magnanimidad hunde sus raíces en el pasado tribal de la humanidad y lleva a sentir que solo son morales las intenciones altruistas y las acciones que de ellas se siguen, a saber: (a) las acciones cuya intención es la de ayudar; (b) las que suponen un sacrificio personal, y (c) las que benefician a personas identificables. Estos tres rasgos no se encuentran en las éticas mundana y de la mano invisible. La ética mundana es la más neutra y quizá la menos visible de las tres. Es lo que llamamos capital social. Consiste en no mentir, no utilizar la violencia o el engaño, respetar los acuerdos, cumplir los contratos, ser corteses y demás normas del bien vivir. Por su parte, la ética de la mano invisible, típica del libre mercado, se basa en el trato repetido y voluntario entre personas que la mayor parte de las veces ni se conocen; un trato que se basa en la información que transmiten los precios.

La llamo “de la mano invisible” porque el propio Adam Smith así la denominó en el libro IV de La riqueza de las naciones: los actores económicos, cuando persiguen solo su propio beneficio, en muchos casos “se ven conducidos por una mano invisible a promover un fin



que no era parte de su intención el promover. Cuando persiguen su propio interés a menudo fomentan el progreso de la sociedad mejor que cuando pretenden hacerlo directamente.” Las acciones encauzadas por la mano invisible ni se hacen con la intención de ayudar, ni se basan en el sacrificio de la propia hacienda, ni se dirigen a personas identificadas. Persiguen el beneficio, obtienen ganancia si aciertan y contentan a grandes grupos anónimos. Sus ganancias no se basan en el mérito sino en la satisfacción del público.

Es una pena que la gente valore las acciones solidarias más que los resultados obtenidos por grandes y pequeños empresarios con el trabajo bien hecho y las ideas novedosas por propio interés. Siempre pregunto que cómo ha hecho más bien a la humanidad Bill Gates, ¿con los productos ofrecidos en Microsoft o con las inversiones de su fundación?

¿Devolver a la sociedad?

Por eso oigo con escepticismo las proclamas de los grandes mecenas de que con sus fundaciones y donaciones buscan devolver a la sociedad algo de lo que esta les ha dado. Si se han hecho millonarios con sus productos y servicios es por haber dado a la sociedad algo de lo que necesitaba o demandaba, sean bienes, sea trabajo, y la sociedad les ha devuelto el favor comprando esos bienes y servicios a un precio remunerador que les ha dejado un beneficio. No se me entienda mal. Agradezco y alabo la generosidad de los grandes mecenas que, movidos por el amor al arte, el respeto a la ciencia, el deseo de combatir las enfermedades o la ignorancia, regalan grandes sumas de su patrimonio (lo hagan ex abundantia cordis, o para ganarse el respeto de sus congéneres). Y agradezco especialmente que dirijan sus fundaciones con la sabiduría con la que han llevado sus negocios. Nada tienen que hacerse perdonar ciertamente no su bien adquirida riqueza.



El Reino Unido corta amarras

11 de febrero de 2020

El adiós del Reino Unido debería llevarnos a reflexionar sobre los errores que hayamos podido cometer los europeos para dar lugar a la marcha de un socio de tanta e importancia. Se va, no solo por disconformidad con la situación actual de la Unión Europea sino porque una mayoría de su pueblo rechaza el futuro del proyecto europeo. Los padres fundadores de la Unión Europea, Adenauer, Schuman y De Gásperi, inspirados por la visión de Jean Monnet, buscaron aplicar un remedio definitivo a la secular guerra civil europea. Todos los intentos de unificar a Europa por la fuerza habían fracasado. El emperador Carlos V no pudo con las armas evitar la división traída por la Reforma protestante. Luís XIV arruinó la monarquía en su intento de crear un continente francés. Napoleón fracasó en su ambición de conquistar los reinos europeos desde el Atlántico hasta los Urales. Alemania buscó imponer su predominio en dos guerras mundiales. Fue la sangrienta lección del siglo XX la que llevó a esos padres fundadores a seguir otro camino hacia la paz de la península euroasiática: el camino de la economía. Al crear la Comunidad Económica Europea (CEE) en Roma en 1957, buscaron alcanzar la concordia por la vía funcional de la libre circulación de bienes, capitales y personas. El proyecto era ingenioso por su aparente modestia, pero incluía un deseo más ambicioso: el de establecer los fundamentos de una "unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos". Sin decirlo, el objetivo era conseguir, con el paso de los años, una unión política.

Ya estaban presentes, pues, en Roma las semillas de la mutación de la CEE en una estructura de imposición política. Desde el principio eran muchas las limitaciones al libre comercio por razones políticas o fiscales, en especial la política agraria comunitaria y el arancel exterior. Un espíritu centralizador fue avanzando por la espontánea vía del comercio, sobre todo durante la larga presidencia de la Comisión de Jacques Delors. La ilusión era que, con el cambio de nombre a "Unión Europea" con la asunción de crecientes poderes por la Comisión, el Tribunal, y el Parlamento; con la creación del "mercado único" con la ampliación hacia el Este a países antes gobernados por la URSS; con el lanzamiento del euro y el Banco Central: fuera apareciendo un sentimiento nacional europeo, que podría culminar en una unión política. Sin embargo, pronto empezaron a notarse los efectos de un exceso de precipitación, si cabe llamar así lo que fueron errores de dirección. El primer aviso fue la resistencia a integrarse en el euro de al menos cinco miembros que cumplían las condiciones de entrada; el segundo aviso fue el rechazo de una Constitución Europea por sendos referendos en dos países fundadores; el tercero, las crisis monetarias griega y chipriota.

Los europeos continentales no supimos ver que la mayoría de los británicos no comulgaban con la idea de un Estado europeo al estilo de los Estados Unidos de América. Hemos subvalorado el aprecio que sienten por su Constitución. La Monarquía como símbolo nacional, el Parlamento como sede de la soberanía, y los Tribunales como poder independiente son algo a lo que no quieren renunciar. Otras naciones de Europa, Holanda,



Bélgica, y los países escandinavos son también monarquías democráticas antiguas. Sin embargo, la historia de otras naciones europeas muestra tintes menos amables, no estamos para dar lecciones de democracia al Reino Unido. El Parlamento Europeo, itinerante de Bruselas a Estrasburgo, parece a muchos británicos la fantasía de una novela de Mary Shelley. La Comisión es un ejecutivo inepto que monopoliza la facultad de presentar proyectos de ley. Y la Corte de Justicia se inclina en sus decisiones por los intereses de la Unión.

La negativa de los europeos a ratificar el Acuerdo de Libre Comercio e Inversiones (TTIP) entre EE.UU. y la UE es una muestra de lo que ha llevado al Reino Unido a querer separarse. Defensor activo que fui de esta mutua apertura entre las dos grandes potencias comerciales del mundo, siempre he lamentado que los europeos no aprovecháramos la buena disposición del presidente Obama a firmarlo. Ese rechazo es típico de la actitud proteccionista de la UE. Los enemigos de la globalización, los verdes, los sindicatos y otros enamorados de nuestra manía regulatoria se opusieron rabiosamente a ese acuerdo. Ahora el presidente es Donald Trump. El primer ministro Boris Johnson acaba de reafirmarse inequívocamente a favor de un comercio internacional más libre en su discurso del Colegio Naval de Greenwich. Quizá él pueda conseguir para el Reino Unido lo que los europeos perdimos con el TTIP.

Boris Johnson ha anunciado ya que, en la negociación con la UE, se negará a aceptar la imposición in aeternum de las reglamentaciones europeas actuales o futuras. El mutuo reconocimiento de normas reglamentarias sería una práctica más acorde con el libre comercio que la imposición de las reglas laborales, sanitarias, fiscales, financieras europeas al Reino Unido. Cuando se trata de sociedades civilizadas, más sencillo es dar por buenas las reglas de la otra parte. Eso daría lugar a una bienvenida competencia, que disciplinaría los afanes intervencionistas de unos y otros. Se habla airadamente de "dumping social", cuando toda idea de "dumping" debería desaparecer del comercio internacional.

Muchos son los que vaticinan grandes pérdidas económicas para el Reino Unido tras separarse de la UE. Sin duda habrá un cambio de su estructura económica al dificultarse sus exportaciones a Europa. Si los británicos no caen en la tentación de aplicar la Ley del Talión, habrá sectores que decaigan y otros que florezcan. La City no está a punto de ser sustituida por la Bolsa de Madrid. Incluso la producción de vehículos puede prosperar con el cambio a propulsión eléctrica. La liberalización comercial siempre tiene efectos sorprendentes. Es la UE la que tiene que cuidarse de no quedar obsoleta con la marcha de su socio más inconforme.



El virus comunista

23 de abril de 2020

Los españoles nos enfrentamos con tres virus, la pandemia, la recesión económica y la erosión de nuestras libertades. Este tercer virus es el más peligroso. Aprovechando que los españoles estamos relegados en nuestras casas y que nos sentimos amenazados por graves peligros, los pretendidos salvadores de nuestra salud y nuestra prosperidad invaden la autonomía individual dictando normas y repartiendo dádivas que serán difíciles de revocar cuando cese la alarma. La proclamación del estado de alarma en todo el territorio nacional era sin duda necesaria. Sin embargo, no debemos renunciar al examen crítico de las medidas económicas tomadas por el Gobierno al amparo del estado de alarma, sobre todo si las relacionamos con los Presupuestos Generales "progresistas" anunciados para los próximos tres años. Cuando las medidas fiscales de este Gobierno de coalición izquierdista prolonguen innecesariamente la recesión venidera, los ministros más radicales echarán la culpa al capitalismo y pedirá más impuestos y más intervención.

La parte comunista del Gobierno está queriendo aprovechar la pandemia del coronavirus para pedir "más Estado", sin aceptar que esa catástrofe sanitaria ha sorprendido al Estado sin reservas financieras y sin capacidad administrativa para enfrentarse con lo inesperado. Es el Estado español, no el libre mercado, el que ha fallado dolorosamente en su capacidad para reaccionar ante accidentes inesperados.

El vicepresidente Pablo Iglesias ha llegado a proponer que el Gobierno nacionalizara las compañías eléctricas y los bancos para superar los efectos económicos de la pandemia. Ahora insiste en forzar la concesión de una serie de medidas sociales que, de ponerse en práctica, congelarán el mercado de trabajo, reducirán la oferta de viviendas en alquiler, y ahondarán el déficit de la Seguridad Social. Los ministros de Podemos dentro del Gobierno muestran profunda ignorancia en lo económico y temible bolivarismo en lo político. El presidente Sánchez debería atajar ese virus comunista, que le está contagiando.

Sobrevenida la epidemia del coronavirus, todos los países han de endeudarse por un tiempo. Algunos lo hacen ordenadamente, nosotros con desesperación, porque nuestra deuda ya equivale al producto español de todo un año. La prudencia aconsejaba la creación de un fondo de contingencias al estilo de nuestros vecinos del norte de Europa, que se atienen al deber de equilibrar sus cuentas públicas, incluso de conseguir un superávit. Nuestros gobiernos, en cambio, han acumulado deuda, incluso después de reanudarse el crecimiento económico a partir de 2014. Ahora, como la cigarra de la fábula, pedimos, incluso exigimos, la emisión de bonos europeos. Pedimos el socorro de quienes han sabido ahorrar a tiempo.



La cuestión crucial es el efecto de esas medidas sobre las expectativas a largo plazo, sobre todo de los inversores. El paquete de medidas sería más eficaz si, en vez de aplazar las obligaciones fiscales y aligerar temporalmente las contribuciones sociales, hubiera reducido permanentemente la carga fiscal, el peso de la Seguridad Social, y muchas líneas de gasto público ineficiente. No es tampoco lo que prometen los Presupuestos Generales. Nos amenazan con una elevación del IRPF, del impuesto de sociedades, del impuesto sobre el patrimonio, de sucesiones, de transmisiones patrimoniales, para castigar precisamente a aquellos que tengan éxito en el empeño de reanimar la producción. A ello hay que añadir los nuevos impuestos sobre transacciones en la Bolsa (la mal llamada "tasa Tobin") y sobre servicios digitales (la "tasa Google"). Justo lo que no hay que hacer en una recesión, pues no es la demanda lo que hace crecer una economía, sino la productividad del lado de la oferta. El aumentar la carga fiscal durante una recesión la profundiza y prolonga.

No basta con salvar la crisis económica. Para combatir el virus comunista debemos reafirmar los principios constitucionales de nuestra democracia liberal, que garantizan nuestra libertad y nuestra prosperidad. Me atrevo a sugerir este decálogo:

1. La figura del Rey simboliza la idea de que no todo es política en la vida.
2. El bien común en una sociedad libre consiste en acomodar de forma pacífica las variadas preferencias y actividades de sus miembros.
3. Debemos conservar y respetar la Constitución de 1978, sobre todo en cuanto se refiere a los derechos y libertades fundamentales de los españoles.
4. El Estado no debe entrometerse ni en la vida familiar, ni en las creencias religiosas, ni en la educación, ni en el trabajo y los negocios de las personas.
5. La democracia debe basarse sobre una firme división de poderes, en especial durante los estados de sitio y de alarma.
6. Habría que proponer que ni el Estado ni las autonomías poseyeran ni financiaran ningún medio de comunicación.
7. El respeto de la propiedad privada es la base de las libertades personales.
8. El libre mercado garantiza que las personas puedan gozar de un amplio espacio en el que ejercer su autonomía individual.



9. La iniciativa empresarial es la principal fuente del progreso de las sociedades civilizadas.

10. No toda necesidad es un derecho. Una reforma radical del llamado Estado de Bienestar debe llevar a que todos los ciudadanos participen en los gastos que ocasionen.



Si pudiera venir Erhard

8 de junio de 2020

En 1947, Alemania era aún un país en ruinas. La guerra, ésta de verdad, había dejado un reguero de muerte y destrucción. Las autoridades de ocupación mantenían congelados los precios. La escasez de productos se combatía con cartillas de racionamiento. Los precios tasados junto con la inflación daban alas al mercado negro. El reichsmark venía sufriendo una devaluación tal que la gente había vuelto al trueque o utilizaba los cigarrillos como calderilla y el coñac para los pagos mayores. La actividad constructora se reducía al desescombros. En el Oeste, las fábricas estaban paradas; en el Este, la maquinaria se la llevaban los rusos.

La transformación comenzó con la reforma monetaria. Las autoridades de ocupación crearon el deutschemark, con un cambio de 1/10. La oferta monetaria se redujo en un 90% y, con ello, la inflación se estabilizó en el 1,5% anual. En abril de 1948, Ludwig Erhard fue nombrado director de la Administración económica de las tres zonas occidentales. El domingo 20 de junio de ese año, comunicó por radio que se iniciaba la total liberación de los precios y se suprimía el racionamiento.

Parece que el lunes, de vuelta de jugar al golf durante el fin de semana, el general americano Lucius Clay, gobernador militar de la zona americana, llamó a capítulo a Erhard y le recriminó que hubiera anunciado la alteración del sistema de precios controlados. “Alterado, no; abolido”. Clay le espetó: “Me dicen mis asesores que es un error”. “También me lo dicen los míos”, respondió Erhard. Los precios subieron hasta conseguir que las baldas de las tiendas se llenasen. Desapareció el mercado negro. En la pira de reglamentaciones socialnacionalistas que encendió Erhard ardieron las leyes laborales, los límites horarios, las limitaciones de la competencia, los salarios máximos e, incluso, la planificación cuatrienal nazi. Y se impuso a la brava el equilibrio presupuestario.

Como refiere Enrique Cerdá en la revista Libertas de Eseade, la producción industrial de la Alemania libre creció un 25% en 1948, y de 1949 hasta 1953 el producto real per cápita lo hizo a una tasa media anual del 8%, tras absorber 10 millones de refugiados venidos del paraíso de la República Democrática del Este. Pasados 10 años, la economía de la Alemania Federal era otra vez la mayor de Europa. Dirán algunos: fue el Plan Marshall. Pues no sólo. En la Inglaterra vencedora, Clement Attlee estaba construyendo la socialdemocracia laborista: nacionalizó las minas de carbón, la producción eléctrica, los ferrocarriles, el transporte por carretera, el acero... En total, un quinto de la economía británica. Las cartillas de racionamiento se mantuvieron hasta 1951. Menudearon las crisis monetarias hasta que tuvo que intervenir el FMI y se multiplicaron los conflictos laborales hasta que Mrs. Margaret Thatcher embridó a los sindicatos. El actual presidente del Gobierno español ha puesto su



esperanza en un Plan Marshall europeo. No entiende que las ayudas Marshall se deshacen como azucarillos si el país se instala en el socialismo.

La salida del coronavirus

Nos enfrentamos con ruinas causadas por la guerra contra el virus. El destrozo humano es grande y la tragedia de las víctimas, dolorosa. La gestión de esta emergencia ha sido un desastre. Cuando se oye al presidente Sánchez adjudicarse una calificación de notable por su reacción a la pandemia, se entiende cómo obtuvo su doctorado: escribiendo una tesis hecha de retazos copiados y engañando sin escrúpulo a toda la comunidad académica. Con todo y lo grave que es el daño innecesario que su Gobierno ha inferido a la salud pública, lo peor es la revolución económica y social al estilo de la DDR que está imponiendo con ayuda del vicepresidente Iglesias. Un país como el nuestro, enfrentado con una contracción del producto que podría alcanzar un 13% este año, un déficit público del 11% del PIB, una deuda pública equivalente al 122% del producto anual y una cifra de paro del 20%, necesita mucho más que empleo público y medidas sociales. No es el momento de subir el salario mínimo, crear una renta básica universal perpetua, cargar impuestos punitivos sobre los “mil más ricos”. La derogación de la reforma laboral pactada entre Bildu y Podemos es lo último que se necesita en un país con grandes cifras de paro. Tampoco es el momento de presentar un dispendioso proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Esta guerra ha dejado la fuerza de trabajo casi intacta y los medios materiales, enteros. Es posible volver a crecer a la alemana, pero con reformas radicales. La Fundación Civismo ha propuesto que se suspenda la obligación de pagar el salario mínimo, al menos mientras dure la crisis. Deberían abolirse las normas que dificultan la prestación de horas extraordinarias. Habría que renunciar a la extensión a toda España del sistema de peonadas del campo andaluz y extremeño, que no otra cosa es la renta mínima básica. Además del alargamiento de los plazos para cumplir con el Fisco, habría que ir directamente a reducciones generales de impuestos y olvidar las llamadas ‘Tasa Tobin’ y la ‘Tasa Google’. Las reducciones deberían ir acompañadas de recortes del gasto público para obedecer la norma europea de equilibrio presupuestario. Después del coronavirus, España es más pobre. Para salir de esta crisis necesitamos buena administración, libertad y trabajar. Friedrich Hayek se inquietó cuando oyó a Erhard hablar de Economía Social de Mercado, pero éste le tranquilizó: “No se preocupe, profesor Hayek, el mercado libre es social”.



Hay que saber ser minoría

17 de julio de 2020

“Supuesta la igualdad de derechos, la desigualdad de condiciones tiene muy saludables efectos”, Jovellanos.

No es fácil pero los tiempos claman porque existan minorías. La política parece invadirlo todo en nuestras sociedades. Tanto en las democracias como en los países autoritarios, quienes mandan o aspiran a mandar buscan incansablemente el apoyo de la mayoría por cualquier método que tengan a mano, legítimo o ilegítimo, patente o disimulado. Las mayorías políticas se obtiene moldeando la opinión pública con las nuevas técnicas de comunicación, que aprovechan que las opiniones se han hecho evanescentes, caprichosas – e influibles. Basta con asomarse a las redes sociales para ver cómo cunden la violencia verbal, el insulto, la descalificación, las noticias falsas, las teorías conspiratorias. Se ha hecho fácil opinar superficialmente con un emoticón o con un ‘me gusta’ y ‘no me gusta’. Los influyentes o influencers cambian las modas del consumo y los modos de vida. También parece ser fácil, nos dicen, fomentar climas de opinión en períodos electorales con métodos invasivos y automáticos, para enturbiar las votaciones e incluso afectar el resultado. Las prédicas en la televisión de quienes nos mandan menudean sin rubor alguno. En todo caso, es notable que un presidente de EE.UU. se comunique directamente con los ciudadanos a través de un torrente de tweets nocturnos.

No me malinterpretéis. Nuestras sociedades no están en peligro de caer en la distopía descrita por George Orwell en su novela 1984. La variedad que permiten las redes es demasiado grande para que ningún poder mundial las maneje con el fin de acabar con todas las libertades. Podría parecer que, en Rusia, en China, en Cuba, los dueños del poder sí que pueden imponer la censura política en las redes y acallar toda oposición, pero la esencia de esa opresión es, en fin de cuentas, el uso de la fuerza externa de la policía y la cárcel.

La cuestión es otra y nos atañe muy especialmente a quienes hoy nos reunimos en esta Escuela de la Libertad. La defensa de la libertad personal en todas sus dimensiones es urgente, pues por desgracia el ser libres no es un anhelo general en nuestro país ni en otras democracias. Prima un ansia de seguridad que lleva a muchos individuos a reducir la libertad civil a una mera apariencia. Disimulada tras la apariencia de libertades personales sin límite, crece la censura de las opiniones que la mayoría considera ‘incorrectas’ y se estrechan los límites a lo que cada uno puede hacer con sus recursos, capacidades, y posesiones. Especialmente tras el castigo inesperado de la reciente pandemia, lo ideal parece ser vivir como monos en el zoo, entregados al capricho del momento, pero organizados y cuidados por guardianes benevolentes que nos prohíben salir de la jaula en la que estamos confinados.



En una entrevista que me hicieron en La Sexta, la periodista me preguntó qué consejo me atrevería a dar a mis amigos y discípulos más jóvenes. Contesté: “Leer mucho y pensar sobre lo que se ha leído”. Por eso me atrevo a deciros hoy que leáis el ensayo de John Stuart Mill Sobre la libertad, publicado en el año de 1859. Como a todo libro, hay que prestarle atención crítica, pues quizá contenga alguna doctrina que poner en cuestión. Mill defiende el principio general de que las autoridades o la opinión no deben interferirse en las acciones de los individuos que les afecten a ellos primordialmente. Con Mill yo daría una interpretación amplia a ese principio, aunque la distinción entre self-regarding y other-regarding actions no es sencilla. “No man is an island”, dijo John Donne. Únicamente cabe exigir que lo que toca a los demás sea aceptado por ellos libremente.

Sí quiero prestar atención a tres cuestiones que hoy nos conciernen: la libertad de pensamiento y discusión; la protección social de los individuos; y la conformidad con los dictados de la mayoría.

Las páginas sobre la libertad de pensamiento y discusión conservan toda su validez siglo y medio después de que Mill las escribiera. El argumento aducido por Mill es difícilmente rebatible. Supone siempre una pérdida para la humanidad el silenciar una opinión.

“Si la opinión es verdadera se priva [a la raza humana] de la oportunidad de cambiar el error por la verdad; y si es errónea, se pierde lo que es un beneficio no menos importante: la más clara percepción y la impresión más viva de la verdad, producida por su colisión con el error”.

Muy interesantes pero susceptibles de discusión son sus reflexiones sobre la relación entre libertad y bienestar. Es reveladora la forma en que Mill distingue el libre comercio y el laissez faire, de la libertad individual: están relacionadas, dice, pero no son lo mismo. Yo me atrevo a discrepar, sobre todo porque pensadores que se dicen liberales han ido deslizándose hacia el error de Indalecio Prieto de proclamarse “socialista a fuer de liberal”. En el medio siglo que siguió a la publicación del ensayo de Mill, el ambiente intelectual y político fue derivando hacia la doctrina de que al hombre medio quizá sea necesario darle “garantías de bienestar y de progreso social, garantías que no sería oportuno debilitar en favor de las libertades estrictamente personales”, en las reveladoras palabras de Carlos Mellizo. Por ese cauce ha ido imponiéndose una corriente liberal socialdemócrata, que es la predominante hoy en el Partido Demócrata americano.

En el mundo de opiniones ‘correctas’ en que nos ha tocado vivir, nos atañen especialmente las páginas que Mill escribió en su ensayo sobre las limitaciones de la libertad individual impuestas por la opinión de los bien-pensants. El capítulo se titula “De los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo”. Notad que dice ‘sociedad’ no ‘Estado’. En la Inglaterra de su tiempo no era acuciante el peligro de intervenciones penales o administrativas en las creencias y opiniones. Temía Mill más bien la uniformidad creciente traída por el “avance de la democracia, la extensión de la educación, el progreso de los medios



de comunicación, el aumento de los intercambios comerciales”. Esas aspiraciones mostrencas desembocaban en la creciente presión ejercida por la opinión pública sobre los individuos.

Para un pensador como Mill, que valora la variedad de modos de vida en una sociedad libre, esa uniformidad resulta peligrosa. Mill subraya la importancia de las minorías para la reforma y progreso de la sociedad.

“Son pocas las personas, comparadas con toda la humanidad, cuyos experimentos, de ser adoptadas por los demás, darían lugar a un mejoramiento en la práctica establecida. Pero estas pocas son la sal de la tierra; sin ellas la vida humana sería una laguna estancada”.

Se acusa la filosofía liberal de ser una filosofía elitista. ¿Cómo es que os digo que no debe asustaros estar en minoría, que es necesario que busquéis ser la minoría de los mejores en la vocación que habéis elegido? El fundamento de ésta mi exhortación es una consideración filosófica, una idea que quizá os sorprenda: el liberalismo es una ética incompleta. El amor de la libertad, el respeto de la libertad de los demás, deben ser el nivel mínimo de nuestra forma de comportarnos. Pero ello no basta para colmar nuestras aspiraciones. Cada uno de nosotros, el empresario, la misionera, el médico, la juez, el carpintero, la cantante, buscaremos completar esa mínima ética de libertad con el buen hacer en el camino que hemos elegido.

Esto no es elitismo. Es pedirnos, sea cual sea vuestra dedicación, que busquéis siempre la excelencia.



El laberinto de la inflación

20 de octubre de 2021

De repente los españoles nos hemos dado cuenta de que ha vuelto la inflación y que no es cosa pasajera, pese a lo que afirman las autoridades. Algunos veníamos anunciándola a la vista de la política monetaria permisiva aplicada por los bancos centrales de EE.UU., Inglaterra y Europa. Sin embargo, el común de los expertos decía que no había inflación o que sería un fenómeno pasajero. Así demostraban ignorar qué es lo que trae esas subidas continuadas de precios al consumo; o, dicho de otra manera, qué es lo que causa la pérdida continuada del poder adquisitivo del dinero.

Para no perdernos en este laberinto necesitamos un hilo conductor que nos lleve a la salida. Este hilo de Ariadna es una correcta teoría de la inflación. Tal es la que acabó de consagrar Milton Friedman en 1956 al decir que “la inflación en todos tiempos y lugares es un fenómeno monetario, en el sentido de que ocurre cuando la cantidad de dinero aumenta más deprisa que la producción”. Hay inflación cuando la autoridad persiste en emitir más dinero del que corresponde al crecimiento de la economía real.

Esta teoría cuantitativa recibe muchas críticas, en especial de los que gobiernan los bancos centrales, que no quieren que se les cargue con la responsabilidad de las inflaciones. Es comprensible el deseo de librarse de esa tacha, pues las pérdidas continuas de valor del dinero causan graves daños a quienes viven de ingresos fijos y de pensiones; o encuentran difícil conseguir que sus sueldos aumenten a la par que los precios; o perciben salarios cercanos al mínimo legal –es decir, los más pobres–. Los gobiernos intentan evitar estos daños ligando las pensiones al coste de la vida, o fomentando la acción sindical, o elevando repetidamente el salario mínimo interprofesional. Por desgracia, los remedios son peores que la enfermedad. Las subidas de las pensiones obligan a aumentar impuestos, algo inoportuno en tiempos de difícil recuperación como los actuales. La acción sindical favorece principal o exclusivamente a los empleados públicos -y a los cargos sindicales-. Los aumentos del SMI fuerzan el cierre de pequeñas empresas y reducen la demanda de mano de obra por las medianas y grandes. Mejor sería que no hubiera inflación, pero eso está en manos de los prebostes de la Reserva Federal en Washington o los mandamases del Banco Europeo en Fráncfort.

En EE.UU. la Reserva Federal ha permitido crecimientos de la oferta monetaria, es decir del dinero en circulación, muy por encima de lo que puede crecer la economía. En efecto, la oferta monetaria (en forma de monedas, billetes, depósitos en los bancos comerciales) ha venido aumentando allí desde agosto de 2020 a tasas anualizadas de más de un 23,1 por ciento, hasta culminar en un 27,1 por ciento en febrero de este año. Esa expansión irresponsable ha empezado a contenerse, pero aún ha sido del 12,1 en julio. En Europa, el crecimiento de la oferta monetaria ha ido moderándose, del 9,2 en abril del presente año al 7,6 por ciento en julio. El resultado es que en EE.UU. los precios están subiendo a tasas del



5,4 y en la zona euro del 3,3 –cuando el objetivo de inflación para ambas economías es de un 2 por ciento anual.

He dicho que la teoría cuantitativa es objeto de muchas críticas. La primera es que las alzas de precios se deben a la reactivación de la demanda después del parón del COVID-19. No entiendo bien por qué han de subir los precios cuando la demanda a duras penas vuelve al nivel anterior y hay tanto recurso desempleado. La segunda es que no hay una relación automática entre la oferta monetaria y el nivel de precios. Ciertamente que esa relación no es mecánica, aunque sí es observable en el largo plazo. La razón del desajuste entre dinero y precios en el corto y medio plazo es que los temores de individuos y empresas hacen que ahorremos más de lo normal sin que esos ahorros se inviertan en procesos productivos. Una tercera crítica consiste en decir que la inflación es sólo aparente cuando se disparan algunos precios llamativos, como el de la luz, pero que pronto se estabilizarán. Por eso, nuestros banqueros centrales consideran necesario convencernos de que estas alzas de precios son ‘puntuales’ como se dice ahora. Pero el hecho es que inflación, haberla hayla, como dicen de las meigas en Galicia. Nada se arregla con sólo evitar ‘efectos de segunda ronda’, es decir, evitar nuestros intentos de forzar aumentos de nuestros ingresos para evitar pérdidas de poder adquisitivo. Como si no hubiera ya efectos de segunda ronda con los aumentos automáticos de las pensiones cuando sube el IPC...

En una crisis económica como la del COVID, los bancos centrales tienen la obligación de acudir en ayuda de las instituciones que pastorean para evitar la quiebra del sistema financiero. Personalmente, no creo que deban responsabilizarse también de la marcha de la economía en su conjunto. Eso es tarea de los gobiernos, que tendrán que decidir a quién prestar ayuda y qué reformas realizar, para facilitar la recuperación de empresas y trabajadores por sus propias fuerzas. Sea esto como fuere, de lo dicho aquí se deduce una conclusión de gran importancia: que los bancos centrales deben mantenerse atentos a los indicadores monetarios (cosa que no hacen), para que las cuantiosas sumas con las que buscan rescatar las economías no se vayan por el sumidero de la inflación.



Un gran liberal

8 de marzo de 2022

Tras una vida entregada a la defensa de las libertades ha fallecido el gran liberal italiano Antonio Martino a los 79 años de edad. Aprendió economía política en Chicago en las clases de Milton Friedman, con quien le unió no sólo la doctrina del libre mercado sino también una amistad de por vida. Llegó a ser presidente de la Mont Pelerin Society como yo mismo lo fui más tarde.

Esa sociedad fue fundada por Friedrich Hayek en 1947 para rescatar el liberalismo de quienes lo veían como filosofía caduca o lo reducían a una mera actitud de tolerancia personal. Su liberalismo no fue superficial ni improvisado, pues argumentó y defendió su visión del mundo en libertad en foros italianos y extranjeros y también como profesor universitario de economía monetaria en la prestigiosa Universidad romana La Sapienza.

Martino acompañó a Silvio Berlusconi en la fundación del Partido Forza Italia y ayudó a redactar el Programa, sobre todo el capítulo que concernía a la defensa del libre mercado. Su objetivo era infundir el espíritu de libertad económica en lo que nacía como un movimiento conservador –una tarea urgente en los países europeos de orillas del Mediterráneo. Fue ministro de Asuntos Exteriores y luego de Defensa en los Gobiernos de Berlusconi. Se proyectó como euroescéptico, pese a que su padre había sido uno de los firmantes del Tratado de Roma. Era mucho más atlántico que europeísta, pues no comulgaba con las actitudes intervencionistas de la burocracia de Bruselas. Como compete a un liberal clásico, consiguió abolir la recluta. Ahondó en la obligación de los Estados democráticos de mantenerse alerta frente a los ataques de sátrapas y autócratas y se comportó como claro amigo de los Estados Unidos, en especial durante los conflictos de Oriente Medio.

Durante sus veinticuatro años como diputado, sus firmes principios, su elegante oratoria, su cortesía y simpatía hicieron de él un político querido y respetado. Se le tildaba de liberal extremo, pero consiguió ser la conciencia de estatistas del Parlamento italiano.

Descanse en paz ese hombre de firmes convicciones a quien me unieron tantos años de sólida amistad.

